



**AMPARO EN REVISION NUMERO 2695/96
QUEJOSAS: INMOBILIARIA FIRPO FIESTA
COAPA, S.A. DE C.V. Y
OTRAS.**

Vo. Bo.
MINISTRO:

**PONENTE: MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.
SECRETARIO: ARMANDO CORTES GALVAN.**

COPIADO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

V.I.S-T.O.S., para resolver los recursos de revisión 2695/96, interpuestos en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo número 385/96 del índice del Juzgado Noveno en Materia Administrativa en el Distrito Federal; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, las empresas denominadas Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, sociedad anónima de capital variable, Promotora Fusión, sociedad anónima de capital variable, Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, sociedad anónima de capital variable, Opción Jamantab, sociedad anónima de capital variable y Corporativo Opción Santa Fe II, sociedad anónima de capital variable, por

conducto de su apoderado, Roger Octavio Menéndez Hernández, así como Servicios Corporativos GC, sociedad anónima de capital variable, a través de su apoderado José Antonio Miguel Padrón Castro, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:

- "a) El H. Congreso de la Unión;**
- "b) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;**
- "c) El C. Secretario de Gobernación;**
- "d) El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público;**
- "e) El C. Gobernador y los CC. Director General de Investigación Económica, Director de Información Económica, Director de Disposiciones de Banca Central, Coordinador de Disposiciones de Banca Central y Gerente de Investigación Económica, todos ellos del Banco de México; y,**
- "f) El C. Administrador Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

"ACTOS RECLAMADOS:

- "a) Del H. Congreso de la Unión, reclamo:**
 - "1. La tramitación, aprobación y expedición de la Ley que modifica a las diversas de los Impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial sobre Producción y Servicios y Federal de Derechos, oficialmente publicada el 10 de mayo de 1996, por cuanto que en términos de su ARTICULO**



TERCERO se reformó, entre otros, el artículo 1º,
"primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, el
"cual establece o, más bien dicho, "reestablece" el
"elemento "sujeto" del Impuesto al activo,
"comprendiendo a la parte quejosa.

"2. La "Ley del Impuesto al Activo" vigente a partir
"del 11 de mayo de 1996 y, en tal virtud, todas las
"leyes que han sido expedidas y promulgadas para
"conformar aquélla, actos reclamados que son, a
"saber, los que inmediatamente después van a
"precisarse, por cuanto que con todos sus
"dispositivos, aplicables respecto de la parte
"quejosa en razón del nuevo artículo 1º de la misma
"ley, establece, estructura y opera el impuesto al
"activo generable, declarable y pagable por
"aquella."

"1.1. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que establece, reforma, adiciona y deroga
"diversas disposiciones fiscales", oficialmente
"publicada el 31 de diciembre de 1988, por cuanto
"que en términos de su ARTICULO DECIMO
"estableció la "Ley del Impuesto al Activo de las
"Empresas."

"1.2. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que establece, reforma, adiciona y deroga
"diversas disposiciones fiscales y que adiciona la
"Ley General de Sociedades Mercantiles",
"oficialmente publicada el 28 de diciembre de 1989,
"por cuanto que en términos de su ARTICULO
"DECIMO TERCERO se reformaron los artículos 1º,

"2º, fracciones II y III, 3º, 4º, fracciones II y III, 5º, 6º, 7º, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos, 8º, 9º y 10 de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; se adicionaron los artículos 2ºA, 5ºA, 7º con un segundo y antepenúltimo párrafos pasando el entonces actual segundo a tercer párrafo, 11, 12, 13 y 14, a dicha Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, y se derogó el artículo 4º, fracción I, de y a la propia ley referida, además de que se modificó la denominación de dicha ley por la de "Ley del Impuesto al Activo".

"1.3. La tramitación, aprobación y expedición de la "Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales", oficialmente publicada el 26 de diciembre de 1990, por cuanto que en términos de su ARTICULO DECIMO TERCERO se reformaron los artículos 2º, fracción I, primer párrafo y fracción II, primer párrafo, 2ºA, 3º, primer y segundo párrafos, 4º, fracción II, 5ºA, 7º, tercer párrafo, 9º, primero, segundo, cuarto y último párrafos y fracción II, 10, primer párrafo, 11, 12, primer párrafo y fracción II, 13, primer párrafo y fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo, y se adicionaron los artículos 1º, con un segundo párrafo, 3º, con un primer párrafo, pasando los entonces actuales primero y segundo a ser segundo y tercero respectivamente, 5º, con un último párrafo, 6º, con un segundo párrafo, pasando el entonces actual segundo a ser tercero,



así como con un último párrafo, 7º, con un cuarto, quinto y último párrafos, pasando el entonces actual cuarto a ser sexto, 7ºA, 7ºB, 8ºA, 9º, con los párrafos séptimo y octavo, pasando el actual séptimo a ser noveno, 10, con los párrafos tercero, cuarto y quinto, 12, con un último párrafo, 12A y 13 con un último y penúltimo párrafos, de y a la Ley del Impuesto al Activo.

1.4. La tramitación, aprobación y expedición de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales", oficialmente publicada el 20 de diciembre de 1991, por cuanto que en términos de su ARTICULO NOVENO se reformaron los artículos 2º, fracciones II, primer párrafo, y III, 5º, primer párrafo, 5ºA, primer párrafo, 6º, 7º, segundo y penúltimo párrafos, y 9º, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, y se adicionaron los artículos 2º, con un penúltimo y último párrafos y con un segundo párrafo a la fracción II, pasando el entonces actual segundo a ser tercer párrafo, 5ºA, con un último párrafo, 6ºA, 8º, con un último párrafo, y 13A, de y a la propia Ley de referencia.

1.5. La tramitación, aprobación y expedición de la Ley que armoniza diversas disposiciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, los Tratados para evitar la doble tributación y para simplificación fiscal", oficialmente publicada el 20 de julio de 1992, por cuanto que en términos de su ARTICULO DECIMO PRIMERO se reformó el

"artículo 7ºB, primer párrafo, de la Ley del
"Impuesto al Activo.

"1.6. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que establece las reducciones impositivas
"acordadas en el pacto para la estabilidad, la
"competitividad y el empleo", oficialmente
"publicada el 3 de diciembre de 1993, por cuanto
"que en términos de su ARTICULO SEPTIMO se
"reformó el artículo 9º, segundo y cuarto párrafos,
"de la Ley del Impuesto al Activo.

"1.7. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que reforma, deroga y adiciona diversas
"disposiciones fiscales", oficialmente publicada el
"28 de diciembre de 1994, por cuanto que en
"términos de su ARTICULO QUINTO se reformaron
"los artículos 2º, primer párrafo, 5ºA, ^{PRIMER PÁRRAFO} primer y
"segundo párrafos, 6º, penúltimo párrafo, 9º, 12A,
"primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, y
"se adicionó el artículo 12B, de y a la propia ley de
"referencia.

"1.8. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que modifica a las diversas de los Impuestos
"sobre la Renta, al Activo, Especial sobre
"Producción y Servicios y Federal de Derechos",
"oficialmente publicada el 10 de mayo de 1996, por
"cuanto que en términos de su ARTICULO
"TERCERO se reformaron los artículos 1º, primer
"párrafo, 6º, fracción V, y el antepenúltimo párrafo,
"13A, fracciones I y II; se adicionaron los artículos
"1º, con un tercer párrafo, 2ºBIS, que se ubicará



inmediatamente después de los artículos 2º, 5ºA,
"con un tercer párrafo y 5ºB; y derogó el artículo 6º,
"fracción II, de y a la Ley del Impuesto al Activo.

"2. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que establece, reforma, adiciona y deroga
"diversas disposiciones fiscales", oficialmente
"publicada el 31 de diciembre de 1986, por cuanto
"que en su ARTICULO PRIMERO adiciona un
"segundo párrafo al artículo 20 del Código Fiscal
"de la Federación.

"3. La tramitación, aprobación y expedición de la
"Ley que establece, reforma, adiciona y deroga
"diversas disposiciones fiscales", oficialmente
"publicada el 31 de diciembre de 1988, por cuanto
"que en sus términos de su ARTICULO PRIMERO
"adiciona un artículo 20-BIS al Código Fiscal de la
"Federación.

"b) Del C. Presidente Constitucional de los Estados
"Unidos Mexicanos, reclamo:

"1. La presentación de las iniciativas, la sanción,
"promulgación y orden de publicación de las leyes
"reclamadas, que fueron anteriormente precisadas.

"2. La emisión de los decretos de fechas 31 de
"diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 20 de
"diciembre de 1990, 18 de diciembre de 1991, 14 de
"julio de 1992, 2 de diciembre de 1993, 27 de
"diciembre de 1994, 7 de mayo de 1996, 28 de
"diciembre de 1986 y 30 de diciembre de 1988,
"promulgatorios de las leyes que se reclaman.

"3. La expedición y establecimiento del
"Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo",
"con su contenido vigente a la fecha y, en tal
"virtud, todos los decretos de establecimiento y
"reforma reglamentaria que han sido expedidos y
"publicados para conformar aquél como rige a
"partir del 11 de mayo de 1996, actos reclamados
"que son:

"3.1. La expedición del "Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas", oficialmente
"publicado el 30 de marzo de 1989.

"3.2. La expedición del "Decreto por el que se
"reforma el Reglamento de la Ley del Impuesto al
"Activo de las Empresas", oficialmente publicado el
"7 de junio de 1989, por cuanto que en términos de
"su ARTICULO UNICO reformaron los artículos 4º,
"12, primer párrafo, y 22, tercer párrafo, del
"Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de
"las Empresas, y se adicionaron los artículos 6ºA,
"19A y 25A de y al citado Reglamento.

"3.3. La expedición del "Decreto que reforma,
"adiciona y deroga diversas disposiciones del
"Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo",
"oficialmente publicado el 15 de mayo de 1990, por
"cuanto que en términos de su ARTICULO UNICO
"se reformaron el Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas, en su
"denominación, quedando como "Reglamento de la
"Ley del Impuesto al Activo", así como los artículos
"1º, 2º, 4º, 5º, primer párrafo, 6º, 10, 13, último



párrafo, 14, 17, 18, último párrafo, 19, 21, 22, 23, "fracción II, 24, segundo párrafo, 25, primer párrafo, "25A; se adicionaron los artículos 16, con un "segundo párrafo, 19B y 23A al dicho Reglamento, "y se derogaron los artículos 9º y 11 del propio "Reglamento de referencia.

"3.4. La expedición del "Decreto que reforma, "adiciona y deroga diversas disposiciones del "Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo", "oficialmente publicado el 31 de marzo de 1992, por "cuanto que en términos de su ARTICULO UNICO "se reformaron los artículos 4º, 10, 16, primer "párrafo, 17, 19, 19A, 20, 21, 23, fracción II, 25, "primer y último párrafos, del Reglamento de la Ley "del Impuesto al Activo; se adicionaron los "artículos 5ºA y 6º, cada uno con un segundo "párrafo, 15A y 18, con un tercero y cuarto "párrafos, pasando el actual tercero a ser quinto "párrafo, de y al mencionado Reglamento, y se "derogaron los artículos 2º, 6ºA, 19B, 23A y 24 del "propio Reglamento de referencia.

"3.5. La expedición del "Decreto por el que se "modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto "sobre la Renta y el Reglamento de la Ley del "Impuesto al Activo de las Empresas y se exime del "pago del Impuesto al Valor Agregado a las "comisiones derivadas del otorgamiento de "créditos hipotecarios", oficialmente publicado el 5 "de noviembre de 1992, por cuanto que en términos "de su ARTICULO SEGUNDO se reformó la fracción

"III del artículo 18 del Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Activo y se derogaron el tercer y
"cuarto párrafos del citado artículo 18.

"3.6. La expedición del "Decreto que otorga
"diversas facilidades fiscales en materia de
"contribuciones federales y que adiciona a los
"Reglamentos del Código Fiscal de la Federación y
"de la Ley del Impuesto al Activo", oficialmente
"publicado el 4 de octubre de 1993, por cuanto que
"en términos de su ARTICULO TERCERO se
"adicionó el artículo 16 del Reglamento de la Ley
"del Impuesto al Activo de las Empresas, con un
"segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos,
"pasando el actual segundo a ser el sexto párrafo.

"c) Del C. Secretario de Gobernación reclamó:

"1. El refrendo constitucional otorgado a los
"Decretos Presidenciales de fechas 31 de
"diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 20 de
"diciembre de 1990, 18 de diciembre de 1991, 14 de
"julio de 1992, 2 de diciembre de 1993, 27 de
"diciembre de 1994, 7 de mayo de 1996, 28 de
"diciembre de 1986 y 30 de diciembre de 1988,
"promulgatorios de las leyes que se reclaman.

"2. La ausencia de refrendo respecto de los
"Decretos Presidenciales expeditorios y
"reformativos del Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Activo, que se reclaman.

"3. La orden de publicación oficial a través del
"Diario Oficial de la Federación, de las leyes y
"Decretos Presidenciales reclamados.



d) Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público,
"reclamo:

"1. La ausencia de refrendo de los Decretos
"Presidenciales promulgatorios de las leyes
"reclamadas, a que alude el apartado 1 del inciso a)
"que antecede.

"2. El refrendo constitucional otorgado a los
"decretos expeditorios y reformativos de las leyes
"y reglamento que se reclaman.

"3. La aplicación que bajo cualquier concepto,
"tanto de hecho como de derecho, hizo, pretenda o
"haya de hacer, en el ámbito de su competencia,
"mediante cualquier acto, orden, acuerdo, circular
"o instrucción verbal o escrita, en contra de la
"parte peticionaria de garantías, de cualquiera de
"ellos o de todos los ordenamientos reclamados en
"la especie. En concreto reclamo, la expedición de
"las formas oficiales necesarias para declarar y en
"su caso enterar el impuesto al activo reclamado,
"así como, en su caso, el cobro a la parte que
"represento, la percepción, la aplicación y
"administración de los recursos tributarios
"relativos.

"Atribuyo a estos actos carácter inminente,
"Imputando desde luego su próxima emisión a la
"referida responsable.

"e) Del C. Gobernador del Banco de México, como
"titular y representante legal de dicha institución,
"reclamo, respecto de los funcionarios de la misma
"que han determinado y publicado los índices

"nacionales de precios al consumidor, quienes son
"los CC. Director General de Investigación
"Económica, Director de Información Económica,
"Director de Disposiciones de Banca Central,
"Coordinador de Disposiciones de Banca Central y
"Gerente de Investigación Económica del Banco, y
"de éstos, en lo conducente:

"1. La totalidad de los actos expedidos antes y por
"expedir, a partir del 1º de enero de 1990, a
"propósito de lo dispuesto por los artículos 20 y
"20-BIS del Código Fiscal de la Federación;
"concretamente, la emisión de los acuerdos o
"circulares que determinaron, determinen y
"determinarán los índices nacionales de precios al
"consumidor mensuales, así como su publicación
"oficial, con efectos fiscales:

"f) Del C. Administrador Local de Recaudación del
"Sur del Distrito Federal, de la Secretaría de
"Hacienda y Crédito Público, reclamo:

"1. La aplicación que hizo de los ordenamientos
"que se reclaman, por primera vez, en contra de la
"parte quejosa, en términos de los actos cuyas
"características precisas se referirán y describirán
"dentro de los antecedentes y del primer concepto
"de violación de esta demanda.

"g) De todas las autoridades señaladas como
"responsables, reclamo:

"Todos los efectos y consecuencias que, tanto de
"hecho como de derecho, se deriven de los actos
"reclamados en forma concreta, mismos que



atribuyo a cada una dentro del ámbito de sus
"respectivas competencias."

SEGUNDO. La quejosa relató como antecedentes de los
actos reclamados, los siguientes:

"1º Las Empresas quejasas: FIRPO, FUSION,
"ALTAVISTA, JAMANTAB, SANTA FE II y GC:

"a) Son sociedades mercantiles mexicanas,
"constituidas de conformidad con lo dispuesto por
"las leyes respectivas, que resultan contribuyentes
"del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto al
"activo (IMPAC).

"b) Se encuentran empadronadas, ante las
"autoridades correspondientes, bajo las
"respectivas claves de Registro Federal de
"Contribuyentes, a saber, [REDACTED] para
"FIRPO; [REDACTED] para FUSION;
"[REDACTED] para ALTAVISTA; [REDACTED]
"para JAMANTAB; [REDACTED] para SANTA FE
"II y [REDACTED] para GC.

"c) Las quejasas tienen sus respectivos domicilios
"legales y fiscales, así como el convencional, en
"los sitios que se indicaron dentro de los
"correspondientes apartados precedentes de esta
"demanda de garantías.

"d) Las quejasas realizan actividades
"empresariales mercantiles y a efecto de
"materializar tal realización y como consecuencia
"de la misma poseen en propiedad y/o

"arrendamiento, administran, utilizan y disponen de
 "activos concurrentes a la obtención de sus
 "ingresos y, más propiamente, de sus utilidades
 "empresariales, siendo aquéllos los que
 "constituyen el objeto del IMPAC que generan;

"e) Durante el ejercicio fiscal de 1995 obtuvieron
 "ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto
 "sobre la Renta (LISR), superiores a \$ [REDACTED]
 "([REDACTED] DE PESOS), para ser más
 "exactos:

"A) FIRPO \$ [REDACTED] [REDACTED]
 "[REDACTED] Y [REDACTED]
 "[REDACTED] Y [REDACTED] PESOS 00/100

"M.N.

"B) FUSION \$ [REDACTED] [REDACTED]
 "[REDACTED] Y [REDACTED]
 "[REDACTED] Y [REDACTED] PESOS 00/100

"M.N.

"C) ALTAVISTA \$ [REDACTED] [REDACTED]
 "[REDACTED]
 "[REDACTED] PESOS 00/100 M.N.

"D) JAMANTAB \$ [REDACTED] [REDACTED]
 "[REDACTED]
 "[REDACTED] Y [REDACTED] PESOS
 "00/100 M.N.

"E) SANTA FE II \$ [REDACTED] [REDACTED] Y
 "[REDACTED]
 "[REDACTED] PESOS 00/100 M.N.



F) GC \$ [REDACTED] Y [REDACTED] PESOS

"00/100 M.N.

"2º. Para los efectos que dentro del presente juicio
"interesan, debo enfatizar que las peticionarias del
"amparo:

"a) Son, en términos de lo dispuesto por la Ley del
"Impuesto al Activo (LIMPAC) y por el Reglamento
"de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas
"(RLIMPAE), a consecuencia de todo lo ya
"reseñado, sujetos del IMPAC y, en tal virtud, lo
"ratifico, se encuentran ubicadas dentro de las
"hipótesis de causación y enteras previstas por
"aquéllos; y,

"b) Que por sus características subjetivas y muy
"personales de nivel de ingresos acumulables para
"los efectos de la LISR en 1995, no se vieron
"favorecidas por la aplicación benéfica del
"Decreto por el que se exime del pago de diversas
"contribuciones federales y se otorgan estímulos
"fiscales", oficialmente publicado el 1º de
"noviembre de 1995, ni de la Ley de Ingresos de la
"Federación para el Ejercicio Fiscal de 1996,
"oficialmente publicada el 14 de diciembre de 1995,
"por cuanto que ésta, en términos de su artículo 18,
"convalidó el Decreto Presidencial indicado ni en
"consecuencia, se encuentra exenta del pago del
"IMPAC que está causando durante el ejercicio de
"1996.

"c) Que, en virtud de lo antes expuesto, "interpusieron sus respectivas declaraciones "complementarias del pago provisional del IMPAC "correspondientes al mes de mayo de 1996, según "el siguiente cuadro esquemático, llevándose a "cabo la manifestación oficial relativa, en "cumplimiento de las obligaciones que les están "impuestas por la Ley y por el Reglamento de la "Materia, para todos los efectos legales a que haya "lugar. (El cuadro no se transcribió).

"3°. Es el caso que, con fecha 10 de mayo de 1996, "fue oficialmente publicada la "Ley que modifica a "las diversas de los Impuestos sobre la Renta, al "Activo, Especial sobre Producción y Servicios, y "Federal de Derechos", en cuyos términos quedó "inconstitucional pero legalmente "resujetada" a la "obligación tributaria de generar, declarar y tener "que pagar el impuesto al activo de las empresas, "todo ello con efectos a partir del día 11 del propio "mes y año que se indican.

"4°. Así las cosas, habiendo la parte quejosa "asumido y cumplido sus formalmente nuevas "pero materialmente reiteradas obligaciones "manifestatorio contributivas de impuesto al activo, "respecto de mayo de 1996, en junio del propio año "en curso, es que, para los efectos del amparo ya "se presentó y produjo, en perjuicio de los "intereses jurídicos y económicos de la "peticionaria de la protección constitucional, el "primer acto concreto de aplicación de los



ordenamientos reclamados, consistente, en la
"realización y material entero tributario, en su caso,
"de la primera declaración provisional de su IMPAC
"de 1996, la cual fue interpuesta ante la Secretaría
"de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la
"oficina de la institución bancaria que las propias
"gobernadas decidieron utilizar, lo cual condiciona
"la procedencia de esta demanda de garantías, a
"cuyo agotamiento se ve necesariamente sujeta su
"parte promovente, para evitar el consentimiento
"jurídico tanto de la última ley reformativa que se
"impugna, cuanto del resto de la Ley del Impuesto
"al Activo y de todo el Reglamento de la Ley del
"Impuesto al Activo en efecto, contra dicha
"impetrante, a partir del 11 de mayo próximo
"pasado; además de para procurar y en su caso
"obtener, la desaplicación jurídica absoluta de los
"mismos y verse liberada del injusto impuesto que
"involucran, mediante la obtención de la protección
"constitucional demandada."

TERCERO. A su vez, la parte quejosa señaló como preceptos de la Constitución General de la República violados en su perjuicio, los 14, 16, 22, 25, 26, 31, fracción IV, 49, 72, 89, fracción I, 103, fracción II, 115, fracción IV inciso a) y 124, y como conceptos de violación expresó los siguientes:

"1. PROCEDENCIA DEL JUICIO.

"Partiendo de discutir la inconstitucionalidad, a
"partir del 11 de mayo de 1996, del artículo 1º de la

"Ley del Impuesto al Activo, en el presente caso se
 "debatirá como problema medular el relativo a la
 "inconstitucionalidad de toda la Ley del Impuesto
 "al Activo y de su Reglamento, ambos vigentes a la
 "fecha, precisamente a partir del 11 de mayo de
 "1996, tal y como quedó descrito antes dentro de la
 "presente demanda, la cual se promueve:

"a) Oportunamente, en términos de lo dispuesto
 "por el artículo 21 de la Ley de Amparo porque la
 "ya en antecedentes indicada primaria aplicación
 "de los ordenamientos reclamados se produjo el
 "lunes 17 de junio de 1996 (sic), mediante la
 "presentación de la declaración del pago
 "provisional del IMPAC relativo a mayo de este año,
 "para todos los efectos legales a que haya lugar.

"b) Bajo la perspectiva de la jurisprudencia número
 "217, consultable a páginas 208 del Tomo I del
 "Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
 "1917-1995 (Ultimo Apéndice), bajo el rubro
 "'LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO
 "CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES
 "DE UN PARTICULAR QUE ACTUA POR MANDATO
 "EXPRESO DE LA LEY", a cuya lectura nos
 "remitimos, en tanto que se incoa bajo criterio de
 "heteroaplicación de los ordenamientos integrales
 "propriadamente reclamados, en razón de su primer
 "acto aplicativo concreto, que para la quejosa
 "aconteció el 17 de junio próximo pasado,
 "mediante la presentación de la primera
 "declaración manifestatoria y, en su caso, de



entero del impuesto al activo correspondiente al "ejercicio de 1996, ya bajo la égida de la ley de la "materia reformada a partir del 11 de mayo; "declaración, esa, que se llevó a cabo mediante la "presentación del correspondiente formato oficial "número 1P1A951 105, denominado de "PAGOS "PROVISIONALES, PARCIALIDADES Y "RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES", que "la parte quejosa utilizó, ante la institución de "crédito autorizada para recibirlo y procesarlo, para "cubrir la cantidad ya descrita en antecedentes, la "cual por supuesto comprende el tributo especial "de que se trata y nos interesa, generado entre los "días 11 y 31 del indicado mes de mayo.

E)c) Bajo criterio de consumación de agravio "personal y directo, porque tanto la Ley del "Impuesto al Activo como el Reglamento de la Ley "del Impuesto al Activo, le han sido ya "directamente autoaplicados a la parte quejosa, "perjudicándola, por primera vez en su vida "jurídico-fiscal actual, en términos de la "declaración ya reseñada.

"A propósito de todo esto importa mucho destacar, "ante su señoría, que exclusivamente para efectos "defensivos de índole constitucional, la parte "quejosa se autosometió a la generación del "impuesto reclamado a partir del 11 de mayo de "1996; se lo autodeterminó, lo calculó, declaró y, en "su caso, enteró ya, por primera vez, en tiempo y "en derecho, después de la última y sustancial

"reforma sufrida por la Ley del Impuesto al Activo
 "destacando la acontecida sobre su artículo 1º,
 "párrafo primero, autoaplicándose de manera
 "integral la Ley que la han conformado hasta ahora
 "y reglamento combatidos, pero sin consentir con
 "ninguno desde el señalado día 11 de mayo de
 "1996.

"También conviene precisar que la Ley del
 "Impuesto al Activo y su Reglamento, vigentes a la
 "fecha, pueden ser válida e integralmente
 "reclamados ahora por la parte quejosa, en
 "términos de lo dispuesto, siendo analógicamente
 "aplicable al presente caso, por la diversa
 "jurisprudencia plenaria número 124 que apareció
 "publicada con el número 78, a páginas 152 de la
 "Primera Parte del Apéndice de Jurisprudencia
 "1917-1985 consultable en el Apéndice 1917-1988,
 "Primera Parte, a páginas 228 a 229, bajo el
 "siguiente texto oficial:

"LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE
 "CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES
 "CONTEMPLAN SITUACIONES JURIDICAS
 "IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO
 "LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUELLOS.
 "Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las
 "disposiciones que contemplaba la ley anterior y
 "que tales disposiciones se recojan en la nueva ley
 "reclamada, ello de ninguna manera puede implicar
 "que la nueva ley resulte derivada de aquélla que



fue consentida, ya que, desde el punto de vista "formal y material, son actos legislativos distintos. "Sostenemos que en la especie la parte quejosa se "encuentra reclamando precedentemente la Ley del "Impuesto al Activo y su Reglamento en forma "integral, porque ambos ordenamientos y por ende "el tributo que estructuran le han resultado "integralmente oponibles de nuevo, para efectos "técnicos y materiales, fundamentalmente en razón "de la reforma acontecida sobre el artículo 1º, "párrafo primero, de aquélla, en vigor desde el 11 "de mayo próximo pasado, habida cuenta de que "dicho numeral establece diversos elementos "esenciales del impuesto de que se trata (impuesto "mismo, sujetos y objeto de éste), de entre los "cuales destaca el "SUJETO", siendo el caso que el "legislador decidió "RESUJETAR" a la ley, y al "dicho impuesto en consecuencia, a todos aquéllos "que en su caso ya lo generaban previamente, pero "bajo una estructura legal distinta. "En efecto, la nueva norma estipula, a la letra, lo "siguiente:

"Artículo 1º. Las personas físicas que realicen "actividades empresariales y las personas morales, "residentes en México, están obligadas al pago del "Impuesto al activo, por el activo que tengan, "cualquiera que sea su ubicación..."

"En concordancia con la norma conducentemente "transcrita, el artículo único transitorio de la ley "que la estableció dispuso: "La presente ley

"entrará en vigor al día siguiente al de su
"publicación en el Diario Oficial de la Federación",
"siendo el caso que ésta aconteció el 10 de mayo
"próximo pasado.

"Pues bien, la parte quejosa es una persona moral
"residente en México, que dispone de activos
"afectos al desahogo de su actividad y, por lo
"tanto, ha quedado legalmente sujeta a la
"generación del impuesto de que se trata desde el
"pasado 11 de mayo, pero en tanto que ella misma
"fue contribuyente del mismo tributo antes, hasta
"el 10 de mayo de 1996, bajo la anterior estructura
"de la ley y del reglamento de la materia, ahora es
"una realidad que técnicamente hablando, para
"efectos defensivos constitucionales de amparo,
"quedó "resujetada" a la ley, a la "nueva ley",
"digámoslo así para enfatizar la idea, nueva para
"ella, "Ley del Impuesto al Activo."

"En virtud de tal parámetro, como de las
"correspondientes partes especializadas de la
"presente demanda se desprende, la parte quejosa
"no solamente está reclamando la
"inconstitucionalidad del nuevo artículo 1º de la
"Ley del Impuesto al Activo, en vigor desde el 11 de
"mayo de 1996, sino también la de todas aquellas
"otras normas estructuralmente conformativas de
"dicho ordenamiento, las cuales no obstante
"encontrarse primigenia o anteriormente en vigor
"(antes del señalado 11 de mayo) respecto de tal
"quejosa, a propósito, en función y precisamente



razón de la entrada en vigor del indicado numeral "1º reformado, le han resultado ahora, a partir del "11 de mayo de 1996, aplicables de nuevo, "generándole interés jurídico y aptitud "constitucional procesal para atacarlos desde "entonces, a fuer del primer acto aplicativo "acontecido el 17 de junio próximo pasado, en "tanto que resulta inconcebible su operancia "aislada de éste, en la medida en que éste, el 1º, "establece, como ya dije, los elementos esenciales "sujeto" y "objeto" del impuesto, mientras que los "demás determinan los diversos elementos "esenciales "base", "tasa" y "época y lugar de "pago" del mismo.

"En efecto, ni al fisco federal responsable ni la "parte quejosa, contribuyente gobernada, nos "resulta relevante la existencia aislada de cada uno "de los numerales indicados, porque sólo mediante "su íntima operación conjunta es que se produce el "impuesto cuyo estudio nos ocupa.

"Ahora bien, planteada en otros términos la idea "que antes acaba de expresarse, cabe "preguntarnos ¿de qué sirve que haya objeto del "impuesto sino hay tasa válida? ¿para qué podría "utilizarse la base si no hay sujeto?

"Pues bien, la parte quejosa desprende interés "jurídico para el agotamiento procedente de la "presente instancia de amparo contra leyes, a "efecto de impugnar absolutamente todos y cada "uno de los numerales que conforman los

"ordenamientos legal y reglamentario reclamados,
"porque entiende que, precisamente para los
"efectos del amparo, se ha producido una especie
"de "novación legislativa" a partir del 11 de mayo
"de 1996, que le atribuye acción para reclamar, de
"nuevo o por primera vez, según su historia
"contributiva pasada, el sistema integral del
"impuesto al activo, a virtud de la entrada en vigor
"del nuevo acto legislativo formal y material que
"introdujo, precisamente a partir de ese día y hacia
"adelante, nuevos sujetos generadores del tributo.
"Así las cosas, opera, en beneficio de la parte
"quejosa, la aplicación analógica del precedente
"plenario número P.XLVII/94, que es consultable en
"la página 33 de la Gaceta del Semanario Judicial
"de la Federación número 83, correspondiente a
"noviembre de 1994, bajo el siguiente texto oficial:
""DEMANDA DE AMPARO. PRESENTACION
"OPORTUNA RESPECTO DE UNA LEY, CUANDO
"SU APLICABILIDAD ESTA SUJETA A LA
"VIGENCIA DE OTRA POSTERIOR. Si una ley
"establece determinadas reglas cuya aplicabilidad
"está sujeta a lo que prevenga otro ordenamiento
"de vigencia posterior, es evidente que los efectos
"jurídicos de la primera se actualizan hasta que
"adquiere obligatoriedad el segundo, que resulta
"ser el susceptible de causar el perjuicio a los
"destinatarios de aquella y, ante esa circunstancia,
"si la demanda de amparo se presentó
"oportunamente por lo que ve al último, lo mismo



"debe considerarse por lo que respecta a la ley con
"vigencia anterior."

"Así las cosas, la parte quejosa estima que el juicio
"es procedente, a partir del 11 de mayo de 1996,
"contra todos los demás numerales de la Ley del
"Impuesto al Activo y de su Reglamento, porque
"con independencia de que haya o no sufrido la
"aplicación concreta de éstos con anterioridad a tal
"día, debe tenerse perfectamente presente que,
"como ya fue argumentado, el impuesto al activo
"es un tributo que funciona en razón de un sistema
"técnico-jurídico cerrado, que se establece,
"precisa, estructura y resulta funcional, operante y
"aplicable, en términos de lo dispuesto por toda la
"ley y el reglamento de la materia, aquí reclamados,
"de suerte que la correspondiente contribución no
"puede existir si falta cualesquiera de sus
"elementos esenciales, a saber: el sujeto, el objeto,
"la base y la tasa o tarifa, siendo el caso que,
"precisamente a partir del pasado 11 de mayo de
"1996, el elemento sujeto del tributo varió o bien se
"restableció substancialmente, según el caso de
"cada quien, no sólo formal sino también
"materialmente, desde el punto de vista legislativo,
"bajo la perspectiva amparista del nuevo acto
"ordenador que introdujo la nueva norma, lo que
"necesariamente implica que, en su virtud, todo el
"sistema haya vuelto a reinstaurarse, de suerte que
"tiene interés jurídico para debatir integralmente, y
"no sólo de manera aislada, su

"inconstitucionalidad, a partir de la indicada fecha,
"a propósito del cambio esencial o estructural
"sufrido por el elemento "sujeto" del que se ha
"hablado.

"Esta es, pensamos, una sensata precisión, más
"que excepción, que puede y debe hacerse al
"sentido y determinaciones alcanzadas por el
"honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número
"6/89, consultable en las páginas 558 a 560 de la
"Primera Parte del Informe 1989 del Presidente de
"ese Máximo Tribunal, bajo el rubro "LEYES,
"AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE
"PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO, O
"ULTERIOR ACTOS DE APLICACION.", la cual,
"además, corresponde con plenitud a los
"novedosos, adecuados y justicieros criterios que
"está sosteniendo consistentemente la nueva
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el
"sentido de que la procedencia de la defensa
"constitucional y, consecuentemente, del juicio de
"garantías para ejercerla por parte de los
"gobernados que lo requieran, es un alto valor que
"debe no sólo salvaguardarse sino promoverse
"eficaz y eficientemente, de manera tal que ha lugar
"a que los órganos de control de la
"constitucionalidad de los actos de las
"autoridades, abran con franqueza e incluso
"audacia sus criterios hacia la procedencia del
"amparo, y abandonen las tendencias de



improcedencia y sobreseimiento que antaño
habían venido desarrollándose activamente.

**"2. LOS ORDENAMIENTOS Y EL IMPUESTO
"RECLAMADOS SON INCONSTITUCIONALES,
"PORQUE VIOLAN LA GARANTIA DE EQUIDAD
"TRIBUTARIA.**

"Bajo la perspectiva de todo lo anteriormente
alegado, en seguida procederemos a impugnar la
totalidad de las normas lesivas de los intereses
jurídicos y económicos de la parte quejosa, que se
contienen dentro de la Ley del Impuesto al Activo
y de su Reglamento.

"Establece el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que es obligación de los mexicanos
contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación como del Distrito Federal, Estado y
Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
El impuesto que se reclama es inconstitucional
porque, además de violar otras, no cumple con la
garantía individual de equidad, establecida por
dicho numeral fundamental, la cual comprende los
principios de generalidad y de igualdad o
uniformidad.

"En términos de lo dispuesto por la jurisprudencia
plenaria número 173 de la Suprema Corte,
consultable bajo el rubro "IMPUESTOS, VALIDEZ
CONSTITUCIONAL DE LOS", a fojas 173 y 174 del
Tomo I del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1995,

"considerada en relación con la diversa
 "jurisprudencia número 170 del propio Pleno,
 "consultable bajo el rubro "IMPUESTOS,
 "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS", a
 "páginas 171 y 172 del señalado Tomo, y con la
 "275, también del Pleno, consultable bajo el rubro
 ""PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS
 "ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION
 "IV, CONSTITUCIONAL", a fojas 256 y 257 del
 "propio libro indicado, sabemos que la equidad
 "tributaria se respeta con el trato igual a los iguales
 "y desigual a los desiguales, que produzca toda
 "norma fiscal. En tal virtud, asimismo, cuando
 "existe una razón o principio igual, de la misma
 "naturaleza, aquélla o éste deben regirse por una
 "disposición igual, equivalente, de la misma
 "naturaleza también; mientras que si existe una
 "razón o principio distintos, aquélla o éste deben
 "regularse, hablando, claro, de leyes tributarias,
 "por disposiciones también diferentes.

"En lo conducente, además de precisar que de
 "manera integral hacemos nuestros los
 "argumentos de las jurisprudencias invocadas, que
 "aquí no se transcriben por mera economía
 "procesal, debemos enfatizar ante su señoría que,
 "según se desprende de aquéllas, es lógico y
 "elementalmente justo que el tratamiento jurídico
 "de las situaciones tributarias involucre simetría,
 "de lo cual inmediatamente se sigue que, como ya
 "se ha dicho, es de equidad tributaria y general que



donde exista una misma razón o hecho, esto es,
"una situación de igual naturaleza,
"correlativamente exista una misma disposición
"jurídica, también de la misma naturaleza, especie
"y alcance, que regule las cosas con equilibrio.

"Con base en estas ideas demostraremos las
"razones de la inequidad invocada, en cuya virtud
"tanto la Ley del Impuesto al Activo (en lo sucesivo
"LIMPAC" o "la ley") cuanto este tributo (en lo
"sucesivo "IMPAC" o "el impuesto") son
"inconstitucionales, precisando, de entrada, que
"para aducirlas fundadamente y evidenciar tal
"aserto, se hace indispensable un planteamiento
"sumarísimo de la estructura y sistemática del
"impuesto, el cual deberemos realizar explorando
"sus elementos esenciales.

"SUJETOS DEL IMPAC. En materia de sujetos del
"tributo, prima facie advertimos que en sus
"orígenes el tributo se enderezó a gravar
"básicamente a las "empresas" (aun cuando la ley
"primigenia contemplaba a otras entidades),
"destacando de entre ellas las sociedades
"mercantiles. Todo ello se desprende del propio
"título inicial de la Ley de la Materia ("Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas"); de los
"planteamientos presidenciales contenidos en su
"iniciativa, vía exposición de motivos; de las
"razones que en su dictamen aprobatorio expresó
"la Comisión de Hacienda de la Cámara de
"Diputados, básicamente. Ahora bien, habiendo

"evolucionado a lo largo de siete años, actualmente
 "se advierte que el tributo grava también a todos
 "los otros tipos de "personas morales" que
 "fiscalmente se contemplan por nuestro derecho.
 "Por supuesto, la parte quejosa se encuentra
 "comprendida dentro del universo subjetivo
 "gravado por la contribución cuya
 "inconstitucionalidad aquí nos ocupa, en términos
 "de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley del
 "Impuesto al Activo reclamada, el cual nos agravia
 "precisamente porque "sujeta" a tan deleznable
 "contribución, a quien promueve esta demanda
 "constitucional, bajo los términos y extremos
 "dispositivos, estructurales y de operación que, en
 "lo conducente, respecto de ella se contienen a lo
 "largo de todo el señalado ordenamiento y se
 "complementan con su reglamento, igualmente
 "combatido.
 "Para los efectos del impuesto reclamado,
 "debemos entender por "empresas" a las personas
 "corporativas o morales y a las físicas,
 "consideradas así por ser comerciantes, en
 "términos de lo dispuesto por los artículos 3º y 75
 "del Código de Comercio, o por desarrollar
 "cualquier actividad empresarial (mercantil) de las
 "que precisan el Código Fiscal de la Federación, en
 "su artículo 16, y la Ley del Impuesto sobre la
 "Renta, en sus artículos 5º y 107, siendo ese tipo
 "de seres, las empresas personales morales o
 "corporativas y los individuos que realizan



"actividades empresariales, los que en 1989 fueron
"fundamentalmente perseguidos por el gravamen.
"Ahora, sin embargo, desde 1990, también lo son
"las personas morales de derecho civil y más
"claramente desde mayo 11 del año en curso,
"ciertas personas físicas arrendadoras de
"inmuebles.

"Pues bien, para efectos de nuestra defensa deben
"entenderse las normas que combatiré bajo la
"descrita tesitura subjetiva.

"OBJETO DEL IMPAC. El objeto del tributo se
"constituye por los "activos" de los sujetos, en
"términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la
"LIMPAC.

"Actualmente, a los contribuyentes se les grava ya
"no sólo porque sean empresas, sino muy
"principalmente por sus **ACTIVOS**, porque tengan
"activos de manera tal que si alguno carece de
"éstos, no será gravado por el impuesto.

"Lo anterior no obstante, debemos precisar que se
"ha pretendido por las responsables y aún llegó a
"producirse un criterio plenario de la honorable
"Suprema Corte de Justicia de la Nación que
"abordó expresamente sobre el tema, que el objeto
"gravado por el IMPAC es un rendimiento mínimo
"presunto del 6% anual sobre el valor de los
"activos que se posean, rendimiento, ése, que a
"juicio de algunos legisladores debiera producir
"todo activo de un contribuyente en el ejercicio.
"Pues bien, a nuestro juicio lo anterior es inexacto,

"porque amén de que la Corte ya ha definido
"jurisprudencialmente otra cosa, tal y como más
"adelante vamos a exponer, de hecho, ningún
"precepto de la ley ni del reglamento establecen
"expresamente tal objeto consistente en el referido
"ingreso mínimo presunto y sí, en cambio, existen
"textos legales expresos que señalan que el objeto
"gravado son "los activos".

"Ahora bien, aunque esto signifique adelantar
"conceptos de violación, para el caso de que
"llegare judicialmente a sostenerse que el aludido
"ingreso es el objeto del impuesto, desde luego
"debemos sostener que ese rendimiento mínimo
"que se pretende presumir, es ficto de manera
"absoluta, además de que no puede ~~dejar de~~
"destacarse que es la realidad de las ~~cosas~~
"sobre todo la realidad económica de cada
"contribuyente, la que determina que tal
"rendimiento se produzca o no, como evento
"fáctico. De todo esto claramente se sigue que
"resulta inválido que dicho "rendimiento mínimo
"presunto" se tome como fuente de indefectible
"gravación, sobre todo teniendo en mente la
"perspectiva de que en realidad tal rendimiento
"puede no generarse y, mas aun, sabiendo tanto de
"hecho como de derecho que de plano el mismo no
"se genera en múltiples casos y, sin embargo, la
"sistemática del tributo priva de manera absoluta a
"todos los contribuyentes percutidos por él, de la
"posibilidad de probar en contrario. Así las cosas,



violentando de manera franca las garantías constitucionales de audiencia y de "proporcionalidad fiscal, respectivamente tuteladas por los artículos 14 y 31, fracción IV, de la Carta Magna, frente al acto privatorio en que se convierte la exacción tributaria relativa respecto de los contribuyentes que realmente generan pérdidas para efectos del impuesto sobre la renta y que no evaden sus obligaciones tributarias, la ley reclamada establece una auténtica presunción iuris et de iure de existencia de capacidad contributiva para efectos del impuesto al activo, tal y como más adelante demostraremos en forma directa.

Posteriormente (dentro del apartado b.11 del inciso B del tercer concepto de violación de la presente demanda) abundaremos en las razones de inconstitucionalidad por desproporción tributaria, que son oponibles al criterio en cita. Por lo pronto, el caso es que en el presente momento histórico ya podemos asegurar tener razón en nuestra indicada apreciación acerca de cuál es el objeto del impuesto, en tanto que existe la jurisprudencia número P./J.11/96, redactada y aprobada por el honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión privada de fecha 26 de febrero de 1996, que se encuentra oficialmente ya publicada en las páginas 5 y 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo III,

"correspondiente a marzo de 1996, la cual
"literalmente estipula:

"**"ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA**
"**CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE**
"**LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR**
"**QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS,**
"**CONCURRENTES A LA OBTENCION DE**
"**UTILIDADES COMO SIGNO DE CAPACIDAD**
"**CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE**
"**ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES**
"**(CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS**
"**EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL.**

"Del contenido de los artículos 25, 28 y 31, fracción
"IV, de la Constitución y, específicamente de
"los artículos 1º, 6º, 9º y 10º, de la Ley del Impuesto
"al Activo de la Empresas (Diario Oficial de la
"Federación de 31 de diciembre de 1988) y de la
"exposición de motivos de la iniciativa
"correspondiente resulta que para examinar la
"constitucionalidad de los preceptos de este
"cuerpo legal es imprescindible considerar
"que, si bien de la literalidad de su artículo 1º, el
"objeto de la contribución radica en el "activo"
"de las empresas, de los demás preceptos que
"integran el sistema del tributo, se infiere que
"dicho objeto se encuentra íntimamente vinculado,
"a que dichos activos sean susceptibles de
"concurrir a la obtención de utilidades, signo de
"capacidad contributiva que el legislador
"necesariamente debe tomar en cuenta como



"presupuesto esencial de toda contribución y
"que, además, del fin estrictamente fiscal de
"recaudar recursos para los servicios públicos
"que exige la fracción IV del artículo 31 de la
"Constitución, persigue la finalidad fiscal de contar
"con un medio eficaz de control en el pago que por
"impuesto sobre la renta corresponda a los sujetos
"pasivos, así como la finalidad extrafiscal de
"estimular la eficiencia de los mismos en el
"desarrollo de sus actividades económicas."

"Ahora bien, aunque la existencia del señalado
"criterio jurisprudencial es un hecho, respecto de
"su contenido y en relación con lo que
"inmediatamente enseguida, al hablar de la base
"del IMPAC, argumentaremos, cabe proponer una
"matización defensivo-conceptual indispensable,
"para sostener que el objeto real del tributo lo es el
"activo "neto" de cada contribuyente gravado y, en
"tal virtud, su patrimonio ¿por qué sostenemos tal
"especie? porque la Corte ha dicho que el
"legislador dispone de una amplia libertad para
"elegir los objetos o fuentes o materias tributables,
"también ha dicho que ellos no pueden ser
"elegidos de manera irracional ni caprichosa, amén
"de que necesariamente con su elección deben
"respetarse todas y cada una de las garantías
"dispuestas por el artículo 31, fracción IV,
"constitucional. Pues bien, constitucionalmente
"entonces, siempre será injusto, por
"desproporcionado, un impuesto que sólo

"contemple la parte activa del patrimonio,
 "discriminando la pasiva que con aquélla
 "necesariamente se vincula para efectos de arrojar
 "las verdaderas capacidades económica y
 "contributiva del gobernado de que se trate.

"Resulta entonces que, como lo veremos, el
 "legislador responsable finalmente razonó bajo el
 "descrito contexto, en la medida en que no
 "obstante que pretende que el objeto gravado por
 "el IMPAC se constituye sólo por los activos del
 "contribuyente, dispuso la base del tributo como el
 "valor de su "activo parcialmente neto", ante lo
 "cual por necesidad y con todo rigor lógico
 "debemos concluir una de dos cosas, a saber: a) O
 "el objeto consiste en el patrimonio, ^{STUPIDA} ~~que puede~~
 "resultar superavitario o no, y entonces la base ^{BOGUEIA}
 "actualmente operante es desproporcionada al no
 "contemplar todas las deudas deducibles, o b) O el
 "objeto consiste sólo en la parte activa del
 "patrimonio y es, entonces, francamente
 "desproporcionado, no obstante que la base del
 "impuesto remedie en alguna medida el malsano
 "carácter recaudador a ultranza implicado por
 "aquél.

"BASE DEL IMPAC. La base del impuesto se
 "constituye por el "valor" de los activos disminuido
 "con el "valor" de algunos pasivos; esto es, por
 "una diferencia superavitaria del monto que
 "corresponde a los primeros (los activos) respecto



del que corresponde a los segundos (pasivos o "deudas disminuibles).

"Ahora bien, expresadas a propósito de este tercer "aspecto estructural del IMPAC, las breves "consideraciones jurídicas que enseguida "plantearemos nos servirán de manera constante "en lo sucesivo, por lo cual las expresamos "in "genere" y de inmediato:

"Para empezar debemos precisar ^{que} "jurisprudencialmente sabemos que existe una "relación íntima e inmediata, próxima en extremo "entre el objeto y la base de cualquier contribución, "a grado tal de que naturalmente dichos elementos "esenciales no pueden desvincularse entre sí, ni "jurídica ^{de} ni económicamente, ya que uno "condiciona a otro. Pretender lo contrario "solamente conduce a la imposibilidad de entender "el gravamen de que se trate o a que éste resulte "desproporcionado de inicio, porque si el objeto es "la materia gravada, la base debe equivaler a la "valoración económica del propio objeto.

"Las responsables sostienen que el impuesto "reclamado grava tan sólo a los activos, porque "éstos son su objeto, pero la base del tributo "revela algo más. Pensamos que en realidad y "conforme a la técnica, aunque el impuesto enfatiza "su percusión sobre los activos del sujeto, no "grava solamente tales sino el patrimonio de éste, "en tanto que por disposición expresa de la ley que "lo estructura (artículos 1º, 2º, 5º y 5ºA

"relacionados), la contribución no se pagará, e
 "incluso materialmente no se generará, si la
 "relación entre los activos y los pasivos o deudas
 "de los sujetos es deficitaria, siendo éstas, y su
 "valor, mayores que aquéllos. Así, verdaderamente
 "el impuesto grava el patrimonio del sujeto, y el
 "valor de éste si bien defectuosa y
 "caprichosamente contemplado, como adelante lo
 "argumentaremos es su base.

"Dicho en forma llana, el patrimonio es lo que
 "pertenece a una persona y en tal virtud se
 "compone no sólo de activos sino también de
 "pasivos del sujeto de que se trate, ya porque éste
 "sea su dueño o su poseedor, detentador o
 "responsable. Por los primeros podemos entender
 "lo que existe, cuenta, es ejercitable o pesa a favor
 "en el balance, mientras que por los segundos lo
 "que existe, cuenta, es ejercitable o pesa en contra,
 "desde el punto de vista económico-financiero.
 "Para ambos elementos aplicamos necesariamente
 "el criterio de que sean susceptibles de apreciación
 "económica, precisamente.

"Se antoja absurdo considerar un patrimonio que
 "no se encuentre referido a un sujeto determinado
 "o determinable; esto es, apreciar un patrimonio
 "existente en abstracto, sin pensar en que sea
 "propiedad o materia de posesión presente o futura
 "de un sujeto que de él sea o resulte responsable,
 "puesto que incluso las "res nullius" y las "res
 "derelictae" son objeto de apropiación final por



"alguien o para alguien, así sea la nación. En la
"misma medida, no es razonable pensar en activos
"solos o en pasivos solos, desvinculados de un
"sujeto y, por lo demás, el patrimonio nunca se
"constituye, salvo casos de extremo, sólo por
"activos o sólo por pasivos.

"Ahora bien, cuando desde el punto de vista
"tributario se atiende al patrimonio de los sujetos
"pasivos, éste se contempla como la riqueza
"constituida, formada, apreciable en su sentido
"estático y no dinámico de formación; en cambio
"cuando lo fiscal alude a la renta, atiende a la
"riqueza en proceso de formación, bajo una
"perspectiva dinámica. Así las cosas, no resulta
"razonable sino caprichosa la gravación del
"patrimonio, si no existe riqueza real (activos
"mayores que pasivos) que dé y condicione la
"capacidad económica al sujeto, de la que a su vez
"depende la contributiva, por lo que no debe
"imponerse un impuesto patrimonial que grave
"solamente activos, con desconsideración de los
"pasivos que son imputables a un mismo sujeto.
"Personalmente estimamos que, aunque con
"graves deficiencias, esto fue intuitivo por el
"legislador responsable en la especie, si se atiende
"al contenido de los artículos 5º y 5ºA de la LIMPAC
"actualmente en vigor, ya desde 1993. De hecho,
"entonces, la base del impuesto es inequitativa y
"desproporcionada, como demostraremos, porque
"entre otras cosas debió contemplar

"absolutamente todas las deudas condicionantes
"de la propiedad o posesión de todo activo
"afectado, como deducibles, siendo real que no lo
"hace así, al menos todavía.

"TASA DEL IMPAC. Es fija, actualmente del 1.8 y
"sobre ella abordaremos más adelante.

"RELACION IMPAC-ISR; COMPLEMENTARIEDAD
"JURIDICA. Inicialmente el IMPAC (vigente durante
"1989) fue Intelegido como complementario del
"impuesto sobre la renta (ISR) y no propiamente
"como accesorio de éste, porque bajo todos los
"ángulos se estructuró como un tributo autónomo,
"y esto, su autonomía jurídica, es innegable. En
"cambio la LIMPAC, en vigor a partir del 1º de enero
"de 1990, no obstante que mantiene esa autonomía
"de causación y pago del IMPAC respecto del ISR,
"contempla las cosas a la inversa, como si el ISR
"complementario del IMPAC y éste el mínimo
"principal a tributar.

"Efectivamente, el cuerpo legislativo en vigor a
"partir del 1º de enero de 1990, aquí impugnado,
"mantiene esa autonomía de causación y pago del
"IMPAC respecto del ISR, y aunque el dictamen de
"la Comisión de Hacienda de la Cámara de
"Diputados que resolvió sobre la iniciativa de
"reformas substanciales sufridas por la ley a partir
"de 1990, sostuvo nuevamente la
"complementariedad del tributo reclamado
"respecto del propio ISR, de hecho la LIMPAC
"contempla las cosas ahora a la inversa, como si el



impuesto sobre la renta fuera complementario del
de activos y éste el mínimo principal a tributar. De
esta suerte, para apreciar el universo subjetivo
considerable desde el punto de vista
constitucional y dimensionar con certeza la
generalidad de los sujetos afectables por el
IMPAC que nos interesa, aunque esto no sea lo
más importante, no podemos perder de vista el
que ellos generen impuesto sobre la renta, si bien
primordialmente deberemos atender a que tengan
ACTIVOS en propiedad y/o en posesión
concurrentes a la generación de ingresos y
utilidades empresariales, o no, de manera tal que
generará y deberá pagar el impuesto todo sujeto
contribuyente que posea activos, máxime si
además genera ISR, pero con independencia de
que lo haga o no.
Así, deberá generar y pagar el impuesto todo
sujeto contribuyente que posea activos, máxime si
además genera ISR, pero con independencia de
que lo haga o no.
A nuestro juicio, las apenas brevemente
abordadas son las situaciones de naturaleza
esencial a las que debemos atender para
determinar si la LIMPAC y su reglamento
estructuran con equidad y proporcionalidad el
impuesto o no, y en tal medida, si éste es
constitucional o inconstitucional, a la luz de
dichas garantías tributarias, siendo por ello que

"en su función vamos a desplegar nuestra defensa
"en lo sucesivo.

"a). EL IMPUESTO ES INEQUITATIVO PORQUE NO
"GRAVA A TODOS LOS SUJETOS CUYA
"SITUACION COINCIDE CON LA QUE LA LEY
"SEÑALA COMO SU HECHO GENERADOR Y,
"ADEMAS, PORQUE DA UN TRATO DESIGUAL A
"QUIENES SON IGUALES FRENTE A LA LEY.

"Actualmente la ley del impuesto reclamado grava
"a la mayoría de los sujetos que caen bajo sus
"supuestos técnicos, obligándolos a su pago, pero
"exenta de éste a otros, los menos, que se
"encuentran en la misma situación generadora
"objetiva, lo que significa una discriminación
"tributaria inadmisibles y caprichosa.

"En términos del actual artículo 1º de la ley son
"sujetos del impuesto:

"(1) Las personas físicas residentes en México que
"realicen actividades empresariales y, (2) Las
"personas morales residentes en México, ambas
"por su activo, cualquiera que sea su ubicación; (3)
"Las personas físicas y morales residentes en el
"extranjero con establecimiento permanente en
"México, las dos por el activo atribuible a tal
"establecimiento; y, (4) Las personas distintas de
"las anteriores, que permitan a aquellas gravadas
"directamente el uso o goce de bienes, respecto de
"éstos.

"Esa generalidad gravatoria absoluta es sólo
"aparente, porque en términos de lo dispuesto por



el artículo 6º, fracciones I y III, de la LIMPAC, se encuentran exentos del pago del impuesto, entre otros los siguientes sujetos: "Quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta" y "Las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos fijos y semifijos en la vía pública o como vendedores ambulantes, cuando las mismas hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Pues bien, como la parte quejosa es persona moral residente en México y dispone de activos, se encuentra gravada por el impuesto reclamado y obligada a cubrirlo, pero advierte que todavía existen otras entidades contribuyentes que, exactamente por las mismas razones imputables a ella, generan el tributo, no obstante lo cual se encuentren liberadas de su obligación de pagarlo, por determinación inequitativa del Congreso responsable, de lo cual la parte promovente en la especie se duele, estimando que debiera corresponderle la misma canongía jurídica de la cual ella no goza.

Ahora bien, para plantear el concepto de violación relativo y no obstante que en términos de la jurisprudencia plenaria aplicable ya sabemos en qué consiste la garantía de equidad fiscal protegida por el artículo 31, fracción IV, constitucional (trato igual a los iguales y desigual

"a los desiguales frente a la ley, en tratándose de
 "todas las hipótesis tributarias estructurales) es
 "necesario realizar un breve análisis constitucional,
 "legislativo y jurisprudencial de la institución de la
 "exención de impuestos:

"Dispone, en su primer párrafo, el artículo 28 de la
 "Constitución Política de los Estados Unidos
 "Mexicanos que "...quedan prohibidos los
 "monopolios, las prácticas monopólicas, los
 "estancos y las exenciones de impuestos en los
 "términos y condiciones que fijan las leyes",
 "cabiendo al respecto precisar que, en términos de
 "lo dispuesto por el artículo 13 de la abrogada Ley
 "Orgánica del artículo 28 constitucional en Materia
 "de Monopolios", "se considera que hay ~~Exención~~
 "de impuestos cuando se releva ~~Total~~ ^{JUSTICIA DE}
 "parcialmente a una persona determinada, de pagar
 "un impuesto aplicable al resto de los causantes en
 "igualdad de circunstancias, o se condonan en
 "forma privativa los impuestos ya causados." (Las
 "subrayas y negrillas son nuestras).

"Sin embargo, habida cuenta de que en la
 "actualidad no existe disposición legal vigente que
 "sea reglamentaria del precepto constitucional
 "señalado toda vez que en términos de lo
 "establecido por los artículos primero transitorio y
 "tercero transitorio, fracción I, de la Ley Federal de
 "Competencia Económica, el señalado numeral 13
 "quedó jurídicamente insubsistente, desde el 25 de
 "junio de 1993, y no se ha expedido ninguna otra



disposición legislativa específica que llene la
laguna constitucional-legal dejada en la materia se
vuelve de máxima relevancia la consideración de
la jurisprudencia que, sobre el tema, ha
establecido la honorable Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ya que ésta es la voz del
máximo intérprete constitucional en la República.
Así, debemos tener presente que la jurisprudencia
plenaria número 163, que es consultable en las
páginas 165 y 166 del Tomo I del último Apéndice,
textualmente dispone:

IMPUESTOS, EXENCION DE ES
CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE
CONSIDERANDO LA SITUACION OBJETIVA DE
LAS PERSONAS EXENTAS. Interpretando en
forma sistemática el artículo 28 constitucional y el
artículo 13 de su reglamento, se obtiene la
conclusión de que la prohibición contenida en el
primero de ellos respecto de la exención de
impuestos debe entenderse en el sentido de que
ésta se prohíbe cuando tiende a favorecer
intereses de determinada o determinadas
personas, y no cuando la exención de impuestos
se concede considerando situaciones objetivas en
que se reflejan intereses sociales o económicos
en favor de categorías determinadas de sujetos."
Por su parte, la jurisprudencia 164, legible a
páginas 166 y 167 del propio Tomo en cita, refiere
esto:

"IMPUESTOS, EXENCION DE ES
 "CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE
 "CONSIDERANDO LA SITUACION OBJETIVA DE
 "LAS PERSONAS EXENTAS. (DECRETO NUMERO
 "200 DEL ESTADO DE SINALOA). Es constitucional
 "la exención de impuestos cuando se establece
 "considerando la situación objetiva de las
 "personas exentas (no así cuando la exención se
 "hace en atención a las características individuales
 "de las personas, estimándose sus características
 "personalísimas), en atención a la situación jurídica
 "abstracta prevista en la ley, la cual contempla
 "elementos objetivos para establecer excepciones
 "en el pago de los impuestos. Por tales razones, es
 "constitucional el Decreto número 200 del Estado
 "de Sinaloa, que en el artículo 150 exime del pago
 "del impuesto, entre otras personas, a los agentes
 "consulares extranjeros, a los miembros de
 "delegaciones científicas, a las personas de
 "nacionalidad extranjera, a los empleados públicos
 "federales, del Estado o de los municipios, que
 "reciban gratificaciones de fin de año.
 "Interpretando en forma sistemática el artículo 28
 "constitucional y el artículo 13 de su reglamento,
 "se obtiene la conclusión de que la prohibición
 "contenida en el primero de ellos respecto de la
 "exención de impuestos, debe entenderse en el
 "sentido de que ésta se prohíbe cuando tiende a
 "favorecer intereses de determinada o
 "determinadas personas, y no cuando la exención



de impuesto se otorga considerando situaciones
"objetivas en que se reflejan intereses sociales o
"económicos en favor de una categoría de sujetos."
"Ahora bien, como las aludidas tesis fueron
"integradas bajo la vigencia de la ley reglamentaria
"abrogada, en la actualidad cabe sostener que al
"sólo existir la norma constitucional en vigor, que
"no distingue y es prohibitoria de las exenciones
"de impuestos, sin modalidad alguna dispuesta por
"ley cualquiera que resulte reglamentaria de tal
"mandato, simple y sencillamente habría lugar a
"concluir que tales exenciones se encuentran
"proscritas de plano; esto es, absolutamente
"prohibidas por el constituyente, al menos
"mientras se prolongue el actual estado de cosas y
"subsista la laguna legislativo-reglamentaria cuya
"existencia hemos destacado.
"Así las cosas, la por ahora palmaria prohibición
"constitucional de las exenciones, que involucra un
"criterio meramente destructivo o negatorio de la
"exención como institución esto es, de toda
"exención por cuanto que, sin modalidades
"legalmente acotadas, su utilización puede
"conducir y conduce al capricho y a la corrupción
"autoritaria, en eventual convivencia con algunos
"posibles gobernados beneficiarios, así como a la
"injusticia en perjuicio de muchos, por lo pronto y
"al menos en principio, parece que no podría
"matizarse con ningún criterio esencialmente
"constructivo y positivo, dimanante de las

"decisiones de los tribunales constitucionales
 "inferiores y de la Suprema Corte de Justicia en
 "última instancia, para que se beneficien de las
 "exenciones estimables convenientes todos
 "aquellos que las merezcan, pero todos, sin
 "excepción, bajo criterios de naturaleza objetiva y
 "no subjetiva, todo lo cual debe entenderse
 "conditio sinne qua non.

"Por tanto, habida cuenta de la destrucción
 "constitucionalmente dispuesta de manera expresa
 "e ineludible contra toda exención fiscal, y
 "encontrándonos frente a la ausencia de
 "legislación reglamentaria de la constitución en el
 "tema, que matice lo ineludiblemente dispuesto por
 "el Poder Constituyente, parece que tenemos que
 "rendirnos ante la conclusión de que ^{JUSTICIA DE} todas las
 "exenciones legal y reglamentariamente dispuestas
 "en materia del IMPAC son inconstitucionales y
 "que, por lo tanto, resultan en perjuicio directo de
 "la parte en la especie agraviada, quien puede
 "impugnarlas porque para ello dispone de interés
 "jurídico, en tanto que ella no disfruta de ninguna,
 "por razones de inequidad, pero para el efecto de
 "que, mientras la ley y el reglamento reclamados
 "no se modifiquen para extinguirlas y dejar de
 "beneficiar a todos los hasta ahora privilegiados, la
 "propia parte quejosa, quien merece el amparo,
 "quede liberada de la obligación de pago del
 "impuesto porque, aun siendo o no objetivamente
 "igual frente a la LIMPAC que los contribuyentes



que sí permanecen exentos, debe recibir el mismo
trato favorable, en tanto que ello es indispensable
para respetar la garantía de equidad fiscal, la cual
obliga a las responsables a darle el mismo trato
favorable que hasta ahora dan a los otros que no
pagan la prestación contributiva, no obstante que
sí la generan.

Finalmente, y esto resulta de máxima relevancia
dentro del presente caso, la jurisprudencia 136 del
honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, consultable a páginas 141 y
142 del propio tomo invocado, determina:

**EXENCION DE IMPUESTOS. SOLO COMPETE
ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN
UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA
FACULTAD REGLAMENTARIA.** El establecimiento
de exenciones fiscales, es facultad exclusiva del
órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su
ejercicio por parte del Ejecutivo a través de
reglamentos, según se infiere del artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en cuanto prohíbe las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan
las leyes, reserva que se confirma por la íntima
conexión que la parte transcrita tiene con la
fracción IV del artículo 31 constitucional, que al
establecer la obligación de contribuir al gasto
público, impone la condición de que ello se logre
de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes." Esta Suprema Corte siempre

"ha interpretado que en este aspecto, por ley debe
 "entenderse un acto formal y materialmente
 "legislativo, por lo cual ha de considerarse que si la
 "creación de tributos, así como sus elementos
 "fundamentales son atribuciones exclusivas del
 "legislador, también lo es la de establecer
 "exenciones impositivas que guardan una conexión
 "inseparable con los elementos tributarios de
 "legalidad y equidad, sin que valga en contra de
 "tales disposiciones constitucionales, ningún
 "precepto legal."

"a1. Aun cuando con la pretensión de respetar lo
 "dispuesto por el honorable Tribunal Pleno/ de la
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación en su
 "jurisprudencia número P.J./10/96, consultable bajo
 "el rubro "ACTIVO, IMPUESTO AL. LA EXENCION
 "DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL
 "SISTEMA FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE
 "EQUIDAD TRIBUTARIA", ya fue corregida en lo
 "más burdo la situación de injusta exención que
 "beneficiaba a las empresas que componen el
 "sistema financiero, el hecho es que, tal y como se
 "desprende de la ley reformativa del 10 de mayo
 "próximo pasado, dicha corrección no fue total
 "sino parcial y mezquina, de suerte que por medio
 "de la ley reclamada, aun el Congreso de la Unión
 "responsable continúa favoreciendo indebidamente
 "a dichas entidades contribuyentes, con perjuicio
 "de los demás quienes, como la parte quejosa, no



disfrutan de los tratamientos legales laxos que a
"aquéllas las responsables prodigan.

"En concreto, no obstante que el nuevo artículo 1º
"de la LIMPAC estipula en su tercer párrafo
"actualmente en vigor que "las empresas que
"componen el sistema financiero están obligadas al
"pago del impuesto por su activo no afecto a su
"intermediación bancaria" y que en relación con
"esto el nuevo artículo 5ºB de la propia Ley
"describe en qué consiste dicho activo,
"determinando que se compone por "... los activos
"fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos,
"que no respalden obligaciones con terceros
"resultantes del desarrollo de su actividad de
"intermediación financiera de conformidad con la
"legislación aplicable", queda claro que, con
"demérito de todos los demás contribuyentes
"gravados y obligados al pago del tributo, se
"insiste, la ley dejó ahora de comprender los
"activos financieros propios de las instituciones
"integrantes del sistema financiero, que les
"corresponden interna y operativamente y que no
"se encuentran directa ni inmediatamente afectos a
"su actividad bancaria ni crediticia. En efecto,
"actualmente existe todavía una injusta exención
"tanto de objeto como base en favor de las
"empresas integrantes del sistema financiero (y de
"la cual no disfrutamos los demás), que opera en
"tratándose de los referidos activos financieros, los
"cuales, para efectos de ser identificados, pueden

"señalarse, entre otros, como aquéllos que
 "permiten cubrir la nómina y todo lo con ella
 "vinculado de los empleados de los bancos y
 "demás empresas financieras, cubrir los tributos a
 "cargo de tales sujetos; comprar y/o pagar la renta
 "de los edificios y demás instalaciones de uso
 "privado de ellos mismos, etcétera.

"a.2. Aun cuando ya fue corregida la situación de
 "injusta exención que beneficiaba a las empresas
 "que componen el sistema financiero, el hecho es
 "que, como sabemos, entre otros prevalecen
 "exentos los sujetos no contribuyentes del ISR,
 "pudiendo, a propósito de ellos, aducir una defensa
 "en general, amén de oponer las razones concretas
 "de defensa para obtener el amparo contra leyes
 "pedido.

"Pues bien, además que respecto de este tema es
 "necesario tener aquí por reproducida nuestra
 "previa argumentación constitucionalmente
 "destructiva de toda exención fiscal (defensa
 "general), bajo una segunda aproximación al tópico
 "(defensa particular) resulta oportuno indicar lo
 "absurdo de las consecuencias del precepto
 "impugnado, porque por una parte autoriza a
 "quienes no sean sujetos del impuesto sobre la
 "renta a no pagar el impuesto al activo, pero por la
 "otra la ley obliga a quienes sí sean sujetos del
 "impuesto sobre la renta a pagar el impuesto al
 "activo estimado inconstitucional a pesar de que
 "no tengan utilidades e incluso teniéndolas, no les



permite acreditarlas en su totalidad, ni en sus
pagos provisionales, sino sólo hasta el término
del ejercicio (véanse y ténganse por reproducidos
aquí los contenidos literales de los artículos 9º y
10º del ordenamiento legal combatido).

Lo anterior es injusto porque, de entrada, el
impuesto al activo no depende del de renta sino
que es autónomo, por más que se encuentren
relacionados próximamente. En efecto, el IMPAC
cuenta con sus propios sujetos, que difieren del
de renta (personas físicas contribuyentes de ISR,
que disponen de activos pero que no desarrollan
actividades empresariales ni conceden el uso o
goce de aquéllos a ningún sujeto directamente
gravado por el IMPAC, por ejemplo); con su propio
objeto (activos) que difieren del de renta (ingresos
y rentas), con su propia base (valor promedio de
activos menos valor promedio de algunos
pasivos) distinta de la de renta (monto de las
utilidades); y, finalmente, con su propia tasa (2%
en la época de los hechos) distinta de la de renta
(tarifa y tasa con porcentaje máximo del 35%).

Así, es injusta la exención de la obligación del
pago del impuesto reclamado respecto de quienes
no sean directamente contribuyentes del ISR,
porque aquel impuesto se causa por la propiedad
o tenencia de activos, que también los exentos
tienen y esa es la única razón objetiva que hay
que considerar. Además, no se pierda de vista que
los no contribuyentes de renta también pueden

"permitir el uso o goce de bienes a los sujetos
 "directamente gravados por la actual LIMPAC
 "reclamada y, en tal virtud, deberían quedar
 "gravados respecto de dichos bienes por lo menos,
 "porque la última parte del primer párrafo del
 "artículo 1º del ordenamiento reclamado no
 "distingue para excluirlos.

"Por otra parte, debe aducirse que si se ha
 "pretendido dentro de la exposición de motivos de
 "la ley reclamada, que el impuesto al activo se
 "entiende como complementario del impuesto
 "sobre la renta, tales sujetos excluidos del pago de
 "aquel ningún complemento pagarán frente al resto
 "de los contribuyentes que, como la quejosa, sí
 "tienen que hacerlo de manera tal que el impuesto
 "reclamado se convierte, comparativamente para
 "nosotros, en una auténtica tasa adicional que
 "recae solamente sobre nuestras cabezas, lo que
 "ya ha sido declarado inconstitucional por el Pleno
 "de la Suprema Corte, al resolver
 "jurisprudencialmente los problemas de la
 "sobretasa del ISR establecido contra las personas
 "físicas durante 1983 y del "Impuesto a la
 "reconstrucción", materializado en 1986, en
 "términos de las tesis y sentido que más adelante
 "precisaremos.

"No obsta para concluir lo anterior el que exista la
 "posibilidad de acreditar el ISR contra el IMPAC,
 "porque, como veremos, esto no siempre es



posible y aquél puede no generarse o hacerlo en cantidad insuficiente.

"Por lo anterior, la parte quejosa se duele de la inequidad involucrada por ese trato injustamente discriminatorio, que es cometido por la ley en su agravio.

"a.3. El antepenúltimo párrafo del artículo 6º de la ley reclamada estipula una regla que inicialmente fue absolutamente general y omnicomprendiva de todos los contribuyentes del IMPAC, en el sentido de que "no se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación...". Lo anterior no obstante, en la actualidad algunos contribuyentes muy específicos se encuentran privados de tal ventaja, a diferencia de lo que acontece con todos los demás, quienes la mantienen.

"Así las cosas, existe inequidad en perjuicio de los contribuyentes cuya actividad preponderante consiste en el otorgamiento del uso o goce temporal de activos fijos, gastos y cargos deferidos y terrenos (la parte quejosa participa, en su caso, de esta situación concreta), porque en términos del párrafo final del artículo 6º reclamado, a diferencia de lo que acontece con todos los demás sujetos gravados, no están exentos del pago del IMPAC en sus ejercicios de inicio de actividades ni en el siguiente, sin que exista razón verosímil que justifique tal

"tratamiento discriminatorio, habida cuenta de que
 "se surten exactamente las mismas circunstancias
 "de hecho y de motivo, que por ello ameritaban un
 "idéntico tratamiento regulatorio.

"a.4. Existe inequidad, también, en tratándose del
 "sistema que estructuran los artículos 6º legal y 16
 "reglamentario reclamados, porque las ventajas
 "exentoras de que disfrutaban los contribuyentes
 "hoteleros debían, por igual, pertenecer a la parte
 "quejosa, quien como aquéllos es comerciante,
 "realiza actividades empresariales, dispone de
 "activos afectos al desahogo de su actividad y a la
 "producción de sus ingresos, invierte fuertemente
 "en relación con su propia capacidad económica,
 "requiere de tiempo para que madure su proyecto,
 "etcétera. El caso es que las responsables
 "distinguen, en perjuicio de la actual parte
 "promovente del amparo, los tratamientos jurídicos
 "de sujetos ubicados en situaciones objetiva y
 "jurídicamente iguales en fondo, y aquélla no goza
 "de la exención, lo cual además surte de un
 "tratamiento reglamentario que, estrictamente
 "hablando, rebasa por mucho los límites
 "dispuestos por la ley reclamada que se dice
 "reglamentar.

"b). BAJO OTRO PUNTO DE VISTA SE VIOLENTA
 "LA EQUIDAD, CON AGRAVIO DE LA PARTE
 "QUEJOSA, PORQUE LOS ORDENAMIENTOS Y EL
 "IMPUESTO RECLAMADOS NO RESPETAN EL
 "PRINCIPIO DE GENERALIDAD EN LA IMPOSICION,



CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTAN LAS
"INJUSTAS EXENCIONES QUE SE RECLAMAN.

"En efecto, ni el artículo 1º de la LIMPAC ni alguno
"otro aplicable gravó con el impuesto a todos los
"demás contribuyentes del impuesto sobre la renta,
"distintos de las personas físicas que realizan
"actividades empresariales y las personas morales
"residentes en México, no obstante que generen
"éste y que cuenten con activos para el desahogo
"de sus actividades imponibles.

"Si mucho se ha insistido en el hecho de que el
"impuesto reclamado es complementario de aquél
"y si de hecho la materia o razón de que el tributo
"exista es la gravación de los activos, la existencia
"de éstos pues, no se justifica que donde hay
"razón igual y donde existe un hecho imponible de
"la misma naturaleza, no exista la misma
"disposición ni resulten para todos los mexicanos
"las mismas consecuencias tributarias. En efecto,
"es inequitativo que sólo las empresas sociedades
"mercantiles o personas físicas que realicen
"actividades empresariales, residentes en México o
"en el extranjero, y más bien sólo algunas de ellas,
"como hemos visto, en razón de las muy injustas
"exenciones combatidas las asociaciones y
"sociedades civiles y quienes, siendo distintos de
"ellas les permitan el uso o goce de bienes en su
"actividad o para desahogarla, sean sujetos
"contribuyentes del impuesto, porque no sólo tales
"sujetos disponen y poseen activos.

"El tributo debió gravar, en su caso, a los
 "asalariados, a los profesionistas independientes, a
 "los rentistas que perciben intereses, a los
 "individuos que perciben dividendos, a los sujetos
 "que perciben premios derivados de sorteos, rifas
 "y juegos permitidos, a los que adquieren o
 "enajenan bienes que son considerados activos en
 "términos de la ley reclamada, etcétera, porque
 "todos estos sujetos generan y pagan ISR; todos
 "estos sujetos disponen de alguno de los tipos de
 "activo que prevé la ley impugnada en las diversas
 "fracciones de su artículo 2º, sino es que de todos
 "ellos, y realizan actividades económicas
 "imponibles, aunque no sean empresariales.
 "La injusticia resultante de la falta de imposición
 "general al universo completo de contribuyentes
 "susceptibles de ser gravados es ostensible,
 "porque donde existe la misma razón de fondo (la
 "posesión de activos) no existe la misma
 "disposición gravatoria. Ello mismo resulta mucho
 "más claro si apreciamos que el artículo 1º, de la
 "LIMPAC determina que son sujetos del tributo las
 "personas físicas que realicen actividades
 "empresariales y las personas morales. Si se grava
 "a algunos sujetos distintos a los antes
 "mencionados por detentar activos y por
 "permitirles a éstos su disposición, es claro que
 "debíó gravarse a todos los demás que posean
 "bienes, con objeto de aumentar el número de
 "tributantes y de aligerar la carga común para



"todos y cada uno den lo particular, lo cual, al no
"darse, implica que el tratamiento inequitativo
"referido agravie a la quejosa, porque es de las
"pocas personas que, detentando activos, se ven
"sujetos a la generación, declaración y pago del
"impuesto.

"La concesión del amparo nos corresponde, así,
"porque la discriminación tributaria que en
"perjuicio de la agraviada acontece se ha declarado
"inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte
"en causas similares, de acuerdo con las
"jurisprudencias a que anteriormente hicimos
"alusión y que son consultables en la Primera Parte
"del Informe 1985 del Presidente de nuestro
"Máximo Tribunal, a fojas 374 a 376, bajo el número
"7, respecto de la "sobretasa de 1983", y a
"propósito del "impuesto a la reconstrucción" en la
"Primera Parte del diverso Informe 1988, a fojas
"80243 a 80248, bajo los números P.1 y P.10 y
"epígrafes siguientes: "RENTA. EL ARTICULO 80
"DE LA LEY RELATIVA, EN CUANTO A LA TASA
"ADICIONAL, VIOLA EL ARTICULO 31 FRACCION
"IV CONSTITUCIONAL. (D.O. 31XII1985)" Y
""(RENTA. IMPUESTO SOBRE LA LA TASA
"ADICIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 141 DE
"LA LEY RESPECTIVA VIOLA EL ARTICULO 31,
"FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. (D.O.
"31XII1985)."

"Todas estas tesis son muy ilustrativas y su
"consulta conviene, al igual que la que se referirá

"dos párrafos adelante, porque todas son
 "analógicamente aplicables en la especie para
 "sostener la concesión del amparo en beneficio de
 "la quejosa, radicando lo importante del asunto en
 "precisar que, tal y como fueron discutidos los
 "asuntos que conformaron las jurisprudencias, se
 "estimó y declaró en algunos de ellos que el
 "impuesto era inequitativo porque no se había
 "gravado con la sobretasa también a las
 "sociedades mercantiles, siendo que éstas
 "normalmente poseen una mayor capacidad
 "tributaria que las personas físicas amén de que el
 "motivo de fondo era igual, a saber, que también
 "son contribuyentes del impuesto.

SUPLENTE
 JUST. I

"El Pleno ya ha razonado consistentemente en el
 "sentido de que cuando exista un motivo o razón
 "de la misma naturaleza, debe existir también una
 "disposición igual y esto se hace evidente con la
 "declaratoria jurisprudencial de
 "inconstitucionalidad del párrafo segundo del
 "artículo 6º de la ley del I.V.A., vigente en 1987 y
 "1988, gracias al cual se permitía a unos causantes
 "obtener la devolución mensual del impuesto y a
 "otros sólo la anual, a pesar de encontrarse en la
 "misma situación, es decir, como acreedores del
 "fisco.

"c). SE VIOLA LA GARANTIA DE EQUIDAD
 "PORQUE EL SISTEMA GRAVATORIO DEL
 "IMPUESTO ES ASIMETRICO Y DESEQUILIBRADO.



Para concretar lo que se expondrá en los incisos "subsecuentes, debe precisarse que es de justicia "que un sistema tributario que mantiene dos "aspectos equivalentes pero opuestos (uno que "mira al interés del fisco, relativo a lo que es "acumulable y gravable, y otro que mira al interés "del particular contribuyente, relativo a lo que es "deducible y no gravable), sea equilibrado y "simétrico, porque en esa medida resulta "equitativo.

En nuestro medio y bajo la égida de la "Constitución, debe entenderse proscrito un "sistema fiscal contrario a esos supuestos en "donde, contra toda justicia, sólo se favorezca uno "de sus aspectos para beneficio exclusivo de una "parte y perjuicio de la otra, máxime cuando esto "ocurre sólo en favor del fisco y únicamente en "perjuicio del pueblo gobernado contribuyente.

"c.1. Sabemos que la base del impuesto equivale al "valor promedio de los activos existentes en el "ejercicio, sólo disminuido por el valor de algunas "de las deudas también existentes durante el "mismo, porque así lo dispone la ley, siendo el "caso que, con gran injusticia, ésta limita contra "los contribuyentes la admisibilidad de auténticos "y reales pasivos o deudas que les son imputables, "cuyo valor debería disminuir la base y por ende el "impuesto, para el exclusivo efecto de que no lo "hagan. Así, mientras los activos se consideran "todos, absolutamente, legalmente no se permite la

"consideración de todos los pasivos o deudas,
 "eliminando caprichosamente el Congreso una
 "importante variedad y masa de éstos, para
 "aumentar la base de manera artificial. Así, donde
 "existe la misma razón no existe la misma
 "disposición, para beneficio exclusivo e injusto del
 "fisco y agravio de la parte quejosa.

"El numeral inconstitucional por tal motivo es el
 "artículo 5º, primero y segundo párrafos, de la ley,
 "considerado en relación con los diversos artículos
 "1º, 2º, 2ºA, 3º, 4º, 7º y 8º de la misma, cuando
 "permite en unos casos la deducción de deudas y
 "la prohíbe en otros, a pesar de tratarse de pasivos
 "de la misma naturaleza, con lo que propicia que
 "los contribuyentes que se encuentran en la misma
 "situación jurídica frente a la ley, a saber, ^{JUSTICIA} personas
 "físicas y morales causantes del impuesto al activo
 "en forma directa, que tengan deudas en el
 "ejercicio con los sujetos y en la moneda a
 "propósito de los cuales la norma permite
 "disminuir su valor para determinar la base, y
 "aquellas otras que también tengan deudas, pero
 "con personas y en moneda distintas, sean
 "colocados en situación desigual.

"Dicha situación desigual se da porque mientras
 "los que pueden hacer la deducción o disminución
 "de deudas verán reducida su base, mientras que
 "los que no puedan hacerla la verán incrementada,
 "atentándose contra la equidad en los tributos.



Efectivamente, todas las especies de activos "imaginables, hasta los intangibles (gastos y "cargos diferidos, que implican derechos por "ejercer), se encuentran gravados como objeto del "impuesto y sus valores integran la base, en "términos de lo dispuesto por los artículos 2º a 4º "de la ley. Por su parte, en cambio, el "inconstitucional artículo 5º permite disminuir del "valor de aquéllos, para alcanzar el referido "elemento esencial del tributo, solamente el valor "de las deudas contratadas con empresas "residentes en el país o con establecimientos "permanentes ubicados en México de residentes "en el extranjero, exceptuando las que adelante se "precisan, no obstante que también son deudas, en "razón de su naturaleza jurídica, contable y "económica, por lo que de ninguna manera "deberían discriminarse como se hace:

- "1) Las contraídas en MONEDA NACIONAL con ""EMPRESAS" residentes EN EL EXTRANJERO sin "establecimiento permanente en el país;
- "2) Las contraídas en MONEDA NACIONAL O "EXTRANJERA con personas QUE NO SEAN ""EMPRESAS" y sea que éstas residan o no EN "MEXICO O EN EL EXTRANJERO, no obstante que, "como se dijo, ahora ya están también gravadas las "asociaciones y sociedades civiles y las "sociedades cooperativas;

"3) Las contraídas en MONEDA NACIONAL O
"EXTRANJERA con las EMPRESAS DEL SISTEMA
"FINANCIERO O CON SU INTERMEDIACION;

"4) Las contraídas con cualquier especie de
"persona, independientemente del lugar de su
"residencia, no en moneda nacional o extranjera,
"sino en bienes, crédito o servicios; y,

"5) Las contratadas con empresas residentes en el
"país o con establecimientos permanentes
"ubicados en México de residentes en el extranjero,
"si se trata de deudas negociables.

"Como es claro, para integrar la base gravable, por
"ley sí se contemplan todos los activos del
"causante, pero no se consideran todos los
"pasivos que le corresponden, no obstante que en
"función de éstos él haya adquirido y posea los
"activos que se gravan. Así vistas las cosas,
"resulta claro que el criterio discriminatorio que se
"revela y opera es caprichoso y descabellado,
"porque todas las deudas que se refieren son
"tales, precisamente; son pasivos que asumen,
"como tales, exactamente la misma naturaleza y
"afectan de la misma manera el patrimonio de los
"contribuyentes, como lo hacen aquéllas que
"legalmente fueron admitidas para que su valor
"disminuya la base del tributo. Es palmario,
"entonces, que a pesar de tener naturaleza
"idéntica, existe un tratamiento diferencial distinto,
"desuniforme, no razonable e inequitativo.



c.2 La situación se desproporciona en extremo "cuando, por ejemplo, "juegan", esto es, se "consideran y deben sumarse entre los activos "financieros imponible cuyo valor conforma la "base, los denominados en moneda extranjera "artículos 2º, fracción I, y 4º de la ley), si están "documentados en títulos de crédito distintos de "las acciones y también las acciones de "sociedades de inversión de renta fija, y no ""juegan" ni se consideran entre los pasivos cuyo "valor es disminuible los así denominados, "precisamente, en moneda extranjera.

En este punto resulta importante destacar que, por así disponerlo en la fracción III del artículo 4º, "no se consideran cuentas por cobrar las que estén a cargo de socios o accionistas residentes en el "extranjero, sean personas físicas o sociedades, y "sin embargo, por exclusión, las contraídas con "socios o accionistas personas físicas o "sociedades residentes en México, sí se "considerarán cuentas por cobrar, implicando ello "un trato del todo inequitativo, porque mientras "éstas como activos se gravan, si el contribuyente "persona moral tiene adeudos con esos socios o "accionistas personas físicas, dichas deudas no "son deducibles de la base.

"Además, la misma razón existe para no considerar "deudas por pagar aquéllas que se tengan con "socios residentes en México, que las mantenidas "con socios residentes en el extranjero, pero

"aquéllas se excluyeron y no éstas, con trato
"distinto y discriminatorio para una situación igual.

"c.3. También acontece que "juegan" los activos de
"que disponga la contribuyente quejosa, que
"provengan o pertenezcan de y a cualquier especie
"de persona física o moral mexicana no "empresa"
"que resida en México o extranjera física o moral
"no "empresa" que resida o no en México. Tales
"activos son imputables contra los contribuyentes
"para efectos del impuesto al considerarlos la ley
"como objeto, y su valor como base de éste, pero
"en cambio no "juegan" para los contribuyentes los
"pasivos que tengan adquiridos o que adquirieran
"respecto de dichas mismas personas, como se
"desprende del artículo 5º, primer párrafo, de la ley
"actual.

"c.4. Una situación estigmatizante e inaudita,
"francamente intolerable, se aprecia cuando, en el
"mismo contexto denunciado, "juegan" como
"objeto del impuesto los activos adquiridos con
"financiamiento proveniente de empresas del
"sistema financiero y su valor completo integra la
"base, pero la deuda o pasivo que importa o
"implica dicho financiamiento no "juega" en el lado
"del pasivo, esto es, de los adeudos con valor
"disminuible.

"Este aspecto del problema es, sin duda, el más
"inícuo y grave, sobre todo ahora, cuando las
"empresas integrantes del sistema financiero
"fueron ya privadas de la inequitativa exención que



las favorecía, porque los activos que se tengan o
"adquieran con el sistema financiero o con su
"intermediación son objetos del impuesto y su
"valor base del mismo, pero no se consideran, en
"cambio, los pasivos adquiridos con éste.

"La situación que aquí específicamente se refiere
"quedará complementada con los argumentos
"correlativos que expresaremos a propósito del
"análisis de la desproporcionalidad tributaria en
"que los ordenamientos reclamados incurren. Sin
"embargo, debemos desde luego invocar en
"beneficio de los intereses jurídicos de la quejosa
"la directa aplicabilidad del precedente número
"P.XLV/95, establecido por el honorable Tribunal
"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, al fallar, con fecha 6 de abril de 1995, en
"amparo en revisión, 107/92, promovido por
"CONSULTORES EN SERVICIOS JURIDICOS
"FISCALES, S. A. DE C. V., el cual es consultable a
"páginas 63 y 64 del Semanario Judicial de la
"Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II,
"correspondiente a julio de 1995, y que a la letra
"dice:

"'ACTIVO. EL ARTICULO 5° DE LA LEY DEL
"IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 5° de la Ley del
"Impuesto al Activo viola el principio de equidad
"tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV,
"constitucional al exceptuar de la autorización de
"deducir las deudas contratadas con empresas

"residentes en el país o con establecimientos
 "permanentes ubicados en México de residentes en
 "el extranjero, a aquéllas que hubieren sido
 "contratadas con el sistema financiero o con su
 "intermediación, pues estas deudas también
 "afectan la base del tributo, ocasionándose con
 "esto un trato desigual a iguales al permitirse a
 "unos contribuyentes las deducciones de sus
 "deudas y a otros no por situaciones ajenas a ellos
 "y propias de los acreedores y sin que puedan
 "considerarse que tal distinción de deudas se
 "justifica por el hecho de que, de permitirse su
 "deducción, no se pagaría el impuesto por ese
 "concepto, ya que dicho adeudo no es el objeto del
 "impuesto y si bien como activo del acreedor
 "constituiría parte de la base para determinar su
 "ganancia mínima presunta objeto del gravamen,
 "no puede considerarse que por el hecho de que el
 "artículo 6º de la ley exente del pago del impuesto a
 "las empresas que componen el sistema financiero,
 "deba ser el deudor quien cubra el impuesto por la
 "ganancia que tal activo le generó a su acreedor,
 "pues ello significaría hacer recaer el pago del
 "tributo en los contribuyentes por una ganancia
 "ajena que en ellos implica un pasivo, lo que lejos
 "de justificar la excepción de deducción de tal tipo
 "de deudas, corrobora su inconstitucionalidad."
 "Ahora bien, a propósito de la indicada invocación
 "es conveniente precisar que con este novedoso
 "criterio plenario, la honorable Suprema Corte de



Justicia de la Nación se apartó del involucrado en
"su previa jurisprudencia número 5/1991, publicada
"a fojas 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de
"la Federación número 41, correspondiente a
"marzo de 1991, consultable bajo el rubro: "ACTIVO
"DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTICULO
"5º DE LA LEY NO VIOLA EL PRINCIPIO DE
"EQUIDAD TRIBUTARIA", la interrumpió
"definitivamente.

"c.5. Bajo otro punto de vista, también se viola la
"equidad porque mientras el valor de los activos se
"ajusta con objeto de incrementarlo y aumentar la
"base gravable, el valor de las pocas deudas o
"pasivos que caprichosamente la ley permite
"disminuir discriminando irracionalmente a otras,
"no es ajustable en los mismos términos.

"En efecto, el ajuste al alza del valor de los activos
"fijos (construcciones, edificios, mobiliario, equipo
"de oficina y transporte etcétera) de los gastos y
"cargos diferidos de los terrenos y de los
"inventarios (estos a partir del 1º de enero de 1990),
"con base en los índices nacionales de precios al
"consumidor, se prevé por los artículos 2º,
"fracciones II y III, y 3º de la ley, mientras que no se
"permite el ajuste del valor de las deudas
"correlativas, de ninguna de ellas, ni siquiera de las
"incurridas por los contribuyentes, entre ellos la
"quejosa, para adquirir cualquiera de los activos
"mencionados, respecto al impuesto impugnado, lo

"que resulta de los términos del artículo 5º, porque
 "donde la ley no distingue no se puede distinguir.
 "Ese impedimento se da, sobre todo, en las deudas
 "expresamente no deducibles para determinar el
 "valor de la base, lo que implica que los elementos
 "que darán lugar al cálculo y pago del impuesto
 "impugnado no son los reales, porque no son
 "todos, lo cual produce una gran ampliación
 "artificial de la base del mismo, que porque lo
 "mismo arroja una resultante notoriamente irreal y
 "deja de tomar en cuenta tanto el principio de
 "equidad como el de capacidad contributiva.
 "Además, la ley da reglas de valuación de los
 "activos financieros denominados en divisas o
 "moneda extranjera pero, en cambio, no da reglas
 "de valuación de ninguno de los pasivos o deudas,
 "ni siquiera de los "admitidos", con objeto de
 "dificultar la situación de los contribuyentes, como
 "se desprende de su artículo 4º, último párrafo.
 "Actualmente, en términos del artículo 5ºA de la ley
 "sólo se permite un ajuste indirecto del valor de las
 "deudas, y únicamente de las "admitidas", como
 "deducibles, pero exclusivamente para el caso
 "excepcional de que el contribuyente ejercite la
 "opción que el numeral consigna, lo que no
 "siempre es posible, y en tal virtud no se salva el
 "vicio indicado.
 "En fin, como se expone, la asimetría e injusticia
 "son evidentes, porque donde existen razones de
 "la misma naturaleza no existen disposiciones



concordantes, desequilibrándose ostensiblemente
"el sistema de cálculo del tributo sólo en perjuicio
"de los contribuyentes, dado que únicamente
"resultan incrementos de la base y nunca una
"disminución en forma real.

"Concluyendo, es extraordinariamente injusto que
"el impuesto grave todos los activos, potenciando
"incluso su valor mediante ajustes que
"incrementan sensiblemente la base en forma
"sostenida, ininterrumpida y progresiva y que, en
"cambio, no contemple ni permita la deducción de
"todos los pasivos o deudas sino sólo de algunos
"determinados con criterio caprichoso y no
"razonable, así como que no permita el ajuste real
"ya no se diga de todos los pasivos, sino siquiera
"de aquéllos cuyo "juego" reconoce, con la
"intención de que no mermen simétricamente la
"base imponible.

"El claro ánimo exclusivamente recaudatorio de las
"normas reclamadas, que tiende a aumentar la
"generación y pago del impuesto mediante la
"ampliación irracional y desfasada de la base,
"contraviniendo el más elemental sentido de
"justicia, equilibrio y sentido común, no es
"justificable bajo ningún aspecto.

"Así, el tributo reclamado auténticamente grava el
"patrimonio de los contribuyentes pasivos, pues su
"estructura no atiende, como es claro, solamente a
"la existencia de activos, pero ni la ley ni el
"reglamento de la materia dan un trato simétrico a

"las situaciones que, para efectos de la generación
 "y pago del impuesto, debieran tenerlo, lo que ha
 "hecho evidente, existiendo como única
 "explicación posible el descrito fenómeno de
 "trato inequitativo y desproporcionado, la de que
 "él favorecía al fisco en su desmedido y voraz
 "ánimo recaudador, porque de preverse un sistema
 "equilibrado y simétrico, éste haría definitivamente
 "más baja, pero justa, la recaudación, y esto
 "violenta la conciencia de cualquiera.

"¿En qué medio estamos cuando la ley resulta
 "leonina en favor del fisco y en perjuicio del pueblo
 "gobernado; cuando el sistema legal y el derecho
 "se utilizan por el poder público para legitimar sus
 "expoliaciones? En uno enrarecido ^{que debe}
 "mejorarse, sustantivamente y cuanto antes, ^{JUSTICIA D} por el
 "bien de México, a propósito de lo cual por fortuna
 "contamos con la materia necesaria, constituida
 "por las garantías individuales previstas por la
 "Constitución; con el instrumento, constituido por
 "el juicio de amparo; y, finalmente, con los agentes,
 "encarnados en los propios gobernados que
 "demandamos justicia y en la honorable Suprema
 "Corte de Justicia de la Nación que, frente a
 "nuestras demandas, conoce la realidad y equilibra
 "en el derecho la relación entre el Poder Público y
 "el pueblo.

"3. LOS ORDENAMIENTOS Y EL IMPUESTO QUE
 "SE RECLAMAN SON INCONSTITUCIONALES,



**POR VIOLAR LA GARANTIA DE
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.**

"Establece el artículo 31, fracción IV, de la
"Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos, que es obligación de los mexicanos el
"contribuir para los gastos públicos, así de la
"Federación como del Distrito Federal, Estado y
"Municipio en que residan, de la manera
"proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

"El impuesto que se reclama es inconstitucional,
"porque no cumple con la garantía individual de
"proporcionalidad.

"Las jurisprudencias número 170 y 275 del Pleno
"de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
"ya conocemos, a propósito de la proporcionalidad
"tributaria cuyos rubros son: "IMPUESTOS,
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS" y
""PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA
"ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION
"IV, CONSTITUCIONAL", estipulan cómo debe
"entenderse tal garantía y al respecto podemos
"resumir precisando de conformidad con lo que
"reiteradamente ha sostenido el propio Pleno, que
"la proporcionalidad fiscal se respeta cuando las
"contribuciones y las leyes que las establecen y
"estructuran: a) consideran, atienden y respetan
"las condiciones y capacidad contributiva de los
"sujetos afectados; b) tienen y determinan un
"objeto razonable de gravación, que no obedezcan
"al capricho ni solamente al ánimo recaudatorio,

"sino que vincula razonablemente el poder
 "tributario del Estado con la obligación de los
 "mexicanos de sufragar los gastos públicos; y, c)
 "sin ninguna discusión, en tratándose de tributos
 "directos, personales y subjetivos, que su tasa
 "(tarifa) sea progresiva, porque debe tratarse
 "cualitativa y no sólo cuantitativamente con mayor
 "rigor y nivel de sacrificio a los que más tienen o
 "ganan, respecto de los que menos poseen o
 ingresan.

"Con apoyo en estas ideas, señalaremos en
 "seguida las razones de la desproporción
 "invocada, pero para hacerlo no es indispensable
 "determinar, al menos de manera sumarisima, cuál
 "es la naturaleza jurídica del impuesto reclamado.
 "A nuestro juicio el impuesto al activo es personal,
 "directo y subjetivo, en oposición a los tributos
 "impersonales, indirectos y objetivos o reales.

"Efectivamente, es directo, bajo el criterio de su
 "incidencia, porque no es un impuesto repercutible
 "a los sujetos pasivos NO PUEDEN TRASLADARLO
 "a otros bajo ninguna circunstancia, en tanto que lo
 "prohíbe la ley. También es directo, bajo el criterio
 "administrativo, del hecho generador y del padrón,
 "porque grava periódicamente al contribuyente,
 "respecto de una situación jurídica y de hecho que
 "presenta permanencia y estabilidad, de manera
 "que pueden hacerse listas de contribuyentes y
 "padrones fiscales. Asimismo es directo por la
 "forma de manifestarse la capacidad contributiva,



puesto que se atiende directamente a "manifestaciones indubitables y originarias de ésta, ya que específicamente se grava al sujeto por lo que tiene, por la riqueza que ha acumulado. Esta posición coincide con la de Jarach quien opina que estos impuestos recaen sobre manifestaciones "directas" de la capacidad contributiva, con las cuales la riqueza se evidencia por elementos ciertos, que son la renta o el patrimonio.

Es personal y subjetivo en tanto que fue estructurado para gravar sujetos específicos atendiendo a sus patrimonios. Como se aprecia del artículo 1º de la ley, el tributo atiende a las personas y no a las cosas. En la especie no puede entenderse el impuesto aislado o abstraído de la figura de la empresa (corporativa o física) propietaria o poseedora de sus activos y ya veíamos en un inicio que es improbable la existencia de un activo aislado de sujeto alguno. Es personal la contribución que recae sobre el total de la capacidad tributaria del sujeto, en opinión de De la Garza y para Ataliba, lo es aquélla cuyo aspecto material del presupuesto toma en consideración ciertas cualidades, jurídicamente calificadas, del sujeto pasivo, que influyen para establecer diferenciaciones de tratamiento en el aspecto material de la hipótesis de incidencia, todo lo cual evidentemente acontece en tratándose del impuesto cuyo estudio nos ocupa.

"El impuesto reclamado sigue a la persona,
 "máxime cuando el artículo 1º de la ley grava a las
 "personas físicas que realicen actividades
 "empresariales y a las morales, residentes en
 "México, ya que la imposición se da atentos
 "exclusivamente a la figura de la persona pasiva,
 "porque en el caso de que terceros concedan el
 "uso o goce de sus bienes, que son activos, a otro
 "tipo de personas distintas de las antes
 "mencionadas, con independencia de la especie de
 "bien de que se trate, no quedarán gravadas ni
 "ellas mismas ni los poseedores temporales
 "beneficiados (véase el artículo 6º, fracción V, de la
 "ley actualmente en vigor).

"Inclusive podemos decir que el impuesto es
 "personalísimo, auténticamente "intuitu personae",
 "en tanto que sigue sólo a la persona contribuyente
 "que lo causó y pagó, porque así lo ha determinado
 "la ley cuando prohíbe terminantemente, dentro del
 "penúltimo y último párrafos de su actual artículo
 "9º, que el derecho de acreditamiento del impuesto
 "se transmita a otro distinto del sujeto que lo causó
 "'ni como consecuencia de fusión", especificando
 "que tal derecho es "personal del contribuyente",
 "previendo tan sólo su división, en caso de
 "escisión de sociedades, entre la escidente y las
 "escindidas. En estas condiciones, la transmisión
 "no procede por actos." inter vivos" o "inter
 "muertos". Eso se complementa con la disposición
 "del último párrafo del artículo 6º, que exenta en lo



general a los pasivos respecto de ciertos
"periodos, pero esa liberación no subsiste para el
"exentado, aún dentro del tiempo previsto, si
"acontece una fusión, transformación de la
"sociedad o su traspaso; legalmente sólo se
"favorece al sujeto original.

"Con base en lo dicho, procede entrar al análisis
"material de las violaciones en que incurren los
"ordenamientos reclamados y el impuesto que se
"combate, de la garantía de proporcionalidad
"tributaria, con agravio de los intereses jurídicos,
"administrativos y económicos de las quejasas.

"Si en el caso con toda claridad advertimos que el
"impuesto combatido es directo, personal y
"subjetivo, debemos concluir sin ambages en que,
"para ser constitucional, debería apegarse a los
"extremos de las tesis jurisprudenciales 170 y 275
"que invocamos, porque de resultar lo contrario
"viola garantías.

"El impuesto contraviene flagrantemente las
"jurisprudencias invocadas y por ello los
"ordenamientos que lo establecen y estructuran
"son, y así debe declararse, inconstitucionales.

"a). EL IMPUESTO RECLAMADO ES
"INCONSTITUCIONAL, PORQUE SU TASA FIJA ES
"DESPROPORCIONAL Y POR ELLO VIOLATORIA
"DE LA GARANTIA DE JUSTICIA TRIBUTARIA.

"El artículo 2º de la Ley del Impuesto al Activo es
"Inconstitucional, porque resulta tributariamente
"injusto al establecer una tasa fija, que jurídica y

"cualitativamente es regresiva, aunque
 "matemáticamente sea igual de proporcional, la
 "cual viola la garantía de proporcionalidad fiscal
 "tutelada por el artículo 31, fracción IV, de la Carta
 "Magna. La parte del artículo 2º reclamado que
 "contiene la disposición inconstitucional, es su
 "primer párrafo.

"Dicho artículo 2º es esencial para la determinación
 "del impuesto, porque establece el elemento
 "fundamental del tributo denominado tasa, que se
 "aplicará sobre la base resultante de lo dispuesto
 "por las cuatro fracciones del propio numeral y,
 "entre otros, por los artículos 3º a 5º, 7º y 8º de la
 "propia ley.

"Según lo que señala el Pleno ^{TUPREMA} ^{JUSICA} ^{REVISION} en las
 "jurisprudencias ya multinvocadas, la garantía de
 "proporcionalidad se respeta cuando el tributo
 "atiende a la capacidad contributiva de los sujetos
 "causantes. Asimismo, la médula, de dicha garantía
 "estriba en que la tasa de la contribución, como
 "elemento esencial de la misma, sea progresiva,
 "para lo cual debe establecerse en tarifa, pues
 "mediante ella se consigue que cubran un
 "impuesto mayor en calidad y cantidad los
 "contribuyentes de más elevados recursos y no
 "uno menor, en calidad y cantidad, los de menores
 "recursos y posibilidades. El que así se opere
 "garantiza que en un país como el nuestro, al que
 "le pesan grandes carencias y desiguales
 "oportunidades de desarrollo y progreso para la



población, que los contribuyentes de tributos
"directos y personales satisfagan mejor su
"responsabilidad social tributaria, tanto por parte
"de quienes menos tienen como por parte de
"quienes mejores posibilidades y posiciones
"económicas han alcanzado o están alcanzando, de
"acuerdo con criterios idóneos de justicia
"distributiva operante en la presente etapa
"histórica que vivimos. A

"La gravación diferencial, indispensable para la
"constitucionalidad de todo impuesto directo, en
"los términos jurisprudenciales descritos,
"propende a generar un mayor sacrificio tributario
"cualitativo y no solo cuantitativo, para aquellos
"contribuyentes de mayor capacidad económico-
"contributiva, respecto de los que tienen una
"menor. La disminución patrimonial, así, debe ser
"progresiva, más acentuada en calidad para las
"capacidades más altas que para las más bajas y
"viceversa, lo cual se ha estimado ineludible o
"indispensable por la Corte, como supuesto
"axiomático de justicia en la imposición.

"Pues bien, es el caso de que para efectos de
"calcular el impuesto al activo definitivo del
"ejercicio, al igual que sus pagos provisionales, el
"artículo 2º de la ley que lo impone y estructura
"establece una tasa única del 1.8%, para aplicarse
"sobre la base total del tributo.

"Dicha tasa, como elemento esencial del impuesto,
"siendo única, en vez de ser progresiva, jurídica y

"materialmente es regresiva, desde el punto de
 "vista cualitativo, aunque matemáticamente sea
 "igual que proporcional y, por ende, es
 "inconstitucional, toda vez que no atiende
 "apropiadamente a la capacidad económica ni, más
 "exactamente, a la contributiva de los causantes
 "lesionados, gravando y afectando, de hecho y de
 "derecho, más que proporcionalmente a los de
 "menores recursos y menos que
 "proporcionalmente a los de mayores riquezas,
 "siendo por ello evidentemente injusta, ATENTOS A
 "LO EXPRESAMENTE DETERMINADO EN LA
 "JURISPRUDENCIA FIRME Y VIGENTE DEL PLENO
 "DE LA SUPREMA CORTE EXPEDIDA EN LA
 "MATERIA, de la cual resulta que una tasa igual
 "que proporcional, así como una regresiva, desde
 "el punto de vista matemático, son
 "inconstitucionales por desproporcionadas.
 "Efectivamente, con tasas matemáticamente fijas o
 "regresivas, en calidad jurídica cubrirá un impuesto
 "más que proporcionalmente mayor quien tenga
 "una base gravable más pequeña, de \$500,000.00
 "(QUINIENTOS MIL PESOS M.N.) por ejemplo, que
 "uno tenga una base mayor, de \$10'000,000.00
 "(DIEZ MILLONES DE PESOS M.N.) por ejemplo,
 "quien cubrirá un impuesto menos que
 "proporcionalmente mayor.
 "Respetan el principio constitucional de justicia en
 "la imposición, en tratándose de impuestos
 "directos, SOLAMENTE LAS TASAS



PROGRESIVAS, que son las que provocan un mayor impacto en cantidad y proporción, esto es, en calidad, a los de más recursos y riqueza y no sobre los que tienen menos. Así, en el caso concreto la tasa referida 2% fijo es directamente violatoria de la jurisprudencia, pues no establece una tarifa progresiva y debe tenerse claro en mente que la progresividad ha sido identificada como el alma de la garantía de proporcionalidad respecto de ese elemento esencial del impuesto, conocido también como alícuota.

La tasa única establecida por el numeral combatido no revoca en los causantes de mayores recursos patrimoniales un impacto distinto en cantidad ni en lo tocante a un mayor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, con proporción a su base, respecto de los causantes de menores recursos, a los que sí, en cambio, les afecta en cantidad y calidad proporcionalmente mayores en relación con su menor nivel de riqueza, de lo que se sigue que, entonces, grava más duramente a los que tienen una menor capacidad de contribución, porque proporcionalmente les priva de mayores recursos que a aquéllos que tienen una mayor, quienes proporcionalmente se ven menos afectados, lo que es injusto e inconstitucional.

No es óbice para concluir lo dicho, el que se sostenga que la tasa es fija por ser la mínima,

"porque aun dentro de rangos tasatorios bajos
 "también es posible tarifar -siempre es posible
 "tarifar- y debe existir una tarificación progresiva,
 "habida cuenta de que se da la misma razón de
 "fondo en uno y en otros escenarios.

"Además, es desproporcionada una tarifa mínima
 "si no existen ingresos o utilidades realmente
 "consumados, siendo el caso que, atentos al objeto
 "gravado por el impuesto reclamado, tal
 "consumación no necesaria es posible y sin
 "embargo el impuesto sí se genera y debe pagarse.

"b) EL IMPUESTO ES INCONSTITUCIONAL,
 "PORQUE NO "CONSIDERA NI RESPETA LA
 "VERDADERA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE
 "SUS SUJETOS PASIVOS CAUTIVOS.

"b.1. Quedó visto al analizar los problemas de
 "equidad, que existe un injusto trato legislativo
 "para los sujetos causantes que deben pagar el
 "impuesto respecto de los que están exentos de su
 "entero, porque todos disponen de activos para
 "desempeñar sus actividades económicas y,
 "además, porque algunos de los indebidamente
 "beneficiados contribuyen en ISR.

"Estrechamente ligados con aquellos argumentos,
 "se proponen los siguientes:

"Se viola la proporcionalidad en perjuicio de la
 "quejosa, que sí tributa, porque la exención la
 "coloca en una situación jurídica, administrativa y
 "económica inferior y desventajosa respecto de las
 "entidades exentas, quienes como empresas no



tienen la carga administrativa y económica del tributo, no obstante que reúnen todas las características naturales para ser gravadas, con lo que se propicia la competencia desleal y la desproporcionada atribución de cargas fiscales, francamente desequilibradas, dentro del país.

No es proporcionado que, como consecuencia de la imposición reclamada, sólo a algunos causantes se les haga más pesado funcionar que a otros que son iguales, privando a aquéllos de recursos indispensables para el desahogo normal de sus giros porque los deberán distraer para pagar el impuesto, mientras que los exentos no, amén de que éstos tienen, por sus características (bancos, verbigracia), mucha mayor riqueza y capacidad económica que quien aquí litiga, no obstante lo cual, la peticionaria de garantías verá mermada aún más su riqueza y aquéllas no.

b.2. VIOLENTA LA GARANTIA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL DESCONSIDERAR LA VERDADERA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LA PARTE QUEJOSA AGRAVIADA, EL ASIMETRICO SISTEMA DE CARGAS QUE ESTABLECEN Y PROPICIAN LOS ORDENAMIENTOS E IMPUESTO RECLAMADOS.

Es desproporcionado que legalmente se considere el valor de los activos adquiridos mediante financiamiento como base del impuesto y que no se consideren esos financiamientos, que son pasivos o deudas, como parte de aquellas cuyo

"valor puede y debe disminuirse de la base, cuando
 "se hayan adquirido y contratado con las empresas
 "del sistema financiero o con su intermediación o
 "en moneda extranjera o con cualquiera de los
 "demás sujetos no "admitidos" por el artículo 5º de
 "la ley.

"Particularmente grave y nociva resulta para la
 "parte quejosa la situación actual, cuando ya las
 "empresas integradoras del sistema financiero son
 "sujetos contribuyentes no exentos, lo que de por
 "sí justifica que las deudas mantenidas con ellas
 "deben contemplarse como deducibles para
 "efectos de alcanzar la base del IMPAC.

"Se falta a la proporcionalidad, porque el que las
 "deudas se contraigan con los sujetos legalmente
 "excluidos o en moneda extranjera no es
 "determinante de la capacidad económica de los
 "contribuyentes percutidos y, por lo mismo, al
 "propiciarse que se aplique una base mayor a
 "quien no puede hacer la deducción del valor de
 "sus deudas frente al que sí puede realizarla, al que
 "se le facilitará que se le aplique y le resulte
 "imputable una base menor, se vulnera la garantía
 "en comentario, porque el pago superior no se
 "encontrará, en este aspecto, en proporción a la
 "capacidad económica de la quejosa sino que
 "dependerá de una situación extraña, a saber, si la
 "deuda se contrae o no en moneda nacional y si se
 "asume o no con empresas, personas físicas o
 "morales, o bien con nacionales o extranjeros, o



con empresas del sistema financiero o no, o en
"bienes y créditos y no en efectivo, etcétera.

"Debe añadirse que, además de que todos esos
"supuestos son exógenos y absolutamente
"independientes de la capacidad tributaria de la
"quejosa, en el caso particular de la prohibición de
"disminuir de la base el valor de las deudas
"contratadas en moneda extranjera, con
"independencia de quien sea el sujeto acreedor, la
"disposición del artículo 5º de la ley es arbitraria,
"porque el Congreso olvida que, de conformidad
"con lo dispuesto por la Ley Monetaria en vigor, si
"las deudas deben pagarse en México se liberarán
"en pesos, aunque se encuentren denominadas en
"divisas, al tipo de cambio que corresponda al día
"de pago. De esta suerte, la disposición reclamada
"resulta esquizofrénica, en tanto que técnicamente
"hablando, la quejosa deudora, dado el caso, puede
"liberarse en México de cualquier especie de deuda
"dineraria, pagándola en pesos.

"Así las cosas, para caracterizar a los
"contribuyentes no se sigue que tengan un mayor o
"menor capital o activo ni que dicho capital o
"activo produzca una renta mayor o menor, del
"hecho de que contraten o no una deuda con los
"sujetos "permitidos" o con los "prohibidos" por la
"norma, o bien de que la contraigan o no en pesos,
"por lo que resulta estridente la violación
"constitucional de la proporcionalidad fiscal que se
"denuncia, en agravio de la agraviada.

"Además, si el legislador estimó que procedía la deducción en algunos casos, no se advierte por qué la prohibió en otros, cuando en ambos se trata de deudas auténticas y de la misma naturaleza, e incluso es factible que sean siempre más onerosas si no se contratan, en concreto, con las empresas del sistema financiero, resultando aquí más disminuida la capacidad económica de los contribuyentes, por lo que existe mayor razón para permitir la deducción.

"Pues bien, aunque estimo que todo lo anterior es bastante para obtener la concesión del amparo demandado, pueden complementarse las ideas vertidas destacando que es normal que, en el desahogo de sus actividades, las empresas requieran indispensablemente de préstamos y financiamientos en efectivo, crédito o bienes, para adquirir, mejorar o sustituir su maquinaria, equipos de oficina y transporte, muebles, terrenos, edificaciones y materias primas necesarias para sus establecimientos y operación, ya con objeto de impulsar sus actividades y hacerlas más productivas, eficientes y grandes, o simplemente para subsistir en una mala época. Las empresas suelen requerir de esos financiamientos, que normalmente les son exógenos, porque sus capitales son insuficientes para satisfacer sus propias demandas y necesidades de subsistencia, desarrollo y actualización en un momento dado.



En términos de lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de la LIMPAC, todos los bienes que la quejosa adquirió y en lo sucesivo pudiera adquirir con esos préstamos, forman y formarán su activo, que está y quedará gravado en las condiciones de valuación y tiempo que la propia ley refiere, convirtiéndose en objeto del impuesto. Sin embargo, el artículo 5º prohíbe que, para determinar la base, y disminuya los valores de las deudas contraídas con las empresas del sistema financiero, con su intermediación o con cualquiera de los otros sujetos no admitidos o bien en moneda extranjera, no obstante que en razón directa de dichas deudas se activó, y esto es claramente injusto y desproporcionado, porque no guarda ningún contexto sensato con la realidad empresarial.

No es justo que se haga objeto y base del gravamen a un bien adquirido y a todo su valor que incluso deberá ajustarse permanentemente por inflación, siempre aumentando y que en concórdancia no se permita, de manera concomitante, que de ese valor se disminuya lo que aún deba o adeude el contribuyente por esa adquisición, únicamente debido a que la deuda se tenga con las empresas del sistema financiero, por ejemplo.

Repugna, además, que el valor del adeudo no pueda ajustarse en la misma forma en que se ajusta el valor de los activos y que, por otra parte,

"el mismo tipo y monto de deuda sí pueda
"disminuirse si se contrata con un tercero distinto
"de las empresas del sistema financiero o de los
"demás sujetos excluidos.

"Me conviene ejemplificar, y para ello nos
"apoyaremos en lo expuesto por un autor,
"diciendo:

"Imaginemos que una empresa adquiere en
"N\$100'000,000.00 una maquinaria para la
"realización de sus actividades empresariales, a
"través de un préstamo bancario equivalente.
"Conforme a la ley combatida deberá pagar
"\$2'000,000.00 del impuesto al activo porque no
"puede deducir su deuda. Sin embargo, la
"capacidad contributiva es totalmente inexistente,
"pues no será sino hasta que se comercialicen los
"productos elaborados con esa maquinaria que la
"empresa empiece a generar ingresos y entonces
"sí esté en posibilidad de contribuir al gasto
"público. Es evidente, pues, que la diferencia entre
"los activos y los pasivos cuya deducción se
"admite en la ley, no permite valorar que de tras de
"ella haya una capacidad contributiva porque en,
"ese caso, se debe todo lo que se tiene."

"A mayor abundamiento, el que no se permita
"deducir la totalidad del pasivo da lugar a
"situaciones de inequidad absoluta pues, por
"ejemplo, compárense aquellas empresas que se
"encuentran muy endeudadas con sus proveedores
"y que conforme a la ley que se combate tendrán



derecho a deducir ese pasivo, con aquellas
"empresas cuyas únicas deudas han sido
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación o que las tienen en moneda
"extranjera, las cuales no podrán reducir ese
"pasivo.

"En este último caso, supóngase una empresa
"cuyo activo es de 1000 y sus deudas con
"proveedores de 500; la base del impuesto será
"500. En cambio, otra empresa que también tiene
"activos de 1000 pero sus deudas sólo contratadas
"con el sistema financiero de 500; la base del
"impuesto será 1000, en vez de 500 que tiene la
"primera. En este caso las dos empresas tienen la
"misma cantidad de activos y pasivos, sin
"embargo, una tendrá que pagar más impuestos
"que la otra. Ahora bien, ¿puede considerarse
"válidamente que la segunda empresa tiene mayor
"capacidad contributiva que la primera por el solo
"hecho de tener su pasivo contratado con el
"sistema financiero?. No. Es muy clara la inequidad
"y desproporción que propicia la ley reclamada,
"como se demuestra.

"Otro ejemplo evidente de inequidad sería el caso
"de aquellas empresas que por necesidad, por
"haber sido forzadas por sus acreedores, o
"simplemente por cuestiones de flujos financieros,
"se encuentran endeudadas en moneda extranjera
"y con el sistema financiero de otros países o
"simplemente con proveedores extranjeros.

"Suponiendo una empresa que tenga de activos
 "1000 y sus deudas con proveedores, sociedades
 "mexicanas, en moneda nacional, sean de 800, la
 "base del impuesto para esta empresa será de 200.
 "En cambio si la misma empresa señalada, por
 "causas ajenas a su voluntad, al no existir insumos
 "nacionales, por ejemplo se viera en la necesidad
 "de importarlos financiándose para ello, tendría un
 "pasivo en moneda extranjera equivalente a 800 en
 "moneda nacional, mismo que no podría deducir
 "del importe de sus activos para determinar el
 "monto del impuesto, por lo que en este último
 "caso la base del impuesto será de 1000, y no de
 "200, como en la primera hipótesis.

UPREMI
 JUSTICIA I

"Efectivamente, en la especie no queda más que
 "rendirnos ante la evidencia de las violaciones
 "constitucionales que argumentalmente probamos,
 "porque es inicuo el tratamiento legal de la
 "cuestión, sobre todo en los impedimentos
 "referidos a la disminución de las deudas
 "contratadas con el sistema financiero, porque
 "siendo rechazada la deducibilidad del valor de los
 "adeudos contraídos con él, sin embargo, desde el
 "momento en que el banco o entidad financiera que
 "fuese pone a disposición del contribuyente el
 "préstamo de que se trate en efectivo, cheque o en
 "línea de crédito, éste ya forma parte del activo
 "objeto del impuesto, y así permanece hasta que el
 "contribuyente adquiera, con la inversión de ese
 "efectivo o crédito, algún bien, pero entonces se



transforma, para continuar pesando dentro de su activo, sólo que ya como terreno, construcción, mueble o lo que fuere, debiendo continuarse el pago del impuesto a su respecto, pero siempre sin poder excluir la cantidad recibida en préstamo de la institución financiera que le sirvió para adquirirlo y que aún adeuda.

El rechazo legal es insólito y caprichoso, porque fue el mismo Estado quien en términos de la Ley de Instituciones de Crédito otorgó a los bancos el carácter de instituciones destinadas a desahogar el servicio público de la Banca y del Crédito y para eso y por eso existen por naturaleza, para prestar y para financiar. Es más, son el conducto idóneo o preferible para financiarse (o al menos eso se supone), porque son profesionales de tal actividad.

Tal rechazo constituye un obstáculo para el sano desempeño de su actividad y restringe la libertad de crédito y de comercio de los contribuyentes empresarios, porque existe una sanción fiscal de por medio para el caso de que utilicen los servicios financieros de aquellas instituciones que para eso, precisamente, existen, y a eso, concretamente, están avocadas por naturaleza, sin que exista razón fundada para ello, porque el préstamo de las instituciones financieras es exactamente de la misma naturaleza del que pueden hacer las demás empresas residentes en México, en moneda nacional o extranjera, o del

"que pueden darle a las empresas las personas que
"no lo son.

"b.3. En igual medida es desproporcionado el que
"se discriminen del pasivo las deudas contratadas
"con personas residentes en el extranjero sin
"establecimiento permanente en el país, sean o no
"empresas, o con personas físicas, asociaciones y
"sociedades civiles residentes en México, que no
"realizan actividades empresariales, aun cuando se
"contraten en moneda nacional, porque realmente
"también disminuyen en forma directa la capacidad
"contributiva de los contribuyentes gravados y,
"entre ellos, la de la quejosa.

SUPLENTE
JUSTICIA

"Efectivamente, la eliminación de toda esa especie
"de deudas, injustamente excluidas por la ley del
"cálculo de los pasivos, aun cuando auténtica y
"efectivamente son deudas bajo cualquier punto de
"vista y cuyo valor es debido y utilizable para
"disminuir la base del impuesto, produce un trato
"desproporcionado y ruinoso que no atiende a la
"verdadera capacidad contributiva de los sujetos
"afectados.

"La desproporcionalidad es palmaria, cuando
"puede acontecer que un contribuyente se haya
"financiado para adquirir activos enormes,
"solamente con sujetos y en moneda de los que la
"ley excluye del pasivo disminuible de la base,
"como si no fueran auténticas deudas. No
"obstante, dichas deudas disminuyen las reales
"posibilidades económicas del contribuyente



mientras pesan sobre él y sin embargo, se le
"castiga con un impuesto cuya base equivale sólo
"al valor de los activos que adquirió, sin ninguna
"disminución, cuando carece de capacidad
"económica real. Esto favorece a otros sujetos que,
"tal vez sin tanto empeño por producir en bien de
"México, si podrán disminuir de los activos
"adquiridos mediante financiamiento, las deudas
"adquiridas en los términos adquiridos por la ley,
"no obstante que jurídica, contable y
"económicamente, sean exactamente de la misma
"especie de aquéllas en las que el contribuyente
"incurrió.

b.4. Bajo otro punto de vista, en general el artículo
"5º de la ley pasa por alto la capacidad contributiva
"de los sujetos causantes para pagar el impuesto,
"desconsiderándola por completo, sin importarle
"que todo tributo, de la especie que sea, debe partir
"de la existencia de capacidad para cubrirlo en los
"sujetos obligados a su pago.

"El hecho de que se tenga un conjunto de activos
"no es determinante, por sí mismo y aisladamente
"considerado, de existencia de capacidad
"económica. En todo caso debe tomarse en cuenta
"las deudas contraídas por el contribuyente para
"adquirir dichos activos, apreciando precisamente
"lo que la iniciativa de ley vigente durante 1989
"denominó "activos netos", porque es la diferencia
"resultante de restar de los activos que se tengan
"los pasivos que con que se cargue, cuando es

"superavitaria, lo que puede constituir un
"parámetro razonable para medir el nivel
"económico del contribuyente, dando base justa
"al impuesto y no lo contrario, arbitrariamente,
"como sucede.

"Aquí resulta oportuna la impugnación del
"pretendido objeto consistente en un rendimiento
"mínimo presunto que, bajo presunción iuris et de
"iure, se opone a los activos y cuya obtención no
"es ineludible en la realidad sino completamente
"aleatoria. En tanto que conduce a actos
"autoritarios necesariamente privatorios, sobre
"todo de derechos y de recursos pecuniarios de los
"gobernados lesionados, su eventual suposición
"legal violenta la garantía de audiencia, porque
"impide a los gobernados probar que dicho
"rendimiento ficto no se da en la realidad nunca o,
"si alguno se produce, no se da siempre o en la
"magnitud estimada. Violenta también, desde
"luego, la garantía de proporcionalidad, porque
"según lo que ya vimos y la Suprema Corte ha
"apenas dilucidado, lo que el tributo realmente
"grava son los activos, su propiedad, posesión y
"tenencia para efectos de realizar la actividad
"empresarial, y no sus productos.

"Es analógicamente aplicable la jurisprudencia
"plenaria 156, consultable en fojas 267 a 269 de la
"Primera Parte del Apéndice 1917-1988, bajo el
"rubro "PRODUCTOS DE CAPITALES.
"INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 316 DE



**LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL
"DISTRITO FEDERAL", a cuya consulta nos
"remitimos y cuyos razonamientos hacemos
"nuestros como conceptos de violación.**

**"b.5. Es también desproporcionado que, en
"términos de lo dispuesto por los artículos 2º, 2ºA y
"3º de la ley, en condiciones normales sólo deban
"ajustarse por inflación y siempre al alza los
"valores de los activos del contribuyente para
"efectos del cálculo del impuesto y no, en cambio,
"los de las deudas, en los mismos términos.**

**"En este aspecto tampoco se atiende a la
"capacidad económica ni a la contributiva real de
"los sujetos obligados, porque la base del
"impuesto se hace depender de un hecho o
"elemento ajeno por completo a la misma, que es la
"inflación.**

**"La inflación no aumenta en modo alguno la
"capacidad económica ni contributiva de nadie; al
"contrario precisamente, ocurre que destruye y
"erosiona las economías de todos a los que afecta
"y lesiona, absolutamente de todos.**

"Nadie gana con la inflación, salvo el fisco.

**"El índice nacional de precios al consumidor con
"las violaciones de la legalidad tributaria que voy a
"exponer más adelante mide la variación de
"determinados precios de bienes y servicios en el
"mercado y, por obvias razones, atentos a la
"naturaleza de las cosas, no toma en cuenta las
"características económicas inherentes a los**

"sujetos obligados al pago del impuesto, las cuales
 "están íntimamente ligadas a las características
 "propias de sus activos productivos, esto es, al
 "tipo y naturaleza de éstos.

"En efecto, no todos los bienes involucran
 "similares costos de mantenimiento ni parámetros
 "equivalentes de rentabilidad; tampoco son iguales
 "las dificultades para adquirir y realizar las
 "materias primas industrializables o
 "comercializables que utilizan los contribuyentes,
 "como tampoco es igual el margen de utilidad que
 "manejan. Dependiendo de sus giros, los diferentes
 "tipos de contribuyentes gravados requieren de
 "distintos tipos de bienes o activos, atentos a la
 "especie de su operación y al destino y aplicación
 "de sus activos financieros, fijos, etcétera.

"Bajo estas condiciones son tales circunstancias
 "operativas y de negocios las que condicionan la
 "capacidad contributiva, de las empresas y no la
 "inflación. Son los aspectos inherentes a los
 "sujetos contribuyentes y al objeto del gravamen
 "los activos, el patrimonio que particularmente
 "detentan los que real, material y únicamente
 "deberían influir en la determinación de la base del
 "tributo, siendo que la ley sólo reconoce tales
 "aspectos de una manera parcial y distorsionada,
 "en tratándose de la depreciación de activos fijos.
 "Por otra parte, el índice siempre aumenta la base y
 "nunca la disminuye, con independencia absoluta
 "de que exista o no capacidad económica o riqueza



verdaderas y de que éstas aumenten o disminuyan en realidad, lo que obedece a otros múltiples factores completamente ajenos a la inflación.

b.6. Por otra parte, el impuesto es desproporcionado en la misma medida en que lo es la mecánica legal determinada para su entero definitivo y para el de los pagos provisionales que motiva, porque se propicia, en razón de que la base de cálculo de éstos estriba exclusivamente en la posición patrimonial del ejercicio anterior del contribuyente Y NO EN LA REAL DEL QUE TRANSCURRE, que no se atienda a su capacidad contributiva real.

Es el caso que la quejosa puede generar impuesto al activo de más en pagos provisionales, respecto del que resulte al término del ejercicio, y que no genere o pague ISR. En tal caso, si el impuesto al activo definitivo es menor que el enterado en pagos provisionales, éstos se convertirán en pago definitivo.

Esta mecánica y la sola posibilidad legal de que lo dicho ocurra así, trastocan y desnaturalizan a tales pagos provisionales, porque de hecho se convierten en una confiscación y en un impuesto causado sobre bases ficticias, cuando es futuro e incierto que se genere ISR.

Ya el Pleno de la Suprema Corte ha resuelto que las bases, objetos o ingresos ficticios sobre los que se causan impuestos, son inconstitucionales,

"porque al no guardar ningún contexto con la
"realidad, no atienden ni consideran, ni respetan la
"capacidad contributiva de los sujetos pasivos.

"El caso concreto y perfectamente verosímil en que
"puede presentarse la aberrante situación que se
"denuncia, acontece cuando, en el curso de un
"ejercicio determinado, la empresa o el empresario
"se "desactiva", deshaciéndose de los bienes que
"constituyen el objeto del impuesto definitivo y
"cuyo valor conforma la base de su cálculo en el
"ejercicio. En estas condiciones, la base de los
"pagos provisionales es tomada del ejercicio
"anterior del contribuyente y equivale al valor de
"los activos que entonces mantuvo, más la
"actualización obligatoria de su valor con la
"inflación de todo un año, en términos de lo
"dispuesto por el artículo 7º de la ley, y será
"necesariamente mayor que la base real del
"ejercicio en curso o término de que se trate, que
"es la computable para determinar el impuesto
"definitivo.

"b.7. Independientemente de que el objeto del
"IMPAC esté constituido por los activos del
"contribuyente, por los activos netos de éste o bien
"por otro elemento, como la ganancia mínima
"presunta sobre ellos, estimó indispensable el
"cuerpo legislador responsable, es inconstitucional
"el artículo 9º de la LIMPAC reclamada y para
"aducir lo relativo, sobre todo bajo el más amplio
"marco conceptual de la defensa, hago nuestros



los argumentos del Máximo Tribunal de la
"República, invocando en beneficio de la causa de
"la parte agraviada la directa aplicabilidad del
"precedente número P.XLVI/95, establecido por el
"honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, al fallar, con fecha 6 de abril
"de 1995, en amparo en revisión 107/92, promovido
"por CONSULTORES EN SERVICIOS JURIDICOS
"FISCALES, S. A. DE C. V., el cual es consultable a
"página 65 del Semanario Judicial de la Federación
"y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II,
"correspondiente a julio de 1995, y que a la letra
"dice:

"ACTIVO EL ARTICULO 9° DE LA LEY QUE
"REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS
"PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
"TRIBUTARIA. (REFORMAS Y ADICIONES
"PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
"FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989). De
"conformidad con lo establecido en el artículo 9° de
"la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas los
"contribuyentes podrán acreditar contra el
"impuesto del ejercicio una cantidad equivalente al
"impuesto sobre la renta efectivamente pagado, lo
"que significa que si un contribuyente tiene
"ingresos o utilidades podrá realizar tal
"acreditamiento e, inclusive, si los mismos llegan a
"la ganancia mínima presunta objeto del impuesto
"al activo, no verán incrementada su carga
"impositiva, mientras que aquéllos que no tengan

"utilidades o resientan pérdidas soportarán la
 "carga impositiva, pues no tendrán cantidad alguna
 "que acreditar y la ley no prevé la posibilidad de
 "desvirtuar la presunción de ganancia mínima de la
 "cual parte como objeto del tributo. De lo anterior
 "se infiere que el precepto legal citado viola los
 "principios de proporcionalidad y equidad tributaria
 "consagrados en el artículo 31, fracción IV,
 "constitucional, pues, consistiendo el primero de
 "ellos, en que los causantes deben contribuir al
 "gasto público en función de su respectiva
 "capacidad contributiva, el precepto legal citado
 "hace recaer el pago del impuesto en quienes no
 "tienen tal capacidad o la tienen en menor medida y
 "libera de la carga impositiva a quienes tienen
 "mayor capacidad tributaria, lo que ^{ESTADO SUPLEN} da como
 "consecuencia también la transgresión del
 "principio de equidad que exige trato igual a los
 "iguales y desigual a los desiguales, pues, de esa
 "forma, se da trato igual a los desiguales y desigual
 "a los iguales."

"Ahora bien, a propósito de la indicada invocación
 "es conveniente precisar que con este novedoso
 "criterio plenario, la honorable Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación se apartó, interrumpiéndolo,
 "del involucrado en sus previas jurisprudencias
 "números 19/1991 y 21/1991, que fueron
 "oficialmente publicadas en la Gaceta del
 "Semanario Judicial durante el indicado año, bajo
 "los rubros "ACTIVO DE LAS EMPRESAS,



"IMPUESTO AL. EL ARTICULO 9° DE LA LEY, QUE
"AUTORIZA EL ACREDITAMIENTO DE LAS
"CANTIDADES CUBIERTAS POR ESA EXACCION,
"SOLO PARA QUIENES OBTENGAN UTILIDADES
"AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, NO VIOLA EL
"PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
"TRIBUTARIA" y "ACTIVO DE LAS EMPRESAS,
"IMPUESTO AL. EL ARTICULO 9° DE LA LEY, QUE
"AUTORIZA EL ACREDITAMIENTO DE LAS
"CANTIDADES CUBIERTAS POR ESA EXACCION,
"NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
"TRIBUTARIA", las cuales, como se ha dicho,
"definitivamente interrumpió.

"b.8. Bajo otra perspectiva y en atención a lo
"establecido en el artículo 9° de la ley impugnada,
"como ya se dijo, la naturaleza del acreditamiento
"en el actual impuesto al activo ha tenido una
"profunda transformación, ya que anteriormente
"las cantidades correspondientes a este último se
"podían acreditar contra las pagadas de ISR, pero
"ahora resulta exactamente a la inversa, dado que
"bajo este nuevo cuerpo normativo las sumas de
"dinero pagadas efectivamente en ISR, se
"acreditarán, con sus limitantes, contra el impuesto
"al activo.

"Bajo la anterior ley, que inició su vigencia a partir
"del 1° de enero de 1989, el impuesto al activo de
"las empresas era accesorio del ISR, siendo éste el
"principal, pero ahora resulta a la inversa; es decir,
"que actualmente puede estimarse que el ISR viene

"a ser el accesorio o complementario y el impuesto
 "al activo el principal, por más que esto suene
 "absurdo.

"Lo apuntado implica, en forma procedente, que si
 "un contribuyente durante su ejercicio fiscal tuvo
 "nulos o pocos ingresos y por ello su pago del ISR
 "fue en ceros o mínimo, al tener activos deberá
 "hacer las erogaciones de efectivo necesarias para
 "tributar con IMPAC, atento al 2% que aplicará
 "sobre el valor de tales bienes, siendo todo esto
 "violatorio del principio de proporcionalidad fiscal
 "precisado en la fracción IV del artículo 31
 "constitucional, por no ser denotativos de su
 "capacidad contributiva verdadera.

"Se insiste en dicha violación, dado que resulta por
 "demás contrario a derecho pretender obligar a un
 "contribuyente a realizar una determinada
 "erogación, vía pago de impuestos, si ésta no toma
 "como base sus utilidades, compuestas de
 "ingresos y deducciones, descuidándose con ello
 "su capacidad contributiva.

"Independientemente de lo ya dicho, resulta del
 "todo contrario al principio de proporcionalidad el
 "devolverle al particular las cantidades pagadas en
 "exceso sólo hasta el término del ejercicio, o
 "incluso dentro de los diez ejercicios siguientes,
 "como ahora, y no durante el transcurso del mismo
 "primero o actual de que se trate, máxime que,
 "como ocurre, se le obliga a declarar y pagar tanto



el ISR como el impuesto al activo en forma mensual, o si acaso, trimestral.

"b.9. Se violenta la proporcionalidad por total desconsideración de la capacidad contributiva de los causantes cuando, además de los vicios especificados en los dos apartados antecedentes, el artículo 9º de la ley prohíbe la transmisión del derecho de acreditamiento como consecuencia de fusión, lo que concreta ipso iure, si la fusión acontece, la conversión de simples pagos provisionales en pago definitivo sin base real, y esto es aberrante.

"El legislador muestra un desconocimiento profundo de la institución de la fusión, cuya naturaleza trastoca con su ánimo recaudador extremado, y un gran desprecio por el derecho especial operante al respecto. Así es, por virtud de la fusión la sociedad fusionada desaparece y prevalece sólo la fusionante, quien asume la responsabilidad íntegra de aquélla, deviniendo en titular de toda su esfera de derechos y obligaciones y, en tal virtud, responsable de ésta.

"Es insensato que el fisco pretenda, como lo hace en general, que la fusionante responda de cualquier adeudo fiscal pendiente de la fusionada para con él pero, en cambio, que en lo concreto no pueda utilizar el derecho de acreditamiento contra el impuesto al activo que aquélla le asistía. Nuevamente se hace claro un evidente desequilibrio y asimetría del sistema, porque

"donde hay razón equivalente no existe disposición
 "también equivalente, y porque tal desequilibrio
 "injusto siempre favorece al fisco y perjudica al
 "gobernado contribuyente.

"Mediante la fusión, de dos personas jurídicas
 "distintas sólo queda una e, inclusive, puede surgir
 "una sola, nueva y mayor, titular y responsable de
 "toda la esfera de derechos de las desaparecidas.
 "En estas condiciones y porque no se atiende a la
 "capacidad contributiva del nuevo ente, resulta
 "francamente inequitativo y desproporcionado que,
 "contra la naturaleza de las cosas, la ley declare la
 "extinción de un derecho que precisamente derivó
 "para la fusionante, de las circunstancias
 "concretas de capacidad contributiva de la
 "fusionada respecto de quien aquélla responde por
 "asunción, en forma íntegra, tanto de sus
 "derechos como de sus obligaciones y
 "responsabilidades, sin que dicha extinción
 "privatoria dimane de un procedimiento seguido en
 "forma de juicio, donde se olga y venza a la
 "gobernada fusionante lesionada.

"b.10. Es desproporcionado, por caprichoso e
 "irracional, el dispositivo de la fracción II del
 "artículo 2º de la ley, que sólo permite disminuir "la
 "mitad" de la deducción (depreciación o
 "amortización, según sea el caso) que corresponda
 "a cada una de las inversiones de activo fijo,
 "cargos y gastos diferidos de que disponga la
 "contribuyente quejosa en el ejercicio, para



"determinar el valor base de esos activos a efecto
"del impuesto.

"La deducción posible, de sólo la mitad de la
"depreciación o amortización de tales activos, que
"en realidad se genera por todo el ejercicio
"completo, conduce a que la base de aquéllos
"resulte artificial y desproporcionadamente mayor,
"en perjuicio por supuesto del contribuyente, para
"calcular el impuesto definitivo.

"¿Por qué no permitió la ley deducir íntegramente,
"como en verdad corresponde, al 100%, esa
"depreciación o amortización, sobre todo a la vista
"de que el impuesto se pagará en forma definitiva
"por todo el ejercicio terminado? Por mero
"capricho recaudatorio. No existe motivo razonable
"para ello. El combatido no es un criterio general ni
"equilibrado de deducción y al desconsiderar la
"capacidad contributiva, es desproporcionado.

"b.11. Otro aspecto sugerente de
"desproporcionalidad inconstitucional del
"impuesto, es el que resulta de considerar que,
"mientras los activos gravables permanecen o
"tienden a permanecer en poder del contribuyente,
"se perpetúa la generación del tributo, que grava
"multitudinariamente los mismos bienes en forma
"periódica mientras transcurre el tiempo, con
"independencia de que sean o no rentables en
"realidad. Además, como ya vimos, la ley prohíbe
"disminuir de la base las deudas incurridas para

"adquirir los activos, con los sujetos o monedas
"prohibidas.

"El caso es que, aún en las hipótesis de deducción
"permitida, las deudas suelen tener para el
"contribuyente una temporalidad menor que la
"permanencia de bienes, a menos que sobrevenga
"la quiebra, en cuyo caso de todas maneras,
"mientras no se produzca la liquidación de la
"persona moral gravada o la muerte de la física o
"su suspensión definitiva como contribuyente, se
"sigue generando el impuesto y debe pagarse.

"¿Qué pasa en el caso de los terrenos, que no se
"deprecian y cuyo valor fiscal siempre aumenta,
"respecto de los cuales no se permite deducir las
"deudas utilizadas para adquirirlos? Sencillamente
"sucede una estrepitosa desconsideración de la
"capacidad contributiva real del contribuyente, por
"lo que el tributo es inconstitucional.

"En este caso concreto, precisamente la mayor
"proporción de activos que le son imputables a la
"quejosa es de terrenos y los ha adquirido, así
"como las construcciones que en ellos y sobre
"ellos ha edificado, con financiamiento bancario.

"Para ser justo, el IMPAC no debe mantener
"exclusivamente como objeto gravado los activos,
"sino el patrimonio íntegro, en su caso, del
"gobernado contribuyente, involucrando rentas,
"porque sólo eso, la contemplación integral y
"equilibrada de la realidad del patrimonio es lo que
"permite apreciar, con adecuación a la verdad, esto



es, a la realidad, la capacidad económica del
"sujeto en su integridad, circunstancia que lo
"volverían razonable, a diferencia de lo que sucede
"actualmente.

"b.12 Por último el impuesto reclamado es
"sustantivamente desproporcional e incluso
"confiscatorio, por exorbitante y ruinoso, en tanto
"que coloca en perentoria indefensión a los
"contribuyentes quienes, sin verdaderamente
"disponer de capacidad contributiva para
"enfrentarlo, tienen que declararlo y pagarlo a
"virtud de la presunción iuris et de iure de riqueza
"que la ley reclamada que de entrada les echa
"encima.

"Los impuestos que gravan exclusivamente el
"patrimonio, máxime cuando sólo se refieren a los
"activos que lo componen, destruyen la fuente.
"Esto se entiende por mera lógica y en razón de la
"propia naturaleza de las cosas. Al atender sólo el
"patrimonio, entendido como la riqueza creada y
"estática y, más aún, sólo a la parte activa de éste,
"que no necesariamente es productiva ni genera
"flujo financiero-económico o de caja, se favorece
"la aplicación de bienes al Estado como
"consecuencia del pago líquido ineludible y
"periódico de la contribución, a cargo de los
"gobernados.

"Se propicia también la destrucción misma de la
"fuente en los casos en que resulta necesaria la
"enajenación del bien, tal vez con grave perjuicio

"económico del contribuyente, para poder pagar la
 "exacción líquida que el impuesto implica. En caso
 "de que el sujeto pasivo no produzca la
 "enajenación para tal efecto y sí carece de
 "posibilidades líquidas de disposición de
 "numerario, es posible que la confiscación se
 "produzca cuando el Estado se aplique a sí mismo
 "el bien gravado, en pago de los adeudos fiscales
 "que el sujeto detentador reporte por él, en la vía
 "del procedimiento administrativo de ejecución.

"Los impuestos al patrimonio, sobre todos aquellos
 "que, como el reclamado, lo hacen su objeto
 "aisladamente de la producción de rentas de que
 "es susceptible, destruyen la riqueza y son
 "altamente inconvenientes; su objeto resulta
 "caprichoso y su establecimiento ^{suprema}obedece
 "exclusivamente a un ánimo recaudatorio llevado a
 "ultranza, por lo que el que se combate debe
 "declararse inconstitucional, como aquí se pide.

"El impuesto que nos ocupa es desproporcionado,
 "exorbitante, ruinoso y confiscatorio, y no se
 "necesita ninguna prueba pericial para demostrarlo
 "y acreditarlo, sino que bastan para ello la razón y
 "la lógica.

"El tributo absorbe la fuente misma porque propicia
 "la pérdida del capital de la quejosa, salvo en el
 "caso de que siempre genere utilidades por las que
 "pague ISR en exceso, lo que de ninguna manera
 "puede asegurarse, porque en toda empresa y a
 "toda empresa se aporta por sus miembros un



capital de riesgo, que en modo alguno garantiza una utilidad permanente y segura.

"A mayor abundamiento, es claro que el impuesto reclamado fue inicialmente inteligido y dirigido especialmente contra las entidades empresariales que incurren en pérdidas de operación, porque como se expresa en la iniciativa de la ley original "se pretende que a través de este impuesto se generen ingresos adicionales importantes y se regularice el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, porque más de la mitad de ellas presentan declaraciones sin pago de impuesto (sobre la renta)." Se adujo también en la iniciativa de la ley original, vigente durante 1989, que el impuesto a los activos (entonces "de las empresas"), se conceptúa como mínimo para que contribuyan de cualquier manera a los gastos públicos las empresas que, aun cuando no pagan ISR, de todas formas utilizan la infraestructura y servicios públicos.

"Actualmente, sin embargo, esa pretensión gravatoria se ha extendido a personas morales civiles y cooperativas de producción, todas las cuales nunca realizan actividades de lucro, de quienes sólo algunas desempeñan actividades de contenido preponderantemente económico pero no mercantil, pero donde otras ni siquiera tienen esos fines económicos sino absolutamente diversos.

"Así las cosas, resulta injusto obligarlas a tributar
 "cuando, precisamente por sus propias
 "características (asociaciones civiles,
 "concretamente) sus bienes no son productivos
 "económicamente hablando, donde sus activos no
 "se tienen para que produzcan rendimientos
 "financieros o de alguna manera económicos, sino
 "voluntaria y definidamente se poseen y mantienen
 "para otros fines.

"Aún pensando de buena fe, lo dicho nos parece un
 "atropello.

"En efecto, olvida el legislador que las empresas
 "con pérdida de operación en ISR, de todas suertes
 "contribuyen a los gastos públicos vía los enteros
 "de IVA, de aportaciones de seguridad social y
 "demás contribuciones que les afectan, y lo mismo
 "acontece con los demás sujetos ahora gravados,
 "quienes, como se ve, incluso pueden no
 "desarrollar actividades preponderantemente
 "económicas.

"Por otra parte, si los contribuyentes gravados en
 "un momento o periodo no pagan ISR y ello
 "obedece sencillamente a que carecen realmente
 "de utilidades y de capacidad contributiva para
 "efectos de aquel tributo, cuyo objeto tiene, como
 "es evidente, una naturaleza diversa e incompatible
 "con la del que se reclama, es precisamente a ellas,
 "a las "amoladas", a las que se ataca con éste, con
 "el IMPAC, y ello constituye un verdadero atentado,



porque lo que se propicia es la destrucción final
de las fuentes en mal estado operacional.

Es un error gravar con un impuesto patrimonial a
las empresas, a las personas físicas y a las demás
personas morales que no pueden generar rentas
en un momento, ejercicio o ejercicios
determinados. Auténticamente resulta que el
objeto tributariamente gravado, el activo o los
activos más bien no es compatible con la
mecánica y sistemáticas del impuesto que se
reclama.

Además, ni el establecimiento ni el mantenimiento
a ulanza del tributo reclamado cambiarán de por
sí la situación deficitaria real de los giros o
sujetos desproporcionadamente afectados con su
percusión, sino que obligarán a su liquidación o
suspensión forzada de actividades, lo que se
antoja inicuo.

Nos parece que hace mal el fisco, por otra parte, al
presumir la mala fe de todos los contribuyentes,
haciendo pagar a justos por pecadores.

La extinción de fuentes es un hecho en multitud
de giros que, sin ser evasores en modo o extremo
alguno, cuenta con activos verdaderamente no
rentables, al menos transitoriamente, y que no
generan flujo de efectivo en absoluto o, por lo
menos, en lo suficiente. Estas expresiones no
conducen a "telenovlear" las cosas, sino que
reflejan una realidad palpable que, como hecho
notorio, puede invocarse en términos del artículo

"88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
 "de aplicación supletoria, porque entre otros
 "elementos de obvia referencia que existen al
 "respecto, basta consultar cotidianamente el Diario
 "Oficial de la Federación para advertir el número
 "considerable de contribuyentes puestos en
 "liquidación o bien declarados en suspensión de
 "pagos y en quiebra, a partir del 1° de enero de
 "1989.

"Es por ello inconcuso que el tributo objetado
 "resulta inconstitucional, porque su pago tiene y
 "tendrá que realizarse con el propio capital de los
 "sujetos dañados, y no con lo que éste les
 "produzca a ellos, empresarialmente hablando.

"Por otra parte, en el caso de empresas sanas el
 "tributo provoca que si se reinvierten utilidades en
 "activos, éstas se volverán a gravar, a pesar de que
 "ya pagaron ISR, de tal forma que se propicia la
 "preferencia de mantener los activos ya totalmente
 "depreciados y no la de reponerlos, afectando la
 "economía mexicana en general.

"Como se advierte, es una falacia, que la realidad
 "desvirtúa por sí misma con los hechos, que
 "absolutamente todos los activos sean productivos
 "en el sentido de generar utilidades, porque de
 "hecho y muy obviamente incluso los hay los que
 "no las dan.

"El impuesto reclamado limita la libertad
 "económica de los sujetos gravados para tener,
 "mantener y conformar su patrimonio como mejor



les parezca, bajo la pena de confiscación si no se
"produce un ingreso mínimo que sirva para cubrir
"el impuesto. Esta situación atenta, también, contra
"la libertad de contratación y de comercio que
"protege en su primer párrafo el artículo 5º
"constitucional, porque el tributo llega a
"constituirse en un obstáculo económico
"insalvable.

"Debe, por todo lo dicho, concedérsele el amparo a
"la parte quejosa.

"b.13. No obstante lo apenas señalado,
"consideramos oportuno precisar las
"consideraciones que enseguida se vierten, las
"cuales se encuentran íntimamente relacionadas
"con varios de los aspectos que tratamos dentro de
"los pasados conceptos de violación contenidos en
"los apartados b.3. a b.8., vertidos contra el tributo
"combatido a propósito de las garantías de equidad
"y proporcionalidad tributarias.

"Ya hemos visto que, para que se respete la
"equidad fiscal, las leyes u ordenamientos que
"correspondan deben tratar igualmente a los
"iguales y desigualmente a desiguales, de lo que se
"sigue que el sistema en cuya virtud funcione y
"opere una contribución, debe ser simétrico y
"equilibrado, de manera tal que no favorezca
"injustamente a ninguno de los sujetos que son
"extremos de la relación impositiva, hállese del
"activo o del pasivo.

"Por lo demás, tal como lo enseña y determina la
"jurisprudencia vigente del Pleno de la Suprema
"Corte, el alma del respeto a la garantía de
"proporcionalidad estriba en la consideración
"legislativa tributaria de la capacidad contributiva
"de los sujetos pasivos de que se trate.

"La capacidad contributiva de tales sujetos es, a
"nuestro juicio, la facultad para afrontar la carga
"tributaria. Sólo existe capacidad contributiva si
"existe la posibilidad razonable de pagar el tributo
"y esto no resulta simplemente del hecho de que
"un sujeto disponga de recursos sino, más bien, de
"excedentes que permanezcan en su patrimonio
"después de haberse afrontado las necesidades
"primarias y las mínimas superiores. ^{JUSTICIA DE} éstas,
"atentos a las características, circunstancias
"particulares y rol social de cada uno (persona
"física o corporativa) que, en el orden económico,
"le impone la vida en sociedad.

"Para identificar la capacidad contributiva, los
"sistemas fiscales modernos se remiten, refieren y
"basan en la capacidad de pago del sujeto pasivo.
"No existe capacidad tributaria si dicho sujeto no
"tiene capacidad de pago frente al fisco. Tal
"capacidad de pago al fisco, resulta después de
"que se hayan enfrentado las necesidades
"primarias y las más elementales de cada sujeto,
"atentos a su naturaleza, en tanto que éstos no
"viven para el Estado.



"El sentido común advierte acerca de que la capacidad contributiva es siempre menor que la riqueza que detente cualquier gobernado. Esto resulta, además, de que nuestra Constitución establece, en sus artículos 39 y 41, al Estado Mexicano, como medio y no como fin en sí mismo, para beneficio del pueblo, con objeto de que éste consiga la mejor vida factible.

"En nuestro pacto social, los mexicanos creamos al Estado para, en su función, alcanzar el bien común y el bien individual de cada uno. Los mexicanos no existimos para el Estado. El Estado existe para y por nosotros.

"Es generalmente admitido que, ante el fenómeno económico de la tributación, operan los principios de la justicia distributiva, los cuales, en tratándose de cargas, como son los impuestos, implican que éstas se atribuyan a todos los mexicanos en el nivel estrictamente indispensable y de acuerdo a su propia capacidad y posibilidades, por lo que los iguales deben ser igualmente tratados y los desiguales desigualmente tratados.

"Tal y como enseña Dino Jarach, en los sistemas fiscales actuales la capacidad contributiva es la causa próxima o inmediata de todos los tributos, particularmente de los impuestos, mientras que la mediata es la voluntad recaudatoria del Estado.

"Por justicia y sentido común, la causa inmediata no puede sacrificarse ante la mediata, ya que aquélla es preferible no sólo en tiempos de paz y

"normalidad sino también en los de guerra y grave
 "excepción, de tal manera que no deben
 "establecerse y menos sostenerse un impuesto, si
 "no hay capacidad popular para pagarlo en forma
 "razonable por parte de los sujetos pasivos.

"Ya han pasado, por fortuna, los tiempos de la
 "barbarie y de la esclavitud. El Estado cobra
 "porque el pueblo tiene posibilidad de pagarle y
 "contribuir para la cosa pública, y no simplemente
 "porque quiera cobrar, si los sujetos pasivos
 "carecen de capacidad de pago.

"En tales circunstancias, es de justicia que el fisco,
 "representando en la especie por todas las
 "responsables, identifique y aprecie objetivamente
 "la existencia o inexistencia de capacidad
 "contributiva en los sujetos pasivos, ^{JUSTICIA} ~~atentos a la~~
 "especie y naturaleza del impuesto pretendido. No
 "es justo que la autoridad prefiera, aun cuando
 "estime que le urgen recursos, la causa mediata,
 "que es su voluntad recaudatoria, a la inmediata,
 "que es la capacidad de pago del obligado de todo
 "impuesto, porque con ello sacrifica en forma no
 "razonable las garantías constitucionales en la
 "especie invocadas. No es justo, en estas
 "condiciones, que el Estado prefabricue una
 "capacidad contributiva de los obligados al pago
 "del impuesto, que le permita aparentar, de manera
 "legaloide y siempre antijurídica, que el tributo
 "existe razonablemente.



*"Todo viene a colación por el sistema legal de no
"reconocimiento en la base del impuesto al activo
"de las empresas de todas las deudas, apreciadas
"en su justo valor, que tengan los sujetos pasivos,
"de manera que no disminuyan en su integridad,
"como correspondería, el valor de todos sus
"activos, que si se consideran íntegramente dentro
"de la base, con el exclusivo afán de que la
"contribución resulte lo más alta posible."*

*"Acontece, a este propósito, la creación legislativa
"de una falsa capacidad contributiva en todos los
"obligados al pago, que se determina en función de
"una regla injustamente incompleta de valuación
"de los pasivos o deudas. La base del impuesto
"reclamado se encuentra, así, francamente
"apartada de la capacidad contributiva de sus
"destinatarios."*

*"Nos convence de esta realidad, además de todo
"aquello que antes razonamos, la apreciación de
"que cuando la ley de la materia cuya vigencia se
"inició a partir del 1º de enero de 1989 se propuso
"al Congreso, en ella se manejaba el concepto de
"activos netos de las empresas como presunto
"objeto gravable."*

*"De manera infeliz, sin embargo, el Ejecutivo de la
"Unión no había iniciado una ley que en realidad
"gravara el activo neto, sino que pretendía el
"establecimiento de un impuesto patrimonial que
"gravase activos en forma exclusiva, lo que no es
"razonable. Sin embargo, en vez de que los*

"legisladores impidieran en fondo esta situación, la
 "admitieron y decidieron, para ser formalmente
 "congruentes con su obra, modificar la
 "denominación del texto legal, estableciendo que el
 "impuesto sólo gravaría activos y no activos netos.
 "De ninguna manera estimamos justificable esa
 "parcialidad del Congreso.

"A nuestros legisladores por lo menos a la
 "mayoría, para ser justos con la minoría no les
 "pareció indebido dejar de reconocer, en la
 "configuración de la base, una buena parte del total
 "de las deudas y, consecuentemente, de su valor,
 "respecto de aquéllas que pesan sobre los sujetos
 "pasivos, como si no las debieran.

"No debe el Poder Judicial de la Federación
 "permitir que se consolide el atropello involucrado
 "por la ficción arbitrariamente creada por el
 "legislador, ya que lastima los imperativos
 "constitucionales que tutelan la justicia tributaria.
 "Una ley y un impuesto que se apartan de la
 "realidad, son necesariamente desproporcionados.
 "Con el sistema impugnado no existe
 "reconocimiento del objeto de capacidad
 "contributiva alguna, sino la creación ficticia,
 "existente sólo en la norma y no en la realidad, de
 "dicha capacidad de pago.

"Hemos apreciado que el impuesto sujeto a
 "reclamación tiene naturaleza patrimonial.

"La doctrina más generalmente aceptada a
 "propósito de este tipo de tributos, sostiene que



"Un impuesto al patrimonio, tal como se aplica en
"los regímenes modernos, obliga, para determinar
"la base la imposición, a sostener el patrimonio
"neto...". "...El impuesto sobre el patrimonio neto,
"toma en cuenta la capacidad contributiva del
"contribuyente, a través de la rebaja de todos los
"pasivos existentes y de las deducciones
"personales...", como aduce Manuel de Juano en
"su "Curso de Finanzas y Derecho Tributario".

"Por otra parte, y también a manera de ejemplo,
"Beatriz Chapoy Bonifaz, en su obra "Imposición a
"la Riqueza en México", refiere que en nuestro
"país, a propósito del intento de establecer un
"impuesto patrimonial federal en 1975, el texto del
"anteproyecto legislativo reconocía que "...para
"determinar el valor de la unidad patrimonial
"gravable, del valor total del conjunto de bienes o
"derechos podrán hacerse de las siguientes
"deducciones: ...las deudas de todo orden a cargo
"del causante por responsabilidad directa o
"propia..."

"Ahora bien, la tradicional doctrina jurídica del
"derecho común en materia de patrimonio,
"sostiene sin lugar a excepciones, que éste se
"compone de activos y pasivos y no solamente de
"uno u otro; que involucra no solamente derechos
"y bienes sino también obligaciones y deudas
"naturales y de lo más variadas. Así, por ejemplo,
"puede consultarse en el "Tratado Elemental de
"Derecho Civil, Tomo IV, Los Bienes", de Planiol.

"De hecho, la legislación nacional adopta esta
 "teoría clásica de determinación e integración del
 "patrimonio de los individuos, apreciándolo, en
 "términos generales, como el conjunto de derechos
 "y obligaciones de una persona, susceptible de
 "apreciarse económicamente, por lo que nos
 "estamos refiriendo a la suma de todos los
 "derechos y de todos los débitos.

"Lo anterior es razonable, porque sólo así estamos
 "en aptitud de apreciar con certeza jurídica y en
 "justicia el patrimonio de un individuo.

"Es ilustrativo el texto del artículo 2166 del Código
 "Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la
 "República en Materia Federal, cuando señala que
 "Hay insolvencia ergo falta de capacidad de pago y,
 "por lo tanto, falta de capacidad contributiva
 "cuando la suma de los bienes y créditos del
 "deudor, estimados en su justo precio, no iguala al
 "importe de sus deudas. La mala fe, en este caso,
 "consiste en el conocimiento de este déficit.

"Con independencia de lo establecido en la primera
 "parte de la norma, nos llama poderosamente la
 "atención el texto final, porque advertimos que la
 "ley nos provee de elementos para suponer que, de
 "manera francamente indebida y animada sólo por
 "una intención recaudatoria llevada a ultranza, en
 "materia fiscal el Legislador voluntaria e
 "intencionadamente propende a ocultar la realidad
 "de los sujetos pasivos, cuando el sistema del
 "impuesto impide reconocer los déficits reales que,



existiendo en el patrimonio de las empresas y de los demás sujetos obligados al pago, conducirían a un entero muchos menos de tributo o, inclusive, a su falta absoluta de pago.

En efecto, el impuesto reclamado grava, en realidad, a una multitud de sujetos insolventes, y esto no es justo ni razonable.

La posibilidad constitucional de legislar no implica ni autoriza al Congreso para que, en el ámbito fiscal, trate que caprichosamente los conceptos jurídicos esenciales de determinadas instituciones. El Congreso no puede, sin agredir a la justicia, violentar a caprichoso la naturaleza de determinados actos o hechos jurídicos, con la exclusiva intención de crear nuevos objetos de gravación o nuevas bases imponibles (ver tesis plenaria consultable a fojas 1311 y 1312 de la Primera Parte del Apéndice 1917-1988, bajo el rubro "VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO AL, SU ARTICULO 18 ES CONTRARIO AL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL", donde el Pleno dijo que "el legislador no puede, sin atentar contra el principio de justicia tributaria, elegir de manera caprichosa e ilógica los presupuestos objetivos que como hechos imponibles, sirven para dar nacimiento a la obligación tributaria").

No obstante, es justamente eso lo que sucede en la especie porque, contrariando la realidad, se crea un nuevo concepto de patrimonio que no

"corresponde a la justicia y que, por supuesto, es
 "inadmisible de acuerdo con la doctrina
 "generalizada que existe en la materia y con la
 "propia legislación sustantiva común que
 "prevalece a nivel federal.

"Es indispensable que los derechos, bienes y
 "activos en general, se valúen correlativamente con
 "las obligaciones, adeudos y pasivos del mismo
 "individuo, porque sólo así es posible determinar
 "adecuadamente y conforme a derecho el valor de
 "su patrimonio y, consecuentemente, constatar su
 "estado de solvencia o de insolvencia.

"No puede dejar de insistirse, además, en el hecho
 "de que el impuesto reclamado es también
 "inconstitucional, en tanto que ^{que SUPRIMES}
 "desproporcionado, porque violenta la ^{JUSTICIA D} disposición
 "del numeral 2166 del Código Civil, en tanto que ni
 "los activos ni las deudas se consideran por la ley
 "que lo establece en su "justo precio", porque
 "aquéllos se actualizan conforme a índices
 "inflacionarios, pero éstas no.

"Así, además de que en la base no se permite la
 "correspondencia de todas las deudas reales con
 "todos los activos, adicionalmente el valor de éstos
 "se "infla" y el de aquéllas no, con lo que
 "ficticiamente y de manera por demás arbitraria se
 "convierte sólo en la ley reclamada, que no en la
 "realidad, en solvente a un individuo insolvente o
 "bien, se estima con mayor solvencia que la real a



otro individuo que en verdad es económicamente
"menos poderoso.

"b.14. El impuesto que se tilda de inconstitucional
"resulta desproporcionado al no atender al
"principio de la capacidad contributiva atento a lo
"mencionado en el artículo 2ºA.

"En efecto, como ya se dijo en su momento se
"seguirá mencionando, bajo la nueva ley, la
"reclamada, el impuesto al activo ha sufrido
"infinidad de cambios, entre otros, el consistente
"en que ahora viene a ser el "principal" respecto
"del ISR, el cual ahora es "accesorio" de aquél.

"A pesar de no tenerse utilidad alguna, deberá
"pagarse el impuesto al activo, estableciéndose
"como una pequeña concesión la posible
"reducción de ambos impuestos, cuando en renta
"sea procedente la misma. Sin embargo, cuando la
"reducción en el ISR sea superior al impuesto al
"activo, el excedente no podrá aplicarse en los
"siguientes pagos de la contribución estimada
"contraria a derecho.

"Esto implica, como ya lo dije, que a pesar de no
"tener utilidades, los sujetos del impuesto al activo
"deberán pagar éste, siendo ello contrario al
"principio de capacidad contributiva, pues no se
"pagará tributo en atención a la riqueza generada
"sino a otros valores que no la representan, como
"pueden ser bienes poco o nada productivos. En
"caso, incluso, de que los activos sean altamente
"productivos, si los bienes por ellos generados no

"se venden no existirá utilidad, sin embargo sí se
 "tendrá que pagar el impuesto al activo con base
 "en objetos que no necesariamente denotan
 "capacidad contributiva.

"b.15. En el mismo orden de ideas que las
 "expuestas en el punto anterior, el impuesto que se
 "combate, concretamente lo indicado en su artículo
 "9º, fracciones I y II, resulta desproporcional, al no
 "atender a la capacidad contributiva del sujeto
 "pasivo de la contribución.

"Como ya se indicó, actualmente el impuesto al
 "activo cambia a ser el principal y accesorio al ISR,
 "situación que es por demás absurda.

"En el segundo párrafo del precepto en comento se
 "establece la posibilidad de solicitar la devolución
 "de las cantidades actualizadas resultantes, sólo
 "cuando al final del ejercicio y no dentro de él, que
 "es cuando se hacen los pagos provisionales, se
 "determine el ISR por acreditar en una cantidad que
 "exceda al impuesto al activo de ejercicio. No
 "obstante ello, en el quinto párrafo del propio
 "artículo 9º se establece que los contribuyentes del
 "impuesto al activo no podrán solicitar la
 "devolución del ISR pagado en exceso, cuando en
 "el mismo ejercicio el impuesto al activo sea igual
 "o superior al ISR, caso en el cual esta última
 "contribución se tendrá como pago definitivo, no
 "obstante que sea evidente que no se percibieron
 "utilidades de los activos gravados.



Lo anterior resulta obviamente contrario a la "capacidad contributiva, dado que el impuesto "generable por la utilidad percibible por el "contribuyente pasa a un segundo lugar, siendo "ocupado el primer sitio por el impuesto que se "combate, que por contemplar sólo los activos del "contribuyente y su valor, sin disminuir sus deudas "y sin apreciar su real funcionamiento y "desempeño dentro de la actividad empresarial, se "aleja de la situación particular y real del causante, "de manera que no se relaciona verdaderamente "con su capacidad contributiva sino con una "ficción legislativa ideada para efectos meramente "recaudatorios.

b.16. Para determinar, y bajo el entendido de que "actualmente, a partir del 1º de enero de 1990, a "diferencia de lo que acontecía en 1989, el "impuesto sobre la renta se acredita en contra del "impuesto al activo, podemos advertir que el objeto "del impuesto reclamado resulta caprichoso y "desproporcionado, como consecuencia de no "atender, ni relacionarse con la verdadera "capacidad contributiva de los sujetos obligados a "su pago.

"El impuesto al activo se genera y debe cubrirse si "no se paga impuesto sobre la renta y, para tal "efecto, los ordenamientos reclamados establecen "una presunción iuris et de iure en el sentido de "que todos los activos poseídos son productivos y "deben generar rentas, lo que es realmente falso.

"No es exacto que un sujeto tenga capacidad
 "contributiva por el solo hecho de que tenga o
 "posea bienes legalmente considerados como
 "activos, porque ese simple hecho no revela
 "posibilidades económicas razonablemente
 "gravables bajo un criterio impositor como el que
 "anima el impuesto sobre la renta. En efecto, los
 "activos de una persona moral o física empresaria
 "pueden quedar inmovilizados e improductivos por
 "múltiples circunstancias de facto, consistentes en
 "fallas sufridas, en periodos de reparación, en falta
 "de pedidos, en ausencia de mano de obra
 "especializada para su operación, en inexistencia
 "de materia prima, en una huelga o paro, en
 "siniestros acontecidos, en accidentes de trabajo
 "que los afecten, etcétera, etcétera.

Suprema
 Justicia de
 la Nación

"Independientemente de la multitud de motivos de
 "hecho que pueden implicar la no producción de
 "rentas de un bien que tenga valor económico en sí
 "mismo, esto no implica que si se colocan en el
 "mercado dichos bienes para su enajenación,
 "necesariamente hayan de ser colocados y
 "reporten una utilidad.

"El impuesto reclamado hace caso omiso de estas
 "circunstancias y grava una renta ficticia, que por
 "ello, por ser una mera posibilidad tal vez no
 "realizable, es profundamente injusta. La capacidad
 "económica no debe presumirse a base de meras
 "inferencias, sino que para efectos tributarios debe
 "ser efectivamente reflejada por los objetos de las



"contribuciones, lo que no acontece en la especie,
"vista la actual mecánica de funcionamiento del
"impuesto impugnado, por lo que es
"inconstitucional.

"4. LOS ORDENAMIENTOS Y EL IMPUESTO AL
"ACTIVO QUE SE RECLAMAN SON
"INCONSTITUCIONALES, POR VIOLAR LA
"GARANTIA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

"El artículo 31, fracción IV, constitucional establece
"diversas garantías individuales de orden tributario
"en favor de los gobernados. De ese precepto se
"deriva con toda claridad, entre otros, el principio
"elemental del derecho fiscal que se enuncia con el
"aforismo latino "nullum tributum sine lege", esto
"es, que no puede haber tributo sin ley que lo
"establezca, significando "ley", en todo caso, un
"acto legislativo tanto formal como materialmente
"considerado. Para ello, la "ley" debe emanar del
"Poder Legislativo competente y contar con las
"características de generalidad, abstracción e
"impersonalidad que le resultan propias, operando
"lo dispuesto por las fracciones VII y XXIX del
"artículo 73 constitucional.

"El principio de legalidad en materia impositiva no
"se satisface con el simple establecimiento del
"tributo en una ley. Es necesario además, que
"todos sus elementos esenciales, a saber, el
"sujeto, el objeto, la base, la tasa, cuota o tarifa, la
"unidad fiscal, la época y forma de pago, etcétera,
"estén expresamente establecidos en el propio

"ordenamiento legal, a fin de satisfacer la
 "pretensión más elemental y tal vez más importante
 "que en la materia fue perseguida por el
 "Constituyente, que es la de proveer de seguridad
 "y certidumbre jurídicas a los particulares
 "gobernados, frente a la administración activa del
 "Estado.

"Lo que el Constituyente persiguió al establecer la
 "garantía de legalidad fiscal, primero, es el
 "mantenimiento y protección irrestrictas, en
 "beneficio de los gobernados, de la seguridad y
 "certeza jurídicas en materia de imposición
 "tributaria. Esta es la pretensión material
 "fundamental pero no la única, como todos los
 "doctrinarios y la jurisprudencia advierten, porque
 "el Constituyente pretendió, también, que sea el
 "mismo pueblo, por conducto de su representación
 "soberana, y no su administración quien formal y
 "materialmente se auto imponga contribuciones y
 "cargas.

"Respecto del primer aspecto indicado, sabemos
 "que la inseguridad tributaria estimula la insolencia
 "y la corrupción, tanto de las autoridades como de
 "los particulares.

"La certidumbre de lo que cada individuo debe
 "pagar es, lo que respecta a los tributos, una
 "cuestión de extrema importancia, porque un grado
 "muy considerable de contribuyentes no liquida
 "sus impuestos por la incertidumbre en sus
 "elementos, en opinión de Adam Smith. Nosotros



agregaríamos que un importante volumen de "abusos se cometen por la autoridad fiscal en "contra del pueblo, precisamente por la misma "causa.

"Para evitar y proscribir esa incertidumbre, como "primer aspecto esencial de la garantía de legalidad "en comentario, las leyes fiscales deben ser y "quedar redactadas claramente, nítidamente, "lógicamente, de manera que sean comprensibles "para todos, pero, a nuestro modo de ver, esto es "indispensable respecto de sus destinatarios "concretos.

"Efectivamente, se viola la garantía de legalidad "tributaria si la ley fiscal es incomprensible para "sus destinatarios concretos.

"Las leyes fiscales no deben tener, contener o "mantener fórmulas ambiguas o imprecisas, en "opinión de Gastón Jéze.

"Bajo el segundo aspecto enunciado antes, "además de asegurar la certidumbre jurídico- "tributaria de los gobernados, existe otra intención "esencial del Constituyente al establecer la "garantía de legalidad fiscal. Esta segunda "pretensión, que es tan importante y trascendente "como la de proteger la seguridad jurídica de los "gobernados, consiste en que el establecimiento y "la determinación de los tributos y de sus "elementos esenciales debe ser hecha "exclusivamente por el órgano legislativo del "Estado, y sólo mediante leyes, para que sea el

"propio pueblo, debidamente representado en el
"Congreso, quien se auto atribuya las cargas
"fiscales que decida soportar y para que no sea la
"administración activa del Estado quien se las
"imponga de manera autónoma.

"Para conseguir esta finalidad, la Constitución
"dispone esa formalidad legislativa como solemne,
"específica e inexcusable, para establecer
"contribuciones.

"La ley fiscal no puede emitirse sin contenido
"material concreto y específico, de manera que
"ante su omisión o abierta permisón sea
"materialmente el Presidente de la República o
"cualquiera otra autoridad administrativa, quien
"legisle y establezca los impuestos o cualesquiera
"de sus elementos esenciales. En este orden de
"ideas, si falta algún concepto esencial y no ha
"sido definido normativamente en la misma ley, no
"se puede encargar al Poder Ejecutivo que defina el
"concepto legal en que está contenido el hecho
"imponible, por ejemplo, porque esto es lo mismo
"que decir que el Poder Ejecutivo expresará sobre
"qué se aplica el impuesto, y esto viola el principio
"de legalidad en su propia esencia.

"Así, en todos los aspectos, ha interpretado la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación el sentido
"y alcance de la garantía de legalidad tributaria,
"conforme lo establecen las jurisprudencias
"emitidas por el Pleno, consultables bajo los
"números 168 y 162, bajo los rubros: "IMPUESTOS,



**"PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE,
"CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL" e
""IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS.
"DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE
"EN LEY", a fojas 169 a 170 y 165, respectivamente,
"del Tomo I del Apéndice de Jurisprudencia
"1917-1995.**

**"Para seguridad de nosotros, los gobernados,
"nuestro tribunales federales deben aplicar a la
"letra los justos y razonables criterios que se
"establecen en las jurisprudencias indicadas.
"Conviene ser enfáticos en que dicha aplicación
"debe efectuarse con firmeza por nuestros jueces,
"sin pusilanimidad, porque ello conducirá a
"terminar en gran medida con los abusos y
"extravagancias en que incurre cotidianamente la
"administración tributaria.**

**"Ahora bien, uno de los elementos esenciales o
"substanciales del impuesto es el objeto, según la
"doctrina y la jurisprudencia.**

**"El objeto del impuesto es la actividad o cosa que
"la ley señala en forma general como motivo de la
"obligación tributaria, es decir, la acción, cosa o
"materia donde nace el impuesto. Resulta
"ilustrativo al respecto el criterio de Flayner, quien
"considera que el objeto "estriba más bien en las
"circunstancias a virtud de las cuales, una persona
"se ve obligada a pagar un determinado tributo."**

**"Es el caso que nos ocupa, el objeto del impuesto
"son los **ACTIVOS** de las empresas, personas**

"físicas o morales, considerados en las cuatro
"categorías que contempla el artículo 2º de la ley.

"Las consideraciones legislativas que precisan,
"determinan o estatuyen el objeto de un
"determinado tributo, al considerar la materia que
"habrá de permitir la vinculación de los
"gobernados (sujetos pasivos) con el poder
"tributario del Estado, influyen directamente en la
"configuración de la base de la propia contribución.

"La base es otro de los elementos esenciales de
"cualquier tributo y consiste en la cantidad sobre la
"cual habrá de aplicarse la tasa, cuota, tarifa o
"alícuota tributaria, para determinar la cuantía o
"monto definitivo de la contribución.

"En la especie, la base del impuesto es el valor de
"los activos promedio del ejercicio, menos ^{el valor de} ^{JUSTICIA DE} ^{los}
"pasivos o deudas promedio en el mismo.

"Con todos estos sustentos, concretamos los
"siguientes argumentos:

"a) El impuesto reclamado contraviene la garantía
"de legalidad tributaria y en tal medida son
"inconstitucionales los ordenamientos que se
"impugnan, porque la ley no precisa íntegramente,
"esto es, exhaustivamente, como debiera haberlo
"hecho, el objeto de la contribución, violentando el
"principio de certidumbre estudiado.

"En efecto, esto es palmario en tratándose de los
"activos financieros que grava.

"En primer término, la ley no define lo que debe
"entenderse por "activo financiero" sino que en



forma casuística determina algunos bienes que "considera como tales. Tampoco la LISR define "que es o qué debe entenderse por "activo "financiero" y sí lo hace, al menos parcialmente y "en fondo, el Reglamento de la Ley del Impuesto "Activo de las Empresas (RLIMPAC) de aquélla.

"El artículo 4º, primer párrafo, relacionado con el 2º "de la ley, es Inconstitucional, porque establece "que se consideran activos financieros los que "menciona "entre otros", sin definir o establecer, "material y específicamente, cuáles son esos "otres".

"Esta forma de legislar es inadmisibile en materia "fiscal, pues si la ley no determina un objeto "tributario como tal, sencillamente no lo es.

"No debemos olvidar que opera con toda su fuerza "la disposición del artículo 5º del Código Fiscal de "la Federación en el sentido de que toda norma "tributaria que establezca cargas a los particulares "será de aplicación **ESTRICTA** y son de esta "especie las normas relativas a cualquiera de los "elementos esenciales de los impuestos.

"Como en el derecho penal, en el fiscal **NO CABEN** "NI LA ANALOGIA NI LA MAYORIA DE RAZON, y "allá es claro que si no hay tipo no hay delito, "mientras que aquí también es obvio que si no hay "objeto no hay impuesto, y no hay objeto si éste no "se encuentra, todo él, comprendido en la ley de "manera expresa, directa, indubitable y suficiente, "porque para seguridad de los gobernados

"contribuyentes y para evitar la arbitrariedad pública, es necesario definir que en el tema opera el principio de legislación exhaustiva.

"La imprudente y enfermiza fórmula utilizada en este caso por el legislador, sólo abre la puerta a la autoridad administrativa, para que materialmente determine cuáles son los "otros" activos gravables, que realmente NO EXISTEN, desde el punto de vista legal.

"De hecho esto aconteció en la especie, cuando el reglamento reclamado dio contenido a esa expresión inconstitucional en su artículo 13, primer párrafo, al establecer que se consideraran como tales "las inversiones y los depósitos en instituciones del sistema financiero" (lo que contablemente se identifica como "bancos"); no obstante que el artículo 6° de la ley expresamente exentó del impuesto a esas instituciones y declaró que el valor de los financiamientos contratados con ellas o con su intermediación, no son susceptibles de disminuir la base del impuesto para los contribuyentes.

"La ley fiscal no puede emitirse sin contenido material concreto y específico, de manera que ante su omisión o abierta permisión, como en el caso ocurre, sea materialmente el Presidente de la República o cualquiera otra autoridad administrativa, quien legisle y establezca los impuestos o cualesquiera de sus elementos esenciales.



Son oportunas las ideas doctrinales que en seguida nos permitimos citar:

"El tratadista Dino Jarach en su obra "Curso Superior de Derecho Tributario", en lo conducente dice:

"El aforismo latino "Nulum Tributum Sine Lege", significa que no habrá tributo sin ley. Pero, ¿cuál es el contenido que debe tener la Ley Tributaria? Este problema se plantea especialmente con respecto a las facultades derivadas... Decir que no debe existir tributo sin ley, significa que sólo la ley puede establecer la obligación tributaria y, por lo tanto, sólo la ley debe definir cuáles son los supuestos y los elementos de la relación tributaria. Y al decir elementos y supuestos, quiero significar que es la ley la que debe definir los hechos impositivos en su aceptación objetiva y también en la esfera subjetiva... Debe ser la ley que debe establecer el objeto... Pero hay un campo de inconstitucionalidad, en nuestra opinión, mucho más amplio, y lo encontramos en la mayoría de nuestras leyes, por un defecto de técnica jurídica en que incurren muy a menudo nuestros legisladores. Muchas veces los que proyectan leyes impositivas creen que la legislación puede hacerse por medio de algunas normas genéricas y dejar que el Poder Ejecutivo termine la obra reglamentando todo aquello que "quedó en la pluma del legislador". Con esa creencia pudo decirse "Se aplicará un impuesto

"sobre el activo neto de las empresas y el Poder Ejecutivo reglamentará lo que se entiende por "activo y pasivo." Así se da poder al Ejecutivo para "establecer cuál es el hecho y la base imponible, o "sea, en definitiva establecer sobre qué recaerá el "tributo, y ello no es una facultad meramente "reglamentaria. "...Cuando falta el concepto y no "ha sido definido normativamente en la misma ley, "no se puede encargar al Poder Ejecutivo que "defina el concepto legal en que está contenido el "hecho imponible, porque esto es lo mismo que "decir que el Poder Ejecutivo expresará sobre qué "se aplica el impuesto, y esto, viola el principio de "legalidad en su propia esencia. Tampoco puede "ser, a pesar de que la misma ley dictada por el "Poder Legislativo lo establezca, que se otorguen "al Poder Ejecutivo, y menos aún a la "administración fiscal, facultades discrecionales "para aplicar en ciertos casos el impuesto y en "otros casos no, o establecer los criterios de "aplicación. Ello acontece a menudo en nuestras "leyes tal vez por defecto de técnica legislativa. "En "conclusión: en materia de derecho tributario "sustantivo, es decir aquellas normas que "contienen los supuestos y los elementos de la "relación jurídica tributaria, sólo la ley puede "establecerlas y no puede facultarse al Poder "Ejecutivo para completarlas, ni otorgarse poderes "discrecionales a la administración para aplicar o



no los supuestos, a aplicarlos en una forma en
"determinados casos y en forma distinta en otros."

"Las opiniones del tratadista son exactamente
"aplicables al caso, en función de lo que acontece
"en materia de activos financieros con el impuesto
"reclamado y por ello debe declararse la
"inconstitucionalidad de los ordenamientos
"impugnados.

"b) Se viola la garantía de legalidad cuando la ley
"establece, para determinar la base del impuesto, la
"actualización del valor de varios de los activos
"que determina como su objeto, según se
"desprende de lo dispuesto por los artículos 2º,
"fracciones II, III y IV, 3º, 5ºA, 7º, tercer párrafo, 9º y
"12, último párrafo.

"Dicha actualización, que siempre operará a la alza,
"se dará sobre los valores de los activos fijos,
"gastos y cargos diferidos, terrenos e inventarios,
"en primer término, así como sobre el total del
"impuesto determinado por el ejercicio anterior, a
"efecto de calcular los pagos provisionales del que
"transcurre, en función de la inflación padecida en
"el país, a la que se le atribuyen y reconocen
"efectos fiscales.

"Sin embargo, el caso es que la determinación de
"ese elemento no se da ni establece en la ley, ni le
"corresponde al Congreso de la Unión, sino que se
"deja materialmente en manos del Banco de
"México, en términos de lo dispuesto por el artículo

"20 del Código Fiscal de la Federación, que
"también se reclama.

"Así, tanto el objeto como la base del impuesto, en
"definitiva, queda entonces en manos del Banco
"Central, quien no es autoridad legislativa, y a
"quien el Poder Judicial Federal ni siquiera le ha
"reconocido carácter de autoridad para efectos del
"amparo.

"No obstante, este organismo es quien establece el
"elemento esencial de la contribución que se
"denomina "índice nacional de precios al
"consumidor", lo que hace por medio de acuerdos
"que no tienen un carácter jurídico superior al de
"una mera circular de las que, por disposición
"expresa del artículo 35 del Código Fiscal de la
"Federación, no pueden derivarse perjuicios para
"ningún particular, sino sólo beneficios en caso de
"publicarse en el Diario Oficial de la Federación,
"circular que de ninguna manera se equipara ni
"equivale a una ley.

"Tal banco es un órgano descentralizado de la
"Administración Pública Federal, que de ninguna
"manera corresponde ni pertenece a la estructura
"del Poder Legislativo de la Unión y sin embargo ha
"determinado, además, sin ningún parámetro o
"restricción legal, los índices nacionales de precios
"al consumidor.

"Por estas razones, es inconstitucional el artículo
"20, segundo párrafo, del Código Fiscal de la
"Federación, que también se reclama, porque es



"dicha norma la que en concreto propicia que las
"leyes tributarias atribuyan efectos fiscales a la
"inflación, en perjuicio de los particulares,
"propósito de la determinación material e irrestricta
"de los índices nacionales de precios al
"consumidor cuya determinación, elaboración y
"cálculo sólo corresponde al Banco de México.

"Pues bien, ya la honorable Suprema Corte de
"Justicia de la Nación, actuando en Pleno,
"estableció jurisprudencia y declaró
"inconstitucional el reclamado artículo 20, y hago
"integralmente nuestros todos los argumentos
"correspondientes. La tesis es consultable bajo el
"número 27/95, con el rubro: "INDICE NACIONAL
"DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. EL ARTICULO 20
"DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION ES
"INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR LA GARANTIA
"DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (TEXTO VIGENTE EN
"1987)", a páginas 52 del Tomo II, Novena Epoca,
"del Semanario Judicial de la Federación y su
"Gaceta, correspondiente a octubre de 1995.

"Ahora sin embargo, a partir del 1º de enero de
"1989, el Congreso responsable ha pretendido
"salvar la situación violatoria de la Constitución,
"generada en 1987 con la adición que sufrió el
"numeral del Código indicado, sin conseguirlo,
"mediante la adición de un artículo 20-BIS al mismo
"ordenamiento federal, que también estamos
"combatiendo en la especie, en el cual se precisan
"ciertos parámetros muy generales y vagos a

"observar por el Banco de México al determinar los
"índices nacionales de precios al consumidor.

"Sostengo que la violación constitucional de la
"legalidad tributaria no desaparece, por lo
"siguiente:

"b.1. Cada acuerdo del Banco de México
"constituye, de mero hecho, un acto de autoridad
"tributaria de facto que, sin embargo, no es
"combatible por conducto de ningún medio
"ordinario de defensa, como se desprende de la
"fracción IX del artículo 202 del Código Fiscal de la
"Federación, sino que al asumir las características
"de generalidad, abstracción e impersonalidad,
"sólo puede combatirse vía amparo contra leyes.
"Se encuentra sujeto, así, a los límites de toda
"garantía constitucional tributaria y sin embargo no
"hay forma para los gobernados de probar su
"inequidad o su desproporcionalidad, aunque sí
"claramente su ilegalidad, al no provenir del
"procedimiento legislativo.

"b.2. La heteroaplicación de las resoluciones
"bancarias determinatorias de los índices y,
"consecuentemente, la de los numerales
"combatidos del Código Fiscal Federal, se
"producirá inminentemente respecto de la parte
"quejosa en función de la liquidación del IMPAC
"que resultará de la determinación de existencia de
"su obligación contributiva relativa, que ya se
"concreta en el acta reclamada, acerca del
"resultado del cálculo del impuesto al activo que le



corresponde porque la cuantía de éste depende de
"los índices ya determinados, con arreglo al
"sistema que la ley y el reglamento reclamados
"prevén.

"b.3. La determinación mensual de cada índice por
"parte del Banco de México, constituye una
"resolución de carácter general que produce para
"los particulares los efectos de una ley sin serlo.
"Esto es inadmisibile en el ámbito tributario, porque
"violenta con flagrancia las jurisprudencias
"plenarias vigentes que interpretan la garantía de
"legalidad.

"b.4. El acuerdo mensual del Banco no pasa, ya lo
"dijimos, de ser una circular y no es dable a la
"circulares determinar o condicionar la existencia
"material de ninguno de los elementos
"fundamentales de las contribuciones.

"b.5. Ahora bien, no obstante la fijación de los
"parámetros generalísimos del artículo 20-BIS del
"Código Fiscal de la Federación, no existe
"supervisión expresa del Poder Legislativo ni
"sanción o aprobación directa por su parte, dentro
"de un procedimiento legislativo siquiera
"abreviado, pero ajustado a las disposiciones del
"artículo 72 constitucional, que valide por el
"Congreso la determinación y cálculo de cada
"índice. Es más, ese factor ni siquiera se promulga
"por el Presidente de la República.

"b.6. Se violan asimismo las garantías de audiencia
"y las de legalidad, protegidas por los artículos 14

"y 16 constitucionales, en tanto que cada acuerdo
 "determinatorio de los índices condiciona en forma
 "global el objeto y la base del impuesto reclamado,
 "pero es el caso que todos han sido determinados
 "por autoridades y funcionarios incompetentes
 "para tal efecto.

"¿Qué sucede cuándo el índice se calcula por
 "funcionarios incompetentes, como ha acontecido
 "y acontecerá? De hecho ni la Ley Orgánica del
 "Banco de México ni su Reglamento Interior
 "precisan, en ninguno de sus artículos, a
 "funcionario alguno que se encuentre legalmente
 "facultado para calcular y publicar el índice con
 "efectos fiscales, y es un hecho que no lo ha
 "formulado, determinado, ni publicado el Director
 "del organismo, lo que se invoca como hecho
 "notorio derivado de las publicaciones oficiales
 "relativas.

"Los acuerdos, además, no vienen firmados.

"Imputamos todos estos hechos en forma directa al
 "banco responsable.

"b.7. El problema de prueba es complejísimo para
 "cualquier sujeto o entidad distinta del Banco, para
 "acreditar si éste computó o no todas las ciudades,
 "bienes y elementos que señala como parámetros
 "el artículo 20-BIS del Código, si utilizó o no
 "debidamente la fórmula matemático-actuarial-
 "logarítmica adecuada, etcétera, etcétera.

"Es más, en la materia, tanto por los elementos de
 "costo, cuanto de logística técnica, de personal e



"instalaciones, los gobernados contribuyentes nos
"encontramos indefensos frente a las
"determinaciones del índice nacional de precios al
"consumidor que realiza el Banco de México, a las
"cuales tenemos que someternos como verdad
"dogmática, en tanto que la prueba en contra de su
"exactitud o corrección resulta para nosotros
"diabólica, por ser materialmente imposible. En
"efecto, aun cuando normalmente pudiera parecer
"que cualquier simple gobernado interesado en el
"tema realmente no está indefenso, real y
"materialmente sí lo está y de manera absoluta, de
"suerte tal que estas cuestiones no pueden ser
"verdaderamente debatidas en sede ordinaria o de
"mera legalidad sino, como ahora, en sede de
"constitucionalidad.
"Ahora bien, el caso es que las publicaciones ya
"acontecidas no determinan, con violación del
"propio numeral y, consecuentemente, de las
"garantías de legalidad que tutela el artículo 16
"constitucional, en qué fechas y condiciones se
"hicieron, ni se prueba el que en realidad se hayan
"efectuado, los tres muestreos o cotizaciones
"mensuales de alimentos, por ejemplo. Es más, lisa
"y llanamente niego que tales muestreos se hayan
"llevado a cabo en cada mes y su falta se prueba
"con las propias publicaciones oficiales
"acontecidas que muestran, efectivamente, que no
"se realizaron, porque no precisan siquiera los días
"de su celebración.

"Así, los índices publicados son inconstitucionales
 "y deben desaplicarse a la quejosa; además, de
 "hecho y de derecho lo seguirán siendo.
 "Materialmente existe indefensión, tanto para los
 "particulares como para el fisco.

"b.8. Por otra parte, tan los parámetros del
 "artículo 20-BIS son vagos, que aún ahora el Banco
 "de México puede hacer materialmente lo que
 "quiera.

"Así las cosas, son las normas del derecho fiscal
 "común que impugnamos las que propician esta
 "situación, por lo que en realidad el Banco continúa
 "irrestricta e irresponsablemente en la posibilidad
 "de dar el contenido que quiera a los índices,
 "incluso sin ajustarse a la realidad de las cosas
 "porque, por ejemplo, le fuese material y
 "humanamente imposible, en un momento dado,
 "pudiendo dar un contenido cualquiera a las cifras,
 "si así es políticamente conveniente, etcétera.

"La inseguridad jurídica material es absoluta y eso
 "es lo que se pretende abolir y no permitir con la
 "garantía de legalidad que se violenta, porque de
 "nada sirve ni serviría que uno o varios
 "contribuyentes probasen una o varias veces o
 "siempre, si se quiere, que el índice que calculó el
 "Banco de México fue inexacto si, ello no obstante,
 "como su determinación y publicación tiene
 "efectos generales, los demás no pueden
 "aprovecharse del fallo que lo declare, porque
 "materialmente les es imposible hacerlo, en tanto



que todos los tributos que dependen de su determinación tienen que pagarse mes a mes y es el caso que de no enterarlos conforme a él, según cada ley particular, los gobernados pueden verse incluso sujetos a presión penal, por más que no exista fraude alguno, sólo por intentar defenderse.

b.9. En resumen, ni aún existiendo el artículo 20-BIS reclamado, que sólo provee de ilusorios parámetros en la realidad al Banco de México quien ello no obstante se encuentra en libertad para determinar a su real y material capricho los índices nacionales de precios, se salva el vicio de ilegalidad constitucional que oponemos y ello acontece simple y sencillamente, porque no es dable que un elemento de naturaleza estadística o económica como el índice, condicione la existencia y dimensiones de cualquiera de los elementos esenciales de las contribuciones y puede dimanar en un órgano que no encarne el Poder Legislativo, ya que lo contrario hace añicos la seguridad y la certeza jurídica que son fundamentales en cualquier estado de derecho, cuando no es el Pueblo sino la autoridad administrativa quien le impone tributos.

b.10. Para seguir el mismo orden de ideas expuestas en los apartados de este punto (b.1. a b.10.) resulta contrario al principio de legalidad, lo establecido en el último párrafo del artículo 12 de la ley impugnada.

"En efecto, se faculta a la Secretaría de Hacienda y
 "Crédito Público a establecer en forma unilateral,
 "sin aprobación del Congreso de la Unión, ni del
 "Presidente de la República, uno de los elementos
 "del impuesto, como lo es el factor de activos fijos,
 "gastos y cargos diferidos a que se refiere la
 "fracción II del numeral en comento, mediante la
 "publicación de una tabla anual.

"Con lo anterior se permite al ejecutivo,
 "prácticamente, ampliar en la medida de sus
 "intereses recaudatorios, contrarios a derecho, la
 "base del impuesto, misma que bajo ningún
 "concepto podrá establecerse en forma unilateral
 "por una dependencia del ejecutivo, ni mucho
 "menos, atento a razones contrarias a derecho.

"Desde luego que su señoría y el propio Pleno de la
 "Suprema Corte de Justicia tienen que ver más allá,
 "por lo que son valores superiores de la Nación,
 "que por el exclusivo interés recaudatorio del fisco
 "federal.

"c) Existe también violación de la garantía de
 "legalidad tributaria cuando, en términos del
 "artículo 5º de la ley, se excepcionan del pasivo
 "cuyo valor es disminuible de la base, las deudas
 "contratadas por los contribuyentes en moneda
 "distinta de la nacional, porque existen casos
 "específicos en que las deudas se denominan en
 "moneda extranjera pero deben pagarse en
 "territorio nacional. En estos casos las deudas
 "deben solventarse en pesos, porque así lo



"mandan la Ley Monetaria y las disposiciones y
"regulaciones vigentes en materia de control de
"cambios, como ya en su oportunidad lo
"argumentamos.

"Por otra parte y con independencia de lo que
"estatuyen tales ordenamientos, ¿qué sucede con
"las deudas que en realidad son en pesos pero que
"se encuentran denominadas en moneda
"extranjera? también ¿qué sucede con las deudas
"que son en moneda extranjera pero que se
"encuentran denominadas en pesos?

"Prevalece para los contribuyentes una absoluta
"inseguridad y falta de certeza jurídica, motivadas
"en la indefinición legal inadmisible que se
"actualiza.

"d) El impuesto viola, bajo otro punto de vista, la
"garantía en comentario, por lo siguiente:

"El artículo 2º de la LIMPAC determina un
"procedimiento para calcular la base del impuesto,
"mediante la obtención de los promedios
"mensuales del valor de las distintas especies de
"activos que son objeto de éste.

"Ya planteamos, al inicio de este concepto de
"violación, la insolente y desaprensiva violación de
"la legalidad fiscal en que incurre el artículo 4º de
"la ley cuando en materia de activos financieros,
"dispuso que lo son "entre otros", que ella no
"definió con la exhaustividad indispensable de
"cualquier ley tributaria, aquéllos que sí precisó de
"manera concreta. Sabemos que no hay más activo

"financiero imputable a los contribuyentes del
 "impuesto, que los cuatro que el numeral precisa,
 "esto es, que constitucionalmente no hay más, no
 "hay "otros". La actitud del Presidente de la
 "República de dar contenido material y definitorio
 "al objeto de esa especie de activos,
 "condicionando en la misma medida la base del
 "impuesto, al precisar en el reglamento que
 "también se trata de los "bancos", esto es, de la
 ""cuenta de bancos", que involucra que los "otros"
 "activos "posibles" según la ley son éstos, resulta
 "francamente inconstitucional como lo
 "demostramos, porque después, al libre y
 "eventualmente caprichoso arbitrio del Presidente
 "o de cualquier otra autoridad administrativa,
 "podrían serlo los que se quieran, aunque la ley no
 "lo disponga o aún contrariando a la ley misma ya
 "que, como veremos, ello no asusta a las
 "responsables y nuestro estado de derecho no les
 "intimida ni inspira respeto.

"Bien, con independencia de lo anterior, la ley
 "continúa violando la garantía de legalidad en
 "tratándose de los otros tipos de activo objeto del
 "gravamen.

"e) Así es, específicamente en relación con los
 "terrenos, a los que alude la fracción III del artículo
 "2º, relacionada con el 3º de la ley, éstos se
 "precisan como objeto del impuesto, y para llegar a
 "la base de éste se establece como su valor básico,
 "valga la redundancia, el "monto original de la



"inversión" que deberá determinarse, en función de
"lo que prevé el nuevo artículo 14 de la actual ley,
"en términos de las disposiciones de la LISR.
"Debemos en este punto, y en toda la temática
"correlativa, tener presente que nos encontramos
"inmersos en materias de estricto derecho, donde
"en términos de lo dispuesto por el artículo 5º el
"Código Fiscal de la Federación prevalecen los
"principios de interpretación y aplicación estricta
"de las disposiciones fiscales, habida cuenta que
"todas aquéllas a las que nos estamos refiriendo,
"establecen cargas a los particulares.

"Esta precisa en su artículo 41, segundo párrafo, el
"concepto de "monto original de la inversión", pero
"aludiendo específicamente a lo que ella entiende
"precisamente por "inversiones", a las que define
"en el contexto del propio artículo 41 y de los dos
"primeros párrafos del 42, al aludir a bienes
"tangibles, gastos y cargos diferidos.

"Conforme a los principios de la hermenéutica, las
"normas deben interpretarse y aplicarse,
"consecuentemente, de manera que resulten
"congruentes consigo mismas y con las
"disposiciones que específicamente les queden
"relacionadas.

"Bajo este criterio directriz, el "monto original de la
"inversión" para efectos del impuesto al activo de
"las empresas, solamente se encuentra definido, en
"términos de la LISR, para los bienes tangibles que
"son depreciables, que el "activo fijo es el conjunto

"de bienes tangibles que utilicen los
"contribuyentes para la realización de actividades
"empresariales y que se demeriten por el uso en el
"servicio del contribuyente y por el transcurso del
"tiempo".

"Son varios los rubros que integran ese "monto
"original", como se aprecia del segundo párrafo del
"artículo 41 del LISR y tal concepto sólo es
"aplicable para los bienes o activos a que alude la
"fracción II del artículo 2º de la ley reclamada,
"porque se trata de los de la misma especie (bienes
"tangibles despreciables, como construcciones,
"edificaciones y sus ampliaciones, modificaciones
"y mejoras). Sin embargo, no existe definición legal
"del término "monto original de la inversión"
"respecto de los terrenos, PORQUE ESTOS, NO
"OBSTANTE QUE SON BIENES TANGIBLES, NO SE
"DEPRECIAN.

"Consecuentemente, si no existe definición legal
"del concepto "monto original de la inversión" en
"tratándose de terrenos, no existe posibilidad de
"determinación de la base del impuesto respecto
"de este tipo de activos porque, se insiste, la LISR
"no precisa el concepto en tratándose de terrenos
"dentro de ninguna de sus disposiciones referidas
"a las empresas.

"En el tema nos apoya, siendo aplicable de manera
"analógica, la jurisprudencia número P./J.32/95,
"establecida por el honorable Tribunal Pleno de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es



consultable a páginas de la 28 a la 30 del "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, "Novena Epoca, Tomo II, correspondiente a "noviembre de 1995, que a la letra dice:

"**ACTIVO DE LAS EMPRESAS. LEY DEL**
"IMPUESTO AL VIOLA EL PRINCIPIO DE
"LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE NO
"ESTABLECE LA BASE DEL IMPUESTO PARA
"CONTRIBUYENTES ARRENDADORES NO
"EMPRESARIOS. En la tesis XXXVI/92, publicada en "la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación "número 51, marzo de 1992, páginas 22 a 24, se "estableció el criterio de que el artículo 2º de la Ley "del Impuesto al Activo de las Empresas prevé el "procedimiento para obtener la base del tributo en "tratándose de arrendamiento de bienes inmuebles. "Sin embargo, el examen de este precepto, en "relación con los demás que integran la ley, "permite concluir que no se establece la base "conforme a la cual debe determinarse el tributo a "cargo de los sujetos que otorgan el uso o goce "temporal de bienes que se destinarán a las "actividades empresariales de otros contribuyentes "del impuesto y que, de conformidad con el artículo "1º, causarán el gravamen por lo que se refiere a "dichos bienes, pues del referido artículo 2º deriva "que el valor del activo, que servirá de base para "aplicar la tasa del dos por ciento y calcular el "monto del impuesto a pagar será, en términos "generales, el resultado de sumar los promedios de

"los activos financieros, activos fijos, gastos y
 "cargos diferidos, monto original de la inversión,
 "inventarios de materias primas, productos
 "semideterminados y terminados, conceptos éstos
 "dentro de los que no quedan comprendidos los
 "bienes por los cuales causan el impuesto este tipo
 "de contribuyentes, pues los activos financieros,
 "inventarios de materias primas, productos
 "semiterminados y terminados, por su naturaleza
 "financiera y contable son bienes propios de la
 "actividad empresarial que no realizan este tipo de
 "contribuyentes; de igual manera, los activos fijos,
 "gastos y cargos diferidos, según deriva de las
 "definiciones que de los mismos da el artículo 42
 "de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que la Ley
 "del Impuesto al Activo de las Empresas incorpora
 "en su artículo 10, se configuran con motivo del
 "desarrollo de una actividad empresarial, más aún,
 "tratándose de activos fijos, la ley los define como
 "el conjunto de bienes tangibles que utilicen los
 "contribuyentes para la realización de actividades
 "empresariales y que se demeriten por su uso en el
 "servicio del contribuyente y por el transcurso del
 "tiempo, de donde se sigue que no tienen tal
 "naturaleza los bienes de los contribuyentes que
 "conceden su uso o goce temporal a terceros para
 "que sean éstos quienes los empleen en sus
 "actividades empresariales; y, finalmente, el
 "concepto de monto original de la inversión que
 "define el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre



la Renta y que también el numeral 109 de la ley en "análisis incorpora a la misma, si bien no concierne "únicamente a la actividad empresarial, sino a "cualquier actividad, se encuentra referida por el "artículo 2º únicamente a los terrenos que formen "parte del activo de los contribuyentes, por lo que "no puede considerarse que configure la base "tributaria para esta categoría de contribuyentes, al "no guardar congruencia con el objeto gravado, "pues el bien cuyo uso o goce se transmite puede "ser diverso a un terreno y la base del impuesto "debe ser establecida de manera que permita "calcular el gravamen en todos los casos que "coincidan con el supuesto previsto como hecho "imponible, sin que pueda derivarse por analogía, "igualdad o mayoría de razón, en virtud del "principio de legalidad tributaria consagrado en el "artículo 31, fracción IV, constitucional, que "garantiza la certidumbre jurídica de los "gobernados y erradica la arbitrariedad de las "autoridades aplicadoras de la ley."

"f) Por otra parte, resulta violada la garantía de "legalidad en tratándose de los activos "consistentes en inventarios, materias primas, "productos semiterminados y terminados, que son "objeto del impuesto en término de la fracción IV "del artículo 2º de la ley, porque la base se "encuentra materialmente indefinida.

"En efecto, para alcanzarla deben valorarse los "objetos y es el caso que la ley no da parámetro o

"definición alguna del método valuatorio general y
 "específico que deberían utilizar los contribuyentes
 "para valuar esos activos. En cambio, la ley señala
 "que cada contribuyente deberá utilizar la
 "valuación que resulta conforme al método que
 "tenga implantado.

"Lo anterior es constitucionalmente ilegal, porque
 "no existe en realidad seguridad ni certeza jurídica
 "para nadie en tanto que contrariando la propia
 "naturaleza del impuesto, su base no equivale a lo
 "que real y materialmente valga este tipo de
 "activos, esto es, no equivale al valor inherente a
 "ellos, cuya determinación se alcance con un
 "método único y definido, de manera que sean
 "comparables todos los contribuyentes que los
 "tengan para que, además de que sean tratados
 "igualmente cuando poseen el mismo tipo de
 "activos, contribuyan con respecto a una razonable
 "determinación de su capacidad económica, sino
 "que equivale, en cambio, a lo que resulta de
 "utilizar, sobre bienes de la misma especie y
 "naturaleza, uno y otro sistema de valuación.

"La base del tributo, en estas condiciones,
 "depende no de los activos en sí mismos
 "considerados y de sus características propias, ni
 "de la capacidad contributiva de los sujetos
 "pasivos, por lo tanto, sino de una circunstancia o
 "elementos exógeno por completo, que consiste en
 "un sistema o criterio de valuación. Así por
 "ejemplo, a un mismo bien, que inminentemente



valga diez, si se le considera con un sistema
"valuatorio determinado puede asignársele el
"mismo valor de diez, pero si en cambio se le
"sujeta a otro, de los muchos que hay, puede valer
"doce, ocho, quince o lo que fuese.

"Lo anterior es inadmisibile; la base del tributo no
"puede depender de uno u otro sistema o técnicas
"contables y financieras, porque éstas no son el
"objeto del impuesto, sino los activos de que se
"trata. En la misma medida, el utilizar uno u otro
"sistema valuatorio, que involucran una decisión
"libérrima de cada contribuyente, no es
"determinante de su capacidad económica y ni
"siquiera se relaciona con ella.

"La situación resulta peor en el caso de que un
"contribuyente desee cambiar su sistema de
"valuación y para ello, tenga que apearse, a los
"efectos del impuesto, a las reglas generales que
"disponga la Secretaría de Hacienda, ni siquiera el
"Presidente de la República y muchos menos la
"ley.

"Así, la base queda directamente en manos de lo
"dispuesto por simples autoridades
"administrativas. Por lo demás, siendo un hecho
"que la ley reclamada pretende una constante
"referencia a la LISR, conviene recordar, que a
"partir del 1º de enero de 1989 en que se suprimió
"el Título VII de ésta, las empresas dejaron de estar
"obligadas a llevar un sistema o método de
"valuación de inventarios, esto es, que no están

"ligadas a llevar ninguno, no sólo en especial,
 "no alguno cualquiera, ya que el Título II de la ley,
 "le es el que prevalece respecto de las empresas,
 "utiliza el sistema gravatorio de deducción directa
 "de compras y no el sistema de costeo.
 "Bajo todas estas consideraciones, resulta
 "evidente la necesidad jurídica de que la ley
 "establezca en forma directa la manera o sistema
 "con arreglo al cual los contribuyentes deban
 "determinar su costo en tratándose de inventarios
 "de materias primas y productos con la intención
 "de no violar la garantía de legalidad tributaria.
 "Situación distinta aconteció para efectos de la
 "actualización del valor de dichos inventarios,
 "porque para ello la ley sí estableció determinados
 "parámetros definidos, como se ve de su actual
 "artículo 30, tercer párrafo y siguientes.

"5. LOS ORDENAMIENTOS Y EL IMPUESTO AL
 "ACTIVO RECLAMADOS SON
 "INCONSTITUCIONALES, PORQUE CON ELLOS, Y
 "EN AGRAVIO DE LA PARTE QUEJOSA, LA
 "FEDERACION INVADE LA ESFERA DE
 "COMPETENCIA DE LOS ESTADOS Y DE LOS
 "MUNICIPIOS, ESPECIFICAMENTE AL GRAVAR
 "INMUEBLES, TANTO CONSTRUCCIONES COMO
 "TERRENOS.

"De conformidad con la estructura constitucional
 "de distribución de competencias del poder
 "tributario del Estado Mexicano entre los órganos
 "impositores, a saber, Federación, Estados y



"Municipios, la regla general o principio
"fundamental en nuestro sistema fiscal consiste en
"la concurrencia que tienen la Federación y los
"Estados para imponer contribuciones en una
"misma materia.

"Efectivamente, tomando en consideración que el
"artículo 124 constitucional dispone que se
"entienden reservadas a los Estados todas
"aquellas facultades que no estén concedidas
"expresamente a la Federación y que, por su parte,
"el artículo 73, fracción VII, dispone que el
"Congreso de la Unión fijará las contribuciones
"necesarias para cubrir el presupuesto, pero no
"indica que dicha facultad de imposición le
"corresponda con exclusión de la facultad que
"asiste a las legislaturas locales, resulta de ello la
"concurrencia legislativa y de poderes impositores
"en materia tributaria.

"La Federación y los Estados y dentro de éstos los
"Municipios, en términos de lo dispuesto o
"autorizado por las legislaturas locales pueden
"imponer de manera concurrente, como regla
"general, contribuciones sobre las mismas fuentes
"gravables, con excepción de aquéllas que, de
"manera exclusiva, reserva el artículo 73 de la
"Constitución General de la República, en las
"fracciones que corresponden a la Federación.

"Así, frente a la regla general de concurrencia de
"facultades y poderes impositivos entre las
"Entidades Federativas, los Municipios y la

"Federación, existen ciertas excepciones que
 "constituyen limitaciones específicas consagradas
 "por la Carta Magna en sus artículos 73, fracciones
 "X y XXIX, 117, fracciones IV a IX y 118, fracción I,
 "en donde se enumeran determinadas fuentes
 "imponibles que no pueden ser gravadas
 "libremente por los Estados ni por los Municipios
 "sino sólo por la Federación, por lo que si aquéllos
 "impusieran un gravamen sobre cualquiera de
 "estas fuentes, dicha contribución resultaría
 "flagrante inconstitucional por evadir la esfera de
 "competencia reservada a la Federación.

"Consecuentemente, fuera de la facultad
 "impositora exclusiva de la Federación, la regla
 "general es la concurrencia impositiva que lleva
 "implícita la posibilidad de que los tres niveles de
 "gobierno graven un mismo objeto con dos o más
 "tributos distintos, no contraviniéndose
 "directamente con esta situación, en principio, los
 "preceptos constitucionales que operan en materia
 "tributaria.

"Sin embargo, acontece también que, en términos
 "de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional,
 "relacionado con los diversos 31, fracción IV, 73,
 "103, fracción II y 115, del propio ordenamiento
 "fundamental, cuando la Carta Magna dispone que
 "ciertas materias u objetos tributarios se reservan
 "específicamente a los Estados o a los Municipios
 "para su aprovechamiento, la Federación queda
 "excluida en forma terminante y resulta



"incompetente para gravar dichas fuentes, que se
"entienden reservadas exclusivamente a las
"Entidades Federativas, de suerte que si la
"Federación las grava, las contribuciones de que
"se trate también resultarán notoriamente
"inconstitucionales, porque invaden la esfera de
"atribuciones fiscales exclusivas de las entidades
"locales.

"En la especie, estos supuestos de invasión de
"esferas por parte de la Federación, en perjuicio de
"los Estados y Municipios, con agravio de la parte
"quejosa, se presentan cuando los ordenamientos
"reclamados y el impuesto al activo que se
"impugna utilizan como objeto de gravación los
"bienes inmuebles, compuestos tanto de terrenos
"como de construcciones o edificaciones, en
"términos del artículo 2º, fracciones II y III, y del
"artículo 3º de la Ley reclamada.

"En efecto, los bienes descritos resultan activos
"gravados por el tributo que se reclama, tal y como
"lo ha definido ya la jurisprudencia vigente del
"Máximo Tribunal de la República, generada en
"febrero del presente año y ya transcrita dentro de
"esta demanda (P./J.11/96). Expresada la idea de
"otra forma, válidamente puede decirse que
"respecto o en razón de tales activos (terrenos y
"construcciones), que son propiedad inmobiliaria,
"pues, se grava a la parte quejosa en términos de
"las leyes y reglamentos federales combatidos
"dentro del presente juicio.

"Es importante atender a la redacción literal del
 "actual artículo 115 constitucional, fracción IV,
 "bases a) y c), con el texto que asumieron a partir
 "de las reformas oficialmente publicadas el 3 de
 "febrero de 1993, que propenden al fortalecimiento
 "económico de la estructura política tanto de los
 "Estados como de los Municipios, proveyéndoles
 "de una independencia material de la Federación
 "que favorece en sí misma la descentralización y
 "auténtica federalización de la vida nacional.

"El numeral dispone lo siguiente:

"ARTICULO 115. Los Estados adoptarán, para su
 "régimen anterior, la forma de gobierno
 "republicano, representativo, popular, teniendo
 "como base su división territorial y de su
 "organización política el Municipio Libre, conforme
 "a las bases siguientes:

"I....

"II....

"III....

"IV. Los Municipios administrarán libremente su
 "hacienda, la cual se formará de los rendimientos
 "de los bienes que les pertenezcan, así como de las
 "contribuciones y otros ingresos que las
 "legislaturas establezcan a su favor, y en todo
 "caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas
 "adicionales, que establezcan los Estados sobre la
 "propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento,
 "división, consolidación, traslación y mejora así



"como las que tengan por base el cambio de valor
"de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el
"Estado para que éste se haga cargo de algunas de
"las funciones relacionadas con la administración
"de esas contribuciones.

"b) ...

"c) Los Ingresos derivados de la prestación de
"servicios público a su cargo.

"Las leyes federales NO LIMITARAN LA FACULTAD
"DE LOS ESTADOS PARA ESTABLECER LAS
"CONTRIBUCIONES A QUE SE REFIEREN LOS
"INCISOS a) y c), ni concederán exenciones o
"subsidios respecto de las mencionadas
"contribuciones, en favor de personas físicas o
"morales, ni de instituciones oficiales o privadas.
"Sólo los bienes del dominio público de la
"Federación, de los Estados o de los Municipios
"estarán exentos de dichas contribuciones.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las
"leyes de ingresos de los Ayuntamientos y
"revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos
"de egresos serán aprobados por los
"Ayuntamientos con base en sus ingresos
"disponibles..."

"De lo transcrito con toda evidencia se desprende
"que la materia inmobiliaria, como fuente u objeto
"de gravación tributaria, corresponde sólo a las
"entidades locales y, más precisamente, a los
"Municipios.

"Bajo el principio general de derecho de que el que
 "puede lo más puede lo menos, si apreciamos que
 "es de mayor entidad establecer una deuda o
 "crédito que perdonarla porque no puede hacerse
 "lo segundo sin lo primero, en tanto que nadie
 "puede remitir adeudos sino es su acreedor, nos
 "convencemos de que la Federación
 "constitucionalmente es incompetente y no le
 "asiste posibilidad alguna de concurrencia para
 "gravar con sus leyes (como la reclamada) la
 "propiedad inmobiliaria bajo ninguna de sus
 "modalidades, porque si no puede lo más, que es
 "establecer contribuciones que afectan esa fuente,
 "que sólo le corresponde a los Estados y
 "Municipios, no puede lo menos, que es establecer
 "exenciones o subsidios ni a esos tributos de
 "orden federal ni, mucho menos a los que
 "establezcan los Estados y los Municipios, siendo
 "clarísimas en este punto las disposiciones del
 "artículo 115 constitucional que se lo impiden.
 "Además, apreciamos que la norma constitucional
 "EXPRESAMENTE la prohíbe a la Federación limitar
 "en cualquier modo las facultades legislativas
 "locales de gravación de la propiedad inmobiliaria.
 "Así, la Federación no puede hacer lo más y
 "tampoco lo menos.
 "Debe entonces declararse la inconstitucionalidad
 "de los ordenamientos y tributo que combatimos,
 "porque el impuesto grava entre otros bienes,
 "como parte de su objeto y base, a los inmuebles



(construcciones, edificaciones y terrenos) de las
"quejas, lo que es imposible, desde el punto de
"vista constitucional, para la Federación y para las
"leyes e impuestos federales, porque invaden las
"esferas de competencia exclusiva de los Estados,
"Municipios y del Distrito Federal.

"6. LOS ORDENAMIENTOS Y EL IMPUESTO AL
"ACTIVO RECLAMADO SON
"INCONSTITUCIONALES, PORQUE VIOLAN LAS
"GARANTIAS DE ORDEN ECONOMICO
"TUTELADAS POR LOS ARTICULOS 25,
"ANTEPENULTIMO Y ULTIMO PARRAFOS, Y 26 DE
"LA CARTA MAGNA.

"Aunque resulta dudoso y probablemente espurio
"el origen de los preceptos constitucionales que a
"partir del 2 de febrero de 1983 se integraron a la
"Carta Magna dentro de los numerales que se
"indican, porque es en su parte dogmática, que
"corresponde al capítulo de garantías individuales
"las que, por serlo, corresponden a los gobernados
"como derechos públicos subjetivos e inalienables
"frente al Estado, donde se incrustan
"determinaciones fundamentales que más bien
"corresponden a éste y no a aquéllos, debemos
"pensar, por lo pronto, bajo un punto de vista
"positivo e interpretar las normas en forma tal que
"establezca en favor de los particulares ciertos
"derechos individuales, porque así debe ser.

"El artículo 25 referido, en lo conducente establece
"que:

"Bajo criterio de equidad social y productividad se
 "apoyará e impulsará a las empresas de los
 "sectores social y privado de la economía,
 "sujetándolos a las modalidades que dicte el
 "interés público y al uso, en beneficio general, de
 "los recursos productivos, cuidando su
 "conservación y el medio ambiente.

"La ley alentará y protegerá la actividad
 "económica que realicen los particulares y
 "proveerá las condiciones para que el
 "desenvolviendo del sector privado contribuya al
 "desarrollo económico nacional, en los términos
 "que establece esta Constitución."

"Por su parte, el artículo 26 establece, también, en
 "lo conducente, que:

"El Estado organizará un sistema de planeación
 "democrática del desarrollo nacional que imprima
 "solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
 "crecimiento de la economía para la independencia
 "y la democratización política, social y cultural de
 "la Nación."

"No es posible entender las ideas de tales
 "disposiciones sin relacionarlas con lo que
 "determina, en sus bases a) y b), de la fracción I,
 "del artículo 3º constitucional, porque allí la
 "Constitución precisa que se entiende la
 "democracia "no solamente como una estructura
 "jurídica y un régimen político, sino como un
 "sistema de vida fundado en el constante
 "mejoramiento económico, social y cultura del

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 SUPLENTE
 JUSTICIA DE
 SECRETARIA GEN.



"pueblo" y nuestro nacionalismo como el que "sin
"hostilidades ni exclusivismos atenderá a la
"comprensión de nuestros problemas, al
"aprovechamiento de nuestros recursos, a la
"defensa de nuestra independencia política, al
"aseguramiento de nuestra independencia
"económica y a la continuidad y acrecentamiento
"de nuestra cultura."

"Sabemos perfectamente, por lo demás, en qué
"sentido dispone justicia tributaria para los
"gobernados la fracción IV del artículo 31
"constitucional.

"Con todo este panorama, no podemos menos que
"concluir en la evidente violación de las garantías
"de orden económico que la Constitución establece
"para proteger a los particulares gobernados,
"porque si ya ha sido demostrada la injusticia por
"inequidad, desproporcionalidad, ilegalidad,
"retroactividad e invasión de competencias del
"impuesto reclamado, en manera alguna puede
"pensarse que ese tributo favorezca el desarrollo de
"la economía, dé seguridad a sus agentes, proteja y
"no hostilice sus actividades, sino todo lo
"contrario, cuando hemos apreciado de inicio que
"la ley favorece con exclusivismos los intereses de
"ciertos sujetos exentos que, ello no obstante, se
"encuentran en la misma situación de hecho y de
"naturaleza que guardan las quejas frente a las
"normas impositoras.

"No prevalece un ánimo de equidad ni de apoyo a
"la productividad, lo que tiende a desfavorecer la
"situación de las quejas, desimpulsando a la
"economía.

"En manera alguna se favorece, por lo demás, sino
"todo lo contrario, el aliento y protección de la
"actividad económica de los gobernados, porque el
"impuesto desestimula sensiblemente la inversión
"a realizar en la patria tanto por los nacionales
"como por los extranjeros, ya que ésta es
"directamente gravada con independencia de que
"resulte o no productiva y rentable, al concretarse
"en patrimonio o en un bien patrimonial cualquiera,
"de las empresas pasivas afectadas.

SUPREMA (
 JUSO DE OY
 REGISTRO GUBER

"La intención meramente recaudadora del gobierno
"cae aquí en lo infeliz y desacertado porque priva a
"México, más pronto que tarde, de las inversiones
"novedosas y de mayor proporción que en ésta
"coyuntura de la historia nos son tan
"indispensables.

"El impuesto reclamado, que técnicamente es un
"tributo que pesa directamente sobre los sujetos
"por su patrimonio y más que eso, sobre la parte
"activa del patrimonio, tiende a destruir la fuente de
"riqueza, lesionando muy gravemente a la
"economía.

"El propio gobierno perjudica, a la corta y a la
"larga, al Estado, porque la destrucción o
"disminución de la actividad económica que resulta
"del desaliento de las inversiones, propicia



"Injustamente la baja en la recaudación
 "proveniente de aquellos sujetos que, además,
 "suelen ser los perennes cautivos, colocándolos,
 "como le sucede a la quejosa, en circunstancias de
 "desventaja operacional, resultante de favorecer a
 "la competencia desleal que en su contra ejercitan
 "tanto las empresas exentas injustamente, como
 "todos los demás agentes de la economía que no
 "se encuentran bajo el estricto control tributario
 "que ellas padecen.

"Procede entonces, de acuerdo con todo lo que se
 "razona, la declaratoria de inconstitucionalidad, en
 "beneficio de quien promueve esta instancia, de la
 "totalidad de los actos reclamados.

"7. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO
 "AL ACTIVO ES INCONSTITUCIONAL, PORQUE
 "VIOLA LAS GARANTIAS DE LEGALIDAD
 "GENERAL Y TRIBUTARIA, BASICAMENTE, Y
 "PORQUE VARIOS DE SUS DISPOSITIVOS
 "TAMBIEN VIOLENTAN LAS DIVERSAS
 "GARANTIAS DE EQUIDAD Y DE
 "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS, EN SI
 "MISMAS CONSIDERADAS.

"Ya conocemos el sentido y alcance de la garantía
 "de legalidad tributaria, en los términos en que la
 "Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de
 "Justicia ha interpretado la fracción IV del artículo
 "31 constitucional.

"Sabemos que este dispositivo se refuerza con lo
 "que establece el segundo párrafo del artículo 14

"constitucional, que garantiza que nadie puede ser
 "privado de sus propiedades, posesiones o
 "derechos, sino es conforme a las leyes expedidas
 "con anterioridad al hecho, por el Congreso de la
 "Unión. No es posible que los elementos
 "fundamentales de las contribuciones puedan
 "quedar al arbitrio del Poder Ejecutivo, en función
 "de los reglamentos que éste se encuentre en
 "aptitud de expedir, un ejercicio de la facultad
 "consagrada en su favor por la última parte de la
 "fracción I del artículo 89 constitucional.

"Los reglamentos expedibles son disposiciones u
 "ordenamientos que participan, al igual que las
 "leyes, de las características de generalidad,
 "abstracción e impersonalidad, por lo que
 "materialmente, desde ese punto de vista, el
 "Presidente legisla, sólo que, por obvias razones,
 "formalmente son ordenamientos administrativos y
 "no legislativos, porque no provienen del Congreso
 "de la Unión. El objetivo de los reglamentos es sólo
 "pormenorizar las leyes, donde ello es factible,
 "para facilitar y propiciar su aplicación correcta en
 "la vida práctica.

"Sólo el Congreso, por lo demás, es competente
 "para legislar en algunas materias en donde de
 "ninguna manera puede intervenir el Presidente ni
 "bajo el pretexto de reglamentar las leyes.

"Hay que convenir en que los reglamentos
 "expedidos por el Ejecutivo tienen que referirse
 "únicamente a las leyes del Congreso de la Unión,



"que son las que expresamente menciona la
"fracción invocada. Por esto, la regla general a que
"se someten los reglamentos es la de
"heteronomía" y tan sólo pueden considerarse
"como excepciones a este principio los supuestos
"del artículo 21 constitucional, relativo a los
"reglamentos autónomos de policía y buen
"gobierno, y del artículo 131, que opera en materia
"arancelaria o de comercio exterior.

"Lo medular en este momento radica en
"comprender que no puede ejercitarse la facultad
"reglamentaria con independencia de la ley, ya que
"lo característico del reglamento es su
"subordinación a ésta.

"En nuestro sistema de derecho, los reglamentos
"están regidos por los principios llamados "la
"reserva de la ley" y de la preferencia o primacía de
"la ley.

"Según el primero, al ejercer la facultad
"reglamentaria el Presidente de la República DEBE
"ABSTENERSE DE LEGISLAR, es decir, no puede
"crear normas jurídicas en materias que, conforme
"a la Constitución, son de competencia exclusiva
"del Legislador, esto es, del Congreso de la Unión.
"Dicho de otra manera, hay materias que sólo
"pueden ser reguladas por una ley y no pueden
"serlo por el Presidente.

"Específicamente, la tributaria es una de ellas. Lo
"referido o relativo a los sujetos, bases, cuotas,
"exenciones, sanciones, tasas de los tributos, así

"como a la determinación de los hechos
 "imponibles, parámetros y demás circunstancias
 "que los originen, sólo puede regularse por leyes
 "expedidas por el Congreso de la Unión y bajo
 "ningún concepto los reglamentos pueden aludir a
 "ello materialmente, ni siquiera por virtud de una
 "delegación de facultades que al respecto
 "propusiera el Legislativo en favor del Ejecutivo, ya
 "que entonces sería el Legislador ordinario un
 "violador directo de la Constitución por pretender,
 "sin modificación de la misma, establecer en leyes
 "secundarias excepciones al principio de la
 "división de poderes que la propia Constitución no
 "contempla.

SUPREMA
 SECRETARÍA DE

"Según el principio de la preferencia o primacía de
 "la ley, segundo que enunciamos, las
 "disposiciones contenidas en una ley de carácter
 "formal y, más aún, de carácter material como son
 "en todo caso las tributarias, no pueden ser
 "modificadas en su sentido o alcance, ni por
 "exceso o por directo, por un reglamento. Así se
 "proclama que las disposiciones de un reglamento
 "no pueden válidamente contrariar, contraponerse,
 "exceder, restringir o modificar a las disposiciones
 "contenidas en la ley que se reglamenta. Este
 "principio se basa en la autoridad formal de las
 "leyes que estatuye el artículo 72 inciso f)
 "constitucional, según el cual "en la interpretación,
 "reforma, o derogación de las leyes o decretos del
 "Congreso de la Unión se observarán los mismos



"trámites establecidos para su formación",
"dispositivo al cual debe arreglarse y entenderse
"sometido el de la parte final de la fracción I del
"artículo 89 fundamental, con objeto de que, en
"definitiva, se respete la división de poderes que
"tutela el artículo 49, segundo párrafo, de nuestro
"Ordenamiento Básico.

"Con todas estas ideas, resulta factible la clara
"demostración de la inconstitucionalidad general
"del reglamento reclamado, así como de la
"específica que vicia a varias de las disposiciones
"que resultan en agravio de los intereses jurídicos
"de la quejosa.

"a). En primer término, toda vez que el reglamento
"por naturaleza es un ordenamiento accesorio del
"principal, que es la ley pormenorizada o
"pretendidamente pormenorizada, resulta en la
"especie que el reclamado es inconstitucional en
"tanto que lo es aquélla, porque resulta fruto de un
"acto viciado en tanto que, bajo su carácter de
"heterónomo o accesorio, la inconstitucionalidad
"que se predica y ha demostrado de la ley, también
"es predicable para y de éste.

"b). También en lo general, acontece que la materia
"y contenido de las disposiciones del reglamento
"no son propias de un instrumento ordenativo de
"su naturaleza, sino de la ley.

"Lo que es la especie ha sucedido es que el
"Presidente de la República, con el pretexto de
"reglamentaria, excedió absolutamente los límites y

"alcances de la ley, transgrediendo de manera
"flagrante el principio de la primacía o preferencia
"de ésta y, además, en tratándose de materia
"tributaria, el de reserva.

"En tanto que el reglamento encuentra la
"justificación de su existencia en la de la ley y su
"medida y alcance en las de los dispositivos
"legales reglamentables, debe ceñirse en todo caso
"simplemente a pormenorizar los principios
"generales, conceptos y directrices que aquélla
"establezca, sin poder ampliarlos, restringirlos,
"modificarlos o infringirlos, ya que la ley es,
"precisamente, la razón misma de su validez,
"alcance y justificación.

"En nuestro sistema o sea, dentro de la materia
"tributaria, con arreglo a lo dispuesto por los
"preceptos constitucionales antes invocados, la
"prescripción que se contiene en la fracción II del
"artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en
"cuyos términos sólo compete al Presidente de la
"República, y ni siquiera al Secretario de Hacienda,
"regular los aspectos formales de la materia fiscal
"y nunca, de ninguna manera, los materiales.

"La disposición es ilustrativa y por ello la
"transcribimos, haciendo nuestro su sentido:

"ARTICULO 39. El Ejecutivo Federal mediante
"resoluciones de carácter general podrá:

"I. ...

"II. Dictar las medidas relacionadas con la
"administración, control, forma de pago y

ESTREMA
JUSTICIA DE
LA MATERIA



procedimientos señalados en las leyes fiscales,
 "sin variar las disposiciones relacionadas con el
 "sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o tarifa
 "de los gravámenes, las infracciones o las
 "sanciones de las mismas, a fin de facilitar el
 "cumplimiento de las obligaciones de los
 "contribuyentes."

"El reglamento reclamado es inconstitucional,
 "porque todo lo dicho se viola en los siguientes
 "casos, dentro de cuya exposición damos por
 "supuesta la violación constitucional de la
 "legalidad general y fiscal que protege la Carta
 "Magna, ya que el ordenamiento administrativo
 "excede, transgrede y modifica en fondo el sentido
 "y alcance de los preceptos legales con los que
 "guarda contexto los cuales, además no son
 "necesariamente los que sus artículos refieren.

"No es factible la concesión de "opciones"
 "reglamentarias que, según el Presidente de la
 "República, "faciliten el cumplimiento de la ley",
 "cuando éstas abiertamente la violan, contradicen,
 "exceden o modifican, máxime cuando la opción no
 "beneficia a todos los contribuyentes, como en el
 "caso sucede.

"La quejosa es la especie obligada a combatir el
 "reglamento, en estas condiciones, sea como
 "fuese, porque inclusive para el caso de que algún
 "aspecto le beneficiase y ejerciese alguna opción,
 "nadie puede asegurar que en el futuro, si éstas se
 "determinaron violando la ley, no sean revocadas o

"su nulidad demandada, en función de actos
"concretos, vía juicio de nulidad, porque las
"resoluciones favorables al particular en tales
"supuestos son notoriamente ilegales, operando
"las disposiciones de la fracción IX del artículo 202
"del Código Fiscal de la Federación.

"b.1. Excediendo a la ley y contraviniendo
"directamente a la Constitución, en la fracción IV
"de su artículo 31, con violación adicional de la
"garantía de equidad tributaria, en su artículo 2º el
"reglamento decretó la exención del pago del
"impuesto en favor de cuatro especies adicionales
"de sujetos pasivos, no contemplados en el
"artículo 6º de la ley, con perjuicio de la parte
"quejosa.

"b.2. El artículo 10 del reglamento, violando
"adicionalmente la equidad tributaria, concede a
"las personas físicas que no realicen actividades
"empresariales y a las asociaciones y sociedades
"civiles gravadas por el impuesto, una opción que
"no concede a la empresa quejosa, para aplicar el
"factor que establece, en la tabla de ajuste
"anualmente publicada, el Congreso de la Unión, en
"lugar que prevé la fracción II del artículo 7º de la
"LISR para que determinen el impuesto a su cargo
"mediante el ajuste al costo comprobado de
"adquisición de las inversiones consistentes en
"construcciones, mejoras y ampliaciones de
"inmuebles.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUATEMALA
SUPREMA
JUSTICIA DE
RECIBIÓ



Además de que el establecimiento de esta opción "excede a la norma legal que no la prevé y su "ejercicio es susceptible de condicionar la cuantía "del impuesto, no hay razón justa para privar de "esa oportunidad a los empresarios que, como la "agraviada, son también causantes del impuesto, "con lo que se viola la equidad.

"b.3. Por su parte, el primer párrafo del artículo 13 "del reglamento es inconstitucional, como ya "vimos al estudiar el artículo 5º de la ley, porque "determina materialmente un objeto del impuesto, "bajo la especie de activo financiero, consistente "en "las inversiones y los depósitos que tengan los "contribuyentes con las instituciones financieras, "directamente, o bien el de las que hayan adquirido "con su intermediación."

"b.4. No queda salvado, en términos del artículo 14 "reglamentario, el vicio general que determina la "inconstitucionalidad del artículo 5º de la ley "porque, además de que lo excede, el reglamento "no admite la inclusión de las deudas mantenidas "por el contribuyente con personas físicas que "realicen actividades empresariales o personas "morales, sólo son contribuyentes del IMPAC.

"b.5. Por su parte, el artículo 15 reglamentario "violenta, en la misma forma descrita, tanto a la ley "como a la Constitución y, adicionalmente, la "garantía de equidad, porque no otorga a la "peticionaria de garantías, también causante del "impuesto, una opción similar a la que provee para

"los sujetos pasivos accionistas de una unión de
"crédito.

"b.6. Excediendo a la ley y contraviniendo
"directamente a la Constitución, en la fracción IV
"de su artículo 31, con violación adicional de la
"garantía de equidad tributaria, en su artículo 16,
"párrafos segundo y siguientes, el reglamento
"decretó una exención temporal mucho más amplia
"sobre el pago del impuesto, en favor de una
"especie de contribuyentes o sujetos pasivos no
"contemplados ni beneficiados así por la ley, ni en
"su artículo 6° ni en alguno otro, con perjuicio de la
"parte quejosa. Se trata, en particular, de los
"contribuyentes dedicados a la prestación de
"servicios hoteleros", quienes "podrán considerarse
"como ejercicio de inicio de actividades aquél en el
"que por primera vez obtengan ingresos por la
"prestación de dichos servicios."

"Bajo otra aproximación de la cuestión, el caso es
"que el señalado artículo 16 reglamentario que se
"impugna, violando adicionalmente la equidad
"tributaria, concede a los contribuyentes
"prestadores de servicios hoteleros, dos opciones
"favorables que no concede a la(s) empresa(s) de
"la parte quejosa, (a) tanto para diferir inicialmente
"la obligación de pago del tributo hasta por cinco
"años, cuando (b) para "calcular el impuesto al
"activo sin considerar en el valor de su activo los
"promedios de los activos y pasivos
"correspondientes a los edificios o unidades en



"construcción", cuando después de iniciar el
"desahogo de la actividad empresarial de que se
"trate, realicen obras de expansión que consistan
"en la construcción de uno o más edificios y
"unidades industriales o comerciales distintas de
"las ya existentes y en operación.

"Pues bien, además de que el establecimiento de
"todas las señaladas opciones favorables (las
"cuales son operantes simple y sencillamente a
"decisión de los contribuyentes beneficiados),
"excede a las normas legales que no las prevén y
"su ejercicio es susceptible de condicionar,
"fundamentalmente a la baja, la cuantía del
"impuesto a pagar, no hay razón justa para privar
"de esas oportunidades a los empresarios que,
"como la parte agraviada en la especie, son
"también causantes del impuesto, con lo que se
"viola la equidad.

"b.7. El artículo 21 del reglamento es
"inconstitucional, porque provee de una opción
"consistente en la posibilidad de acreditar el
"impuesto reclamado que causan y efectivamente
"paguen en un ejercicio, cuando no hubieren
"podido redimirlo en éste, dentro de los cinco
"siguientes, sólo a las empresas dedicadas
"preponderantemente a la construcción de obras
"públicas o a la enajenación de lotes en
"fraccionamientos o parques industriales, y no lo
"hace respecto de la quejosa, también siendo
"empresa para efectos de la ley, construye obra

"civil, no pública, y carece de esa opción,
 "permaneciendo en el régimen normal de ley
 "previsto por su artículo 9º, pudiendo realizar el
 "acreditamiento sólo dentro de un periodo que no
 "excederá de tres años, en vez de cinco.

"b.8. En las mismas condiciones, el artículo 24 del
 "reglamento establece una opción benéfica para
 "los contribuyentes que reciban financiamiento de
 "una empresa del sistema financiero, si es de
 "comercio exterior, residen en México y se
 "encuentra registrada ante la SECOFI, porque
 "cualquiera que sea la naturaleza de los créditos,
 "podrán pagar por cuenta y orden de ésta el
 "impuesto que le corresponda y deducir los
 "pasivos inherentes al crédito.

SUPREMA
 JUSTICIA DI
 FEDERAL DE

"Sin embargo, esa opción no se refiere a todas las
 "empresas del sistema financiero, que tienen la
 "misma naturaleza de la que, dentro de éstas, se
 "dedican al comercio exterior. Así las cosas, se da
 "nuevamente un tratamiento desigual a las
 "empresas contribuyentes, si es que se financian
 "con empresas del sistema financiero no dedicadas
 "al comercio exterior o dedicadas a él, teniendo en
 "un caso beneficio fiscal y en otro no y, además,
 "dependiendo esto de factores exógenos, sólo
 "imputables a las empresas financieras que
 "respecto de ellas son terceros, y no a su
 "capacidad contributiva.

"8. Por otra parte, es evidente que sólo hemos
 "reclamado algunas de las disposiciones que



"agravian los intereses jurídicos de la parte
"quejosa, causándole perjuicio bajo cualquier
"aspecto o concepto, no reclamando, en cambio,
"del reglamento, disposiciones que le benefician,
"porque, por razones obvias, en su función no
"existe agravio y entonces el juicio constitucional
"devendría improcedente a tal respecto, siendo
"ocioso plantear cualquier consideración en
"contrario.

"9. Finalmente por razones de inconstitucionalidad
"derivada, al encontrarse materialmente fundado
"en normas y ordenamientos inconstitucionales,
"deberá igualmente concedérsele el amparo a la
"parte quejosa contra el primer acto concreto de
"aplicación que de todas aquellas hemos
"reclamado, consistente en la declaración de pago
"provisional del IMPAC correspondiente a mayo de
"1996, hecha por la parte quejosa, cuya notificación
"sufrió efectos al día hábil siguiente, en razón de
"que constituye un claro fruto de los actos
"legislativos y reglamentarios viciados que hemos
"venido impugnando, para todos los efectos
"legales a que haya lugar. Asimismo, es
"procedente que se ampare a la parte quejosa
"contra los actos autoritarios futuros pero
"inminentes que en su contra se concretarán, como
"efectos y consecuencias de los ordenamientos
"reclamados, en vía de nuevas determinaciones y
"de liquidaciones tributarias."

CUARTO. Por auto del veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al que fue turnada la demanda de amparo, la admitió en el expediente número 385/96 y, previos los trámites legales correspondientes, en la audiencia constitucional que se celebró el treinta de agosto del mismo año, dictó sentencia que terminó de engrosar el treinta de septiembre siguiente, que concluyó con los puntos resolutivos que dicen:

**"PRIMERO. Se sobresee respecto de los actos y
"autoridades que quedaron precisados en el
"considerando tercero.**

**"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni
"protege a Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa,
"sociedad anónima de capital variable, Promotora
"Fusión, sociedad anónima de capital variable,
"Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, sociedad
"anónima de capital variable, Opción Jamantab,
"sociedad anónima de capital variable, Corporativo
"Opción Santa Fe II, sociedad anónima de capital
"variable y Servicios Corporativos GC, sociedad
"anónima de capital variable, contra los actos que
"reclaman del Congreso de la Unión, Presidente de
"la República y Secretario de Gobernación,
"consistentes en la expedición, aprobación,
"promulgación, publicación y refrendo del Código
"Fiscal de la Federación, particularmente por lo que
"hace a sus artículos 20, párrafo segundo, y 20-BIS,
"publicados en el Diario Oficial de la Federación de
"treinta y uno de diciembre de mil novecientos**



"ochenta y seis y treinta y uno de diciembre de mil
"novecientos ochenta y ocho, respectivamente. Ni
"contra los actos que reclaman del Gobernador del
"Banco de México.

"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y
"protege a Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa,
"sociedad anónima de capital variable, Promotora
"Fusión, sociedad anónima de capital variable,
"Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, sociedad
"anónima de capital variable, Opción Jamantab,
"sociedad anónima de capital variable, Corporativo
"Opción Santa Fe II, sociedad anónima de capital
"variable y Servicios Corporativos GC, sociedad
"anónima de capital variable, contra los actos que
"reclaman del Congreso de la Unión, Presidente de
"la República, Secretario de Gobernación y
"Secretario de Hacienda y Crédito Público,
"consistentes en la expedición, aprobación,
"promulgación, publicación y refrendo de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas, hoy
"denominada Ley del Impuesto al Activo, publicada
"en el Diario Oficial de la Federación de treinta y
"uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
"ocho, así como sus decretos de reformas
"publicadas en ese órgano de difusión el
"veintiocho de diciembre de mil novecientos
"ochenta y nueve; veintiséis de diciembre de mil
"novecientos noventa; veinte de diciembre de mil
"novecientos noventa y uno; veinte de julio de mil
"novecientos noventa y dos; tres de diciembre de

*"mil novecientos noventa y tres; veintiocho de
 "diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; y
 "diez de mayo de mil novecientos noventa y seis.
 "Así como contra el Reglamento de la Ley del
 "Impuesto al Activo de las Empresas, hoy sólo
 "Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo,
 "publicado en el Diario Oficial de la Federación del
 "treinta de marzo de mil novecientos ochenta y
 "nueve; y sus decretos de reformas publicadas el
 "siete de junio de mil novecientos ochenta y nueve;
 "quince de mayo de mil novecientos noventa;
 "treinta y uno de marzo y cinco de noviembre de
 "mil novecientos noventa y dos; y, cuatro de
 "octubre de mil novecientos noventa y tres."*

**SUPREMA
 JUSTICIA DE
 FEDERACION**

QUINTO. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa y el Procurador Fiscal de la Federación, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y éste en representación del Presidente de la República, en su carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, interpusieron sendos recursos de revisión ante el propio Juez de Distrito del conocimiento, el que remitió el escrito de agravios y el expediente de garantías respectivo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por acuerdo del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el Presidente de este Alto Tribunal admitió los recursos de revisión interpuestos y ordenó dar al Procurador General de la República la intervención legal que le corresponde.



El Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento en el sentido de que se confirme la sentencia recurrida.

Mediante proveído del nueve de enero de mil novecientos noventa y siete, el Presidente de este Supremo Tribunal ordenó turnar los autos al Ministro Juan Díaz Romero para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y por proveído del día dieciséis siguiente, tuvo a la parte quejosa adhiriéndose a la revisión interpuesta a nombre del Titular del Ejecutivo Federal, en los términos del escrito presentado el veinticinco de noviembre del año anterior ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, y ordenó reintegrar el asunto al Ministro nombrado como ponente.

Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto de que se trata fue radicado para su resolución en la Segunda Sala.

Con proyecto de resolución el asunto fue listado en la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para la sesión del diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, habiéndose acordado aplazar el asunto.

En atención a la petición del Ministro ponente el asunto fue turnado al Tribunal Pleno para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de los recursos

de revisión y de la revisión adhesiva en comento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los mencionados recursos de revisión se interpusieron en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo y en esta instancia subsiste el problema relativo a la constitucionalidad de dicho ordenamiento.

Es pertinente señalar que en la demanda de amparo también se señaló como acto reclamado el Reglamento a la Ley del Impuesto al Activo expedido por el Presidente de la República, acto cuyo conocimiento compete originalmente a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia; sin embargo, se advierte que las violaciones que se aducen al respecto se encuentran íntimamente relacionadas con las expresadas en contra de la Ley, por lo que a fin de resolver en su totalidad la cuestión jurídica planteada, en observancia del principio de celeridad procesal que establece el artículo 17 de la Carta Magna, este Tribunal Pleno decide ejercer la facultad de atracción para conocer del referido Reglamento, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, antepenúltimo párrafo, constitucional y correlativamente en el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo.

SEGUNDO. Las consideraciones que fueron vertidas en la sentencia recurrida, son del tenor siguiente:



PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es
"competente para conocer y resolver el juicio
"conforme a lo dispuesto por los artículos 114,
"fracción I, de la Ley de Amparo y 52, fracción III,
"de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
"Federación, en virtud de que se reclama la
"inconstitucionalidad de diversos ordenamientos
"legales y reglamentarios de la materia fiscal con
"motivo de su aplicación.

SEGUNDO. Son ciertos los actos que se reclaman
"del Congreso de la Unión, Presidente de la
"República y Secretario de Gobernación,
"consistentes en la expedición, aprobación
"promulgación, publicación y refrendo de la Ley del
"Impuesto al Activo de las Empresas, hoy
"denominada Ley del Impuesto al Activo, publicada
"en el Diario Oficial de la Federación del treinta y
"uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
"ocho, así como sus decretos de reformas
"publicadas en ese órgano de difusión el
"veintiocho de diciembre de mil novecientos
"ochenta y nueve; veintiséis de diciembre de mil
"novecientos noventa; veinte de diciembre de mil
"novecientos noventa y uno; veinte de julio de mil
"novecientos noventa y dos; tres de diciembre de
"mil novecientos noventa y tres; veintiocho de
"diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; y,
"diez de mayo de mil novecientos noventa y seis,
"así como del Código Fiscal de la Federación,
"particularmente por lo que hace a sus artículos 20

"y 20-BIS, según decretos publicados el treinta y
 "uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
 "seis y treinta y uno de diciembre de mil
 "novecientos ochenta y ocho, pues así lo
 "reconocen las autoridades en sus informes
 "justificados (folios 451 a 484 y 487 a 489).

"También son ciertos los actos que se reclaman del
 "Presidente de la República, Secretario de
 "Hacienda y Crédito Público, y Secretario de
 "Gobernación, consistentes en la expedición,
 "refrendo y publicación del Reglamento de la Ley
 "del Impuesto al Activo de las Empresas, hoy solo
 "Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo,
 "publicado en el Diario Oficial de la Federación del
 "treinta de marzo de mil novecientos ochenta y
 "nueve, así como sus decretos de reformas
 "publicadas el siete de junio de mil novecientos
 "ochenta y nueve; quince de mayo de mil
 "novecientos noventa; treinta y uno de marzo y
 "cinco de noviembre de mil novecientos noventa y
 "dos, y cuatro de octubre de mil novecientos
 "noventa y tres.

"El Secretario de Hacienda y Crédito Público
 "reconoce haber omitido refrendar los decretos
 "promulgatorios de las leyes expedidas por el
 "Congreso de la Unión.

"Aun cuando el Gobernador del Banco de México
 "rechaza el acto que se le atribuye consistente en
 "las publicaciones mensuales del índice nacional
 "de precios al consumidor, su negativa se ve



"destruida con el contenido del artículo 20, párrafo
"segundo, del Código Fiscal de la Federación, que
"establece la obligación a cargo de dicho banco de
"publicar mensualmente esos índices en el Diario
"Oficial de la Federación.

"TERCERO. El Secretario de Hacienda y Crédito
"Público niega todo acto de aplicación de los
"ordenamientos legales y reglamentarios
"reclamados en perjuicio de la quejosa; negativa
"que no desvirtúa el demandante. También niega
"haber expedido las formas oficiales para declarar
"y enterar el impuesto al activo, negativa que
"tampoco destruye el quejoso.

"El Administrador Local de Recaudación del Sur
"del Distrito Federal, niega haber aplicado las
"normas jurídicas impugnadas en perjuicio del
"quejoso, sin prueba contraria que destruya su
"aserto.

"Tampoco son ciertos los actos que se atribuyen al
"Coordinador y Director de Disposiciones de Banca
"Central, Director General de Investigación
"Económica y Director de Información Económica,
"todos dependientes del Banco de México,
"consistentes en las publicaciones mensuales del
"índice nacional de precios al consumidor, pues ya
"antes se determinó qué autoridad es responsable
"de ese acto.

"Por ende, procede decretar el sobreseimiento en
"cuanto a los actos y autoridades aquí indicadas

"conforme a lo dispuesto por el artículo 74,
"fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

"CUARTO. El Procurador Fiscal de la Federación
"propone las siguientes causas de improcedencia:

"a) Aduce que opera la prevista por el artículo 73,
"fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que
"las declaraciones de pago provisional que
"exhibieron las quejas correspondientes al mes
"de mayo de mil novecientos noventa y seis no
"constituyen el primer acto concreto de aplicación
"de los ordenamientos impugnados, pues en la
"demanda de amparo confiesan que fueron
"contribuyentes del impuesto al activo desde antes
"del diez de mayo de este año, fecha en que
"apareció publicada la última reforma a la Ley del
"Impuesto al Activo.

ESTADO DE
JUSTICIA
MAYO 1996

"b) En estrecha relación con la anterior, dice
"también que opera la causa prevista en el artículo
"73, fracción XII, del ordenamiento en consulta,
"porque si las empresas demandantes se ubicaron
"por primera vez bajo los supuestos de la Ley del
"Impuesto al Activo antes del diez de mayo de mil
"novecientos noventa y seis, resulta que desde ese
"primer acto de aplicación hasta la fecha en que
"promovieron la demanda transcurrió el término de
"quince días para presentarla.

"c) También propone la diversa causa de
"improcedencia prevista en la fracción V, del
"precepto legal invocado, alegando que las
"demandantes no demuestran estar bajo los



"supuestos de los artículos 5º, 5ºB, 9º y 12, de la
"Ley del Impuesto al Activo.

"La primer causa de improcedencia es infundada
"porque aun cuando las empresas quejasas
"vinieran pagando el impuesto al activo de las
"empresas antes de su última reforma que se
"publicó el diez de mayo de este año, lo cierto es
"que ese decreto modificó, entre otros, el artículo
"1º de la Ley del Impuesto al Activo, precepto que
"establece quiénes son sujetos de ese impuesto y
"si la parte quejosa demuestra ser sujeto de la
"obligación tributaria, con ello se genera su
"derecho para reclamar la inconstitucionalidad del
"sistema tributario propio que crea dicha ley,
"siendo aplicable la tesis jurisprudencial 210 de la
"Compilación 1995, Tomo I, que establece: "LEYES,
"CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO
"DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN
"SITUACIONES JURIDICAS IGUALES, AUN
"CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA
"POR EL PRIMERO DE AQUELLOS. Aun cuando la
"quejosa se hubiera sometido a las disposiciones
"que contemplaba la ley anterior y que tales
"disposiciones se recojan en la nueva ley
"reclamada, ello de ninguna manera puede implicar
"que la nueva ley resulte derivada de aquella que
"fue consentida, ya que, desde el punto de vista
"formal y material, son actos legislativos distintos."
"Por la misma razón es ineficaz la segunda causa
"de improcedencia.

"En efecto, si las empresas demandantes hicieron
 "pago provisional del impuesto mediante
 "declaración que presentaron ante el banco
 "autorizado el primero de julio de este año, es
 "claro que ese pago lo hicieron porque el artículo
 "primero reformado de la ley, los resujetó al
 "impuesto y entonces ese es el primer acto
 "concreto de aplicación de la reforma.

"Consecuentemente, si del legajo de pruebas se
 "advierde que el pago provisional del impuesto
 "combatido lo hicieron el primero de julio pasado y
 "presentaron la demanda el veintidós siguiente, es
 "claro que la promoción fue oportuna computando
 "el término de quince días a partir del primer acto
 "concreto de aplicación.

"La última causa de improcedencia que propone
 "esta autoridad también es ineficaz.

"Ciertamente, desde que la Ley del Impuesto al
 "Activo de las Empresas, denominada así en el
 "decreto promulgatorio de su origen, inició su vida
 "jurídica, creó un sistema tributario propio ya que
 "desde entonces sus preceptos establecieron los
 "sujetos, objeto, base gravable, tasa, forma y época
 "de pago de la contribución, de suerte que el
 "particular quedó obligado al pago del tributo
 "desde que se colocó en el hecho imponible o
 "hipótesis de causación prevista.

"El sistema tributario propio creado por la ley y las
 "siete reformas que también reclama el quejoso
 "vino funcionando desde el inicio de su vigencia

SUPREMA
 JUSTICIA D.
 ENLACE



"hasta el diez de mayo de este año, pues al día
"siguiente entró en vigor la última de esas
"reformas. Los elementos fundamentales del
"tributo estaban previstos en la ley y tales
"reformas, y así es como se integraba el sistema
"tributario propio. Sin embargo, en la última
"reforma se modificó entre otros el artículo primero
"para redefinir quiénes son sujetos del impuesto.
"Por ende, si la parte quejosa demostró ser sujeto,
"de nueva cuenta del tributo tiene entonces
"derecho de reclamar la inconstitucionalidad de
"cualquier precepto de la ley porque entre todos
"componen el sistema tributario propio.
"Las autoridades dependientes del Banco de
"México también proponen las siguientes causas
"de improcedencia:
"a) Que no probaron haberse colocado en las
"hipótesis de los artículos 20 y 20-BIS del Código
"Fiscal de la Federación.
"b) Que respecto de dichos preceptos existe
"extemporaneidad de la demanda porque debió
"presentarse dentro de los quince días siguientes a
"su primer acto concreto de aplicación.
"c) Que las empresas demandantes confiesan
"haber realizado diversos pagos del impuesto al
"activo, por lo que debe entenderse que hubo
"consentimiento.
"d) Que antes de acudir al juicio de amparo
"debieron agotar los medios ordinarios de defensa
"que establece el Código Fiscal de la Federación.

"Las primeras dos causas de improcedencia
 "resultan infundadas si se tiene en cuenta que los
 "artículos 20 y 20-BIS, del Código Fiscal de la
 "Federación fueron reclamados por la parte
 "quejosa en tanto que están integrados al sistema
 "de determinación de la base del impuesto al
 "activo, es decir, la ley que regula este tributo se
 "basa en los factores de actualización que se
 "obtienen a través del índice nacional de precios al
 "consumidor, previsto en dichos preceptos.

"Por tanto, al reclamar esos preceptos como parte
 "del sistema del impuesto al activo, la oportunidad
 "de su impugnación es la misma que la de la ley
 "que los integró a ella y que como parte de ella se
 "reclaman, lo que significa que si antes ya se vio
 "que fue oportuna la reclamación de dicha ley,
 "también lo es por lo que hace a los preceptos del
 "Código Fiscal de la Federación.

"La tercer causa ya quedó superada al haber
 "puesto de manifiesto la ineficacia de la correlativa
 "que propuso la autoridad hacendaria.

"La última debe seguir la suerte de las anteriores
 "porque lo que se reclama en este juicio es la
 "inconstitucionalidad de diversas normas jurídicas
 "de la materia fiscal con motivo de un acto
 "concreto de aplicación consistente en el pago
 "provisional del impuesto al activo correspondiente
 "al mes de mayo. De acuerdo con lo que dispone el
 "artículo 73, fracción XII, párrafo segundo, de la
 "Ley de Amparo, el quejoso tiene la posibilidad de



"elegir, si reclama la inconstitucionalidad de la ley
"con motivo de un acto concreto de aplicación, o
"bien se impugna la legalidad de éste mediante
"algún recurso. En el caso que se resuelve es
"evidente que decidió impugnar la ley y por ende
"no estaba obligado a agotar ningún recurso
"ordinario.

"Como no existen otras causas de improcedencia,
"en seguida se examinan los conceptos de
"violación.

"QUINTO. Por cuestión de método en la exposición,
"primero serán examinados los conceptos
"tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de
"los artículos 20 y 20-BIS del Código Fiscal de la
"Federación.

"Dice el quejoso que se viola la garantía de
"legalidad tributaria porque para determinar la base
"gravable del impuesto mediante la actualización
"del valor de varios de los activos que se señalan
"como objeto del impuesto, se debe acudir al
"índice nacional de precios previsto por los
"preceptos reclamados.

"El artículo 20, párrafo segundo, del Código Fiscal
"de la Federación, dice: "En los casos en que las
"leyes fiscales así lo establezcan a fin de
"determinar las contribuciones y sus accesorios,
"se aplicará el índice nacional de precios al
"consumidor, el cual será calculado por el Banco
"de México y se publicará en el Diario Oficial de la

"Federación dentro de los primeros diez días del
"mes siguiente al que corresponda."

"Y el artículo 20-BIS del mismo ordenamiento prevé
"las reglas a que debe sujetarse el aludido índice
"nacional de precios al consumidor.

"Pues bien, el tema ya fue examinado por el
"Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación y al respecto emitió la tesis de
"jurisprudencia 174 de la Compilación 1995, Tomo
"I, que establece: "INDICE NACIONAL DE PRECIOS
"AL CONSUMIDOR. EL ARTICULO 20-BIS DEL
"CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (VIGENTE A
"PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 1989), NO VIOLA EL
"PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL
"DISPONER QUE DEBERAN COTIZARSE PRECIOS
"DE PRODUCTOS CONFORME AL CATALOGO DE
"ACTIVIDADES ECONOMICAS ELABORADO POR
"EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA,
"GEOGRAFIA E INFORMATICA. El índice nacional
"de precios al consumidor a que se refiere el
"artículo 20-BIS del Código Fiscal de la Federación
"y que calcula el Banco de México, deberá
"sujetarse a las reglas que el propio precepto
"establece entre las que, en su fracción II, dispone
"que deberán cotizarse los precios
"correspondientes a cuando menos dos mil
"productos y servicios específicos agrupados en
"doscientos cincuenta conceptos de consumo, los
"cuales abarcarán, al menos, treinta y cinco ramas
"de los sectores agrícola, ganadero, industrial y de



"servicios, conforme al catálogo de actividades
"económicas elaborado por el Instituto Nacional de
"Estadística, Geografía e Informática. Esta
"disposición sólo prevé que los precios de los
"productos que deberán cotizarse, de las diversas
"ramas que señala, se tomarán del catálogo que
"emite el citado Instituto, pero jamás que tales
"precios, productos y servicios los elabore el
"Instituto supracitado."

"Por tanto, no puede considerarse que el impuesto
"al activo viole el principio de legalidad consagrado
"en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por el
"hecho de que se utilice tal índice para la
"determinación de la base del tributo por obtenerse
"a través del mismo los factores de actualización,
"siendo aplicable al respecto la tesis
"jurisprudencial 41 visible en la Compilación 1995,
"Tomo I, que establece: "ACTIVO DE LAS
"EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS ARTICULOS 2º Y
"3º DE LA LEY NO INFRINGEN EL PRINCIPIO DE
"LEGALIDAD TRIBUTARIA (INDICE NACIONAL DE
"PRECIOS AL CONSUMIDOR). De acuerdo con lo
"dispuesto por el artículo 2º de la Ley del Impuesto
"al Activo de las Empresas, para determinar éste
"debe aplicarse al valor del activo en el ejercicio la
"tasa del dos por ciento y en él se fijan además,
"las reglas para determinar la base gravable. La
"circunstancia de que, en los términos del artículo
"3º de la Ley del Impuesto al Activo de las
"Empresas, para determinar el valor de algunos

"bienes que conforman el activo y, por ende, la
 "base del impuesto, debe tomarse en cuenta el
 "factor de actualización a que se refiere la fracción
 "II del artículo 7º de la Ley del Impuesto sobre la
 "Renta, y que éste se determine con base en el
 "índice nacional de precios al consumidor, no da
 "lugar a considerar que existe incertidumbre
 "respecto de la base del impuesto. Lo anterior
 "porque la obtención del índice nacional de precios
 "al consumidor constituye un indicador que refleja
 "las variaciones en el valor de la moneda y su
 "determinación se encomienda a un órgano
 "descentralizado que realiza una función técnica
 "con el propósito de contar con un mecanismo que
 "permita conocer la magnitud de los cambios
 "económicos derivados del proceso inflacionario.
 "Para determinar este índice se parte de la base de
 "que el valor de los bienes y operaciones se mide
 "por unidades monetarias y por esa razón, cuando
 "la economía sufre un proceso inflacionario, la
 "moneda tiene variaciones en su poder adquisitivo,
 "lo que da lugar a que la contabilidad arroje
 "información inexacta sobre la situación financiera
 "de una negociación, que es preciso actualizar o
 "reexpresar para adecuar los valores contables y
 "los estados financieros al que realmente les
 "corresponden. Uno de los procedimientos para
 "calcular la variación mencionada, es el
 "consistente en elaborar una media estadística,
 "que exprese el cambio porcentual de los precios



de un conjunto preestablecido de bienes, en
"lugares y momentos determinados, que es lo que
"se conoce como índice nacional de precios al
"consumidor. Por tanto, puede señalarse que se
"trata de un elemento que se determina con base
"en normas técnicas y no con el fin de fijar el
"monto de uno o varios impuestos. Por otra parte,
"la remisión que se hace en la Ley al índice
"nacional de precios al consumidor, no significa
"que el Banco de México realice una función
"legislativa, ni que con ello quede en sus manos el
"establecimiento de uno de los elementos
"esenciales del tributo, ya que éste órgano se limita
"a calcular un elemento que el legislador estimó
"necesario utilizar para determinar el monto del
"impuesto, con base en una apreciación real del
"valor de los bienes y operaciones que se toman
"como referencia, para conocer la capacidad
"contributiva de los sujetos pasivos, además de
"que se evita la posibilidad de hacer constantes
"reformas a la ley, para el solo efecto de hacer los
"ajustes que imponen las variaciones del poder
"adquisitivo de la moneda. Por ende, al remitir la
"ley al índice citado para determinar el factor de
"actualización, no se da lugar a la incertidumbre
"respecto del monto de la base del impuesto al
"activo de las empresas, puesto que no se deja en
"manos de la autoridad exactora su cálculo, ni su
"establecimiento tiene como única finalidad la de
"fijar el monto de los impuestos. Además, la

"exigencia de que se consignent en la ley los
 "elementos necesarios para conocer la medida en
 "que debe contribuirse para los gastos públicos, no
 "se incumple por el hecho de que alguno de ellos
 "sea variable y que, para su determinación, el
 "propio legislador ordene que se atienda a un dato
 "que debe calcularse en forma periódica por un
 "organismo descentralizado especializado."

"Consecuentemente, se debe negar el amparo por
 "lo que hace a los artículos 20, párrafo segundo y
 "20-BIS, del Código Fiscal de la Federación.

"SEXTO. En el concepto de violación que la
 "quejosa identifica como c.1, dice que el artículo 5º,
 "primer y segundo párrafos de la Ley del Impuesto
 "al Activo, rompe el principio de equidad porque
 "permite en unos casos la deducción de deudas y
 "la prohíbe en otros, a pesar de tratarse de pasivos
 "de la misma naturaleza, lo que propicia que
 "contribuyentes que se encuentran en la misma
 "situación jurídica ante la ley sean colocados en
 "situación desigual.

"Como se dijo, el tema versa sobre el principio de
 "equidad tributaria y al respecto conviene precisar,
 "desde luego, que basta que un derecho
 "establecido en la ley impositiva no pueda ser
 "ejercido por todos los contribuyentes, aunque
 "éstos se coloquen en igual situación, para que
 "pueda darse la posibilidad de inequidad de la ley
 "tributaria.



Corroborar este aserto la tesis ejecutoria visible en "el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Agosto de 1995, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESION DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORIAS DE CONTRIBUYENTES. El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, constitucional, y que exige el debido respeto al principio de igualdad, que se traduce en dar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, no requiere como presupuesto para su posible transgresión el que la norma legal relativa establezca diversas categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta con que establezca un derecho que no pueda ser ejercido por todos los contribuyentes, sino sólo por aquéllos que se coloquen en la hipótesis que dé lugar a su ejercicio, o bien provean regímenes diversos, aunque éstos sean aplicables a todos los contribuyentes sin diferenciación, según la hipótesis legal en que se coloquen y puedan, incluso, ser aplicables a un mismo sujeto pasivo del impuesto, para que se dé la posibilidad de inequidad ya que tal diferenciación en los regímenes o el ejercicio del derecho sólo por algunos pueden ser, en sí mismos, violatorios de tal principio al ocasionar según la aplicación que

*"corresponda de los regímenes o el derecho, un
trato desigual a iguales o igual a desiguales."*

*"Ahora bien, el artículo 5º, párrafos primero y
segundo, de la Ley del Impuesto al Activo,
señalan:*

*""Artículo 5º. Los contribuyentes podrán deducir
del "valor del activo en el ejercicio, las deudas
contratadas con empresas residentes en el país o
con establecimientos permanentes ubicados en
México de residentes en el extranjero, siempre
que se trate de deudas no negociables. También
podrán deducirse las deudas negociables en tanto
no se le notifique al contribuyente la cesión del
crédito correspondiente a dichas deudas a favor
de una empresa de factoraje financiero, y aun
cuando no habiéndosele notificado la cesión, el
pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a
cualquier otra persona no contribuyente de este
impuesto.*

*"No son deducibles las deudas contratadas con el
sistema financiero o con su intermediación."*

*"Pues bien, el planteamiento ya fue examinado por
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y al respecto pronunció la ejecutoria
consultable en la misma fuente, que establece:
""ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL
ARTICULO 5º DE LA LEY NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 5º de la Ley
del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación del treinta y*



"uno de diciembre de mil novecientos ochenta y
"ocho, que autoriza a deducir el valor promedio de
"las deudas en moneda nacional concertadas con
"empresas residentes en México, no así las
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación, no infringe el principio de equidad
"que establece el artículo 31, fracción IV, de la
"Constitución Política de los Estados Unidos
"Mexicanos; ello, porque dicho precepto legal no
"establece diversas categorías de contribuyentes a
"efecto de que pudiera surtir el presupuesto
"necesario para sujetarlos a un tratamiento
"impositivo desigual, sino que sólo se limita a
"establecer regímenes distintos para diferentes
"clases de adeudos, todos los cuales pueden
"figurar, perfectamente, en el activo de un mismo
"causante. El principio de equidad tributaria
"asegura trato igual a sujetos iguales, mas no
"garantiza que todos los elementos patrimoniales
"de un contribuyente sean valorados de igual
"manera al integrar la base gravable del impuesto.
"Además, es razonable que se autorice la
"deducción de los adeudos en moneda nacional
"concertados con empresas residentes en México,
"ya que siendo éstas también causantes del
"impuesto, con dicha regla se evita gravar dos
"veces el mismo adeudo, como activo del deudor y
"como activo del acreedor, razón que no opera
"tratándose de los otros adeudos porque, de

"admitirse su deducción, ni el acreedor ni el deudor
"pagarían el impuesto por ese concepto."

"En lo que el quejoso identifica como concepto de
"violación b.7, cita en su beneficio la tesis
"ejecutoria que dice: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE
"LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA
"LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y
"EQUIDAD TRIBUTARIA. (REFORMAS Y
"ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
"DE LA FEDERACION DEL VEINTIOCHO DE
"DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
"NUEVE). De conformidad con lo establecido en el
"artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo de las
"Empresas los contribuyentes podrán acreditar
"contra el impuesto del ejercicio una cantidad
"equivalente al impuesto sobre la renta
"efectivamente pagado, lo que significa que si un
"contribuyente tiene ingresos o utilidades podrá
"realizar tal acreditamiento e inclusive, si los
"mismos llegan a la ganancia mínima presunta
"objeto del impuesto al activo, no verán
"incrementada su carga impositiva, mientras que
"aquellos que no tengan utilidades o resientan
"pérdidas soportarán la carga impositiva, pues no
"tendrán cantidad alguna que acreditar y la ley no
"prevé la posibilidad de desvirtuar la presunción de
"ganancia mínima de la cual parte como objeto del
"tributo. De lo anterior se infiere que el precepto
"legal citado viola los principios de
"proporcionalidad y equidad tributaria consagrados



en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues,
"consistiendo el primero de ellos, en que los
"causantes deben contribuir al gasto público en
"función de su respectiva capacidad contributiva,
"el precepto legal citado hace recaer el pago del
"impuesto en quienes no tienen tal capacidad o la
"tienen en menor medida y libera de la carga
"impositiva a quienes tienen mayor capacidad
"tributaria, lo que da como consecuencia también
"la transgresión del principio de equidad que exige
"trato igual a los iguales y desigual a los
"desiguales, pues, de esa forma, se da trato igual a
"los desiguales y desigual a los iguales."

"Ahora bien, los criterios que se han invocado
"revelan la inconstitucionalidad de la ley que
"establece el tributo porque quebranta el principio
"de equidad, por una parte, y el de
"proporcionalidad, por otra. Eso es suficiente para
"estimar que la declaratoria de inconstitucionalidad
"debe recaer sobre toda la ley, pues los vicios que
"se han puesto de manifiesto afectan a la totalidad
"del sistema tributario creado por ella, ya que amén
"de lo que dispongan los restantes preceptos no
"podrá superarse la inequidad y
"desproporcionalidad producida por los que aquí
"se vieron.

"Por ende, se estima también innecesario examinar
"el resto de los conceptos de violación, pues
"cualesquiera que fuera su resultado no variaría la
"conclusión alcanzada.

"En esas condiciones se debe conceder el amparo solicitado contra la Ley del Impuesto al Activo, sus reformas que aquí se reclamaron, el Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo y sus reformas, porque también son inconstitucionales al reglamentar una ley que lo es."

TERCERO. La parte quejosa expresó como agravios los siguientes:

"1. Es incorrecto el sobreseimiento decretado en el juicio respecto de los actos reclamados precisados en el apartado 3 del inciso d) del capítulo especial de la demanda de amparo, que imputamos al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público y más específicamente, los hechos consistir en "La aplicación que bajo cualquier concepto, tanto de hecho como de derecho, hizo pretenda o haya de hacer, en el ámbito de su competencia, mediante cualquier acto, orden, acuerdo, circular o instrucción verbal o escrita, en contra de la parte peticionaria de garantías, de cualquiera de ellos o de todos los ordenamientos reclamados en la especie. En concreto reclamo la expedición de las formas oficiales necesarias para declarar y en su caso enterar el impuesto al activo reclamado, así como, en su caso, el cobro a la parte que represento, la percepción, la aplicación y administración de los recursos tributarios relativos", el cual se decretó dentro del tercer



considerando de la sentencia recurrida, porque
"además de que el A quo omitió expresar motivos
"específicos para dejar de tener por reconocidas
"dichas aplicación y expedición, el caso es que tal
"y como reza el principio general de derecho
"consagrado por el artículo 86 del Código Federal
"de Procedimientos Civiles, de aplicación
"supletoria, el derecho no es objeto de prueba,
"siendo real que tanto los ordenamientos legales y
"reglamentarios reclamados, como la expedición
"de las formas oficiales también impugnadas,
"fueron determinadas, establecidas y oficialmente
"publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y
"la emisión de éstas es imputable al referido
"secretario del despacho quien, en términos de lo
"dispuesto por el artículo 33, Frac. I, inciso c), del
"Código Fiscal de la Federación, responde por la
"expedición de la Resolución que establece reglas
"de carácter general aplicables a los impuestos y
"derechos federales, excepto a los relacionados
"con el comercio exterior, oficialmente publicada el
"29 de marzo de 1996", cuyo anexo 1 recoge, en
"términos de la Regla 68, los formatos oficiales que
"nos interesan, lo cual es suficiente para desvirtuar
"su respectiva negación.

"1.1. También resulta incorrecto el sobreseimiento
"decretado en el juicio respecto de los actos
"reclamados precisados en el apartado 1 del inciso
"e) del capítulo especial de la demanda de amparo
"que imputamos a los funcionarios del Banco de

"México que han determinado y publicado los
 "índices nacionales de precios al consumidor,
 "quienes son los C.C. Director General de
 "Investigación Económica, Director de Información
 "Económica, Director de Disposiciones de Banca
 "Central, Coordinador de Disposiciones de Banca
 "Central y Gerente de Investigación Económica del
 "Banco, y de estos mismos, y más específicamente
 "los hechos consistir en "La totalidad de los actos
 "expedidos antes y por expedir, a partir del 1º de
 "enero de 1990, a propósito de lo dispuesto por los
 "artículos 20 y 20-BIS del Código Fiscal de la
 "Federación; concretamente, la emisión de los
 "acuerdos o circulares que determinaron,
 "determinen y determinarán los índices nacionales
 "de precios al consumidor mensuales, así como su
 "publicación oficial, con efectos fiscales" el cual se
 "decretó dentro del tercer considerando de la
 "sentencia recurrida, porque además de que el A
 "quo omitió expresar motivos específicos para
 "dejar de tener por reconocidas dichas aplicación y
 "expedición, el caso es que tal y como reza el
 "principio general de derecho consagrado por el
 "artículo 86 del Código Federal de Procedimientos
 "Civiles, de aplicación supletoria, el derecho no es
 "objeto de prueba, siendo real que los actos
 "reclamados a las anteriormente descritas
 "autoridades se encuentran debidamente
 "publicados, y de manera periódica, en el Diario
 "Oficial de la Federación, cuya emisión es



"imputable al referido representante del Banco de
"México, lo cual es suficiente para desvirtuar su
"respectiva negación.

"1.2. Los mismos argumentos son aplicables al
"sobreseimiento decretado en el juicio respecto de
"los actos reclamados precisados en el apartado 1
"del inciso f) del capítulo especial de la demanda
"de amparo que imputamos al C. Administrador
"Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal,
"dependiente de la Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público, y más específicamente los
"hechos consistir en "La aplicación que hizo de los
"ordenamientos que se reclaman, por primera vez,
"en contra de la parte quejosa..." el cual se decretó
"dentro del tercer considerando de la sentencia
"recurrida, porque además de que el A quo también
"omitió expresar motivos específicos para dejar de
"tener por reconocida dicha aplicación y
"expedición, el caso es que tal y como reza el
"multicitado principio general de derecho
"consagrado por el artículo 86 del Código Federal
"de Procedimientos Civiles, de aplicación
"supletoria, el derecho no es objeto de prueba,
"siendo real que los actos reclamados a la
"anteriormente descrita autoridad se encuentran
"debidamente publicados, y de manera periódica,
"en el Diario Oficial de la Federación, y cuya
"aplicación es imputable al referido Administrador
"Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal,
"dependiente de la Secretaría del Ramo

"correspondiente, lo cual es suficiente para
"desvirtuar su respectiva negación.

"En tal virtud, ha lugar a que el honorable ad quem
"levante el sobreseimiento impugnado, para todos
"los efectos legales a que haya lugar.

"2. Ahora bien, bajo las circunstancias que
"enseguida se expondrán y dicho sea con todo
"respeto y consideración para el A quo, cuya
"honorabilidad, buena fe, empeño y capacidad
"técnica se encuentran para nosotros fuera de toda
"duda, la sentencia combatida puede estimarse
"incongruente, insuficiente e inexhaustiva, debido
"a que el Juez de Distrito sólo produjo un estudio
"parcial de los conceptos de violación
"argumentados dentro del capítulo correspondiente
"de la demanda inicial de amparo y, por tal motivo
"solicito al honorable ad quem que, en caso de
"considerarlo así prudente, estudie los demás
"conceptos de violación omitidos.

"En efecto, con violación de lo dispuesto por los
"artículos 76 y 77 a 79, de la Ley de Amparo,
"considerados en relación con lo dispuesto por los
"diversos numerales 222, 348, 349 y 352 del Código
"Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación
"supletoria, el inferior dejó de analizar, contestar y
"resolver aspectos torales de la litis contestatio
"que las quejasas propusieron a lo largo de su
"demanda inicial de amparo, dejando
"absolutamente sin abordar una parte considerable
"de la demanda, en tanto que para concedernos el



amparo y protección de la Justicia Federal a él
"bastó el referirse a "el concepto de violación que
"la quejosa identifica como c.1. (que en realidad es
"el correspondiente al inciso c.1. del segundo
"concepto de violación esgrimido en la demanda
"inicial de garantías) dice que el artículo 5º.primer y
"segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al
"Activo, rompe el principio de equidad..." y "En lo
"que el quejoso identifica como concepto de
"violación b.7..." (que en realidad es el
"correspondiente al inciso b.7 del tercer concepto
"de violación contenido en el escrito inicial de la
"demanda de amparo), tal y como lo dejó
"claramente precisado dentro del propio sexto
"considerando de su sentencia. Nota: Los
"paréntesis son nuestros.
"Ad cautelam entonces, como ya se indicaba, y tan
"solo en la medida en que el fallo de primera
"instancia resultare impugnado por las
"responsables, opongo a la sentencia recurrida la
"insuficiencia e incongruencia que resulta
"ostensible, en tanto que al honorable A quo omitió
"resolver y pronunciarse acerca de todos los
"conceptos de violación de nuestra demanda,
"distintos a aquéllos a los cuales él aludió en forma
"precisa.
"3. Ahora bien, por cuanto hace al análisis y
"resolución adoptados respecto de los propios
"conceptos de violación que como atendidos se
"mencionan, también es cierto que fue dejada sin

"atención ni referencia judicial explícita la
 "mayor parte de los argumentos defensivos
 "contenidos dentro de ellos, en cuyos términos y
 "bajo su propia aproximación las quejas
 "demostraron, racionalmente y con amplitud
 "temática, bajo diversos enfoques, las violaciones
 "constitucionales que en su perjuicio irrogan tanto
 "el acto legislativo cuanto el reglamentario
 "reclamado, siendo el caso que su señoría, el
 "inferior, solamente estudió, y declaró fundados,
 "los argumentos expuestos en el sentido de que
 "los artículos 5º, primer y segundo párrafos y 9º de
 "la Ley del Impuesto al Activo resultan,
 "respectivamente, violatorios de las garantías de
 "equidad y proporcionalidad tributarias, y de las
 "cuales se contrae el artículo 31, fracción IV de la
 "Constitución Política de los Estados Unidos
 "Mexicanos.

"El caso es que su señoría, el inferior, arribó a la
 "conclusión amparatoria definitiva que decretó, por
 "un camino racional muy directo y breve, sin
 "referirse a todo lo dentro del tópico sujeto a
 "análisis fue abordado por las quejas y esto
 "podría llegar a estimarse como incongruente. Así,
 "además, el Juez de Distrito dejó de lado el análisis
 "de todas las restantes consideraciones que
 "fueron por nosotros vertidas en los conceptos de
 "marras, con las cuales se robustece notablemente
 "el criterio de inconstitucionalidad expresado,
 "mismo que, sin gozar del estudio de aquéllas,



podría atacarse enjundiosamente por nuestras
"contrarias para aparentar una debilidad técnica y
"conceptual que, aun cuando no es real, al menos
"en alguna medida podría llegar a confundir e
"inclinarse adversamente a nuestra causa al
"honorable ad quem del presente conocimiento.

"Bajo las descritas circunstancias, como nada dijo
"su señoría, el inferior, muy probablemente por
"estimarlo innecesario, acerca de todos los otros
"temas por ella no abordados, aún dentro del
"contexto de violación de las mismas garantías de
"equidad y de proporcionalidad fiscales citadas por
"las quejas, y ello no obstante, como la
"sentencia aduce haber estudiado y declarado
"integralmente fundados los apartados C y B de los
"conceptos de violación 2º y 3º de nuestra
"demanda, las responsables podrían aducir que
"dogmáticamente éste se estimó fundado en las
"partes no expresamente razonadas para ello, y
"sostener que, en realidad, dichos tácitos
"argumentos son infundados, propiciando la
"indefensión de las quejas.

"4. Finalmente, el caso es que la incongruencia
"combatida lesiona gravemente la seguridad
"jurídica de las quejas, porque en tanto dentro
"de la presente causa están enfrentando la
"legislación reclamada a propósito de los primeros
"actos aplicativos que de ella, para efectos del
"amparo, resintieron, y prevalece la vigencia de la
"jurisprudencia plenaria que estipula que el amparo

"indirecto contra leyes sólo procede en tal virtud, el
 "hecho de que sólo se estudien algunos pocos
 "conceptos de violación y con base en ellos se nos
 "ampare, en lugar de estudiar todos y,
 "precisamente, con base en todos los que se
 "declaren fundados a ampararnos y, en su caso,
 "negarnos la protección constitucional respecto de
 "los que el inferior estimase infundados, nos deja
 "indefensos, en la medida, primero, de que si los
 "actos reclamados se modificaren en lo futuro en
 "tratándose de los aspectos ahora estimados
 "fundados, las quejas quedarían desde luego
 "privadas de la protección constitucional; y, por
 "otro lado, no han podido defenderse en revisión
 "contra cualquier posible y eludida negativa, nada
 "de lo cual es correcto y debe, en consecuencia,
 "remediarse por el honorable ad quem.

"5. Consecuentemente, sólo bajo los indicados
 "parámetros y para protección de las quejas, se
 "hace necesario pedir, al honorable ad quem, que
 "se sirva atender todos los aspectos de los
 "conceptos de violación cuyo estudio fue
 "soslayado por el honorable Juez de Distrito."

CUARTO. En el recurso de revisión interpuesto a nombre
 del Presidente de la República se hacen valer los siguientes
 agravios:

"PRIMERO: Violación a lo dispuesto por los
 "artículos 77, fracción II, en relación con los



"diversos 73, fracciones XI y XII, y 74, fracción III,
"de la Ley de Amparo, por inobservancia de los
"mismos, en relación con los diversos 95, 96, 199 y
"200, del Código Federal de Procedimientos
"Civiles.

"El C. Juez A quo, en la sentencia impugnada
"causa agravio a la autoridad recurrente, toda vez
"que omitió decretar el sobreseimiento que se
"actualiza en el presente juicio, al considerar
"infundadamente que aun cuando el amparista
"antes de la reforma de la Ley del Impuesto al
"Activo publicada en el Diario Oficial de la
"Federación del 10 de mayo de 1996 venía pagando
"el impuesto, la modificación al artículo 1º de la Ley
"del Impuesto al Activo le genera el derecho para
"reclamar la Inconstitucionalidad del sistema
"tributario que crea dicha ley, porque a su juicio se
"le está resujetando al impuesto.

"Sin embargo, tal argumento resulta a todas luces
"infundado ya que contrariamente a lo
"manifestado por el A quo, el decreto impugnado
"no crea una nueva ley que modifique la situación
"jurídica del contribuyente frente a los supuestos
"de la norma, ya que como empresa legalmente
"constituida y por el objeto social que tiene posee
"activos, situación que lo sujeta al pago del
"impuesto de referencia, tan es así que la misma
"quejosa lo reconoce en su demanda de garantías
"al manifestar que hasta antes de la reforma del 10
"de mayo de 1996, venía pagando el impuesto,

"manifestación que nos permite considerar
"válidamente que el amparista consintió la
"constitucionalidad de la Ley del Impuesto al
"Activo y las reformas de que ha sido objeto hasta
"antes de la fecha mencionada.

"Lo anterior es así en razón de que tratándose del
"juicio de amparo contra leyes, existen dos
"momentos para promover el juicio de garantías:
"desde que entran en vigor (tratándose de leyes
"autoaplicativas) o bien cuando se aplican por
"primera vez (cuando son heteroaplicativas) o
"cuando no se promovió juicio de amparo contra
"una ley autoaplicativa con motivo de su entrada
"en vigor). En el segundo supuesto (amparo
"promovido con motivo del primer ^{JUSTICIA D.} ~~acto~~ de
"aplicación) existe la posibilidad de que el acto de
"aplicación no emane de la autoridad sino de un
"tercero o del propio particular, como sucedió en el
"presente caso, donde los contribuyentes se
"autoaplicaron la ley reclamada al efectuar sus
"correspondientes pagos del impuesto al activo,
"con anterioridad a las declaraciones que ellas
"pretenden hacer consistir en el primer acto de
"aplicación.

"En el caso sujeto a estudio, es evidente que el
"sobreseimiento planteado y que el juzgado
"desestima se actualiza, toda vez que la quejosa
"impugna la Ley del Impuesto al Activo no como
"autoaplicativa sino en su carácter de
"heteroaplicativa, esto es, con motivo de un acto



concreto de aplicación, el cual lo hizo consistir en "la declaración provisional presentada el 17 de "junio de 1996, correspondiente a mayo del mismo "año, la cual no constituye el primer acto de "aplicación del ordenamiento legal reclamado para "que pueda proceder el juicio de amparo contra "leyes.

"En efecto, tratándose del juicio de amparo contra "leyes heteroaplicativas, es necesario que la "demanda se enderece en contra del primer acto de "aplicación del ordenamiento tachado de "inconstitucional, acto que en el presente caso no "resulta ser la declaración provisional presentada "el 17 de junio de 1996, ya que la propia "demandante reconoce en su demanda de "garantías, específicamente en la página 11, cuarto "párrafo, que "...fue contribuyente del mismo "tributo antes, hasta el 10 de mayo de 1996, bajo la "anterior estructura de la ley y del reglamento de la "materia..." lo cual implica que la quejosa es "contribuyente del impuesto al activo, esto es, se "sujeta a sus disposiciones, consinténdola, "manifestación que hace prueba plena en su "contra, de conformidad con lo dispuesto por los "artículos 199 y 200 del Código Federal de "Procedimientos Civiles.

"Dicho de otra manera, de la confesión que hace la "quejosa en su demanda de amparo, confesión que "hace prueba plena en su contra en los términos de "los artículos que han quedado invocados, se

"desprende que ha venido pagando el impuesto en
 "comento, por lo que es de concluirse que en la
 "especie el juez del conocimiento debió sobreseer
 "en el juicio, en virtud de que operó el
 "consentimiento por parte de la amparista de las
 "normas que pretende combatir y, en tal virtud, si
 "consideraba inconstitucionales dichos
 "ordenamientos, debió haberlos impugnado en la
 "vía de garantías dentro de los 30 días siguientes a
 "la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al
 "Activo, en tanto que ésta constituye una ley
 "autoaplicativa, o bien, dentro de los 15 días
 "siguientes al primer acto de aplicación de la
 "propia ley y su reglamento lo cual según su propio
 "reconocimiento expreso no hizo.

SUPREMI
 JUSTICIA I
 SECRETARÍA DE

"Consecuentemente, al no haber reclamado dichos
 "actos en los términos de ley antes señalados, a la
 "fecha en que presentó la demanda que inició el
 "juicio que nos ocupa, resulta extemporánea su
 "impugnación para efectos del juicio de garantías,
 "actualizándose así la causal de sobreseimiento
 "que se hace valer.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Informe de
 "Labores de 1989, Primera Parte, Tribunal Pleno,
 "páginas 586 y 587 del tenor literal siguiente:

"AMPARO CONTRA LEYES
 "HETEROAPLICATIVAS. PROCEDE CON MOTIVO
 "DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el
 "segundo supuesto que distingue la norma
 "contenida en la fracción VI, del artículo 73, de la



"Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes
"heteroaplicativas, cabe establecer que no
"cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley
"puede dar pauta para que el particular impugne su
"constitucionalidad, puesto que la citada
"disposición, interpretada en forma relacionada
"con lo que se prevé en los párrafos segundo y
"tercero de la fracción XII del mismo precepto,
"permite concluir que tal "acto posterior" de
"ejecución de la ley se refiere sólo al primero y no
"al segundo o subsecuentes actos de aplicación.
"Un análisis congruente y sistemático de la
"indicada fracción XII, lleva a sostener que dicha
"fracción está concebida de manera tal que cuando
"en juicio de amparo se impugna una ley con
"motivo de su aplicación concreta, es una
"exigencia ineludible que la acción constitucional
"que en contra de ella se ejercite se haga,
"precisamente, con motivo de su primer acto
"específico de individualización y no del segundo o
"ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo
"deriva de lo dispuesto en el segundo párrafo, sino
"especialmente de lo que estatuye en el tercero, en
"el cual de un modo manifiesto se aprecia que las
"opciones que ahí se establecen para poder
"combatir la ley en juicio de garantías están
"referidas y parten del propio acto de aplicación de
"la ley, esto es que el agraviado puede interponer
"amparo en contra de la ley al través de su primer
"acto de ejecución, o bien en contra de la

"resolución que recaiga al recurso o medio legal de
 "defensa interpuesto en contra de dicho acto. La
 "finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo
 "en la disposición en cita radica, precisamente, en
 "que la constitucionalidad de la ley se examine y
 "juzgue una sola vez y no tantas veces como actos
 "de aplicación que de dicha ley existan; esto,
 "aparte de evitar la litispendencia, y asegurar el
 "respeto al principio de cosa juzgada, asimismo
 "evita la contradicción de sentencias sobre el
 "particular. Consecuentemente, si el particular
 "promueve juicio constitucional reclamando una
 "ley heteroaplicativa pero no con motivo de su
 "primer acto de aplicación, sino del segundo o
 "subsecuentes actos de ejecución, el juicio de
 "amparo en tal hipótesis será improcedente.
 "Es aplicable al respecto la tesis de la Tercera Sala,
 "visible en las páginas 243-244 del Informe de
 "Labores de 1989, que a la letra dice:

"TERMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA DE
 "AMPARO EN CONTRA DE UNA LEY FEDERAL DE
 "CARACTER FISCAL CON MOTIVO DE UN ACTO
 "CONCRETO DE APLICACION. DEBE
 "COMPUTARSE DE ACUERDO CON EL CODIGO
 "FISCAL DE LA FEDERACION A PARTIR DEL DIA
 "SIGUIENTE EN QUE LA NOTIFICACION SURTIO
 "EFECTOS. De conformidad con lo dispuesto por el
 "artículo 21 de la Ley de Amparo, el término para
 "interponer la demanda de garantías será de quince
 "días, el cual se contará desde el día siguiente al en



"que haya surtido efectos, conforme a la ley del
"acto, la notificación al quejoso de la resolución o
"acuerdo que reclame. En esa virtud si se impugna
"una ley fiscal de carácter federal con motivo de un
"acto concreto de aplicación, la notificación de éste
"debe regirse por lo previsto en el Código Fiscal de
"la Federación, por ser el ordenamiento que
"contiene las disposiciones de carácter general
"aplicables en todo lo no previsto por las leyes
"fiscales respectivas; ordenamiento que en su
"artículo 135 establece que las notificaciones
"surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél
"en que fueron hechas, por lo que el término para
"la interposición de la demanda debe computarse a
"partir del día hábil siguiente a aquél en que la
"notificación surtió sus efectos."

"A mayor abundamiento, es importante aclarar que
"las reformas a la Ley del Impuesto al Activo no
"genera el interés jurídico de la quejosa para
"impugnar la ley en relación con los artículos que
"no fueron reformados, ya que no entró en vigor
"una nueva Ley del Impuesto al Activo, sino que es
"la misma que existía antes de la fecha citada, con
"la única variante de que sufrió reformas, que no
"por ese hecho la convirtieron en un nuevo
"ordenamiento legal.

"Aún más, resulta infundada la afirmación del A
"quo en la que considera que por el hecho de que
"la Ley del Impuesto al Activo se reformó, la
"quejosa tiene derecho a reclamar los mismos

"dispositivos de la ley que con anterioridad
 "consintió, porque a su juicio la está resujetando a
 "sus supuestos y enterar el tributo
 "correspondiente, pues contrario a lo manifestado
 "por el juzgador, la quejosa sólo tenía interés
 "jurídico para reclamar los dispositivos legales que
 "fueron reformados el 10 de mayo de 1996, en el
 "Diario Oficial de la Federación, siempre que éstos
 "lesionen su esfera jurídica, mas no toda la
 "mecánica de causación fue consentida por ellas al
 "enterar el tributo respectivo.

"En este sentido, si determinado artículo de la Ley
 "del Impuesto al Activo, reformado a partir del 10
 "de mayo de 1996, causaba un agravio a la quejosa,
 "ésta debió impugnar los mismos y no otros
 "dispositivos que les fueron aplicados con
 "anterioridad y que por ese mismo hecho fueron
 "consentidos por ellas.

"De tal manera que en el presente caso, el A quo
 "NO puede considerar que se actualiza el derecho
 "del quejoso para impugnar la inconstitucionalidad
 "de la ley cuando ésta sufre reformas, en virtud de
 "que en la especie, no se le está resujetando al
 "pago del impuesto, ya que pierde de vista que el
 "amparista ya era sujeto del impuesto y al
 "considerar que la reforma impugnada lo está
 "resujetando, el mismo juzgador está aceptando
 "que el amparista consintió la constitucionalidad
 "de la ley que impugna hasta antes de la reforma
 "del 10 de mayo.



"De lo manifestado se desprende lo infundado del
"argumento del juzgador, pues si bien es cierto, la
"declaración del 17 de junio de 1996, constituye el
"primer acto de aplicación de la reforma del 10 de
"mayo de 1996, también lo es que dicha reforma
"únicamente está modificando los artículos 1º y 5ºB
"de la Ley del IMPAC y no crea una nueva ley, que
"genere el interés jurídico de la amparista para
"impugnar los preceptos de la ley que no fueron
"objeto de la reforma.

"Por los argumentos hechos valer lo procedente es
"revocar la sentencia recurrida y sobreseer el
"presente juicio.

"SEGUNDO. Procede sobreseer en el presente
"juicio de garantías con fundamento en el artículo
"74, fracción III, en relación con el diverso 73,
"fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por falta
"de interés jurídico de la quejosa para reclamar la
"Inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley del
"Impuesto al Activo.

"En efecto, en los artículos en comento se
"establece que también son sujetos de la ley, las
"empresas que componen el sistema financiero y
"las personas que otorgan el uso o goce temporal
"de inmuebles a otras que realizan actividades
"empresariales y que no son deducibles las deudas
"contratadas con el sistema financiero o con su
"intermediación, supuestos en los cuales la
"quejosa no acredita encontrarse, ya que no
"demuestra que la reforma al artículo 1º de la ley, lo

"haya resujetado al impuesto como
 "infundadamente lo manifiesta el A quo, puesto que
 "la quejosa como persona moral desde antes de la
 "reforma del 10 de mayo de 1996, se encuentra
 "obligada al pago del impuesto respecto de sus
 "activos, incluyendo aquéllos que pudiera dar en
 "arrendamiento a otras personas morales con
 "actividad empresarial por lo que carece de interés
 "jurídico para impugnarlos.

"En efecto, a fin de encontrarse legitimados para
 "impugnar una norma legal no basta que la
 "querellante solamente manifieste la supuesta
 "inconstitucionalidad de la norma legal, debido a
 "que el juicio de amparo no es erga omnes, por lo
 "que debe ser tramitado por la persona que
 "resiente de manera personal y directa una
 "afectación en su esfera jurídica y que demuestre
 "que se encuentra dentro de los supuestos
 "previstos en ella. De tal suerte, en el presente
 "caso, la empresa quejosa no aportó ninguna
 "prueba mediante la cual acredite que la reforma a
 "la ley en comento la resujetó al impuesto, y por lo
 "tanto, no pueden legalmente controvertir la ley en
 "comento.

"Lo anterior en virtud de que el interés jurídico es
 "uno de los elementos de procedencia del amparo,
 "en el entendido de que el interés no es
 "simplemente un elemento subjetivo que pueda
 "revelar deseo, finalidad o intención, sino que debe
 "traducirse en situaciones o hechos subjetivos por



los cuales pueda causarse un detrimento en la esfera jurídica de la quejosa, reparable a través del juicio de garantías, de acuerdo con lo cual, al no afectar el artículo reclamado la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de no ubicarse ésta en sus supuestos, carece de interés jurídico para cuestionar su constitucionalidad, razón por la cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que textualmente establece:

"INTERES JURIDICO DEL QUEJOSO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. DEBE DEMOSTRARSE PLENAMENTE. Según los lineamientos constitucionales y del juicio de amparo que se refieren a los principios que norman el amparo contra leyes, no es suficiente la calidad de mexicanos y residentes de un Municipio o Estado para comprobar el interés jurídico en impugnar una ley y tampoco basta que los quejosos manifiesten poseer determinada calidad, sino que debe demostrarse plenamente el interés jurídico por parte de aquéllos por medio de las pruebas que admite la legislación de la materia; y si afirman que son profesionistas y que por ello se encuentran obligados a pagar un impuesto establecido en la ley que combaten, deben acreditar plenamente que se dedican a esa actividad y no por la circunstancia de que las autoridades no se refieren a dicha personalidad se

"estima cierta la afirmación de los quejosos,
"máxime si las autoridades aplicadoras negaron
"los actos reclamados en la forma en que fueron
"planteados."

"De la misma manera y con fundamento en la
"causal de improcedencia invocada, procede
"sobreser respecto del artículo 1º de la Ley del
"Impuesto al Activo, respecto de la adición que se
"hizo a dicho ordenamiento legal por ley publicada
"en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo
"de 1996, en virtud de que hace derivar la
"inconstitucionalidad de dicho precepto con
"fundamento en los sujetos obligados que incluye,
"sin embargo, carece de interés jurídico para
"impugnarlo, pues como ya se explicó, no
"demuestra por ningún medio de prueba que dicho
"precepto lesiona su esfera jurídica, razón por la
"cual procede sobreser con fundamento en la
"causal de improcedencia que se hace valer.

"TERCERO. Violación a lo dispuesto por el artículo
"77 de la Ley de Amparo y 5º de la Ley del
"Impuesto al Activo, pues éste no infringe el
"artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Tomando en cuenta que el A quo considera que el
"primer acto de aplicación de la ley se dio con las
"reformas del 10 de mayo de 1996, cabe aclarar en
"principio, que los conceptos de violación que
"esgrime la quejosa en su demanda van
"encaminados a cuestionar el artículo 5º de la Ley
"del Impuesto al Activo, cuyo texto no fue objeto de



la reforma mencionada, toda vez que como ya se mencionó, la citada reforma consiste en colocar como sujeto obligado al pago del impuesto a las empresas que integran el sistema financiero y a las personas físicas o morales que otorguen el uso o goce temporal de inmuebles a otras con actividad empresarial y la forma de cómo deben de cumplir dicha obligación.

Sin embargo, el A quo pasa por alto que el contenido del artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, se encuentra vigente desde antes de la reforma impugnada y además declara la inconstitucionalidad de toda ley en comento, sin tomar en cuenta que la impugnación de la ley es en su carácter heteroaplicativa y que la quejosa ya la consintió. No obstante ello se manifiesta que:

Resulta infundado el argumento del A quo en el sentido de que el artículo 5º, primero y segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Activo, rompe con el principio de equidad, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Fundamental, porque permite en unos casos la deducción de deudas y la prohíbe en otros a pesar de tratarse de pasivos de la misma naturaleza, lo cual resulta erróneo en atención a las siguientes consideraciones legales:

Al respecto se manifiesta que el hecho de que en el primer párrafo del artículo 5º de la ley se autorice deducir del valor del activo las deudas contratadas con empresas residentes en el país cuando se trate de deudas negociables y en el

"segundo se refiera a la exclusión de partidas
 "deducibles para efectos del impuesto al activo, no
 "implica que el ordenamiento legal reclamado, sea
 "violatorio del principio de equidad, lo anterior
 "tiene plena justificación y no atiende a la calidad
 "de sus acreedores.

"Sobre este punto, cabe mencionar que el
 "tratamiento diferencial contenido en la Ley del
 "IMPAC, no se establece en función del tipo de
 "contribuyentes, sino del tipo de deudas. Este
 "criterio fue expuesto por la propia SCJN al
 "analizar la constitucionalidad del artículo 5º en
 "estudio, bajo la tesis jurisprudencial titulada
 "'ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL EL
 "ARTICULO 5º DE LA LEY NO VIOLA EL PRINCIPIO
 "DE EQUIDAD TRIBUTARIA", al señalar, en su parte
 "conducente, que "dicho precepto legal no
 "establece diversas categorías de contribuyentes a
 "efecto de que pudiera surtirse el presupuesto
 "necesario para sujetarlos a un tratamiento
 "impositivo desigual, sino que sólo se limita a
 "establecer regímenes distintos para diferentes
 "clases de adeudos, todos los cuales pueden
 "figurar, perfectamente, en el activo de un mismo
 "causante. El principio de equidad tributaria
 "asegura trato igual a sujetos iguales, más no
 "garantiza que todos los elementos patrimoniales
 "de un contribuyente sean valorados de igual
 "manera al integrar la base gravable del impuesto.
 "Además, es razonable que se autorice la



deducción de los adeudos en moneda nacional
"con empresas residentes en México, ya que
"siendo éstas también causantes del impuesto, con
"dicha regla se evita gravar dos veces el mismo
"adeudo, como activo del deudor y como activo de
"acreedor, razón que no opera tratándose de los
"otros adeudos porque, de admitirse su deducción,
"ni el acreedor ni el deudor pagarían el impuesto
"por ese concepto."

"CUARTO. Por otra parte el A quo pierde de vista
"un criterio, que no ha formado jurisprudencia
"para declarar la inconstitucionalidad de la ley
"reclamada, de tal manera que hace un análisis de
"fondo sobre la inconstitucionalidad de los
"artículos 5º y 9º de la Ley del Impuesto al Activo.
"Lo anterior, en razón de que no debe perderse de
"vista que el artículo 5º de la Ley del Impuesto al
"Activo fue combatida, en su mayoría, porque las
"empresas que constituyen el sistema financiero
"no estaban comprendidas como sujetos obligados
"al pago del impuesto al activo, situación que el
"legislador contempló a través de la reforma.

"Ahora bien, aun cuando el A quo cita de manera
"equivoca la tesis referida a la constitucionalidad
"del artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo,
"cabe mencionar que dicho criterio fue emitido por
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en él
"sostiene que la disposición impugnada sólo se
"limita a establecer regímenes distintos para
"diferentes clases de adeudos, todos los cuales

"pueden figurar en el activo de un mismo causante,
 "razón por la cual no puede considerarse que los
 "contribuyentes que tengan adeudos de la misma
 "naturaleza sean tratados de distinta manera, y
 "menos aún que aquéllos que se ubican en una
 "situación diferente sean tratados igual.

"De tal forma que el hecho de que el artículo
 "cuestionado prevea la forma en que los
 "contribuyentes pueden acreditar contra el importe
 "del impuesto del ejercicio, una cantidad
 "equivalente al impuesto sobre la renta que le
 "correspondió pagar en el mismo ejercicio, no
 "implica que no se esté tomando en cuenta la
 "capacidad contributiva de los causantes que se
 "encuentren en la misma hipótesis de causación,
 "pues el que unos contribuyentes hayan obtenido
 "utilidad y otros pérdida, no hace que varíe la base
 "del impuesto, ni que el tratamiento que les de la
 "ley sea diferente respecto de aquéllos que se
 "ubiquen en el mismo supuesto.

"Por ello, es inexacto que el artículo 9º de la Ley de
 "Impuesto al Activo dé un trato desigual a los
 "contribuyentes de la misma, en cuanto a que los
 "sujetos de dicha contribución, por los activos que
 "tengan, deben cubrirla, ajustándose a los
 "procedimientos establecidos por los diversos
 "dispositivos que integran tal ordenamiento legal,
 "lo cual es aplicable a todos los que se encuentran
 "en los mismos supuestos fácticos establecidos
 "por la ley.



"En ese orden de ideas y contrariamente a lo
"aseverado en la sentencia que se recurre, no
"obstante la serie de razonamientos económicos y
"financieros que giran en torno al diseño de un
"tributo, el mero hecho de la detentación de activos
"se traduce, con absoluta certeza, en un signo de
"riqueza, circunstancia que como ya se señaló, no
"se trata de una simple presunción sino un hecho
"real y concreto, pues de otra manera no sería
"posible aplicar los procedimientos necesarios
"para su acreditamiento con el ISR.

"Luego entonces, es claro que en la ley
"cuestionada sí se toma en cuenta la capacidad
"contributiva de los contribuyentes, puesto que
"para la determinación del impuesto que nos
"ocupa, se toman como base los activos que cada
"uno detenta, lo cual evidentemente implica que
"cubre el impuesto que resulte a su cargo, en
"proporción a tales activos, siendo incontrovertible
"que tal contribución no es proporcional ni
"equitativa como se sostiene en la tesis que cita el
"juez de conocimiento en la sentencia que se
"recurre.

"Asimismo, el derecho al acreditamiento a que se
"refiere la tesis citada para el A quo, sí resulta
"aplicable a aquellos contribuyentes, que se
"encuentren en los supuestos establecidos para tal
"efecto, lo cual implica que el mismo es aplicado a
"todos los que se encuentran en igualdad de

"circunstancias y condiciones, contrariamente a lo
"sustentado por el A quo en su sentencia.

"Por tal motivo, resulta infundada la cita de la tesis
"que hace el A quo en el sentido de que se violan
"los principios de proporcionalidad y equidad, al no
"tomar en cuenta la capacidad económica de los
"contribuyentes, otorgando un trato desigual para
"los iguales y viceversa. Lo anterior es así, ya que
"de demostrarse por la autoridad que las pérdidas
"declaradas son improcedentes, lo conducente
"resultaría en modificar la utilidad fiscal en el ISR y
"determinar un cobro en este último impuesto.

"Por lo tanto, no existe un trato desigual en el
"artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo para
"aquellos contribuyentes que obtienen mayores
"utilidades que otros, puesto que la capacidad
"contributiva del sujeto obligado se refleja en los
"activos que poseen y no en los ingresos
"obtenidos, razón por la cual, al no existir el trato
"desproporcional el artículo 9º de la ley en
"comento, no vulnera lo dispuesto por el artículo
"31, fracción IV, constitucional y en consecuencia
"no debe declararse la inconstitucionalidad de la
"Ley del Impuesto al Activo."

QUINTO. Como agravios en la revisión adhesiva, la quejosa
aduce:

"1. Son correctas las declaraciones judicatorias
"hechas por el A quo dentro del cuarto y quinto



"considerandos del fallo en revisión, en el sentido
 "de ser infundadas, todas y cada una, las causales
 "de improcedencia en el juicio que las autoridades
 "responsables plantearon. en sus informes
 "justificados y fueron resumidas, por el propio
 "juez, a partir de la página 14 de su sentencia.

"En efecto:

"a) Por lo que respecta a la causal de
 "improcedencia contenida en el artículo 73,
 "fracción VI, de la Ley de Amparo, visible en el
 "inciso a) del cuarto considerando de la resolución
 "en comento, y que fuera argumentada por el
 "Procurador Fiscal de la Federación, en el sentido
 "de que las declaraciones de pago provisional que
 "en vía de pruebas de la parte quejosa resultaron
 "exhibidas dentro del juicio de amparo, no
 "constituyen el primer acto concreto de aplicación
 "de los ordenamientos impugnados, cabe
 "mencionar lo siguiente:

"i. Con fecha 10 de mayo de 1996, fue oficialmente
 "publicada la "Ley que Modifica a las Diversas de
 "los Impuestos sobre la Renta, al Activo, Especial
 "sobre Producción y Servicios y Federal de
 "Derechos", en cuyos términos las quejas, ahora
 "recurrentes adhesivas, quedaron inconstitucional
 "pero legalmente "resugetadas" a la obligación
 "tributaria de generar, declarar y tener que pagar el
 "impuesto al activo de las empresas, todo ello con
 "efectos a partir del día 11 de mayo de 1996.

"Así las cosas, habiendo las empresas quejas
 "asumido y cumplido sus formal y materialmente
 "nuevas obligaciones manifestatorio-contributivas
 "del impuesto al activo respecto de mayo de 1996,
 "resulta ser que, para los supuestos normativos
 "contemplados en la Ley de Amparo, el juicio de
 "garantías que oportuna y formalmente se
 "promovió y, por ende, del cual deriva el recurso de
 "revisión adhesiva en el que nos encontramos
 "inmersos, resultó procedente a partir del 11 de
 "mayo de 1996, bajo criterio autoaplicativo o bien
 "desde el 2 de julio para las quejas, según las
 "circunstancias concretas del presente caso, bajo
 "criterio heteroaplicativo, toda vez que la
 "realización y material entero-tributario, en su caso,
 "de la primera declaración provisional de su IMPAC
 "de 1996 bajo el nuevo sistema de la ley, las cuales
 "fueron interpuestas ante la Secretaría de Hacienda
 "y Crédito Público, por conducto de la caja número
 "2, de la Sucursal Revolución del Banco
 "Internacional, S. A., institución bancaria
 "autorizada para dichos efectos, el día 1º de julio
 "de 1996, lo cual condicionó la procedencia de la
 "demanda inicial de amparo, que fue oportuna y
 "formalmente interpuesta para evitar el
 "consentimiento de las impugnadas Ley del
 "Impuesto al Activo, de su Reglamento y de su
 "última ley reformativa a partir del 11 de mayo de
 "1996, además de que para procurar y, en su caso,
 "obtener, la protección y amparo de la Justicia de



"la Unión, en contra de la aplicación de todos esos
"ordenamientos que les desfavorecen, con objeto
"de verse liberadas del injusto impuesto que las
"involucra.

"ii. La interposición de la demanda inicial de
"amparo se realizó bajo criterio de consumación de
"agravio personal y directo, porque tanto la Ley
"del Impuesto al Activo como su Reglamento les
"han sido ya directamente autoaplicados a las
"empresas quejasas, perjudicándolas por primera
"vez en su vida. jurídico-fiscal actual, en
"términos de las declaraciones ya reseñadas.

"A propósito de todo esto importa destacar, ante
"sus señorías, que exclusivamente para efectos
"defensivos de índole constitucional, las
"recurrentes se autosometieron a la generación del
"impuesto reclamado a partir del 11 de mayo de
"1996; se lo autodeterminaron, lo calcularon,
"declararon y, en su caso, enteraron ya, por
"primera vez, en tiempo y en derecho, después de
"la última reforma sufrida por la Ley del Impuesto
"al Activo -destacando la acontecida sobre su
"artículo 1º, párrafo primero- autoaplicándose de
"manera integral la ley -las leyes que le han
"conformado hasta ahora- y reglamento
"combatidos, pero sin consentir con ninguno
"desde el señalado día 11 de mayo de 1996.

"Sostenemos que en la especie mis representadas
"se encuentran reclamando procedentemente la
"Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento en

"forma integral, porque ambos ordenamientos y,
 "por ende, el tributo que estructuran les han
 "resultado integralmente oponibles de nuevo, para
 "efectos técnicos y materiales, fundamentalmente
 "en razón de la reforma acontecida sobre el artículo
 "1º, párrafo primero, de aquélla, en vigor desde el
 "11 de mayo próximo pasado, habida cuenta de que
 "dicho numeral establece diversos elementos
 "esenciales del impuesto de que se trata (Impuesto
 "mismo; sujetos y objeto de éste), de entre los
 "cuales destaca el "SUJETO", siendo el caso que el
 "legislador decidió "RESUJETAR" a la ley, y al
 "dicho impuesto en consecuencia, a todos aquéllos
 "que en su caso ya lo generaban previamente, pero
 "bajo una estructura legal distinta.

"En efecto, la nueva norma estipula, a la letra, lo
 "siguiente:

""Artículo 1º. Las personas físicas que realicen
 "actividades empresariales y a las personas
 "morales, residentes en México, están obligadas al
 "pago del impuesto al activo, por el activo que
 "tengan, cualquiera que sea su ubicación..."

"En concordancia con la norma conducentemente
 "transcrita, el artículo único transitorio de la ley
 "que estableció dispuso: "La presente ley entrará
 "en vigor al día siguiente al de su publicación en el
 "Diario Oficial de la Federación", siendo el caso
 "que ésta aconteció el 10 de mayo próximo pasado.

"b) La diversa autoridad responsable cuyos
 "argumentos sobreseñalados (sic) de la acción



"constitucional enderezada por las empresas
"quejasas, mis representadas en esta alzada
"constitucional, que se viene estudiando, también
"se fundamentó en el contenido del artículo 73,
"fracción XII, de la Ley de Amparo, al pretender
"concluir que las empresas recurrentes se habían
"ubicado bajo los supuestos de la Ley del Impuesto
"al Activo aún antes del 1º de mayo de 1996, con lo
"cual pretendió dar por precluido el fatal término de
"15 días hábiles aptos para solicitar la protección y
"amparo de la Justicia Federal. Al respecto de todo
"lo anterior, sus respetables señorías, nos
"permitimos disentir con el funcionario indicado y
"convenir con el A quo en su sentencia revisada,
"exponiendo lo siguiente:

CORTE DE
PRIMERA INSTANCIA
J. DE MEXICO
"i. Conviene precisar que la Ley del Impuesto al
"Activo y su Reglamento, vigentes a la fecha,
"pueden ser válidamente reclamados por
"las quejasas, ahora recurrentes adhesivas,
"tomando en cuenta la aplicación, analógica al
"presente caso, de la jurisprudencia plenaria
"número 124 que apareció publicada con el
"número 78, a páginas 162 de la Primera Parte
"del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1985,
"consultable en el Apéndice 1917-1988, Primera
"Parte, a páginas 228 a 229, bajo el siguiente texto
"oficial:

"LEYES, CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE
"CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES
"CONTEMPLAN SITUACIONES JURIDICAS

"IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO
"LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUELLOS.

"Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las
"disposiciones que contemplaba la ley anterior y
"que tales disposiciones se recojan en la nueva ley
"reclamada, ello de ninguna manera puede implicar
"que la nueva ley resulte derivada de aquélla que
"fue consentida, ya que, desde el punto de vista
"formal y material, son actos legislativos distintos."

"c) Las autoridades responsables, nuestras
"contrarias dentro de la instancia constitucional en
"la que nos encontramos inmersos, propusieron la
"causal de improcedencia del juicio de garantías
"contenida dentro del artículo 73, fracción V, de la
"Ley de Amparo, en el sentido de que las empresas
"recurrentes no acreditaron, propiamente, que los
"ordenamientos legislativos reclamados afectaran
"sus intereses jurídicos, alegando que las
"impetrantes del juicio de garantías no
"demostraron materializar los supuestos
"hipotéticos contemplados por los artículos 5º, 5ºB,
"9º y 12, de la Ley del Impuesto al Activo,
"argumentación en contra de la cual estamos
"plenamente identificados con las conclusiones
"jurídicas expuestas por el A quo dentro de su
"sentencia, en apoyo de las cuales nos permitimos
"manifestar lo siguiente:

"1. Tal y como se ha indicado líneas arriba, las
"empresas recurrentes han reclamado, por la vía
"constitucional, la Ley del Impuesto al Activo y su



"Reglamento, junto con el impuesto que éstas
"regulan, ya que les han resultado oponibles, de
"nueva cuenta, en virtud de la reforma que el
"artículo 1º, párrafo primero, de la mencionada ley
"sufriera a partir del 11 de mayo de 1996, toda vez
"que dicho numeral establece diversos elementos
"esenciales del impuesto, como el "sujeto" del
"mismo, entre otros, redefiniéndolo e incluyendo
"de nueva cuenta en su concepto, a las personas
"morales residentes en México, como lo son mis
"representadas.

"Así las cosas, tenemos que las empresas
"que/osas son personas morales residentes en
"México, que disponen de activos afectos al
"desahogo de su actividad empresarial o mercantil,
"razón por la cual se encontraban legalmente
"sujetas a la generación del impuesto en cuestión
"hasta el pasado 10 de mayo de 1996, bajo la
"antigua estructura de la ley y su reglamento,
"siendo el caso, sin embargo, que desde la fecha
"en que entraron en vigor las más recientes
"reformas a dicho ordenamiento 11 de mayo de
"1996 las recurrentes se vieron, una vez más,
"sujetas a la ley y reglamento reclamados, en
"función de los cambios legislativos ya citados y
"que reestablecieron los elementos esenciales
""sujeto" y "objeto" del impuesto que las vuelven a
"comprender como contribuyentes del impuesto al
"activo, pero ya bajo un nuevo sistema legal.

"De todo lo anterior se desprende el interés jurídico
 "necesario y suficiente para solicitar la protección
 "y amparo de la Justicia de la Unión en nombre de
 "y para mis representadas, en contra de los
 "ordenamientos legal y reglamentario en cuestión,
 "porque precisamente para los efectos del juicio de
 "amparo, desde el 11 de mayo de 1996, se ha
 "producido una modificación legislativa que les
 "atribuye - legitimación activa para reclamar el
 "sistema integral del impuesto al activo, en virtud
 "de la entrada en vigor del nuevo acto legislativo
 "formal y material que definió, estableció, identificó
 "o introdujo como quiera decirse a su sistema
 "tributario, a nuevos sujetos dentro de un nuevo
 "ámbito temporal y material de regulación. SUPREM
 JUSTICIA
 "Así las cosas, opera en beneficio de las quejosas,
 "la aplicación analógica del precedente plenario
 "número P.XLVII/94, que es consultable en la
 "página 33 de la Gaceta del Semanario Judicial de
 "la Federación número 83, correspondiente a
 "noviembre de 1994, bajo el siguiente texto oficial:
 ""DEMANDA DE AMPARO. PRESENTACION
 "OPORTUNA RESPECTO DE UNA LEY, CUANDO
 "SU APLICABILIDAD ESTA SUJETA A LA
 "VIGENCIA DE OTRA POSTERIOR. Si una ley
 "establece determinadas reglas cuya aplicabilidad
 "está sujeta a lo que prevenga otro ordenamiento
 "de vigencia posterior, es evidente que los efectos
 "jurídicos de la primera se actualizan hasta que
 "adquiere obligatoriedad el segundo, que resulta



ser el susceptible de causar el perjuicio a los
"destinatarios de aquélla y, ante esa circunstancia,
"si la demanda de amparo se presentó
"oportunamente por lo que ve al último, lo mismo
"debe considerarse por lo que respecta a la ley con
"vigencia anterior."

"De esta manera, las quejas ahora recurrentes
"estiman, junto con el Juez de Distrito, que el juicio
"es procedente, a partir del 11 de mayo de 1996,
"bajo criterio autoaplicativo o bien desde el 2 de
"julio para las quejas, según las circunstancias
"concretas del presente caso, bajo criterio
"heteroaplicativo, contra todos los demás
"numerales de la Ley del Impuesto al Activo y de su
"Reglamento, porque con independencia de que
"hayan o no sufrido la aplicación concreta de éstos
"con anterioridad a tal día, debe tenerse
"perfectamente presente que, como ya fue
"argumentado, el impuesto al activo es un tributo
"que funciona en razón de un sistema técnico-
"jurídico cerrado, que se establece, precisa,
"estructura y resulta funcional, operante y
"aplicable, en términos de lo dispuesto por toda la
"ley y el reglamento de la materia, reclamados, de
"suerte que la correspondiente contribución no
"puede existir si falta cualquiera de sus elementos
"esenciales, a saber: el sujeto, el objeto, la base y
"la tasa o la tarifa, siendo el caso que,
"precisamente a partir del pasado 11 de mayo de
"1996, el elemento sujeto del tributo varió o bien se

"restableció substancialmente, según el caso de
 "cada quien, no sólo formal sino también
 "materialmente, desde el punto de vista legislativo,
 "bajo la perspectiva amparista del nuevo acto
 "ordenador que introdujo la nueva norma, lo que
 "necesariamente implica que, en su virtud, todo el
 "sistema haya vuelto a reinstaurarse, de suerte que
 "mis autorizantes tienen interés jurídico para
 "debatir integralmente, y no sólo de manera
 "aislada, su inconstitucionalidad, a partir de la
 "indicada fecha, a propósito del cambio esencial o
 "estructural sufrido por el elemento "sujeto" del
 "que se ha hablado.

"Esto es, pensamos, una sensata precisión, más
 "que excepción, que puede y debe hacerse al
 "sentido y determinaciones alcanzadas por el
 "honorable Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación, en su jurisprudencia número
 "6/89, consultable en las páginas 558 a 560 de la
 "Primera Parte del Informe 1989 del Presidente de
 "ese Máximo Tribunal, bajo el rubro: "LEYES,
 "AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE
 "PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O
 "ULTERIOR "ACTOS DE APLICACION.", la cual,
 "además, corresponde con plenitud a los
 "novedosos, adecuados y justicieros criterios que
 "está sosteniendo consistentemente la nueva
 "Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el
 "sentido de que la procedencia de la defensa
 "constitucional y consecuentemente del juicio de



garantías, para ejercerla por parte de los gobernados que lo requieran, es un alto valor que debe no sólo salvaguardarse sino promoverse eficaz y eficientemente, de manera tal que ha lugar a que los órganos de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades obren con franqueza e incluso audacia, sus criterios hacia la procedencia del amparo y abandonen las tendencias de improcedencia y sobreseimiento que antaño habían venido desarrollándose activamente.

III. En el mismo orden de ideas, con fundamento en lo expresamente dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, invocó ante sus señorías, en carácter de hecho notorio, para todos los efectos legales a que haya lugar y por así convenir a la defensa de los intereses de mis representadas, las partes conducentes del quinto considerando de la resolución pronunciada por el honorable Tribunal Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 10 de septiembre de 1996, en los autos del incidente de inejecución número 142/94, promovido por PORCELANITE, S.A. DE C.V., perteneciente a la ponencia del señor Ministro Juan Díaz Romero, y que a continuación se transcriben:

"De tal manera este órgano reitera el criterio de que la producción de un nuevo acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal declarado

"inconstitucional por una sentencia de amparo,
 "hace procedente la promoción de un nuevo juicio
 "de amparo por todos aquéllos que se vean
 "afectados por el mismo, incluyendo a quienes
 "hayan obtenido una sentencia de amparo en
 "contra del texto vigente con anterioridad a dicha
 "reforma, porque se trata de actos distintos que
 "deben ser por lo tanto objeto de distintas acciones
 "impugnativas.

"Este criterio da coherencia al sistema del juicio de
 "amparo y además garantiza con toda plenitud la
 "defensa de los gobernados, en cuanto les permite
 "impugnar cada pronunciamiento del órgano
 "legislativo, no sólo cuando reforma parcial o
 "totalmente un texto preexistente, sino inclusive
 "cuando reproduce en términos idénticos un texto
 "anterior como acontece, por ejemplo, tratándose
 "de leyes tributarias de vigencia anual, según se
 "precisa ahora y se sostiene en la tesis
 "jurisprudencial que aparece actualmente
 "publicada con el número noventa y uno del Tomo
 "I, Materia Constitucional del apéndice en mención,
 "la cual declara procedente la acción de amparo en
 "aquellos casos en que se reclama una ley, a pesar
 "de que la quejosa se haya sometido a una ley
 "anterior de igual contenido.

"La tesis de mérito dice:

""CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE
 "NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES



**JURIDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN
"ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO.**

**"Aun cuando un quejoso se hubiere sometido a las
"disposiciones contempladas por una ley anterior,
"recogidas en una nueva y reclamada en amparo,
"ello de ninguna manera puede implicar que las
"nuevas normas resulten derivadas de aquéllas
"que fueron consentidas, ya que, desde el punto de
"vista formal y material, son actos legislativos
"distintos."**

**"El criterio sentado en esta tesis fue razonado en la
"primera de las ejecutorias que le dieron origen,
"relativa al amparo en revisión 3729/69 promovido
"por Harinera Euzkaro, sociedad anónima, de la
"siguiente manera:**

**"QUINTO. El primer agravio que hace valer en su
"recurso de revisión el gobernado, idéntico al
"primero del escrito de revisión de la legislatura
"local, consiste esencialmente, en que las
"disposiciones que afectaron a las quejas de la
"Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles que
"estuvo en vigor en el Estado, fueron consentidas
"por los mismos, y como el Código Fiscal vigente
"en esa entidad regula el impuesto sobre ingresos
"mercantiles con idénticos preceptos a los de la ley
"que anteriormente fue consentida, no importa que
"tales disposiciones estén reguladas por otra ley,
"ya que si se consintió la situación creada por la
"primera, la segunda ley que en nada cambia esa
"situación debe estimarse también consentida, por**

"lo que el juicio de amparo debió ser declarado
"improcedente y consecuentemente decretarse el
"sobreseimiento respectivo. Es infundado este
"agravio en mérito de las siguientes
"consideraciones: las recurrentes no aprobaron el
"supuesto que ahora esgrimen como agravio,
"debido a que no aportaron en autos los convenios
"que para el pago del impuesto sobre ingresos
"mercantiles celebraron las autoridades fiscales
"con las empresas quejasas bajo la vigencia de la
"Ley de Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y
"antes de la vigencia del Código Fiscal; por tanto,
"este Tribunal Pleno no tiene elementos para
"probar que las empresas quejasas consintieron la
"ley abrogada, o bien que tales convenios
"significaron el no sometimiento a la misma. Pero,
"aún en el supuesto que se hace valer, sería
"infundado el argumento presentado, relativo a la
"igualdad de las situaciones jurídicas creadas por
"dos ordenamientos legales. En efecto, aún en el
"supuesto de que el Código Fiscal sometiera a las
"quejasas en sus preceptos relativos a la igualdad
"de las situaciones que las que hubieran
"consentido bajo la Ley del Impuesto sobre
"Ingresos Mercantiles abrogada, la circunstancia
"de que tales preceptos formen parte de un nuevo
"ordenamiento legal, hace indispensable que los
"órganos del Estado que lo formaron sean
"llamados a juicio y oídos, no pudiendo aceptarse
"el argumento de que por contemplar situaciones



"jurídicas semejantes a las de una ley anterior que
"se dice fue consentida la nueva ley también lo sea,
"ya que se trata desde el punto de vista formal y
"material, de un acto legislativo distinto al que dice
"fue consentido y es aplicada una ley diversa a la
"que también se dice consentida."

"Como se advierte de la transcripción, en esta
"ejecutoria se analizó el supuesto en que se
"reclama una ley (el Código Fiscal) que establece
"un tributo que ya se había impuesto en un cuerpo
"legal derogado (la Ley del Impuesto sobre
"Ingresos Mercantiles).

"Al mismo supuesto se refirieron las siguientes
"tres ejecutorias que dieron lugar a las tesis
"citadas las que reprodujeron palabras más o
"menos, el razonamiento expresado en la primera:

"En el amparo en revisión 5261/76 promovido por
"Gas de Huatusco, sociedad de responsabilidad
"limitada, (identificando erróneamente en la tesis
"jurisprudencial con el número 4287/77) en que se
"reclamó la Ley del Impuesto sobre Consumo de
"Gasolina, se estableció:

"Asimismo, son fundados los referidos agravios
"que expresa la recurrente en, contra del
"sobreseimiento decretado respecto de las citadas
"leyes locales y de sus actos de aplicación
"reclamados, en cuanto en ellos se alega que el A
"quo no estuvo en lo justo al considerar, en otra
"parte de la sentencia, que la quejosa consintió el
"tributo cuestionado, por haber pagado el de igual

"naturaleza que estableció la Ley de Hacienda del
 "propio Estado de Veracruz, que entró en vigor el
 "1º de enero de 1963, ya que la circunstancia de
 "que dicha agravada haya cubierto el impuesto
 "creado por la aludida Ley de Hacienda, la cual fue
 "abrogada por las que se reclaman en este juicio,
 "sólo significa que pueda considerarse consentida
 "aquella ley, pero no el que también lo sean las
 "ahora impugnadas, en tanto que como éstas
 "constituyen, desde un punto de vista formal y
 "material, actos legislativos distintos de la
 "expedida con antelación, aun cuando sometan a
 "los particulares a iguales situaciones jurídicas que
 "las que consintieron a la luz de la ley anterior, no
 "por ello pueden estimarse consentidos los nuevos
 "ordenamientos legales, por ser, precisamente,
 "diversos del que se dice consentido. Al respecto,
 "cabe señalar que el anterior criterio fue
 "sustentado por este Tribunal en Pleno al resolver
 "el amparo en revisión 3729/69, promovido por
 "Harinera Euzkaro, S.A. ..."

"En el amparo en revisión número 4287/76
 "promovido por Liguigas, sociedad anónima de
 "capital variable, se reclamaron la Ley de Hacienda
 "del Estado de Veracruz y la Ley de Hacienda
 "Municipal de la misma entidad, ambas expedidas
 "en el año de mil novecientos setenta y seis, en
 "cuanto establecían un impuesto sobre la
 "enajenación de gas industrial y doméstico, que
 "estaba ya contemplado en las leyes derogadas por



"aquéllas de los años de mil novecientos setenta y
"dos y siguiente, y en la ejecutoria se expresó:
"En efecto, dichos agravios son fundados en
"cuanto en ellos se alega que el Juez de Distrito no
"estuvo en lo justo al considerar que la quejosa
"consintió las leyes reclamadas, por haber pagado
"el impuesto especial del Estado de Veracruz,
"establecido en leyes anteriores a las impugnadas,
"en tanto que, como acertadamente lo alega la
"citada recurrente, la referida circunstancia de que
"haya cubierto el aludido impuesto creado por
"leyes abrogadas por las que se reclaman el
"amparo, sólo significa que puedan considerarse
"consentidas aquellas leyes, pero no el que
"también lo sean las impugnadas en el presente
"amparo en revisión, ya que como éstas
"constituyen, desde un punto de vista formal y
"material, actos distintos las expedidas con
"antelación, aun cuando sometan a los particulares
"a iguales situaciones jurídicas que las que hayan
"consentido a la luz de leyes anteriores, no por ello
"pueden estimarse consentidos los nuevos
"ordenamientos legales. Lo anterior se corrobora,
"además, si se tiene en cuenta que cada
"ordenamiento legal que expide el Poder
"Legislativo constituye la expresión de su voluntad
"imperante en el momento que ejerce la facultad
"legislativa con que está investido, así como que
"por esa razón, dicha voluntad sólo tiene
"aplicación a partir del momento en que entra en

"vigor la ley que la contiene; de manera que aun
 "cuando se regule en la nueva ley, de igual modo
 "que en el pasado, la conducta de las personas y
 "las someta a similares o idénticas situaciones
 "jurídicas, no puede sostenerse válidamente que
 "en tal evento es su voluntad anterior la que
 "manifiesta y no una nueva, puesto que ello
 "significaría desvirtuar la naturaleza del acto
 "legislativo. Por tanto, si el legislador deroga una
 "ley, lo cual no necesita hacer cuando estima que
 "la voluntad en ella contenida debe seguir
 "imperando parcialmente, y expide un nuevo
 "ordenamiento legal en el que regula, de igual
 "manera que en la ley vieja, determinada situación
 "nueva expresión de voluntad, no puede estimarse
 "consentida la nueva ley en razón de haberse
 "consentido la anterior, puesto que, como se dijo,
 "aquella constituye un acto formal y materialmente
 "distinto de ésta. Sobre el particular, cabe señalar
 "que este Tribunal en Pleno arribó a igual
 "conclusión que la anterior, al resolver el amparo
 "en revisión 3729/69, promovido por Harinera
 "Euzkaro, S. A. ..."

"En el amparo en revisión número 3014/79
 "promovido por Industrias Químicas de México,
 "sociedad anónima, se asentó:

"En dicho agravio se aduce, que es indebido que
 "el juzgador estimara que por no reclamarse la Ley
 "de Ingresos Municipales del Estado de Michoacán
 "para el año de mil novecientos setenta y siete, que



creó el derecho del diez por ciento sobre el
"consumo de energía eléctrica, debe tenerse por
"consentida la Ley de Ingresos Municipales del
"siguiente año que se reclama, por reproducirse en
"esta última dicho tributo puesto que se trata de
"ordenamientos legales distintos. Es exacto lo
"alegado por la recurrente. Aun cuando la quejosa
"se hubiera sometido a las disposiciones que
"contemplan la ley anterior y que tales
"disposiciones se recojan en la nueva ley
"reclamada, ello de ninguna manera puede implicar
"como incorrectamente lo estimó el juez, que la
"nueva ley resulte derivada de aquella que fue
"consentida, ya que, desde el punto de vista formal
"y material, son actos legislativos distintos.
"Respecto de problemas similares, este Tribunal
"Pleno ha sustentado el mismo criterio, al resolver
"los amparos en revisión siguientes: A.R. 3729/69,
"promovido por Harinera Euzkaro, S. A. ..."
"Por último, en la quinta ejecutoria recaída en el
"amparo en revisión número 8981/84 promovido
"por Fábrica de Jabón La Corona, sociedad
"anónima, en donde se reclamaron la ley que
"reformó los artículos 227, fracción II, 229 y 230, de
"la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario
"Oficial de la Federación del treinta y uno de
"diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y la
"ley que nuevamente reformó el artículo 227,
"fracción II, y modificó el numeral 234 del mismo
"ordenamiento citado, publicada en el Diario Oficial

"de la Federación del día treinta de diciembre de
"mil novecientos ochenta y tres, se sostuvo el
"mismo criterio sentado en las cuatro ejecutorias
"anteriores, al decirse:

"Los conceptos de violación segundo y cuarto,
"salvo el último párrafo de este último que después
"se analizará, se estudian conjuntamente, por
"impugnarse en ambos el sistema establecido en
"las leyes reclamadas para el cobro de derechos
"por el uso o aprovechamiento de aguas
"nacionales; concretamente, por impugnarse el
"establecimiento de diversas tasas, atendiendo al
"destino que se dé a las aguas extraídas o al lugar
"en que se verifique su extracción. Con respecto a
"los anteriores conceptos, lo primero que debe
"determinarse es si este Tribunal Pleno debe o no
"avocarse al estudio de la constitucionalidad del
"referido sistema para el cobro de los derechos de
"que se trata, establecido en las leyes expedidas
"en 1982 y 1983, reclamadas en el presente
"amparo, pues la quejosa en los antecedentes de
"su demanda manifiesta que promovió un juicio de
"amparo anterior en contra de la ley expedida en
"1981, lo cual implica que la peticionaria ya era
"causante del tributo de que se trata durante la
"vigencia de esta ley.

"Procede realizar este análisis previo, en virtud de
"que en la ley de 1981 ya se contenía el sistema de
"cobro que ahora se combate respecto de las leyes
"reclamadas. A este respecto cabe señalar, que



aunque la quejosa haya sido causante de los
 "derechos de agua de que se trata durante la
 "vigencia de la ley expedida en diciembre de 1981,
 "tal circunstancia no le impedía impugnar las leyes
 "de 1982 y 1983 en las que volvió a establecerse el
 "mismo sistema, reformándose las tasas del
 "tributo, pues cada uno de estos ordenamientos
 "constituyen actos legislativos distintos, tanto
 "desde el punto de vista formal como material, por
 "lo que de ninguna manera podría sostenerse que
 "las leyes ahora reclamadas resultan derivadas de
 "las de 1981. Para corroborar este aserto, resulta
 "conveniente transcribir la tesis de este Tribunal
 "Pleno, visible bajo el número 19, página 354 de la
 "Primera Parte del Informe de Labores
 "correspondiente a 1982, dice: "LEYES,
 "CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE CUANDO
 "DOS ORDENAMIENTOS LEGALES CONTEMPLAN
 "SITUACIONES JURIDICAS IGUALES, AUN
 "CUANDO SE HAYA CONSENTIDO LA CREADA
 "POR EL PRIMERO DE AQUELLOS." (Se
 "transcribe).
 "La tesis citada en esta última ejecutoria se integró
 "también como jurisprudencia con tres de los
 "precedentes ya examinados y dos distintos, para
 "quedar con el texto que aparece publicado con el
 "número doscientos diez del Tomo I, Materia
 "Constitucional, del Apéndice de mil novecientos
 "noventa y cinco, del tenor siguiente:

"LEYES CONSENTIMIENTO DE LAS. NO EXISTE
 "CUANDO DOS ORDENAMIENTOS LEGALES
 "CONTEMPLAN SITUACIONES JURIDICAS
 "IGUALES, AUN CUANDO SE HAYA CONSENTIDO
 "LA CREADA POR EL PRIMERO DE AQUELLOS.
 "Aun cuando la quejosa se hubiera sometido a las
 "disposiciones que contemplaba la ley anterior y
 "que tales disposiciones se recojan en la nueva ley
 "reclamada, ello de ninguna manera puede implicar
 "que la nueva ley, resulte derivada de aquella que
 "fue consentida, ya que desde el punto de vista
 "formal y material, son actos legislativos distintos.
 "En lo concerniente a las otras dos ejecutorias que
 "aparecen como tercer y quinto precedentes en
 "esta tesis jurisprudencial, basta decir lo siguiente:
 "En el amparo en revisión número 6211/81
 "promovido por Cal de Aguascalientes, sociedad
 "anónima, se reclamó la Ley de Hacienda del
 "Municipio de Aguas Calientes publicada en el año
 "de mil novecientos ochenta, la cual no se
 "consideró consentida, de acuerdo con el criterio
 "sostenido en el primer precedente, a pesar de que
 "la quejosa se había sometido a las Leyes de
 "Hacienda expedidas en el año anterior; y en el
 "amparo en revisión número 5643/79 promovido
 "por Jesús Gomaba Grijalva y otros, se reclamó el
 "Decreto del Congreso del Estado de Chihuahua
 "que reformó el Código Municipal de dicha entidad,
 "incrementando la tasa del derecho por alumbrado
 "público, y se aplicó el criterio sostenido en los



precedentes anteriores para sostener que los "quejosos no consintieron el gravamen por "haberse sometido a los preceptos que lo "establecían con una tasa inferior.

"En suma, el criterio sostenido en dichas tesis, que "ahora reitera este Alto Tribunal, radica en estimar "procedente la acción de amparo que se enderece "en contra de una ley, aunque el contenido de esa "ley infiera al quejoso un perjuicio igual o similar al "que hubiera resentido con una ley anterior, "siempre que la ley atacada provenga de un nuevo acto legislativo, esto es, de un nuevo "procedimiento legislativo que haya culminado con "la creación de su texto, lo cual acontece, "naturalmente, cuando como ocurrió en la mayoría de los precedentes antes examinados se abroga "un ordenamiento en su integridad y se expide uno "nuevo en el que se incluyen algunos preceptos "idénticos a los contenidos en el anterior, o cuando "se introduce una reforma legal que varía en "cualquier sentido el texto de la ley anterior, toda "vez que en ambos supuestos ya no se está en "presencia del mismo acto, sino de uno distinto.

"Esta concepción sobre la distinción que cabe "establecer entre dos leyes en atención a la "circunstancia de que ambas deriven de "pronunciamientos legislativos distintos, referida al "principio de relatividad de la sentencia de amparo, "implica sostener, por razones de congruencia, que "la eficacia protectora de la sentencia de amparo

"subsiste en tanto la ley declarada inconstitucional
"no se ha substituido por otra susceptible de
"impugnación en un nuevo juicio de amparo.

"Son pues razones que derivan de la mecánica
"conforme a la cual el Constituyente instituyó el
"juicio de amparo, restringiendo su procedencia a
"la reclamación de un acto o ley que infiera al
"particular una lesión de naturaleza y medida
"precisas, las que impiden considerar que la
"sentencia lo protege contra una violación definida
"en abstracto (tasa fija, en el caso) o contra todas
"las leyes o actos que adolezcan de cierta falla,
"pues, como se dijo, los límites de la eficacia
"protectora quedan constreñidos a la ley según el
"texto juzgado y censurado.

SUPREMA
JUSTICIA DE
MONTAÑA

"2. Por cuanto al fondo, ha lugar a fortalecer la
"sentencia principalmente recurrida bajo los
"siguientes aspectos:

"a) En primer término y bajo los auspicios del muy
"reciente criterio plenario sustentado al resolverse,
"con fecha 23 de septiembre de 1996, el amparo en
"revisión 1673/95, promovido por Armando
"Landeros Llavayol, en el sentido de que resulta
"técnicamente factible que los revisionistas
"adhesivos planteen, dentro de su instancia
"condicionada, argumentos propios de revisión
"principal, a continuación exponremos los
"siguientes razonamientos que convienen a la
"defensa planteada en los presentes autos:



"En tanto que el inferior estimó suficientes para
"conceder el amparo dos de los argumentos
"expuestos por las quejas en sus conceptos de
"violación, consistentes, el primero, en que el
"artículo 5º, primer y segundo párrafos, de la Ley
"del Impuesto al Activo viola la garantía de equidad
"tributaria, en razón de permitir, en sólo algunos
"casos, la deducción de deudas y la prohíbe en
"otros, a pesar de tratarse de pasivos de la misma
"naturaleza, lo que propicia que los contribuyentes
"que se encuentran en la misma situación jurídica
"ante la ley sean colocados en situación desigual, y
"el segundo, en que el artículo 9º de la ley
"impositiva de referencia viola los principios de
"proporcionalidad y equidad tributarias, habida
"cuenta de la existencia de la tesis jurisprudencial
"número P.XLVI/95, establecida por el honorable
"Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación, al fallar, con fecha 6 de abril de 1995, en
"amparo en revisión 107/92, promovido por
"CONSULTORES EN SERVICIOS JURIDICOS
"FISCALES, S. A. DE C. V., la cual es consultable a
"página 65 del Semanario Judicial de la Federación
"y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II,
"correspondiente a julio de 1995 y cuyo rubro a la
"letra dice: "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY
"QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS
"PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
"TRIBUTARIA. (REFORMAS Y ADICIONES
"PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

"FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)",
 "dejó de estudiar y pronunciarse sobre todos los
 "demás argumentos defensivos que, dentro de sus
 "conceptos de violación, hicieron valer las
 "quejas en su demanda inicial de amparo, al
 "estimar que el estudiarlos en nada variaría el
 "sentido de la sentencia que emitió.

"Lo anterior implica, dicho sea con todo respeto y
 "consideración para el A quo, que con fundamento
 "en lo dispuesto por los artículos 8º constitucional;
 "2º, 76, 79 y demás relativos y aplicables de la Ley
 "de Amparo; 349, 351, 352 y demás relativos y
 "aplicables del Código Federal de Procedimientos
 "Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la
 "materia y apoyando nuestro argumento en la
 "jurisprudencia número 440, consultable en la
 "página 775 de la Segunda Parte del Apéndice de
 "Jurisprudencia 1917-1988, bajo el rubro:
 "'CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU
 "ESTUDIO ES INNECESARIO", la sentencia puede
 "estimarse incongruente, por insuficiente e
 "inexhaustiva, ya que el inferior dejó de analizar,
 "contestar y resolver diversos aspectos torales de
 "la litis contestatio que las quejas propusieron
 "en su demanda inicial de amparo. Pues bien, dicha
 "insuficiencia judicatoria ostensible (en tanto que
 "el honorable A quo omitió resolver y pronunciarse
 "acerca de todos los conceptos de violación y
 "argumentos fácticos jurídicos que las quejas le
 "propusieron para demostrar, en sus términos, la



"inconstitucionalidad de los ordenamientos
"reclamados), puede utilizarse ahora para
"perfeccionar y fortalecer el fallo, vía agravio de
"revisión adhesiva, en tanto que para sostener la
"concesión del amparo deben estimarse aplicables
"todas y cada una de las razones expuestas para
"ello por las quejas, dentro de los conceptos de
"violación no estudiados, todos los cuales deben
"tenerse por aquí reproducidos como si se
"insertaran a la letra, lo cual no se hace únicamente
"por mera economía procesal.

"Cabe hacer mención de que el honorable inferior
"justificadamente determinó que "...los criterios
"que se han invocado (por las quejas dentro de
"su demanda inicial de amparo) revelan la
"inconstitucionalidad de la ley que establece el
"tributo porque quebranta el principio de equidad,
"por una parte, y el de proporcionalidad, por otra.
"Eso es suficiente para estimar que la declaratoria
"de inconstitucionalidad debe recaer sobre toda la
"ley, pues los vicios que se han puesto de
"manifiesto afectan a la totalidad del sistema
"tributario creado por ella, ya que amén de lo que
"dispongan los restantes preceptos no podrá
"superarse la inequidad y desproporcionalidad
"producida por los que aquí se vieron. Por ende, se
"estima también innecesario examinar el resto de
"los conceptos de violación, pues cualesquiera que
"fuera su resultado no variaría la conclusión
"alcanzada."

"Nota. Los paréntesis son nuestros.

"Bajo las descritas circunstancias, insisto, para
 "protección de las quejas y fortalecimiento del
 "fallo que nos es benéfico, se hace necesario pedir
 "al honorable ad quem que se sirva atender todos
 "los aspectos de los conceptos de violación cuyo
 "estudio fue, justificadamente desde su punto de
 "vista, soslayado por el honorable Juez de Distrito.

"b) Asimismo, con pleno acuerdo a la sentencia
 "pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en
 "Materia Administrativa en el Distrito Federal
 "utilizamos esta vía para fortalecer los criterios
 "argumentados desde la demanda inicial de
 "amparo y con base en los cuales el A quo
 "determinó conceder el amparo y protección de la
 "Justicia de la Unión a las quejas, ahora
 "recurrentes, en contra de la Ley del Impuesto al
 "Activo, su Reglamento y los respectivos decretos
 "reformativos de cada ordenamiento, al tenor de
 "las siguientes razones:

"i. Por lo que respecta a la primera parte del
 "considerando sexto de la sentencia de mérito,
 "hemos de decir que el artículo 5º, primero y
 "segundo párrafos de la Ley del Impuesto al Activo,
 "considerado en relación con los diversos artículos
 "1º, 2º, 2ºA, 3º, 4º, 7º y 8º, de la misma ley, resulta
 "estar afectado de un vicio de inconstitucionalidad
 "toda vez que, en donde existe la misma razón no
 "existe la misma disposición, para beneficio



"exclusivo e injusto del fisco y en agravio de las
"empresas quejasas, ahora recurrentes.

"Efectivamente, el artículo anteriormente señalado,
"en relación a los otros también indicados permite,
"en algunos casos, la deducción de deudas y, en
"otros, la prohíbe; a pesar de tratarse de pasivos
"de la misma naturaleza, es decir, esta aplicación
"inequitativa propicia que contribuyentes ubicados
"ante la misma situación jurídica frente a la ley, de
"tal manera que personas físicas y morales
"causantes del impuesto al activo en forma directa
"y que tengan deudas en el ejercicio de que se trate
"contraídas con los sujetos y en la moneda a
"propósito de los cuales la norma permite
"disminuir su valor para determinar la base, y
"aquellas otras que también hayan contraído
"deudas, pero con personas y en monedas
"distintas, sean colocados en situación desigual.
"Propiamente dicho, la desigualdad e inequidad
"tributaria que se plantea queda establecida en el
"hecho de que quienes pueden hacer la deducción
"o disminución de sus deudas, verán reducida su
"base impositiva, mientras que los que no puedan
"hacerla, la verán incrementada. Es decir, todas las
"especies de activos se encuentran gravados como
"objeto" del impuesto y sus valores integran la
"base", en término de lo dispuesto por los
"artículos 2º y 4º de la ley, por otro lado, en cambio,
"el artículo 5º permite disminuir del valor del
"objeto", para alcanzar la "base" del tributo,

"solamente el valor de las deudas contraídas con
"empresas residentes en el país o con
"establecimientos permanentes ubicados en
"México de residentes en el extranjero, excepto las
"que a continuación se distinguen, no obstante que
"también son deudas, en razón de su naturaleza
"jurídica, contable y económica, por lo que no
"deberían discriminarse, como se hace:

"1) Las contraídas en MONEDA NACIONAL con
"EMPRESAS residentes EN EL EXTRANJERO sin
"establecimiento permanente en el país;

"2) Las contraídas en MONEDA NACIONAL O
"EXTRANJERA con personas QUE NO SEAN
"EMPRESAS y sea que éstas residan o no EN
"MEXICO O EN EL EXTRANJERO, no obstante que
"como se dijo, ahora ya están también gravadas las
"asociaciones y sociedades civiles y las
"sociedades cooperativas;

"3) Las contraídas en MONEDA NACIONAL O
"EXTRANJERA con las EMPRESAS DEL SISTEMA
"FINANCIERO O CON SU INTERMEDIACION;

"4) Las contraídas con cualquier especie de
"persona, independientemente del lugar de su
"residencia, no en moneda nacional o extranjera,
"sino en bienes, crédito o servicios; y,

"5) Las contratadas con empresas residentes en el
"país o con establecimientos permanentes
"ubicados en México de residentes en el extranjero,
"si se trata de deudas negociables.



"De manera tal que, para integrar la base gravable
"del impuesto, han de tomarse en cuenta todos los
"activos pero, como se ha establecido no sucede lo
"mismo en tratándose de los pasivos lo que revela
"el criterio discriminatorio e injusto ya que todas
"las deudas (pasivos) son tales en una doble
"función, la que respecta a su naturaleza jurídica,
"económica y contable, y la que respecta a su
"reflejo en el patrimonio de los contribuyentes
"entonces, ¿Cómo es posible que solamente
"algunas de estas deudas sean aptas de ser
"disminuidas de la base tributaria y otras, cuya
"naturaleza es idéntica, padezcan un tratamiento
"diferente?

CORTE DE LA NACION,
AL SEÑOR JUEFE DE LA FISCALIA,
II. En cuanto a la segunda parte del considerando
sexto de la sentencia del inferior, por lo que se
"refiere a la Inconstitucionalidad del artículo 9º de
"la Ley del Impuesto al Activo planteada en la
"demanda inicial de amparo promovida por las
"empresas quejasas, ahora recurrentes, sólo
"podemos manifestar que la directa aplicación e
"interpretación de la tesis jurisprudencial cuyos
"argumentos se hicieron nuestros en defensa de
"los intereses de mis representadas, dieron como
"resultado el correcto juicio y conclusiones a que
"arribó el A quo.

"El precedente en cuestión es el identificado con el
"número P.XLVI/95, establecido por el honorable
"Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
"la Nación, al fallar, con fecha 6 de abril de 1995, en

"amparo en revisión 107/92, promovido por
 "CONSULTORES EN SERVICIOS JURIDICOS
 "FISCALES, S.A. DE C.V., el cual es consultable a
 "páginas 65 del Semanario Judicial de la
 "Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II,
 "correspondiente a julio de 1995 y cuyo rubro dice:
 "ACTIVO. EL ARTICULO 9º DE LA LEY QUE
 "REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS
 "PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD
 "TRIBUTARIA. (REFORMAS Y ADICIONES
 "PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
 "FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989)" y
 "cuya transcripción se tiene por hecha a la letra, lo
 "que no se hace por economía procesal.

"Ahora bien, a propósito de la indicada invocación
 "es conveniente precisar que con este novedoso
 "criterio plenario, la honorable Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación se apartó, interrumpiéndolo,
 "del involucrado en sus previas jurisprudencias
 "números 19/1991 y 21/1991, que fueron
 "oficialmente publicadas en la Gaceta del
 "Semanario Judicial durante el indicado año, bajo
 "los rubros: "ACTIVO DE LAS EMPRESAS,
 "IMPUESTO AL. EL ARTICULO 9º DE LA LEY, QUE
 "AUTORIZA EL ACREDITAMIENTO DE LAS
 "CANTIDADES CUBIERTAS POR ESA EXACCION,
 "SOLO PARA QUIENES OBTENGAN UTILIDADES
 "AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL, NO VIOLA EL
 "PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
 "TRIBUTARIA" y "ACTIVO DE LAS EMPRESAS,



**"IMPUESTO AL. EL ARTICULO 9° DE LA LEY, QUE
"AUTORIZA EL ACREDITAMIENTO DE LAS
"CANTIDADES CUBIERTAS POR ESA EXACCION,
"NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
"TRIBUTARIA", las cuales, como se ha dicho,
"definitivamente interrumpió."**

SEXTO. En principio, es pertinente precisar que de la lectura integral de los escritos mediante los que la parte quejosa y la autoridad responsable Presidente de la República, interpusieron sus respectivos recursos de revisión, así como de la que corresponde a la revisión adhesiva que también la quejosa hizo valer, se desprenden algunos argumentos íntimamente relacionados que ameritan un estudio conjunto y otros que por su naturaleza se excluyen, por lo que en esta ejecutoria se hará un examen que seguirá un orden conceptual, que no necesariamente respetará aquél en que los agravios aparecen propuestos por las partes, sino el que permita la lógica, el método judicial y la vinculación de los planteamientos.

En esa tesitura, deben examinarse, inicialmente, los argumentos relativos a la procedencia o improcedencia del juicio de garantías respecto de los diversos actos reclamados y, luego, en su caso, los referentes al fondo del asunto, haciendo para esto remisión expresa a los medios de impugnación en el que aparecen esgrimidos.

SEPTIMO. De acuerdo con la mecánica de estudio antes enunciada, es preciso analizar, en primer lugar, los agravios que

la parte quejosa hace valer en cuanto a los sobreseimientos decretados por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.

Con relación al sobreseimiento que el juez de amparo dictó en el considerando tercero de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público que se hicieron consistir en la aplicación de los ordenamientos legal y reglamentario reclamados, así como en la expedición de las formas oficiales para declarar y pagar el impuesto al activo, la parte quejosa aduce, en su recurso de revisión, que el juzgador omitió expresar los motivos específicos para dejar de tener por reconocidos dichos actos, independientemente de que en términos del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la expedición de los ordenamientos y formas reclamados, no están sujetos a prueba, dado que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, además de que la emisión de la forma es imputable al referido Secretario, el que en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, responde por la expedición de la "Resolución que establece reglas de carácter general aplicables a los impuestos y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior, oficialmente publicada el 29 de marzo de 1996, cuyo anexo 1 recoge, en términos de la Regla 68, los formatos oficiales que nos interesan," lo cual es suficiente para desvirtuar la negativa de su existencia.

Tales argumentos deben desestimarse porque del considerando tercero de la sentencia recurrida se aprecia que el Juez de Distrito señaló al respecto, que la autoridad responsable



Secretario de Hacienda y Crédito Público negó todo acto de aplicación de los ordenamientos legal y reglamentario tildados de inconstitucionales, en perjuicio de la quejosa, y haber expedido las formas oficiales para declarar y pagar el impuesto al activo, pero que tal negativa no fue desvirtuada por la peticionaria de garantías, concluyendo más adelante que, por tanto, lo procedente es el sobreseimiento en cuanto a tales actos, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo. Esta precisión pone de manifiesto que, contrariamente a lo que se aduce, el juzgador federal expresó los motivos específicos por los que no tuvo por existentes a los actos de mérito, siendo en consecuencia infundado el planteamiento relativo:

Además, del artículo 33, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, que se invoca, se desprende la obligación de "las autoridades fiscales" de elaborar los formularios de declaración y distribuirlos con oportunidad, pero no la de publicarlos y menos que esto deba hacerlo directamente el Secretario de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, como lo sostiene la quejosa, por lo que su relativo argumento carece de base legal y es, por tanto, ineficaz para desvirtuar la respectiva consideración del Juez de Distrito.

No está por demás destacar que la negativa formulada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la existencia de los actos de aplicación de las leyes tachadas de inconstitucionales, no puede estimarse desvirtuada con las declaraciones del impuesto exhibidas, ya que este primer acto no proviene de dicha autoridad, sino que fueron las propias

peticionarias de garantías quienes presentaron sus respectivas declaraciones ante el Banco Internacional, sociedad anónima, por lo que, por sí mismas se colocaron (no por algún acto de autoridad) en las relativas hipótesis previstas en la ley.

Por cuanto hace al sobreseimiento que el Juez de Distrito determinó en el considerando tercero de la sentencia recurrida, respecto de los actos reclamados al Administrador Local de Recaudación Sur del Distrito Federal que se hicieron consistir en la aplicación de las normas jurídicas tildadas de inconstitucionales, la parte quejosa señala que el juzgador omitió expresar los motivos específicos para dejar de tener por reconocidos dichos actos, independientemente de que en términos del artículo 86 del Código Federal del Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el derecho no es objeto de prueba, siendo real que los actos de tal autoridad se encuentran publicados de manera periódica en el Diario Oficial de la Federación.

Al respecto, tampoco asiste razón a la parte quejosa, puesto que del mencionado considerando se advierte que el juez de amparo precisó los motivos por los que decretó el sobreseimiento, ya que sostuvo que la citada autoridad responsable negó la existencia de tales actos y tal negativa no fue desvirtuada, por lo que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Asimismo, el planteamiento relativo a la publicación de los actos de la referida autoridad en el Diario Oficial de la Federación, resulta ser una afirmación vaga e imprecisa, dado




que no se señala siquiera por qué se dice que tales actos son publicados en ese diario y, en todo caso, cuándo ocurrió esto.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que aunque dentro de las atribuciones de la mencionada autoridad es evidente que se encuentra la de aplicar las disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo y del Reglamento de tal legislación, para efectos de reclamar en el amparo los actos dimanados de esa facultad, es necesario que aparezcan identificados y demostrados, lo que no acontece en la especie de autos, ya que la parte quejosa realiza una reclamación genérica, esto es, sin distinguir acto preciso alguno, siendo pertinente señalar que ni las declaraciones del impuesto al activo exhibidas son reveladoras de la existencia de un acto de aplicación de la mencionada autoridad, pues como ya antes se dijo, fueron las propias peticionarias de garantías quienes presentaron sus respectivas declaraciones, en diversos días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Banco Internacional, sociedad anónima, por lo que, por sí mismas, se colocaron en las relativas hipótesis legales, no por un acto de autoridad.

Tocante al sobreseimiento decretado en relación con los actos atribuidos al Coordinador y Director de Disposiciones de Banca Central, Director General de Investigación Económica y Director de Información Económica, todos dependientes del Banco de México, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte actualizada una causa de improcedencia que conduce a confirmar aquella determinación y hacerla extensiva a los actos imputados al Gobernador del Banco de México, respecto de los que se negó la protección de la

Justicia Federal, según lo determinado en el considerando quinto de la sentencia recurrida, en relación con la constitucionalidad de los artículos 20, párrafo segundo, y 20 bis, del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, la parte quejosa reclama de los mencionados funcionarios del Banco de México, actos relacionados con la determinación y publicación mensual en el Diario Oficial de la Federación del índice nacional de precios al consumidor, que es empleado en la determinación de contribuciones federales y sus accesorios, en términos de los artículos 20, párrafo segundo, y 20 bis, del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, el Tribunal Pleno de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia identificada con el número 39/92, que más adelante se transcribirá, determinó que el Banco de México  no es autoridad para los efectos del amparo cuando por conducto de sus funcionarios interviene en la determinación y publicación del índice nacional de precios al consumidor, ya que en realidad sólo actúa como órgano auxiliar de carácter técnico.

La aludida jurisprudencia aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 59, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y dos, página 13, que dice:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.

"NO TIENE TAL CARACTER EL BANCO DE

"MEXICO. Este organismo no reúne los atributos



para ser considerado autoridad para los efectos de la Ley de Amparo, pues aun cuando elabora el "índice nacional de precios al consumidor, ello no "significa que actúe como autoridad al "determinarlo, ni que se le deleguen facultades que "corresponden a una autoridad. En realidad, sólo "actúa como un órgano auxiliar de carácter técnico, "obligado por el artículo 20 del Código Fiscal de la "Federación, a calcular un índice económico que es "utilizado en la determinación de ciertas "contribuciones y sus accesorios."

En tales condiciones, respecto de los actos de mérito se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1º, fracción I, de la ley invocada, esta última disposición interpretada en sentido contrario. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la legislación de la materia, debe confirmarse el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida en cuanto los actos atribuidos al Coordinador y Director de Disposiciones de Banca Central, Director General de Investigación Económica y Director de Información Económica, todos dependientes del Banco de México, y revocarse la negativa del amparo determinada en el considerando quinto, tocante de los actos reclamados al Gobernador de la mencionada Institución bancaria, decretándose en su lugar también el sobreseimiento en el juicio.

Debe precisarse que como consecuencia de lo antes determinado, resulta ya innecesario el examen del agravio

expuesto por la quejosa en cuanto al sobreseimiento que el Juez de Distrito decretó respecto de los actos del grupo de funcionarios bancarios antes precisado.

OCTAVO. Por otra parte, es pertinente advertir que de los escritos de la quejosa correspondientes al recurso de revisión y a la adhesión que hizo valer, se evidencia que no formula ningún agravio en contra de la negativa del amparo decretada por el Juez de Distrito en el resolutivo segundo de la sentencia recurrida, en términos del considerando quinto del mismo fallo, esto es, la tocante a los actos relacionados con los artículos 20, segundo párrafo y 20 bis del Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia, tal determinación debe tenerse firme, dado que la parte quejosa, a la que en todo caso pudiera reportarle algún perjuicio, no esgrime ningún agravio tendiente a controvertirla.

SECRETARÍA
DE JUSTICIA
FEDERAL

NOVENO. A continuación, debe abordarse el examen de los argumentos de la responsable que giran en torno a las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito para desestimar las causas de improcedencia propuestas a nombre del Presidente de la República; así, paralelamente, el de los agravios que sobre el particular se hacen valer por esa autoridad, y el de los planteamientos que para robustecer dichas consideraciones la parte quejosa expone en su escrito de adhesión a la revisión; siendo tal estudio de orden preferente por versar sobre la procedencia del juicio de amparo que es de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.



En nombre del Presidente de la República se aduce, en el primero de los agravios, que contrariamente a lo estimado por el Juez de Distrito, el decreto impugnado no crea una nueva ley que modifique la situación jurídica de las quejasas, ya que siendo empresas que poseen activos, esto las sujetaba al pago del impuesto desde antes de la reforma del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, habiendo consentido la constitucionalidad de la ley, puesto que se la autoaplicaron al efectuar sus correspondientes pagos del impuesto al activo, con anterioridad a la declaración provisional que presentaron, la que no constituye el primer acto de aplicación del ordenamiento legal reclamado, ya que como lo reconocen en su demanda de garantías, específicamente en la página 11, cuarto párrafo, fueron contribuyentes del mismo tributo desde antes de la reforma impugnada, bajo la anterior estructura de la ley y del reglamento de la materia, lo cual implica que se sujetaron a sus disposiciones, consintiendo la manifestación que hace prueba plena en su contra como confesión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

También, por la mencionada autoridad responsable se expone que las reformas a la Ley del Impuesto al Activo no generan el interés jurídico de las quejasas para impugnar la ley en relación con los artículos que no fueron reformados, ya que no entró en vigor una nueva Ley del Impuesto al Activo, sino que es la misma que existía antes de la fecha citada, con la única variante de que sufrió reformas, que no por ese hecho la convirtieron en un nuevo ordenamiento legal, por lo que resulta

infundada la afirmación del juzgador en la que considera que por el hecho de que la Ley del Impuesto al Activo se reformó, las quejas tienen derecho a reclamar los mismos dispositivos de la ley que con anterioridad consintieron, porque a su juicio las resujetó, en tanto, contrario a esto, las quejas sólo tenían interés jurídico para reclamar los dispositivos legales que fueron reformados el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, siempre que éstos lesionen su esfera jurídica, más no toda la mecánica de causación que consintieron al enterar el tributo respectivo. Que en este sentido, si determinado artículo de la Ley del Impuesto al Activo, reformado a partir del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, les causaba un agravio, debieron impugnarlo y no otros que les fueron aplicados con anterioridad y que por ese mismo hecho consintieron.

En cambio, las quejas aducen en su revisión adhesiva, que son correctas las mencionadas consideraciones del Juez de Distrito, ya que a partir de que entró en vigor la reforma reclamada, quedaron resujetadas al pago del impuesto al activo, pues aunque antes de ésta pagaban el tributo, lo hacían bajo una estructura legal y reglamentaria distinta y en la prevista en la reforma de nueva cuenta se les incluye como sujetos, lo que les permite reclamar la inconstitucionalidad de todo el sistema del impuesto, a pesar de que algunas de las disposiciones de la ley tengan el mismo texto que las anteriores o hayan permanecido inalteradas, siendo aplicable sobre el particular el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia al resolver el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el incidente de inejecución de sentencia 142/94, relativo al juicio de amparo promovido por la empresa



denominada Porcelanite, sociedad anónima de capital variable (consideraciones de la sentencia respectiva que transcribe).

Para abordar con mayor información el examen de tales argumentos, es preciso tomar en consideración que en la demanda de amparo, las quejasas realizan afirmaciones genéricas en cuanto a que reclaman todos los preceptos de la Ley del Impuesto al Activo en vigor; sin embargo, de la lectura integral de esa demanda se desprende con claridad que sólo precisan tal impugnación constitucional en relación con los artículos 1º, 2º, 2º-A, 3º, 5º, párrafo segundo, 5º-B, 6, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, del citado ordenamiento; asimismo, se impone hacer alusión al hecho de que en los conceptos de violación aducen, esencialmente, que tales disposiciones de la ley infringen en su perjuicio las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad contenidas en el artículo 31, fracción IV; la garantía de igualdad tutelada en los artículos 1º y 13; las garantías de orden económico previstas por los artículos 25, antepenúltimo y último párrafos y 26; y la garantía de competencia constitucional, prevista en el artículo 16, primer párrafo, en relación con los artículos 73, fracciones VII y XXIX, 115, fracción IV, inciso a), 117, fracciones IV a VII, 118 y 124, todos de la Constitución General de la República.

De modo particular, en los conceptos de violación de la demanda de amparo, las quejasas hacen referencia a la circunstancia de que tales garantías se vulneran porque no se grava la totalidad de los activos afectos a la intermediación financiera (artículo 1º, párrafo tercero); respecto de la tasa del 1.8% para fijar el monto del impuesto (artículo 2º, párrafo

primero); en relación con la base gravable, por virtud de la confusión e incertidumbre en el procedimiento previsto para el cálculo del impuesto (artículos 2º y 3º); en cuanto a la capacidad contributiva reflejada en los pagos provisionales (artículo 2º-A); tocante de los sujetos del impuesto, al exceptuar de la autorización de deducir las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en el extranjero, a aquéllas que hubieren sido contratadas con el sistema financiero o con su intermediación (artículo 5º, párrafo segundo); por el establecimiento de un régimen de tributación especial -en cuanto a la determinación de la base gravable- para las empresas que componen el sistema financiero (artículo 5º-B, en relación con el 1º, párrafo tercero); al exentar del pago del impuesto a determinados contribuyentes (artículo 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo); por la existencia y determinación de los pagos provisionales del impuesto (artículo 7º); e igualmente respecto del sujeto, el derecho de acreditamiento de la garantía mínima presunta (artículo 9º). Asimismo, controvierten la competencia del Congreso de la Unión para establecer dicho tributo, por estimar que se legisla sobre propiedad inmobiliaria, cuya facultad para su establecimiento está conferida a las legislaturas de los Estados, y en beneficio de los Municipios y, además, refieren que el impuesto al activo por afectar el patrimonio de los contribuyentes tiende a destruir la fuente de riqueza, convirtiéndose en ruinoso y lesivo para la actividad económica, desalentando la inversión y propiciando a la postre una baja recaudación tributaria.

Como puede advertirse del panorama general descrito, los planteamientos formulados por las quejas están dirigidos a



• cuestionar algunos de los elementos esenciales del impuesto referido, que se encuentran contenidos en los preceptos citados de la Ley del Impuesto al Activo.

Así, la nota común de la argumentación jurídica expuesta en los conceptos de violación es que se impugna el establecimiento mismo del tributo, ya porque en la determinación de algunos de sus elementos esenciales se infringen los principios constitucionales de las contribuciones, o bien, porque el órgano legislativo que expidió la Ley del Impuesto al Activo carece de competencia para tal efecto.

Según puede advertirse de lo anterior, se trata de aspectos vinculados con la obligación tributaria relativa al impuesto al activo, en los cuales se comprenden, inclusive, las reformas introducidas a la Ley del Impuesto al Activo, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis. Debe precisarse que el texto de los artículos 2º, 2º-A, 3º, 5º párrafo segundo, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, no fue tocado por esta última reforma; luego, estos preceptos legales rigen la situación de las quejas, por lo menos desde el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, en que ya existían y entró en vigor la reforma inmediata anterior a la del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, esto es, aquella que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, mientras que respecto del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo, sus dispositivos tildados de inconstitucionales han permanecido inalterados y han regulado la situación de las peticionarias de

garantías desde antes de esas fechas, pues su última modificación data del cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, en que cobró vigencia la adición a su artículo 16, publicada en el citado Diario del día cuatro de octubre del mencionado año.

Sobre las anteriores premisas, es necesario establecer que el sistema de causación previsto en la Ley del Impuesto al Activo, contrariamente a lo afirmado por el Juez de Distrito, en términos generales permaneció inalterado pese a las reformas del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, por cuanto hace a los artículos 2º, 2º-A, 3º, 5º, párrafo segundo, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º; excepto por lo que toca al régimen tributario atinente a las empresas que componen el sistema financiero (artículos 1º y 5º-B, vigentes a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y seis), aspectos que las empresas quejasas también impugnaron en el juicio de amparo; sin embargo, es inexacta la consideración del juzgador de amparo en el sentido de que la adición introducida al artículo 1º, por haber alterado el contenido de esta norma, dio lugar, con ello, a que cualquier sujeto del impuesto al activo esté en aptitud jurídica de impugnar en la vía de amparo la totalidad de las disposiciones integrantes de la Ley del Impuesto al Activo y las del Reglamento de esta legislación, si ya habían consentido los preceptos no reformados.

Para demostrar el anterior aserto resulta indispensable esclarecer si la reforma o adición parcial de un ordenamiento, da derecho a los afectados para poder impugnar, además de las disposiciones legales reformadas o adicionadas, todos los demás



preceptos de tal ordenamiento y los ordenamientos reglamentarios relativos.

A efecto de decidir esta cuestión, es conveniente tener presente el criterio de que las quejas hacen referencia en su revisión adhesiva, sustentado por este Tribunal Pleno, al resolver el diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de diez votos, el incidente de inejecución 142/94 deducido del juicio de garantías promovido por la empresa denominada Porcelanite, sociedad anónima de capital variable, en cuya respectiva resolución se externaron las consideraciones que a continuación se transcriben, con la que los señores Ministros Aguirre Anguiano y Godínez Pelayo, manifestaron no estar de acuerdo:

...Toca ahora analizar la eficacia temporal del fallo protector, considerando que la autoridad responsable funda parcialmente su negativa a "devolver a la quejosa el impuesto pagado, en la "circunstancia de que el artículo 10 de la Ley del "Impuesto sobre la Renta ha sufrido reformas por "virtud de dos decretos posteriores al que diera "lugar al juicio de amparo, publicados en el Diario "Oficial de la Federación de los días veintiocho de "diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y "tres de diciembre de mil novecientos noventa y "tres.

"Como consecuencia de la primera de las reformas "indicadas, se modificó el primer párrafo del

"artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
"para quedar como sigue: (se transcribe).

"A partir de la segunda reforma, el texto de este
"numeral en la parte que se analiza dice: (se
"transcribe).

"A propósito de estas reformas, asevera la
"quejosa que la concesión del amparo la protege
"no sólo contra la tasa del 35% vigente hasta el año
"de mil novecientos noventa y tres, sino también
"contra la tasa del 34% vigente a partir de
"entonces, que adolece del mismo vicio atribuido a
"la tasa anterior, mientras que la autoridad estima
"que el efecto del amparo se constriñe únicamente
"al periodo durante el cual prevaleció el primer
"párrafo del artículo 10 de la ley en cita con la
"redacción que tenía al promoverse el juicio de
"amparo, considerando que se está en presencia
"de nuevos actos legislativos ajenos a la eficacia
"tutelar del fallo.

"A juicio de este alto tribunal, la solución de la
"cuestión propuesta deriva de la exacta aplicación
"al caso del principio de relatividad de la sentencia
"de amparo.

"Es indudable que, como ya ha sido precisado,
"con arreglo al principio de la relatividad, la
"eficacia protectora de una sentencia de amparo no
"puede alcanzar un objeto distinto de aquel que fue
"materia de la declaratoria de inconstitucionalidad,
"de modo que los efectos tutelares del fallo federal
"subsisten en tanto subsista el acto respecto del



"cual se dictó, y cesa cuando se extinguen los
"efectos vinculantes de dicho acto sobre el
"quejoso.

"Esta regla, cuya aplicación se admite
"ordinariamente tratándose de amparos
"concedidos en contra de actos reclamados de
"naturaleza administrativa y judicial, es aplicable
"igualmente al juicio contra leyes, pues ha de
"tenerse presente que la ley, en cuanto es objeto
"de reclamación ante el tribunal, no es sino un acto
"del poder legislativo, esto es, una manifestación
"de voluntad del órgano constitucional investido de
"la facultad normativa de carácter innovador.

"Como manifestación de voluntad del órgano
"legislativo, la creación y extinción de la ley están
"determinadas por las reglas constitucionales, ya
"federales, ya locales, que establezcan el
"procedimiento y las formalidades a observar al
"efecto, reglas de entre las cuales interesa
"destacar en el caso concreto la prevista en el
"artículo 72 de la Constitución General de la
"República, en la parte que dice:

"ARTICULO 72. Todo proyecto de ley o decreto,
"cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
"Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas,
"observándose el Reglamento de Debates sobre la
"forma, intervalos y modo de proceder en las
"discusiones y votaciones.

"F). En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación."

"La observancia de la regla consagrada en este numeral, de la cual deriva que la extinción de un acto legislativo (vía la derogación) se produce a través de otro acto dictado conforme al mismo procedimiento y a las mismas formalidades que dieron nacimiento a aquél -principio conocido como de autoridad formal de la ley o de congelación de rango- conduce forzosamente a la conclusión de que el efecto de una sentencia de amparo contra leyes únicamente protege al gobernado en contra del acto legislativo que dio origen al texto declarado inconstitucional, pero no lo protege en contra de actos legislativos ulteriores.

"En este sentido, basta considerar que el efecto del amparo se constriñe a una norma legal, tal como resultó redactada con motivo de un acto legislativo concreto, para concluir que cualquier modificación de ese texto legal derivada de un acto legislativo posterior, no queda comprendida dentro de la eficacia protectora del fallo, ni siquiera en el supuesto de que pueda parecer que dicha modificación no altera en esencia el contenido de la regla original tal como fue declarada inconstitucional por el juez de amparo, porque el nuevo texto de la norma ha resultado de

SUPREMA
JUSTICIA DE
REPUBLICA



"un nuevo procedimiento legislativo y de otro
"pronunciamiento del legislador.

"Estas reflexiones conducen a estimar que en la
"especie, la eficacia protectora de la sentencia de
"amparo sólo pudo subsistir mientras permaneció
"inalterado el primer párrafo del artículo 10 de la
"Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, hasta
"antes de su reforma por el decreto publicado en el
"Diario Oficial de la Federación del día veintiocho
"de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve,
"decreto en cuyos términos se dispuso:

"ARTICULO DECIMO. Se reforman los artículos ...
"10, primer párrafo, ... de la propia Ley del
"Impuesto sobre la Renta para quedar como
"sigue:..."

"De tal manera este órgano reitera el criterio de que
"la producción de un nuevo acto legislativo, que
"reforma o modifica un texto legal declarado
"inconstitucional por una sentencia de amparo,
"hace procedente la promoción de un nuevo juicio
"de amparo por todos aquéllos que se vean
"afectados por el mismo, incluyendo a quienes
"hayan obtenido una sentencia de amparo en
"contra del texto vigente con anterioridad a dicha
"reforma, porque se trata de actos distintos que
"deben ser por lo tanto objeto de distintas acciones
"impugnativas.

"Este criterio da coherencia al sistema del juicio de
"amparo y además garantiza con toda plenitud la
"defensa de los gobernados, en cuanto les permite

"impugnar cada pronunciamiento del órgano
 "legislativo, no sólo cuando reforma parcial o
 "totalmente un texto preexistente, sino inclusive
 "cuando reproduce en términos idénticos un texto
 "anterior como acontece, por ejemplo, tratándose
 "de leyes tributarias de vigencia anual- según se
 "precisa ahora y se sostiene en la tesis
 "jurisprudencial que aparece actualmente
 "publicada con el número noventa y uno del tomo I,
 "Materia Constitucional, del Apéndice en mención,
 "la cual declara procedente la acción de amparo en
 "aquellos casos en que se reclama una ley, a pesar
 "de que la quejosa se haya sometido a una ley
 "anterior de igual contenido.

"La tesis de mérito dice:

"CONSENTIMIENTO. NO EXISTE RESPECTO DE
 "NORMAS QUE CONTEMPLAN SITUACIONES
 "JURIDICAS IGUALES A LAS PREVISTAS EN UN
 "ORDENAMIENTO ANTERIOR CONSENTIDO. Aun
 "cuando un quejoso se hubiere sometido a las
 "disposiciones contempladas por una ley anterior,
 "recogidas en una nueva y reclamada en amparo,
 "ello de ninguna manera puede implicar que las
 "nuevas normas resulten derivadas de aquéllas
 "que fueron consentidas, ya que, desde el punto de
 "vista formal y material, son actos legislativos
 "distintos."

Este criterio aplicado al caso de que se trata en el que se
 discute la procedencia del juicio de amparo indirecto, permite



establecer que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese pronunciamiento específico del legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquéllos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria, común y corriente con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian.

En el mismo orden de ideas, es preciso destacar que la razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de un artículo reformado, es la de que conforme al artículo 72, inciso f), de la Constitución General de la República, dicho precepto reformado constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal); de ahí que, en principio, sólo respecto de él se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos del relativo ordenamiento jurídico, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si por su sola vigencia le causaron perjuicio (llamados de naturaleza autoaplicativa) o si requiriendo de un acto de aplicación para causar perjuicio (heteroaplicativos), le fueron aplicados, y en cualquiera de esas hipótesis no los reclamó oportunamente en el juicio de amparo.

De esta guisa resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinado ordenamiento legal, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás del relativo cuerpo

normativo que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma, como ya se indicó.

En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Pleno al resolver, en la sesión del diez de julio de mil novecientos noventa y siete, los juicios de amparo en revisión números 2648/96, 2908/96, 2913/96, 2914/96 y 3035/96, promovidos, respectivamente, por Bombardier Concarril, sociedad anónima de capital variable, Arrendadora Huemex, sociedad anónima de capital variable, Embutidos Selectos, sociedad anónima de capital variable, Dorothy Gaynor, sociedad anónima de capital variable e Industrias Vinícolas Pedro Domec, sociedad anónima de capital variable.

Sobre el particular, este Tribunal Pleno hace suyo el criterio plasmado en la tesis CXLIV/97, sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo en revisión número 1918/97 promovido por Zapatería La Rua, sociedad anónima de capital variable, que dice:

**"LEYES, AMPARO CONTRA. LA REFORMA DE UN
"PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODO EL
"ORDENAMIENTO JURIDICO, SINO SOLO EL**



AMPARO EN REVISION: 2695/96

"PRONUNCIAMIENTO ESPECIFICO DEL
"LEGISLADOR Y LOS ARTICULOS QUE RESULTEN
"DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que
"se admite la procedencia del juicio de garantías en
"contra de una norma general que es reformada, es
"la de que de acuerdo con el artículo 72, inciso f),
"de la Constitución General de la República,
"constituye un acto nuevo (principio de autoridad
"formal), por lo que, en principio, sólo respecto de
"ella se actualiza la procedencia del amparo y no
"en contra de los demás preceptos del
"ordenamiento jurídico, los que deben estimarse ya
"consentidos por el gobernado si no los reclamó
"dentro de los plazos previstos al respecto por la
"Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto
"legislativo que reforma o modifica un texto legal,
"da derecho a impugnar, a través del juicio de
"amparo, el pronunciamiento específico del
"legislador y, además, los preceptos que con el
"mismo acto se vean directamente afectados en
"cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal
"modo que por su causa se varíe la situación que
"bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que
"simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo
"normativo guardan una relación ordinaria y común
"con el que fue materia de la reforma y cuyas
"hipótesis de observancia o aplicación, por parte
"del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa
"resulta que no basta que se actualice la reforma o
"adición de un precepto de determinado

CORTE DE
 LA NACION
 SAL DE JUSTICIA

"ordenamiento jurídico, para que puedan
 "combatirse en la vía constitucional, además de
 "ese dispositivo, todos los demás del relativo
 "cuerpo normativo que guarden una relación
 "ordinaria con el reformado en virtud de la
 "integración que debe tener cualquier sistema
 "legal, pues lo que autoriza su impugnación
 "constitucional, paralela a la reforma legislativa, es
 "la existencia del cambio formal, que desde el
 "punto de vista constitucional, lo convierte en un
 "acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que
 "también puedan reclamarse aquéllas
 "disposiciones sobre las que repercuta
 "directamente la reforma."

Con el propósito de someter a los artículos del decreto
 publicado el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, a
 los principios enunciados, es necesario conocer el texto íntegro
 del citado decreto, pero antes lo dispuesto por el artículo 1º de la
 Ley antes de la reforma de mérito, en la parte referida a la Ley
 del Impuesto al Activo. En lo conducente, tal decreto es del
 siguiente tenor:

"ARTICULO TERCERO. Se REFORMAN los
 "artículos 1º, primer párrafo; 6º, fracción V, y el
 "antepenúltimo párrafo 13-A, fracciones I y II; se
 "ADICIONAN los artículos 1º, con un tercer párrafo;
 "2º-BIS, que se ubicará inmediatamente después
 "del artículo 2º; 5º-A, con un tercer párrafo y 5º-B; y



se DEROGA el artículo 6º, fracción II, de la Ley del
"Impuesto al Activo, para quedar como sigue:

"Artículo 1º. Las personas físicas que realicen
"actividades empresariales y las personas morales,
"residentes en México, están obligadas al pago del
"impuesto al activo, por el activo que tengan,
"cualquiera que sea su ubicación. Las residentes
"en el extranjero que tengan un establecimiento
"permanente en el país, están obligadas al pago del
"impuesto por el activo atribuible a dicho
"establecimiento. Las personas distintas a las
"señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o
"goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen
"en la actividad de otro contribuyente de los
"mencionados en este párrafo, están obligadas al
"pago del impuesto por su activo fijo, y terrenos
"por los que obtengan ingresos a los que se refiere
"el Capítulo III del Título IV y los artículos 133,
"fracción XIII y 148-A, de la Ley del Impuesto sobre
"la Renta.

"Las empresas que componen el sistema
"financiero están obligadas al pago del impuesto
"por su activo no afecto a su intermediación
"financiera.

"Artículo 2º-BIS. Las personas físicas que otorguen
"el uso o goce temporal de inmuebles, que se
"utilicen por otro contribuyente del impuesto, para
"determinar el monto original de los mismos,
"estarán a lo siguiente:

"I. Determinarán por separado el monto original de
 "la inversión del terreno y de las construcciones,
 "considerando el valor declarado en la escritura
 "notarial en la que conste la adquisición. Cuando
 "en dicha escritura no se hubiera hecho la
 "separación de dicho monto para el terreno y las
 "construcciones, los contribuyentes considerarán
 "las proporciones que para el terreno y las
 "construcciones, se hayan dado en el avalúo
 "practicado a la fecha de la adquisición del bien de
 "que se trate, o considerarán las proporciones que
 "aparezcan en los valores catastrales que
 "correspondan a la fecha de adquisición.

"En el caso de que no puedan determinarse las
 "proporciones señaladas en el párrafo anterior, se
 "considerará que del monto original de la inversión
 "del bien de que se trate, el 80% corresponde a las
 "construcciones y el 20% al terreno.

SUPREMA
 JUSTICIA DE
 FISCALIA

"II. Cuando no se pueda determinar el monto
 "original de la inversión de un inmueble, se
 "considerará como dicho monto, el que resulte
 "conforme a lo siguiente:

"a). En el caso de las construcciones, mejoras o
 "ampliaciones del inmueble, se considerará como
 "monto el valor que se contenga en el aviso de
 "terminación de obra. En caso de que no se
 "consigne el valor correspondiente en el aviso de
 "terminación de obra o de que no exista la
 "obligación de dar dicho aviso, se considerará
 "como monto original de la inversión de las



construcciones, mejoras o ampliaciones del inmueble, el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referido a la fecha en que las mismas se hayan terminado.

b). Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1º de enero de 1981, se considerará como monto el que haya servido para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos del impuesto sobre la renta. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste se considerará el monto original de la inversión referido a la fecha de adquisición.

c). Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, incluyendo las donaciones efectuadas por la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios u organismos descentralizados, se considerará el monto original de la inversión que dicho bien haya tenido para el autor de la sucesión o para el donante, respectivamente. Si no pudiera determinarse dicho monto, se considerará como tal el 80% del valor del avalúo practicado al bien de que se trate referido al momento de la adjudicación o de la donación, según corresponda.

d). Tratándose de bienes adquiridos por prescripción, se determinará su monto original de

"la inversión conforme al avalúo que haya servido
 "de base para el pago de impuestos con motivo de
 "la adquisición. Si en la fecha en que se adquirió
 "no procedió la realización del avalúo, se efectuará
 "uno referido al momento en que la prescripción se
 "hubiera consumado, independientemente de la
 "fecha de la resolución que la declare. Cuando no
 "pueda determinarse la fecha en que se consumó
 "la prescripción adquisitiva, se tomará como tal
 "aquella en que se haya promovido ésta.

"Cuando para determinar el monto original de la
 "inversión de un bien base de este impuesto, se
 "deba realizar un avalúo en los términos de esta
 "fracción, el contribuyente podrá acreditar el costo
 "del avalúo contra los pagos provisionales del
 "impuesto y el correspondiente al del ejercicio en
 "que se efectuó dicho avalúo.

"Artículo 5º-A...

"Para los efectos de lo dispuesto en el primer
 "párrafo de este artículo los contribuyentes
 "actualizarán el impuesto que les hubiera
 "correspondido de no haber ejercido la opción a
 "que se refiere este precepto.

"Artículo 5º-B. Las empresas que componen el
 "sistema financiero considerarán como activo no
 "afecto a su intermediación financiera, los activos
 "fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos,
 "que no respalden obligaciones con terceros
 "resultantes del desarrollo de su actividad de
 "intermediación financiera de conformidad con la

SUPREMA
 JUSTICIA DE
 FEDERACION



"legislación aplicable. No se incluirán los activos
"que por disposición legal no puedan conservar en
"propiedad. Estos contribuyentes sólo podrán
"deducir del valor del activo, las deudas
"contratadas para la adquisición de los activos
"mencionados, siempre que reúnan los requisitos a
"que se refiere el artículo 5º de esta ley.

"Artículo 6º...

"I...

"II. (Se deroga).

"III y IV. ...

"V. Las personas físicas residentes en México que
"no realicen actividades empresariales y otorguen
"el uso o goce temporal de bienes a las personas a
"que se refiere la fracción I de este artículo,
"únicamente por dichos bienes.

"VI....

CORTE DE
LA N.
DE ACUERDOS.

"Las personas a que se refiere la fracción I de este
"artículo que mantengan los inventarios a que se
"refiere el párrafo segundo del artículo 1º de esta
"ley, o que otorguen el uso o goce temporal de
"bienes que se utilicen en la actividad de un
"contribuyente de los mencionados en el artículo 1º
"de esta ley, a excepción de las que estén
"autorizadas para recibir donativos deducibles para
"efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en
"los términos de la fracción I del artículo 24 y
"fracción IV del artículo 140 de dicha ley, pagarán
"el impuesto por dichos bienes.

"Artículo 13-A...

**"I. En el ejercicio en que se efectúe la escisión y el
"siguiente, para efectos de los párrafos tercero y
"quinto del artículo 7º de esta ley, determinarán el
"monto de los pagos provisionales del periodo que
"corresponda, considerando el impuesto
"actualizado del último ejercicio de 12 meses de la
"sociedad antes de la escisión, en la proporción en
"que, a la fecha de la escisión, participe cada una
"de ellas del valor de su activo a que se refiere el
"artículo 2º de la misma, después de disminuirle en
"la misma proporción las deudas deducibles,
"existentes a la misma fecha, en los términos del
"artículo 5º de este ordenamiento. El impuesto del
"último ejercicio de 12 meses se actualizará por el
"periodo comprendido desde el último mes del
"ejercicio inmediato anterior al de 12 meses, hasta
"el último mes del ejercicio inmediato anterior
"aquel por el cual se calcula el impuesto.**

SUPREMA
COURT
OFFICE
SECRETARY GENL

**"II. La sociedad escidente acreditará en el
"ejercicio de que se trate, la totalidad de los pagos
"provisionales enterados en dicho ejercicio, con
"anterioridad a la escisión, incluso cuando los
"pagos provisionales los hubiera efectuado de
"conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º-A
"de esta ley. En ningún caso las sociedades
"escindidas podrán acreditar los pagos
"provisionales realizados por la escidente."**



AMPARO EN REVISION: 2695/96

Como es fácil de advertir el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo, no sufrió modificación alguna en cuanto al régimen general de contribuyentes, sino sólo fue adicionado, por una parte, en lo relativo a la categoría de contribuyentes que conforman los arrendadores no empresarios, mediante la precisión de su base, y, por otra, a través de la inclusión de una nueva categoría de sujetos integrada por las empresas que componen el sistema financiero. Por consiguiente, la adición al artículo en comento no modificó en forma alguna el sistema general del tributo, ni tampoco afectó en su sentido, alcance o aplicación a otros preceptos ajenos al decreto del diez de mayo de mil novecientos noventa y siete, por lo que al tenor de las reflexiones precedentes resulta obligado concluir que tal adición, no hace renacer el derecho a impugnar en la vía constitucional otros dispositivos legales diversos al decreto de reforma en comento que ya hubieran sido consentidos por la parte quejosa al haberle sido aplicados y no haberlos reclamado dentro de los plazos previstos al respecto por la Ley de Amparo.

CORTE DE
JURISPRUDENCIA
FEDERAL

Debe recordarse que, como ya se indicó, las quejas hacen valer violaciones constitucionales, en relación, entre otros, con los artículos 1º, 2º, 2º-A, 3º, 5º-B, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, los que ameritan distinto trato desde el punto de vista de la oportunidad de la demanda.

La afirmación precedente pretende justificarse, según lo manifestaron las empresas quejas en su demanda de garantías, en que el primer acto de aplicación de la Ley y Reglamento tildados de inconstitucionales, el cual hacen derivar

de la vigencia de la reforma a la ley, en vigor desde el once de mayo de mil novecientos noventa y seis_ se actualizó el uno de julio de ese mismo año, fecha en la que coincidentemente, presentaron sus respectivas declaraciones de pago provisional del impuesto al activo, correspondientes al mes de mayo, mientras que las autoridades responsables señalaron en sus informes justificados, que esas declaraciones provisionales no constituyen el primer acto de aplicación de los ordenamientos legal y reglamentario, pues con anterioridad, las peticionarias de garantías ya eran sujetas del tributo; de modo tal que las declaraciones provisionales mencionadas, en todo caso, sólo constituirían el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto al Activo, pero respecto de las normas modificadas o adicionadas mediante el decreto legislativo publicado el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el Diario Oficial de la Federación, aspecto sobre el cual se insiste en los agravios aducidos en nombre del Presidente de la República.

SUPREMA
JUSTICIA DI

Sobre el particular, es necesario precisar que en el expediente de amparo las quejas exhibieron, entre otros documentos, copia fotostática certificada de las declaraciones provisionales de pago del impuesto al activo de que hacen mención, es decir, de las que presentaron el uno de julio de mil novecientos noventa y seis, por el mes de mayo del mismo año, exhibiendo también copias de las declaraciones de pago de ese tributo correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco; presentadas, el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, por Inmobiliaria Plaza Opción Altavista, sociedad anónima de capital variable; el veinte de marzo del mismo año, por Promotora Fusión, sociedad anónima de capital variable; y el uno de abril



por Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, sociedad anónima de capital variable, Opción Jamantab, sociedad anónima de capital variable, Servicios Corporativos GC, sociedad anónima de capital variable y Corporativo Opción Santa Fe II, sociedad anónima de capital variable.

Conviene recordar que la última reforma incorporada a la Ley del Impuesto al Activo, anterior a la que inició su vigencia el once de mayo de mil novecientos noventa y seis, fue la publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, mientras que la última modificación al Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo cobró vigencia a partir del cinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, por lo cual se dijo que la obligatoriedad de los artículos 2º, 2º-A, 3º, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, y de las disposiciones del mencionado Reglamento, rigen la situación de las quejas a partir de las fechas últimamente mencionadas.

De lo anterior cabe deducir que los artículos 2º, 2º-A, 3º, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, así como las disposiciones del Reglamento de esa ley, ya estaban en vigor desde el año de mil novecientos noventa y cinco, y que desde entonces las empresas quejasas ya eran sujetos del tributo, según lo demuestran las declaraciones del impuesto al activo que por el ejercicio fiscal de ese año presentaron y la confesión que al respecto expusieron en su demanda de garantías, además de que tocante a dichos preceptos legal y reglamentario no tiene repercusión directa el

decreto publicado el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, pues además de no haberlos modificado en forma alguna, tampoco resultan afectados en su sentido, alcance o aplicación, por lo que mantienen a las quejas en la misma situación que prevalecía antes de la última reforma; por lo tanto, debe considerarse que, por lo menos, desde las indicadas fechas en que respectivamente presentaron sus declaraciones anuales del tributo (dieciocho y veinte de marzo, y uno de abril) se actualizó el primer acto de aplicación de las disposiciones precitadas; por tanto, es claro que la presentación de la demanda relativa, después de más de tres meses, a señalar, el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis, es sobre el particular extemporánea.

Las reflexiones expuestas con antelación, revelan actualizada respecto de los precitados artículos de la Ley del Impuesto al Activo y de la totalidad de disposiciones del Reglamento de la misma ley, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 21, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el examen de los autos del juicio de amparo revela claramente que las quejas presentaron su demanda constitucional cuando ya había fenecido el término de quince días previsto por el citado artículo 21.

Sobre el tópico en comento, se impone destacar que no es aplicable la tesis que la parte quejosa invoca y transcribe en el capítulo de conceptos de violación de su demanda de garantías, cuya sinopsis es la siguiente:



DEMANDA DE AMPARO. PRESENTACION

"OPORTUNA RESPECTO DE UNA LEY, CUANDO

"SU APLICABILIDAD ESTA SUJETA A LA

"VIGENCIA DE OTRA POSTERIOR. Si una ley

"establece determinadas reglas cuya aplicabilidad

"está sujeta a lo que prevenga otro ordenamiento

"de vigencia posterior, es evidente que los efectos

"jurídicos de la primera se actualizan hasta que

"adquiere obligatoriedad el segundo, que resulta

"ser el susceptible de causar el perjuicio a los

"destinatarios de aquélla y, ante esa circunstancia,

"si la demanda de amparo se presentó

"oportunamente por lo que ve al último, lo mismo

"debe considerarse por lo que respecta a la ley con

"vigencia anterior."



CORRE DE
LA NACION
IN EL MUNDO

Facil resulta apreciar que el criterio que desarrolla la tesis en estudio, parte de la premisa relativa a la existencia de una ley que prevé determinadas reglas cuya aplicación está sujeta a lo que prevenga otro ordenamiento de vigencia posterior; hipótesis no actualizada en el caso, pues la aplicación de los artículos 2º, 2º-A, 3º, 6º, Fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, en ningún momento se encontraba condicionada a la reforma del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, sino que se encontraban en vigor y por tanto, sus efectos jurídicos se actualizaron, sin sujeción alguna, desde antes de esa reforma, siendo susceptibles de causar el perjuicio a sus destinatarios, por lo que a pesar de que la demanda de amparo se haya presentado oportunamente

respecto de los preceptos reformados, resulta extemporánea con relación a los no tocados por el mencionado acto legislativo.

Cabe agregar en apoyo a la postura de que no es aplicable la tesis en comento, que si bien es criterio de esta Suprema Corte de Justicia, plasmado en la resolución relativa al incidente de inejecución 142/97 deducido del juicio de amparo promovido por Porcelanite, sociedad anónima de capital variable (antes reseñada) y en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, que es posible promover el amparo contra disposiciones o leyes nuevas, no lo es en contra de los preceptos ya existentes y consentidos, como en la especie ocurre con los artículos 2º, 2º-A, 3º, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo.

De acuerdo con lo antes expuesto, es de concluirse que son incorrectas las consideraciones que el Juez de Distrito externó para sostener al respecto la procedencia total del juicio constitucional; en consecuencia, al estimar que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio en relación con los actos vinculados con los artículos 2º, 2º-A, 3º, 6º, fracciones I, III y VI, antepenúltimo párrafo, 7º y 9º, de la Ley del Impuesto al Activo, y con las disposiciones del Reglamento de esa Ley.

En cambio, es necesario precisar que respecto de los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, su primer acto de aplicación debe estimarse actualizado en las declaraciones provisionales del tributo que las quejasas



presentaron el uno de julio de mil novecientos noventa y seis; de esto se sigue que si la demanda de amparo se recibió el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la presentación de la misma es oportuna, se insiste, sólo en cuanto a los actos reclamados en relación con los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, pues se interpuso dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Diverso tratamiento amerita el examen de la procedencia de la reclamación constitucional que se endereza en contra del artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, aspecto que será abordado en el considerando siguiente.

DECIMO. Respecto del mencionado artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, si bien no se actualiza la extinguida causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, en relación con el artículo 21, ambos de la Ley de Amparo, por la razones que más adelante se precisarán, este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que se surte otra diversa que conduce a confirmar el sobreseimiento decretado sobre la particular.

Es importante destacar que cuando en la revisión se advierte la existencia de una causa diferente a la que se estimó actualizada o a la desestimada por el juzgador de primer grado o la actualización de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el

particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Corrobora esta aseveración lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, particularmente su fracción III, precepto que dice:

ARTICULO 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

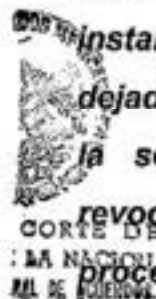
II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias;

III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él



en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, y

IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley;



V. (DEROGADA, D.O. 20 DE MAYO DE 1986)

VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.

De este precepto se desprende que establece las reglas que deben seguirse al resolverse el recurso de revisión, entre las que se encuentran, la de estudiar los agravios aducidos y, en su caso, los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador y considerar las pruebas que fueron rendidas, disponiendo una regla que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales examinadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aún ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, verbigracia, la ausencia de afectación del interés jurídico prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que puede revelarse, entre otros múltiples supuestos, por ausencia de pruebas que acrediten la afectación o la titularidad del derecho protegido, o bien por la falta de contemporaneidad del perjuicio o la inexistencia propia del perjuicio dimanada del acto autoritario, esto es, porque el acto en realidad beneficie al peticionario, circunstancias que pueden presentarse en forma independiente o



conjunta, por lo que si el juez estudió sólo alguna de ellas, es viable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues sobre el particular no hay pronunciamiento, por lo que menos puede existir firmeza.

El criterio plasmado encuentra mayúscula justificación en otros diversos casos, como son aquéllos en que el Juez de Distrito no estudió una causa de improcedencia que se le planteó, o ésta sobreviene o se actualizan motivos que la descubren, casos en que el órgano jurisdiccional revisor debe analizarla, por subsistir el orden público que justifica su estudio.

Debe precisarse que en esta línea y sobre diversos aspectos y en diferentes momentos se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con los criterios plasmados en las siguientes tesis:

LA NACION
DEL DE ACUERDOS

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: 34, Julio de 1997

Tesis: 2a./J. 30/97

Página: 137

**"REVISION. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS
"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO
"EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER
"GRADO. Si se trata de una causal de
"improcedencia diferente a las ya estudiadas y**

"declaradas inoperantes por el juzgador de primer
 "grado, no existe obstáculo alguno para su estudio
 "de oficio en la revisión, ya que en relación con ella
 "sigue vigente el principio de que siendo la
 "improcedencia una cuestión de orden público, su
 "análisis debe efectuarse sin importar que las
 "partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o
 "ante el tribunal revisor, de conformidad con lo
 "dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la
 "Ley de Amparo."

Novena Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta

Tomo: VII, Mayo de 1998

Tesis: 1a. XVII/98

Página: 345

ESTADO DE
 JUSTICIA DE
 SECRETARÍA GENERAL

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE
 "LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73
 "DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo
 "dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la
 "Ley de Amparo las causales de improcedencia
 "deben ser examinadas de oficio, pues tal tema es
 "de orden público y debe abordarse en cualquier
 "instancia en que el juicio se encuentre; de tal
 "manera que si en la revisión se advierte que
 "existen otras causas de estudio preferente a la
 "invocada por el Juez para sobreseer, habrán de



analizarse, sin atender razonamiento alguno
 "expresado por el recurrente. Esto es así porque si
 "bien el artículo 73 prevé diversas causas de
 "improcedencia y todas ellas conducen a decretar
 "el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo
 "del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo
 "orden de importancia amerita que se estudien de
 "forma preferente. Una de estas causas es la
 "inobservancia al principio de definitividad que rige
 "en el juicio de garantías, porque sí, efectivamente,
 "no se atendió a ese principio, la acción en sí
 "misma es improcedente, pues se entiende que no
 "es este momento de ejercitarla; y la actualización
 "de este motivo conduce al sobreseimiento total en
 "el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer
 "atendió a la causal propuesta por las
 "responsables en el sentido de que se consintió la
 "ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio
 "que respecto de los restantes actos había dejado
 "de existir su objeto o materia; pero en revisión se
 "advierde que existe otra de estudio preferente
 "(inobservancia al principio de definitividad), que
 "daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y
 "que, por ello, resultarían inatendibles los agravios
 "que se hubieren hecho valer, lo procedente es
 "invocar tal motivo de sobreseimiento y con base
 "en él confirmar la sentencia, aun cuando por
 "diversos motivos."



IDCS
 CORTE DE
 LA NACION
 SAL DE GUERRA

Octava Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: I Primera Parte-1

Página: 191

**"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO DE OFICIO EN LA
"REVISION. Si se trata de una causal de
"improcedencia diferente a las ya estudiadas y
"declaradas inoperantes por el juez de distrito del
"conocimiento, no existe obstáculo alguno para su
"estudio de oficio en la revisión, ya que en relación
"con ella sigue vigente el principio de que siendo la
"improcedencia una cuestión de orden público, su
"análisis debe efectuarse sin importar que las
"partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o
"ante el tribunal revisor."**

Octava Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII-Abril

Tesis: 3a. XII/94

Página: 65

**"IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO NO
"ESTUDIO ALGUNA CAUSAL HECHA VALER, EL
"ORGANO REVISOR DEBE ANALIZARLA. Si el
"Juez de Distrito no estudió una causal de
"improcedencia que se le planteó, el órgano**



**"jurisdiccional revisor debe analizarla, por subsistir
"el orden público que justifica su estudio."**

Octava Epoca

Instancia: Tercera Sala

**Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación**

Tomo: 72, Diciembre de 1993

Tesis: 3a./J. 29/93

Página: 39

**IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA
REVISION DE MOTIVOS DE DIVERSOS A LOS
ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto
que cuando un Juez de Distrito desestima una
causal de improcedencia al analizar motivos
específicos, si en la revisión no se formula ningún
agravio el pronunciamiento debe tenerse firme,
ello no impide que al resolver el recurso se
sobreesa en el juicio por improcedente por
motivos diferentes a los analizados por el inferior,
pues las cuestiones de improcedencia son de
orden público y deben estudiarse de oficio."**

Octava Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: III Primera Parte

Tesis: CIII/89

Página: 360

**"REVISION. IMPROCEDENCIA SOBREVENIDA EN
"LA. DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE AL
"FONDO. Si está pendiente de resolución un
"recurso de revisión y se advierte que ha
"sobvenido una causal de improcedencia, debe
"examinarse previamente la procedencia del juicio
"de amparo, por ser esa cuestión de orden público
"en el juicio de garantías."**

Ahora bien, para poner de manifiesto que tocante al artículo 5º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, a pesar de no haberse reformado por virtud del decreto del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, no se surte la causa de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, es preciso partir de la base de que para que exista el consentimiento que precisa esa hipótesis de improcedencia, debe haber existido, en principio, la posibilidad de promover la acción constitucional y no se haya hecho, lo que debió encontrarse precedido de la existencia de interés jurídico que en cuanto a ese precepto legal sólo se surte ante la demostración de que se tienen deudas contratadas con el sistema financiero, deudas de la parte quejosa cuya existencia no está acreditada en autos, por lo que si bien no se surte la causa de improcedencia aludida, sí se surte la prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Para corroborar esta postura cabe recordar que la parte quejosa pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5º,



párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.

El citado artículo 5º de la Ley del Impuesto al Activo, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

**"ARTICULO 5º. Los contribuyentes podrán deducir
"del valor del activo en el ejercicio, la deudas
"contratadas con empresas residentes en el país o
"con establecimientos permanentes ubicados en
"México de residentes en el extranjero, siempre
"que se trate de deudas no negociables. También
"podrán deducirse las deudas negociables en tanto
"no se le notifique al contribuyente la cesión del
"crédito correspondiente a dichas deudas a favor
"de una empresa de factoraje financiero. Y aun
"cuando no habiéndosele notificado la cesión el
"pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a
"cualquier otra persona no contribuyente de este
"impuesto.
"No son deducibles las deudas contratadas con el
"sistema financiero o con su intermediación."**

De esta disposición se desprende que autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.

Entonces, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el artículo 5°, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

En apoyo de tal aserto, debe reconocerse que existen mecanismos de tributación que son simples cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, por adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna



inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.

En este caso se encuentra el artículo 5°, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto al Activo, que establece la no deducibilidad de las deudas contratadas con el sistema financiero, puesto que las reglas que rigen a los elementos esenciales de la contribución se establecen en diversos preceptos legales siendo que la posibilidad de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, si bien atañe al cálculo de la base gravable, es una variable que no se da en todos los contribuyentes del impuesto, sino sólo en aquéllos que tienen contratadas esa clase de deudas; por ende, el amparo que eventualmente se llegara a conceder, en caso de que así procediera, produciría el efecto de permitir a la quejosa la deducción de las aludidas deudas, sin que con ello quede eximido de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad planteado no alcanza la totalidad del sistema impositivo sino sólo una variable que se aplica a la base.

Por lo anterior, no basta que la parte quejosa demuestre ser contribuyente del impuesto al activo para reclamar la inconstitucionalidad de una de sus variables, sino que resulta indispensable que demuestre ubicarse en la hipótesis legal que la prevé, de lo contrario, retomando el asunto en análisis, podría

darse el caso de que el quejoso tuviera en su poder un amparo inútil, de no tener al momento de su promoción deudas contratadas con el sistema financiero, con lo que el amparo no conseguiría un fin restitutorio sino de mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar esa clase de deudas que podrá hacerlas deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

Las reflexiones que anteceden conducen a concluir que tratándose de elementos variables de la contribución, es necesario que se demuestre estar dentro de las hipótesis legales; por tanto, como en la especie la parte quejosa no demostró tener deudas contratadas con el sistema financiero, procede sobreseer en el juicio de amparo por falta de interés jurídico, respecto del artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo.

SUPLENTE
JUSTICIA DE

Se corrobora lo precedente, si se tiene en consideración el criterio contenido en la tesis 3ª.CXXXI/91, consultable en la página 21, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-septiembre, Octava Epoca, Tercera Sala, cuyo rubro es **"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LOS EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO, FIRME POR NO HABER SIDO IMPUGNADO, RESPECTO DEL ARTICULO 5º DE LA LEY QUE ESTABLECE ESTE IMPUESTO SON EXCLUSIVAMENTE LOS DE PERMITIR AL QUEJOSO LA DEDUCCION DEL VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS EN MONEDA NACIONAL CONCERTADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO O SU INTERMEDIACION"**, en el cual claramente se establece que el efecto de la concesión de la protección constitucional sólo consiste en permitirle a la parte quejosa la



deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional concertadas con el sistema financiero mexicano o su intermediación; luego, puede inferirse, que para acreditar el interés jurídico que le asiste al gobernado para reclamar el artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto establece la prohibición de deducir deudas contratadas con el sistema financiero, con motivo de un acto de aplicación, es necesario demostrar que se ubica dentro de ese supuesto, lo cual no aconteció en la especie.

DECIMO PRIMERO. En el segundo de sus agravios la autoridad responsable propone el sobreseimiento en el juicio de garantías por cuanto hace a los actos vinculados con los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, al alegarse actualizada la improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo en virtud de que los destinatarios de esos preceptos legales son las empresas que componen el sistema financiero, en el que las quejas no demostraron encontrarse incluidas, por lo que al respecto no acreditaron su interés jurídico.

Para comprender el sentido de los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, es necesario armonizarlos con el contenido de la reforma legislativa introducida a la Ley del Impuesto al Activo, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el cual se derogó la fracción II del artículo 6º de dicha Ley, cuyo texto era del siguiente tenor:

"Artículo 6º. No pagarán el impuesto al activo las siguientes personas:

"(...)

**"II. Las empresas que componen el sistema
"financiero..."**

Esta precisión permite sostener que si bien, de manera expresa, en virtud de la mencionada reforma a la Ley del Impuesto al Activo, el legislador ya no establece en favor de las empresas que componen el sistema financiero una exención del pago del impuesto al activo, sino que conformó una nueva categoría de contribuyentes, lo que argumentan las quejas y reiteran en su adhesión a la revisión, entre otros aspectos, es que en la ley reclamada se da un tratamiento desigual a los sujetos del impuesto, que contraviene la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, puesto que a las empresas que integran el sistema financiero se les sujeta a un régimen distinto para calcular la base de la contribución.

SUPLENTE
JUSTICIA DE
SECRETARÍA DE

Lo anterior denota lo infundado de la causa de improcedencia invocada, en virtud de que los artículos 1º, párrafo tercero, y 5º-B, de la Ley del Impuesto al Activo, establecen la obligación de cubrir el impuesto al activo a las empresas que componen el sistema financiero, pero sólo en relación con el activo de las empresas que componen tal sistema que no se encuentra afecto a su intermediación financiera.

En ese orden de ideas, lo tocante a que a dichas empresas se le da un trato diferente al de los demás contribuyentes, autoriza a las quejas a combatir en el amparo las disposiciones precitadas, cuya materia sobre el particular, será el examen de la



violación a la garantía de equidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

DECIMO SEGUNDO. A continuación, debe emprenderse el examen de los conceptos de violación, que por razones de congruencia con el estudio realizado en los considerandos anteriores, sólo comprenderá los conceptos vinculados con la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, en tanto que en el estudio integral acerca de la procedencia del amparo se limitó ésta a los artículos indicados, por lo que no puede obsequiarse en toda su extensión la petición que las quejas realizan en cuanto a que se examine la totalidad de los conceptos cuyo estudio omitió el Juez de Distrito.

El estudio de los conceptos de violación se justifica aún más, si se toma en cuenta que el Juez de Distrito apoyó su decisión de otorgar a la quejosa la protección de la Justicia Federal, en los criterios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia en que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 9º de la Ley del Impuesto al Activo, pues ya se vio en el considerando quinto de la presente resolución, que en ese aspecto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.

Por razón de método, debe emprenderse, inicialmente, el examen del identificado como sexto concepto de violación que se advierte vinculado con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo, en tanto se aduce que la contribución de referencia es violatoria de los artículos 25, antepenúltimo y último párrafos, y 26, de la Constitución General de la República, pues se dice, en esencia, que afecta el patrimonio de los

contribuyentes y tiende a destruir la fuente de riqueza, convirtiéndose en ruinoso y lesivo para la actividad económica, desalentando la inversión y propiciando a la postre una baja recaudación tributaria.

Al respecto, en primer término, es necesario tener en cuenta que las disposiciones constitucionales que se alegan violadas establecen lo siguiente:

**"ARTICULO 25. Corresponde al Estado la rectoría
"del desarrollo nacional para garantizar que éste
"sea integral, que fortalezca la Soberanía de la
"Nación y su régimen democrático y que, mediante
"el fomento del crecimiento económico y el empleo
"y una más justa distribución del ingreso y la
"riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y
"la dignidad de los individuos, grupos y clases
"sociales, cuya seguridad protege esta
"Constitución.
"El Estado planeará, conducirá, coordinará y
"orientará la actividad económica nacional, y
"llevará a cabo la regulación y fomento de las
"actividades que demande el interés general en el
"marco de libertades que otorga esta Constitución.
"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con
"responsabilidad social, el sector público, el sector
"social y el sector privado, sin menoscabo de otras
"formas de actividad económica que contribuyan al
"desarrollo de la Nación.**



**"El sector público tendrá a su cargo, de manera
"exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan
"en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
"manteniendo siempre el Gobierno Federal la
"propiedad y el control sobre los organismos que
"en su caso se establezcan.**

**"Asimismo, podrá participar por sí o con los
"sectores social y privado, de acuerdo con la ley,
"para impulsar y organizar las áreas prioritarias del
"desarrollo.**

**"Bajo criterios de equidad social y productividad se
"apoyará e impulsará a las empresas de los
"sectores social y privado de la economía,
"sujetándolos a las modalidades que dicte el
"interés público y al uso en beneficio general, de
"los recursos productivos, cuidando su
"conservación y el medio ambiente.**

**"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la
"organización y la expansión de la actividad
"económica del sector social: de los ejidos,
"organizaciones de trabajadores, cooperativas,
"comunidades, empresas que pertenezcan
"mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y,
"en general, de todas las formas de organización
"social para la producción, distribución y consumo
"de bienes y servicios socialmente necesarios.**

**"La ley alentará y protegerá la actividad económica
"que realicen los particulares y proveerá las
"condiciones para que el desenvolvimiento del
"sector privado contribuya al desarrollo económico**

"nacional, en los términos que establece esta
"Constitución."

"ARTICULO 26. El Estado organizará un sistema de
"planeación democrática del desarrollo nacional
"que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
"equidad al crecimiento de la economía para la
"independencia y la democratización política,
"social y cultural de la Nación.

"Los fines del proyecto nacional contenidos en
"esta Constitución determinarán los objetivos de la
"planeación. La planeación será democrática.
"Mediante la participación de los diversos sectores
"sociales recogerá las aspiraciones y demandas de
"la sociedad para incorporarlas al plan y los
"programas de desarrollo. Habrá un plan nacional
"de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
"los programas de la Administración Pública
"Federal.

"La ley facultará al Ejecutivo para que establezca
"los procedimientos de participación y consulta
"popular en el sistema nacional de planeación
"democrática, y los criterios para la formulación,
"instrumentación, control y evaluación del plan y
"los programas de desarrollo. Asimismo
"determinará los órganos responsables del
"proceso de planeación y las bases para que el
"Ejecutivo Federal coordine mediante convenios
"con los gobiernos de las entidades federativas e
"induzca y concierte con los particulares las



acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

**"En el sistema de planeación democrática, el
"Congreso de la Unión tendrá la intervención que
"señale la ley."**

Tales preceptos fundamentales establecen, en esencia, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, la cual se cumple en los términos previstos en los propios dispositivos constitucionales, cuando el Estado alienta la producción, concede subsidios, otorga facilidades a empresas de nueva creación, estimula la exportación de sus productos, concede facilidades para la importación de materias primas, organiza el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, entre otras acciones, pero la rectoría ahí garantizada no se ve menoscabada por la legislación de los tributos, como el denominado impuesto al activo, pues si bien implica una carga económica para los contribuyentes, al tener su fundamento en el artículo 31, fracción IV, constitucional, su objetivo es el de sufragar el gasto público, cuya solvencia redunda en la posibilidad de que el Estado cumpla cabalmente con sus fines sociales, entre los que se encuentra, precisamente, la rectoría económica destinada al desarrollo y bienestar colectivo; razones que ponen de relieve que la contribución de que se trata no vulnera la mencionada rectoría económica sino que permite su consecución.

Tocante a que el impuesto al activo cuyo objeto aparece enunciado en el artículo 1º de la ley relativa, afecta el patrimonio de los contribuyentes y tiende a destruir la fuente de riqueza, es

preciso tener en cuenta el criterio sustentado en la actualidad por el Tribunal Pleno, que se desprende de las consideraciones conducentes que expresó en la ejecutoria relativa al amparo en revisión número 749/91, promovido por Compañía Harinera de La Laguna, sociedad anónima de capital variable, resuelto por mayoría de ocho votos, en la sesión del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, que dicen:

"...De todo lo expuesto, este Alto Tribunal establece que al examinar integralmente el sistema legal del impuesto al activo de las empresas, se aparta de los criterios implícitos o explícitos que había adoptado anteriormente al examinar el objeto del impuesto al activo de las empresas. Por un lado, considera que el adoptado originariamente de que se circunscribía al activo respondía a una aplicación literal de un precepto desvinculado del sistema legal en el que se encuentra; por otro, estimar como se decidió en la sentencia mayoritaria pronunciada el 6 de abril de 1995, al resolver el amparo en revisión 107/92, Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S. A. de C. V., que dicho objeto recaía en la utilidad mínima presunta, contrariaba el principio de legalidad tributaria interpretado por la jurisprudencia, puesto que tal conclusión era resultado de inferencias apartadas no sólo de la literalidad de la ley sino de su interpretación sistemática. Según se ha concluido en esta nueva apreciación más rigurosa, el objeto del tributo

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE



"radica en los activos pero comprendidos con la
"vinculación estrecha con los elementos
"precisados, como son su susceptibilidad de
"concurrir en la obtención de utilidades, como
"signo de capacidad contributiva y los fines
"fiscales y extrafiscales que se establecen de
"modo explícito e implícito en la ley que rige esta
"contribución..."

A

Con la parte transcrita de la ejecutoria referida se integró la
jurisprudencia visible en la Novena Epoca del Semanario Judicial
de la Federación, Tomo III, correspondiente a marzo de mil
novecientos noventa y seis, página 5, cuya sinopsis es la
siguiente:

CORRE
LA NACION

**ACTIVO, IMPUESTO AL. EL ANALISIS DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE
"LA LEY QUE LO REGULA EXIGE CONSIDERAR
"QUE SU OBJETO RADICA EN LOS ACTIVOS,
"CONCURRENTES A LA OBTENCION DE
"UTILIDADES, COMO SIGNO DE CAPACIDAD
"CONTRIBUTIVA, ASI COMO QUE ELLO SE
"ENCUENTRA VINCULADO A SUS FINES FISCALES
"(CONTRIBUTIVO Y DE CONTROL) Y A LOS
"EXTRAFISCALES DE EFICIENCIA EMPRESARIAL.
"Del contenido de los artículos 25, 28 y 31, fracción
"IV, de la Constitución, y específicamente, de los
"artículos 1°, 6°, 9° y 10°, de la Ley del Impuesto al
"Activo de las Empresas (Diario Oficial de la
"Federación del 31 de diciembre de 1988) y de la**

*"exposición de motivos de la iniciativa
 "correspondiente, resulta que para examinar la
 "constitucionalidad de los preceptos de este
 "cuerpo legal es imprescindible considerar que, si
 "bien de la literalidad de su artículo 1º, el objeto de
 "la contribución radica en el "activo" de las
 "empresas, de los demás preceptos que integran el
 "sistema del tributo, se infiere que dicho objeto se
 "encuentra íntimamente vinculado, a que dichos
 "activos sean susceptibles de concurrir a la
 "obtención de utilidades, signo de capacidad
 "contributiva que el legislador necesariamente
 "debe tomar en cuenta como presupuesto esencial
 "de toda contribución y que, además, del fin
 "estrictamente fiscal de recaudar recursos para los
 "servicios públicos que exige la fracción IV del
 "artículo 31 de la Constitución, persigue la finalidad
 "fiscal de contar con un medio eficaz de control en
 "el pago que por impuesto sobre la renta
 "corresponda a los sujetos pasivos, así como la
 "finalidad extrafiscal de estimular la eficiencia de
 "los mismos en el desarrollo de sus actividades
 "económicas."*

Con base en ese criterio, debe precisarse que de lo
 dispuesto en el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo, en
 relación con los demás preceptos que integran el tributo, se
 desprende que el objeto de tal contribución no son lisa y
 llanamente los activos de una empresa, ni por ende, el patrimonio
 de éstas, como inexactamente se aduce, si no sólo aquellos



activos que sean susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades, como signo de capacidad contributiva, los que el legislador tomó en cuenta como presupuesto esencial de la contribución; además, teniendo en consideración que el pago del tributo es periódico y no instantáneo, también resulta inexacto que tenga por consecuencia extinguir el objeto gravado, ya que independientemente a que no se aplica a la totalidad de los bienes del contribuyente, únicamente grava los activos concurrentes a la obtención de utilidades en un porcentaje del 1.8%, de lo que se sigue, que no es factible que agote la fuente de riqueza, mientras se mantenga la actividad económica de la empresa.

DÉCIMO TERCERO. A continuación, debe analizarse el argumento expuesto en el inciso b) del identificado como segundo concepto de violación, en el que se aduce que el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de equidad por no ser general al no gravar a todos los demás contribuyentes del impuesto sobre la renta distintos de las personas físicas que realizan actividades empresariales y de las personas morales residentes en México, como son los profesionistas independientes, los rentistas que perciben intereses, los que enajenan bienes, etcétera, no obstante que realizan actividades económicas con base en sus propios activos.

Es infundado tal argumento, pues desconoce que la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que

uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones, no es precisamente el de generalidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados.

La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de contribuciones, sea en su calidad de sujeto pasivo de ellas, o destinatario de las mismas, por traslación que deba hacerse por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate.

En ese orden de ideas, no puede admitirse que exista obligación de contribuir si no existe capacidad contributiva, así como que debe pagar más quien tiene una capacidad contributiva mayor, y menos el que la tiene en menor proporción; todo lo cual descarta la aplicación absoluta del principio de generalidad de que hablan las quejas.

De lo anterior se sigue que para comprender cabalmente las notas distintivas de un tributo específico, debe desentrañarse en el sistema legal que lo rige, en dónde radica la capacidad contributiva en la que descansa la obligación de tributar. En este aspecto conviene destacar que el legislador puede partir de diversos criterios.

Tratándose del impuesto al activo, del análisis sistemático de las disposiciones que componen el ordenamiento legal que lo establece, se advierte que la capacidad contributiva no se



atribuye simplemente a los activos, como parecería desprenderse de la literalidad del reformado artículo 1º, de la ley, en cuanto señala que las "sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo de las empresas, por su activo", pues el artículo 6º, determina, en su parte final, que "no se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, el subsiguiente y el de liquidación", y en la reforma publicada el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se determinó que "no se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación..."; lo que pone de manifiesto que no es simplemente el activo el factor que se considera como revelador de capacidad contributiva, sino también la cualidad de que éste se encuentre asociado con las actividades empresariales y, por consecuencia, en condiciones idóneas para concurrir a la obtención de utilidades, por lo que no asiste razón a la parte quejosa, en cuanto a que debió gravarse a todos los que en el ejercicio de actividades económicas cuentan con activos y no sólo a las personas físicas y morales con actividades empresariales.

§ Cabe señalar que la consideración del legislador de que el activo en esas condiciones revela capacidad contributiva susceptible de gravarse, se sustenta en una apreciación de lógica y sentido común: si una o varias personas se dedican a una actividad empresarial lo hacen por obtener utilidades, resulta absurdo aceptar que lo hagan para perder dinero o por simple diversión. Más difícil resulta admitir que a través de los años quienes se dedican a actividades empresariales no obtengan

utilidades y declarando pérdidas continúen con su actividad. Por elemental conocimiento de la actividad empresarial, lo que es un hecho notorio, se sabe que ella implica complejas actividades y se corren riesgos. Se requieren Inversión, contratación de personal de naturaleza diversa, incluyendo profesionistas de variadas ramas como economistas, administradores de empresas, contadores, abogados, etcétera. Se tiene que cumplir con funciones de auxiliares del fisco al retener los impuestos que se causan por quienes están sujetos a la relación laboral, se tiene que contar con la maquinaria y los materiales necesarios para cumplir con los fines de la empresa, de producir bienes o prestar servicios. También, por elemental lógica, es imprescindible aún admitiendo que no necesariamente exista el fin especulativo de alcanzar el mayor lucro, que se busquen utilidades para conservar la misma empresa y para que siga siendo fuente de trabajo. Manejar una empresa que no obtenga utilidades es un contrasentido dentro de la lógica humana. Todo ello permite inferir que sea perfectamente admisible, como ocurre con la ley que rige la contribución de que se trata, que el legislador estime que toda empresa ya establecida, que ha superado uno o dos años de inicio, por sus activos tenga capacidad contributiva y que por ello tenga que cubrir un tributo. Recurrir al criterio de los activos susceptibles de concurrir a la obtención de utilidades como indicador de capacidad contributiva, también obedece a la lógica de que éstos responden a las necesidades de una empresa para tener, cuando menos, la utilidad que garantice su funcionamiento, sería ilógico tener menos o más activos que los necesarios para ello. En uno y en otro caso, en el primero por insuficiencia, en el segundo por desperdicio, se iría en contra de lo que por naturaleza de la empresa se debe perseguir.



Además, es importante tener en cuenta que de la interpretación conjunta de los artículos 25, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, se desprende que el legislador está autorizado para establecer tributos que no persigan únicamente fines recaudatorios, sino que permitan al Estado ejercer sus atribuciones en materia de rectoría económica, de acuerdo con los principios y valores protegidos por las propias normas constitucionales, de manera que a través de los mecanismos de imposición fomenten o regulen el desarrollo de ciertas actividades productivas, fortalezcan algunos sectores económicos o conduzcan a la explotación de los bienes en beneficio social, por lo que se actualizan razones no sólo jurídicas sino también sociales y económicas, que justifican la determinación del objeto del impuesto al activo en relación con las actividades empresariales.

LA NACION
AL DE LOS

En conclusión, no puede decirse que el artículo 1º de la Ley del Impuesto al Activo ~~viola~~ el principio de equidad tributaria consagrado por el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal, por no comprender como sujetos obligados a todos los que realizan actividades económicas bajo la tenencia de activos, pues según se ha visto, el legislador, en ejercicio de su potestad tributaria, eligió como nota distintiva del objeto del impuesto que son los activos concurrentes a la obtención de utilidades a la práctica de actividades empresariales.

DECIMO CUARTO. Por otra parte, las quejas aducen (en el segundo concepto de violación, punto "a1" y otros apartados) que se infringe en su perjuicio la garantía de equidad

tributaria, pues conforme al artículo 1º, párrafo tercero, y 5º-B, de la Ley del Impuesto al Activo, texto vigente a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y seis, se estableció una base para el cálculo del impuesto al activo, a cargo de las empresas que componen el sistema financiero, distinta a la que deben considerar el resto de los contribuyentes, pues aquellas empresas en la actualidad, si bien son sujetos del impuesto al activo, lo son únicamente respecto a los activos que no respalden obligaciones con terceros, derivadas de su actividad de intermediación financiera, lo que carece de justificación.

Para hacerse cargo de los argumentos anteriores, debe tomarse en consideración el origen del actual texto de los artículos 1º, párrafo tercero, y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, vigente al once de mayo de mil novecientos noventa y seis. Al efecto, ha de señalarse que el antecedente del régimen especial, en cuanto a la determinación de la base gravable, conferido por la Ley del Impuesto al Activo en los preceptos citados, se encuentra en el artículo 6º, fracción II (ya derogada), de la misma Ley, que exentaba del impuesto relativo a esas empresas.

El artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto al problema relativo a la transgresión del principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, fue motivo de estudio por el Tribunal Pleno al resolver, por mayoría de ocho votos, los amparos en revisión 1558/90, 4736/90, 16/92, 5815/90 y 749/91, en la sesión pública del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis. El artículo 6º, fracción II, de la Ley del Impuesto al Activo (el cual,



como se dijo, fue derogado por virtud del decreto legislativo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis), disponía:

**"Artículo 6°. No pagarán el impuesto al activo las
siguientes personas:**

"(...)

**"II. Las empresas que componen el sistema
financiero..."**

Los asuntos aludidos dieron lugar a la integración de la jurisprudencia 10/1996, consultable en la página treinta y ocho del Tomo III, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y seis, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes:

CORRE DE
LA NACE
DEL 2000

**ACTIVO, IMPUESTO AL LA EXENCION A LAS
EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA
FINANCIERO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA. El artículo 6°, fracción I, de la Ley
del Impuesto al Activo, vigente en su origen
(actual fracción II) al establecer que exenta del
pago del tributo a las empresas que componen el
sistema financiero, transgrede el principio de
equidad tributaria, consagrado en el artículo 31,
fracción IV, constitucional, en virtud de que
teniendo estas empresas activos destinados a
actividades empresariales, y no presentarse
respecto de ellas ninguna situación de beneficio o
justificación social que pudiera fundar un trato**

*"privilegiado de exención, no existe razón alguna
 "por la que respecto de ellas no se establezca que
 "al ser sujetos del tributo deban pagar el impuesto
 "al activo, el cual podrán acreditar al impuesto
 "sobre la renta efectivamente pagado, sin que
 "pueda argüirse como justificación de tal exención
 "la dificultad para medir con exactitud el activo
 "neto afecto a sus actividades empresariales por
 "el hecho de operar con ahorro captado del público
 "y con depósitos efectuados por el mismo, como
 "se señala en la exposición de motivos de la Ley,
 "pues tal circunstancia, en todo caso, podría dar
 "lugar a prever una forma especial de
 "determinación de la base del tributo, pero de
 "ningún modo justifica su exención, máxime que
 "tales empresas son contribuyentes del impuesto
 "sobre la renta, de manera tal que si pueden
 "determinar sus utilidades para efectos de este
 "impuesto, no existe razón alguna para presumir
 "que en el impuesto al activo, esencialmente
 "vinculado a aquél, no puedan hacer la
 "determinación relativa. Tampoco puede admitirse
 "como justificación de la exención que estén
 "sujetas a un estricto control financiero, pues
 "además de que ello no puede llevar a considerar
 "innecesario el control que como "objetivo fiscal
 "no contributivo", persigue el impuesto al activo,
 "bajo este contexto se podría afirmar que todos los
 "contribuyentes no sólo están sujetos a control
 "fiscal y a diversos tipos de control administrativo,*



de acuerdo con la naturaleza específica de cada empresa, sino que el legislador siempre está en posibilidad de establecer nuevos sistemas de control dentro del marco constitucional, por lo que ello no puede considerarse una situación que diferencie esencialmente, para efectos fiscales contributivos, a las empresas que integran el sector financiero, de los demás sujetos pasivos del impuesto, lo que obliga concluir que la exención de mérito introduce dentro del sistema de tributo un trato desigual a iguales, lo que resulta violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución, en cuanto previene como un requisito esencial de las contribuciones que sean equitativas."



CORTE DE
LA NACIÓN
12 DE OCTUBRE

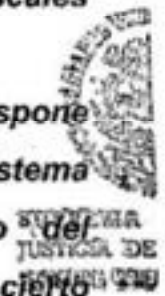
En la última de las ejecutorias con que se integró la jurisprudencia anterior, (lo mismo que en las cuatro que le anteceden), se estableció, en la parte que interesa:

"...Todo lo anterior pone de manifiesto que ni del análisis de las causas especificadas en la exposición de motivos de la ley relativa, ni del contenido de sus preceptos, ni de las disposiciones constitucionales que regulan el sistema económico, ni de las características propias de las actividades de las instituciones de crédito, en contraste con las que realizan las demás empresas que tienen el carácter de contribuyentes del impuesto al activo neto de las

"empresas, se pueden desprender causas objetivas
 "y razones de notorio beneficio o justificación
 "social que fundamenten la exención que ha sido
 "motivo de análisis, por lo que debe concluirse que
 "se viola el artículo 31, fracción IV, constitucional,
 "en cuanto dispone que las contribuciones deben
 "ser equitativas.

"Conviene destacar, en resumen, las siguientes
 "ideas. El artículo 6° de la Ley del Impuesto al
 "Activo, viola la garantía de equidad tributaria
 "establecida en la fracción IV del artículo 31
 "constitucional, toda vez que establece un
 "tratamiento dispar a situaciones fiscales
 "similares.

"El artículo 6° referido, en su fracción I, dispone
 "que las empresas que componen el sistema
 "financiero no están obligadas al pago del
 "impuesto al activo. Sin embargo, si bien es cierto
 "que dichas empresas, por su actividad de
 "intermediación financiera, mantienen activos que
 "se integran por depósitos y operaciones del
 "público ahorrador, también lo es que esta
 "circunstancia no es suficiente, jurídicamente, para
 "exentarlas del pago del impuesto, pues el resto de
 "las empresas también presentan determinados
 "rasgos o peculiaridades que, sin embargo, no
 "fueron reconocidos por la ley como causas
 "suficientes para liberarlas del pago del impuesto
 "al activo.





"Las peculiaridades de las empresas a que se hace
 "referencia no debieron dar lugar a que el
 "legislador estableciera la exención que se
 "describe, sino que lo lógico hubiera sido señalar
 "un mecanismo jurídico-contable que permitiera a
 "las empresas que componen el sistema financiero,
 "superar con facilidad el problema contable
 "referido, o sea que la diferencia existente debía
 "haber motivado un trato diverso en el mismo
 "renglón en el que aquella se producía, pero no
 "establecer una exención por ese motivo.

"En otras palabras, el legislador no debió
 "establecer un beneficio fiscal en el presupuesto
 "de hecho del tributo (exención), sino sólo en la
 "cuantificación del mismo, es decir, en la base
 "gravable, a efecto de excluir de la tributación a los
 "activos de las empresas que componen el sistema
 "financiero afectadas por la intermediación que
 "desarrollan.

"Además para que tenga lugar una exención es
 "necesario que una norma fiscal contemple que en
 "aquellos supuestos expresamente previstos en
 "ella, no obstante producirse el hecho imponible,
 "no se desarrolle, por alguna causa de notorio
 "beneficio o justificación social, su efecto
 "principal: el deber de pagar el tributo. Lo anterior
 "significa que las empresas que componen el
 "sistema financiero sí son contribuyentes del
 "impuesto al activo, ya que realizan el hecho
 "imponible de este tributo, pues cuentan con los

CORTE DE LA NACION
 AL DE

*"elementos patrimoniales que constituyen el acto
"gravado por la ley. En consecuencia, la exención
"establecida en el artículo 6º, fracción I, de la Ley
"del Impuesto al Activo, vienen a romper la paridad
"de tratamiento que para situaciones fiscales
"semejantes exige la garantía de equidad tributaria
"contenida en la fracción IV del artículo 31
"constitucional.*

*"Por tanto, el artículo 6º, fracción I, de la Ley del
"Impuesto al Activo viola la garantía de equidad
"tributaria establecida en la fracción IV del artículo
"31 constitucional, toda vez que no da paridad de
"tratamiento a situaciones de paridad fiscal, pues
"las empresas que componen el sistema financiero
"cuentan, al igual que el resto de las empresas, con
"activos que deben ser gravados por la citada ley,
"sin que se advierta alguna otra causa que pudiera
"haber tenido en cuenta el legislador para justificar
"la exención de que se trata..."*

SUPREMA
COURT OF
JUDICIAL
REVISION

Es de capital importancia tener presentes los razonamientos anteriores, en virtud de que éstos influyeron notablemente para que el legislador derogara la fracción II del artículo 6º de la Ley del Impuesto al Activo, y al propio tiempo adicionara el artículo 1º, con un párrafo tercero, y agregara el artículo 5º-B de la precitada Ley, mediante el decreto relativo publicado en el Diario Oficial de la Federación del diez de mayo de mil novecientos noventa y seis.



Al efecto, los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, disponen:

"Artículo 1º. Las personas físicas que realicen
"actividades empresariales y las personas morales,
"residentes en México, están obligadas al pago del
"impuesto al activo, por el activo que tengan,
"cualquiera que sea su ubicación. Las residentes
"en el extranjero que tengan un establecimiento
"permanente en el país, están obligadas al pago del
"impuesto por el activo atribuible a dicho
"establecimiento. Las personas distintas a las
"señaladas en este párrafo, que otorguen el uso o
"goce temporal de bienes inmuebles que se utilicen
"en la actividad de otro contribuyente de los
"mencionados en este párrafo, están obligadas al
"pago del impuesto por su activo fijo y terrenos por
"los que obtengan ingresos a los que se refiere el
"Capítulo III del Título IV y los artículos 133,
"fracción XIII y 148-A, de la Ley del Impuesto sobre
"la Renta.

"(...) §

"Las empresas que componen el sistema
"financiero están obligadas al pago del impuesto
"por su activo no afecto a su intermediación
"financiera."

"Artículo 5º-B. Las empresas que componen el
"sistema financiero considerarán como activo no
"afecto a su intermediación financiera, los activos

**"fijos, los terrenos, los gastos y cargos diferidos,
"que no respalden obligaciones con terceros
"resultantes del desarrollo de su actividad de
"intermediación financiera de conformidad con la
"legislación aplicable. No se incluirán los activos
"que por disposición legal no puedan conservar en
"propiedad. Estos contribuyentes sólo podrán
"deducir del valor del activo, las deudas
"contratadas para la adquisición de los activos
"mencionados, siempre que reúnan los requisitos a
"que se refiere el artículo 5º de esta Ley."**

El nuevo texto de los preceptos transcritos fue aprobado, fundamentalmente, por la pretensión del legislador de adecuar la Ley del Impuesto al Activo al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes transcrita, en lo que atañe a la situación jurídica de las empresas que componen el sistema financiero; y con ello, de ajustar dichos preceptos al principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Esta circunstancia se advierte del contenido de la exposición de motivos del decreto de reformas de que se da noticia, en el cual, en lo conducente, se señala:

**"...Al efecto, en fechas recientes y como resultado
"de un proceso de varios años la Suprema Corte de
"Justicia de nuestro país ha establecido una
"definición jurisprudencial sobre la
"constitucionalidad del impuesto al activo."**



"Como resultado de ese proceso, nuestro Supremo Tribunal ha concluido, mediante la opinión mayoritaria de sus integrantes, que no obstante las bondades y la procedencia del tributo en su conjunto, existen disposiciones que lo rigen, que son contrarias a la equidad que todo impuesto debe mantener.

"Fue el caso, de manera principal, de la disposición contenida en la fracción II del artículo 6º de la ley, que en su texto vigente no considera sujetos del impuesto a las empresas que componen el sistema financiero.

"Es de recordar que el razonamiento del legislador a ese respecto, fue el de considerar que dichas empresas no debían ser sujetas del impuesto en análisis, por el hecho de que sus activos derivan de las operaciones de intermediación financiera que, conforme a las leyes que rigen la constitución, operación y funcionamiento de los diversos intermediarios financieros, están constituidos fundamentalmente con los recursos captados del gran público en general y que representa su ahorro e inversión.

"Al analizar la sistemática del tributo, la Suprema Corte de Justicia consideró en forma mayoritaria que, aun cuando esa situación es cierta, no resulta absoluta, pues si bien los intermediarios que integran al sistema financiero, tienen peculiaridades que desde el punto de vista financiero como contable las distinguen del

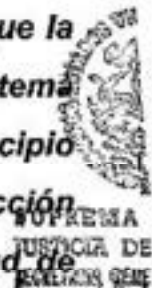


ORTE DE
A NACIÓN
DE MÉXICO

"conjunto de empresas que, en lo general poseen
"activos, y que ello justifica un trato diferencial del
"resto de los contribuyentes, no alcanza a ser una
"justificación para que queden totalmente exentas
"del impuesto al activo.

"Lo anterior, como resultado de que, de acuerdo al
"criterio mayoritario de la Suprema Corte, las
"instituciones que integran el sistema financiero
"tienen en su patrimonio, además de los activos
"correspondientes a su intermediación financiera,
"activos que no se diferencian de los del resto de
"los contribuyentes.

"En tal sentido, la Suprema Corte consideró que la
"exención que la ley prevé para el sistema
"financiero no cumple plenamente con el principio
"de equidad establecido en el artículo 31, fracción
"IV, de nuestra Carta Magna, ya que en virtud de
"que estas empresas cuentan con activos
"destinados a actividades empresariales, y al no
"presentarse respecto de ellas ninguna situación
"de beneficio o justificación social que pudiera
"fundar un trato privilegiado de exención, no existe
"razón alguna por la que, respecto de dichas
"empresas, no se establezca que deban pagar el
"impuesto al activo, respecto del cual se puede
"acreditar el impuesto sobre la renta efectivamente
"pagado. Señala el criterio jurisprudencial de
"nuestro Máximo Tribunal, y reconociendo la
"diferencia entre los activos de este tipo de
"empresas con las del resto de los contribuyentes,





que lo procedente es el prever "una forma especial de determinación de la base del tributo", "pero de ningún modo su exención, máxime que, como lo reconoce la jurisprudencia en cuestión, tales empresas son contribuyentes del impuesto sobre la renta, el cual pueden determinar sin problema alguno.

En otras palabras, el legislador no debió establecer un beneficio fiscal en el presupuesto de hecho del tributo (exención), sino sólo en la cuantificación del mismo, es decir, en la base gravable, a efecto de excluir de la tributación de los activos de las empresas que componen el sistema financiero afectadas a la intermediación que desarrollan.



CORTE DE
LA NACION
UN DE ACUERDO

Reconociendo entonces el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, y en un continuo esfuerzo por dotar a nuestro sistema impositivo de todos los elementos que hagan indubitable el cumplimiento de los requerimientos que nuestra Constitución Política le impone, someto a la consideración de ese H. Congreso la necesidad de ajustar, en los términos ya indicados, la Ley del Impuesto al Activo.

En ese orden de ideas, se propone la derogación de la fracción II del artículo 6º, la adición de un artículo 5-B y ajustes a los artículos 1º y 6º, fracción V y al penúltimo párrafo, para establecer que las instituciones que integran el sistema financiero están obligadas al pago del impuesto al

"activo por aquellos activos que no provienen de
 "su intermediación financiera, considerándose
 "como tales a sus activos fijos, sus terrenos, sus
 "gastos y cargos diferidos que no respalden
 "obligaciones con tercero resultantes del
 "desarrollo de su actividad de intermediación
 "financiera.

"Por lo que se refiere a las deducciones, se
 "propone a esa H. Soberanía que las empresas que
 "componen el sistema financiero, únicamente
 "puedan deducir aquellas deudas directamente
 "relacionadas con la adquisición de sus bienes
 "gravados con el impuesto al activo, por lo que
 "para que sean deducibles en el citado impuesto
 "las deudas que adquieran dichas empresas deben
 "ser contratadas con empresas residentes en el
 "país o con establecimientos permanentes
 "ubicados en México de residentes en el extranjero.

"Asimismo, se establece que no serán deducibles
 "las deudas contratadas con las demás empresas
 "del sistema financiero o a través de su
 "intermediación, con lo cual se otorga a dichas
 "empresas el mismo tratamiento al que están
 "sujetos los demás contribuyentes.

"Esta reforma en el impuesto al activo, cumple con
 "el precepto constitucional de equidad, ya que:

"i) Mantienen la simetría entre los diversos
 "contribuyentes que integran el sistema financiero,
 "así como respecto del resto de los contribuyentes,
 "pues permite deducir las deudas contratadas con



**"empresas residentes en el país y no así las
"deudas contratadas con el sistema financiero o
"con residentes en el extranjero.**

**"ii) Evita la doble tributación, en el sentido de que
"los activos que ya están gravados en otros
"sectores, por ser utilizados en ellos, no son
"gravados, en una segunda instancia, en el sistema
"financiero..."**

De la confrontación de la jurisprudencia y ejecutoria transcritas, con el texto de los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, deriva que con estas disposiciones el legislador pretende subsanar el vicio de inconstitucionalidad que presentaba el artículo 6º, fracción II, al derogar dicha fracción en el decreto aludido, en cuanto que en esta se exentaba del pago del impuesto a las empresas que componen el sistema financiero; y, además, mediante la creación de un régimen jurídico especial en la determinación de la base gravable, precisamente para las empresas referidas, situación que fue abordada igualmente por este Tribunal Pleno en las resoluciones precitadas.

De acuerdo con lo anterior, debe arribarse a la conclusión de que los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, no infringen el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

El anterior aserto encuentra apoyo en la jurisprudencia número 80/97, sustentada por este Alto Tribunal, al resolver en la sesión celebrada el diez de julio de mil novecientos noventa y siete, por mayoría de nueve votos en contra del voto del señor

Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, los juicios de amparo en revisión números 2648/96, 3035/96, 2164/96, 2986/96 y 65/97, promovidos, respectivamente, por Bombardier Concaril, sociedad anónima de capital variable, Industrias Vinícolas Pedro Domec, sociedad anónima de capital variable, Estructuras Fema, sociedad anónima de capital variable, Refrescos California, sociedad anónima de capital variable, y Cualytel de Puebla, sociedad anónima de capital variable; siendo la tesis del tenor siguiente:

**"ACTIVO. LOS ARTICULOS 1º Y 5º-B DE LA LEY
"RELATIVA A ESE IMPUESTO, QUE ESTABLECEN
"UN REGIMEN ESPECIAL PARA LA
"DETERMINACION DE LA BASE DEL TRIBUTO A
"CARGO DE LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL
"SISTEMA FINANCIERO NO VIOLAN EL PRINCIPIO
"DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 10 DE MAYO DE 1996). Los
"artículos 1º, párrafo tercero, y 5º-B de la Ley del
"Impuesto al Activo, establecen un régimen
"especial para las empresas que componen el
"sistema financiero, en cuanto a la determinación
"de la base gravable del impuesto, en la medida en
"que el precepto citado en primer término dispone
"que las empresas indicadas están obligadas al
"pago del tributo por su activo no afecto a la
"intermediación financiera, a diferencia del régimen
"que en ese aspecto rige para los demás
"contribuyentes que deben pagar respecto de la
"totalidad de sus activos, pero este tratamiento**



especial concedido a las empresas que integran el "sistema financiero es acorde al principio "constitucional de equidad tributaria: a) porque "vincula a todas las empresas que están incluidas "dentro de dicho sistema; y, b) porque tales "empresas forman parte de un grupo de "contribuyentes con características tan peculiares "que se consideran suficientes para justificar el "trato desigual existente en la determinación de la "base gravable. Así, los aspectos que inciden "esencialmente en la distinción entre las empresas "que componen el sistema financiero y el resto de "los contribuyentes, radican en lo siguiente: 1) la "actividad de la intermediación financiera que "realizan requiere de autorización, cumplimiento de "múltiples requisitos y vigilancia constante de la "Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 2) en "los artículos 52 al 54-A de la Ley del Impuesto "sobre la Renta, el legislador estableció un "tratamiento especial para algunas de las empresas "del sistema financiero, respecto a la "determinación de la base gravable; y, 3) los "activos afectos a la intermediación financiera no "son recursos propios de las empresas del sistema "financiero, de tal manera que si esas empresas "consideraran aquellos activos dentro de su base "gravable, se correría el riesgo de gravar con un "mismo tributo a dos o más contribuyentes por los "mismos recursos, según figuraran como activos "del ente financiero, del que obtuviere un préstamo

RTE DE
NACION:
DE ACUERDO

*"y del depositante. Por tanto, los artículos 1º,
"párrafo tercero y 5º-B de la Ley del Impuesto al
"Activo, al prever un tratamiento especial para el
"cálculo de la base gravable del impuesto al activo
"a cargo de las empresas que componen el sistema
"financiero, no son contrarios al principio de
"equidad tributaria previsto en la fracción IV del
"artículo 31 constitucional."*

Es corolario de todo lo anterior, que al resultar infundados los conceptos de violación analizados, procede negar a las quejas la protección de la Justicia Federal, respecto a los actos vinculados con los artículos 1º y 5º-B (vigentes a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y seis) de la Ley del Impuesto al Activo.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

**SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GEN**

PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Con la salvedad a que se refiere el punto resolutivo siguiente, se sobresee en el juicio de amparo en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo.

TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa denominada Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, S.A. de C.V. y otras, en contra de los actos que reclamaron vinculados con los artículos 1º y 5º-B de la Ley del Impuesto al Activo, vigentes a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y



seis y con los artículos 20, párrafo segundo y 20 bis del Código Fiscal de la Federación.

NOTIFIQUESE; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin discusión, por unanimidad de once votos se aprobaron los resolutivos primero y segundo; y por mayoría de diez votos de los señores Ministros Azuela Guitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Guadalupe Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza, y Presidente Aguinaco Alemán se aprobó el resolutivo tercero; el señor Ministro Aguirre Anguiano votó en contra. Los señores Ministros Aguirre Anguiano y Presidente Aguinaco Alemán formularon salvedades respecto de las consideraciones que rigen el resolutivo segundo. Fue ponente el señor Ministro Juan Díaz Romero.

Firman el Presidente, el Ponente y el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

PONENTE:

MINISTRO JUAN DIAZ ROMERO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. J. JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

Esta hoja forma parte del amparo en revisión número 2695/96, promovido por Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, S.A. de C.V. y otras. Fallado el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido siguiente: **PRIMERO.** Se modifica la sentencia recurrida. **SEGUNDO.** Con la salvedad a que se refiere el punto resolutivo siguiente, se sobresee en el juicio de amparo en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo. **TERCERO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la empresa denominada Inmobiliaria Firpo Fiesta Coapa, S.A. de C.V. y otras, en contra de los actos que reclamaron vinculados con los artículos 1º y 5º de la Ley del Impuesto al Activo, vigentes a partir del once de mayo de mil novecientos noventa y seis, y con los artículos 20, segundo párrafo y 20 bis del Código Fiscal de la Federación. **Conste.**